

2-8-1944

# DERECHO FEDERAL

## CUESTIONES VARIAS

BIBLIOTECA CORTE SUP	<i>Fichado Analítico - 8-54</i>
Nº. D.	3849
UBICACION	<i>F. 16</i>
FICHA MATERIA	



TOMÁS JOFRÉ

TALCAHUANO, 826



# DERECHO FEDERAL

## CUESTIONES VARIAS



BUENOS AIRES

IMPRESA DE JONÉ TRAGANT — CALLE BELGRANO, 438 AL 472

1917





## CUATRO PALABRAS (1925)

---



Este libro obedece a un fin didáctico. Sus páginas no fueron inspiradas en una mera vanidad de autor y sí en el deseo de transmitir algo de mi experiencia a los abogados neófitos. No se busque en ellas belleza de forma ni hondas investigaciones científicas, incompatibles con su gestación, como que han surgido en el afanoso trajín de mi bufete, entre las ásperas exigencias materiales, las actividades de la vida pública y la redacción de códigos y leyes de diversa índole.

En los *casos* judiciales que publico ha triunfado la perseverancia de mis convicciones jurídicas, pues varios fueron resueltos desfavorablemente para mí por jueces de primera y segunda instancia; pero logré, al fin, sentir las fruiciones del éxito, muchas veces ambulando durante años de tribunal en tribunal.

Algún colega llegó a motejarme de litigante empedernido a quien no acobardan los primarios reveses.—¿No le han bastado a usted la opinión desfavorable de los ministerios públicos y tres sentencias para convencerse de que no tiene razón?—, se me dijo en presencia de varios fracasos.

Sin embargo, la sentencia final demostró el error de las anteriores. Había triunfado la verdad, gracias a la tenacidad con que fuera sostenida.

---

Para hacerlo más metódico y práctico, he dividido el libro en tres partes.

La primera, contiene cuatro casos de derecho federal, que deseo referir brevemente por la importancia que reviste alguno de ellos:

1.—Don Juan G. Káiser, periodista de Luján, fué condenado, como autor del delito de calumnia, a dos años y medio de penitenciaría por el juez del crimen de La Plata, doctor Wáshington Ocampo. Apelada la sentencia para ante la cámara 3.ª de dicha ciudad, fué anulada por vicios de forma, enviándose los autos al doctor Luis Villar Sáenz Peña para que los fallase nuevamente. Éste pensó como su colega, el doctor Ocampo, e impuso al acusado la misma pena.

Llevado por segunda vez el caso a la cámara de La Plata, se falló declarando culpable al acusado. Tres sentencias condenatorias, subscriptas por hombres habituados a aplicar la ley, no me convencieron, porque, aunque sobran en ella las palabras, les faltaba el razonamiento científico. Recurri a la corte de la nación entre la sonrisa desdeñosa de muchos que me compadecían, y el alto tribunal consagró la doctrina por que yo venía bregando, estableciendo: «que el código penal no es aplicable a los delitos cometidos por medio de la prensa en el territorio de las provincias argentinas». El señor Káiser fué absuelto. La simple lectura de los fallos pronunciados en la acusación contra Káiser lleva al ánimo el convencimiento de que la suprema corte ha pronunciado la palabra final y científica en la cuestión. Es el único caso en que la corte, en su medio siglo de existencia, ha absuelto a un hombre a quien los tribunales de provincia habían impuesto pena.

2.—La municipalidad del partido del Salto me adeudaba dinero por servicios profesionales que le había prestado. Solicité embargo en el producido de sus impuestos. El juez y la cámara de Mercedes me lo negaron porque, de acuerdo con el código de procedimiento de la provincia de Buenos Aires, las rentas públicas del Estado o de los municipios son inembargables. Llevé el caso a la suprema corte de la nación, la que declaró inconstitucional la disposición citada e hizo lugar a mi pedido.

Más tarde, en una ejecución seguida contra la municipalidad del Rosario, la corte reprodujo su jurisprudencia, levantando una protesta ruidosa en aquella ciudad. Es evidente que no se ha comprendido el alcance de la decisión del tribunal: se ha creído que ella viene a echar por tierra la existencia de los poderes públicos, cuando lo único que hace es compeler al pago de las deudas a los que se nie-



gan infundadamente a satisfacerlas, sin que tal medida pueda llegar a trabar los servicios públicos indispensables.

3.—En una acción de reivindicación promovida por el gobierno nacional, pedí que se citase de evicción al gobierno del Paraguay, primitivo propietario de la tierra. El juez y la cámara federal encontraron impertinente ese trámite. Recurrí a la suprema corte de la nación, y el procurador del tesoro, doctor López, criticando esa actitud, dijo que ella no tenía otro objeto que «ganar tiempo y hacerlo perder al gobierno, pues el caso era en realidad muy sencillo». Las costas debían imponerse a mi parte, seguramente, para escarmiento de litigantes porfiados. La corte entendió las cosas de manera diametralmente opuesta y revocó las dos sentencias anteriores.

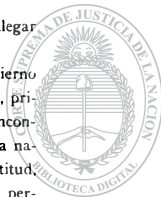
4.—No hay quien haga comprender a ciertos secretarios y magistrados que los exhortos emanados de jueces de la república no necesitan de la legalización para que se les dé curso. El juez doctor Félix Martín y Herrera se negó a cumplimentar un exhorto que le presenté sin legalizar. Apelada su resolución para ante la cámara comercial, ésta la revocó.

---

La segunda parte contiene varias defensas y fallos judiciales. Algunas de las causas que publico son interesantes. Mis defendidos fueron condenados a 6, 10 y 25 años de presidio en primera y segunda instancia, y absueltos, por último, por la corte de la provincia.

---

En la tercera parte se insertan, finalmente, dos causas ruidosas. Una es la que se sigue por homicidio a don Anibal P. V. La otra es la rendición de cuentas promovida por los señores Agustín y Rafael Ladoux contra don Juan Laplacette, y en el cual la corte de la nación acaba de pronunciar su palabra final.





# PRIMERA PARTE

## DERECHO FEDERAL





## DELITOS DE IMPRENTA

*El código penal no es aplicable en:  
las provincias a los delitos cometidos  
por medio de la prensa.*







# DELITOS DE IMPRENTA

## Coronel Diego Saborido contra Juan G. Kaiser, querrellándose por calumnia



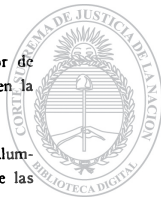
### I

ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS PRESENTADO POR EL DOCTOR  
TOMÁS JOFRÉ, ANTE LA CÁMARA 3.<sup>a</sup> DE APELACIÓN DE LA PLATA

1. Reproducción de anteriores escritos. — 2. Cuestiones fundamentales a resolver. — 3. Las publicaciones acusadas. — 4. El dolo especial en los delitos contra el honor. — 5. No está probado que Kaiser sea autor de la publicación acusada. — 6. Los dos argumentos del juez: *a*) el escrito de fojas 51; *b*) la reproducción de las publicaciones acusadas. — 7. Se ha aplicado una pena sin ley. — 8. El congreso no puede legislar sobre delitos de imprenta. — 9. Interpretación del artículo 32 de la constitución nacional: *a*) según su letra; *b*) según sus antecedentes históricos; *c*) según la inteligencia que le ha atribuido el legislador; *d*) según la jurisprudencia argentina. — 10. La distinción entre abusos de la libertad de imprenta y los delitos de imprenta. — 11. Conclusiones.

1.—Como V. E. no tuvo oportunidad de entrar al fondo de este asunto cuando le fué remitido anteriormente, desde que declaró nula la sentencia del juez doctor Ocampo, mis argumentos de la expresión de agravios han quedado subsistentes y los reproduzco. El señor juez doctor Villar Sáenz Peña no se ha hecho cargo de ellos, seguramente porque no fueron presentados en primera instancia.

2.—Las cuestiones fundamentales que ruego a V. E. quiera tratar, son las siguientes: *a*) si las publicaciones acusadas son calum-



niosas; b) si está probado que don Juan G. Káiser sea el autor de las mismas; c) si la ley aplicada por el inferior está en vigor en la provincia.

3.—El inferior, después de repetir la definición que de la calumnia hace el código penal, transcribe en su sentencia párrafos de las publicaciones acusadas en que se relatan dos hechos que, según su apreciación, constituyen falsas imputaciones de delitos, con lo que queda demostrado, según él, la existencia de la calumnia.

Sostengo que eso no basta, excelentísima cámara: es indispensable que la comisión de esos delitos fuera imputada al ex comisionado municipal don Diego Saborido, para que él pudiera considerarse calumniado; y basta leer con detención los propios párrafos que la sentencia transcribe para cerciorarse de que no es así.

En lo referente a las planillas de pago, en que se hicieron figurar peones que no han existido, no pueden ser más explícito el concepto y la intención de la publicación, la que después de referir *la denuncia hecha por un inspector municipal*, agregaba: «Ante esa acusación clara, precisa, determinada, cualquier jefe de administración tiene el deber ineludible de realizar una investigación amplia y pública, para conocer a los culpables y castigarlos...» No puede ni presumirse siquiera, que se haya imputado al ex comisionado Saborido la comisión de ese delito, cuando se le instigaba a realizar una investigación para conocer y castigar a los culpables. No se investiga para descubrir las propias culpas.

La otra calumnia—que la sentencia menciona—: la subscripción levantada en Carlos Keen, para dotar a esa localidad de alumbrado, es asimismo evidente que no existe. Debo hacer notar, de paso, que el inferior no ha apreciado, en este caso, la prueba producida, con sujeción a las reglas de la sana crítica; todos los testigos que han declarado a ese respecto, manifiestan que la subscripción se realizó, que ellos contribuyeron con distintas cantidades, que el dinero no fué invertido en compra de lámparas ni focos, que no les fué devuelto ni tuvo entrada en la tesorería municipal. Todo ésto no tiene valor ante el criterio del señor juez, y queda destruído, según él, por la declaración que hacen los mismos testigos de que no les consta que la subs-



cripción se llevara a cabo por orden del comisionado Saborido. Se olvida que también afirman que *el dinero fué recogido por el delegado municipal*, con lo que queda probada la absoluta verdad de la imputación, no al comisionado Saborido, sino a su administración, de la que no cabe dudar formaba parte el delegado municipal, empleado de la misma. No hay, pues, calumnia, porque el hecho denunciado no es falso; es cierto; y porque no se le ha imputado al querellante, quien hubiera salvaguardado mejor su buen nombre castigando a los culpables de los delitos denunciados que presentándose como acusado de delitos que nadie le atribuyó.

4.—Sobre la necesidad del dolo especial en esta clase de delitos; véase Haus, números 303 y 304 y notas respectivas; fallos de la cámara criminal de la capital; tomo 43, pág. 297; tomo 44, pág. 305; tomo 56, pág. 22; tomo 60, pág. 233, y tomo 67, pág. 215.

El dolo especial, la intención de dañar por parte de Káiser, no existe en las publicaciones acusadas, porque, como claramente se desprende de su lectura, sólo se trataba de poner en claro el manejo de los dineros públicos.

Me explico que el particular se amuralle en su vida privada y pretenda que no se le examine; pero esa conducta es inadmisibile en un funcionario público. La administración tiene que desarrollarse en plena luz y esa luz es la que reclamaba el acusado de quien manejaba de mala manera los intereses de la comuna.

¿Dónde está la intención de calumniar? ¿Dónde el *ánimus injuriandi*? ¿Dónde el delito?

Estoy seguro que V. E. no lo encontrará, porque no existe.

5.—He argumentado hasta ahora en la hipótesis de que Káiser sea el autor de las publicaciones acusadas, pero es el caso que ese hecho, fundamental en el proceso, no está probado, por más que el inferior piense lo contrario.

Pretende el juez que «no existe duda alguna y debe considerarse como autor de los expresados delitos a don Juan G. Káiser, desde el momento en que en su escrito de fojas 51, manifiesta que conside-

ra apropiados y merecidos los términos de la publicación aludida y que asume la responsabilidad que se le atribuye».



6.—Para apoyar esa extraña conclusión, se cita a continuación el artículo 485 del código de procedimiento en lo criminal.

¡Novedosa doctrina!

a). Jamás juez alguno puede considerar que un escrito constituye confesión.

La confesión, para existir, debe ser hecha ante autoridad competente y la redacción de un escrito no llena esa condición.

El inferior agrega que Káiser, como director del periódico en que aparecieron los artículos acusados, se ha hecho responsable de sus consecuencias.

La premisa y la conclusión son equivocadas.

c). En efecto: ¿de dónde saca el inferior que Káiser sea el director de la publicación acusada? ¿Cuál es la prueba de dónde esa circunstancia resulta acreditada?

Niego que exista prueba alguna demostrativa del hecho afirmado por el inferior.

El acta de fojas 71, donde consta una declaración de Káiser, que el juez seguramente ha tenido presente es nula, porque no existe en nuestro derecho confesión jurada. Luego se ha violado el artículo 18 de la constitución nacional, en cuanto establece que nadie está obligado a declarar contra sí mismo.

La conclusión también es falsa. El juez ha aplicado erróneamente el código penal.

El artículo 4.º, inciso d), de la ley 4189, establece que no se consideran cómplices ni autores de los hechos punibles, cometidos por la prensa, a los editores, impresores y demás personas que prestan al autor del escrito o grabado la cooperación necesaria para su publicación.

En presencia de esta disposición legal, hay que convenir que, cuando la misma ley, en el artículo 21, inciso d), castiga al que publicare o reprodujese, por cualquier medio, injurias o calumnias inferidas por otro, como autor de las injurias o calumnias de que se



trate, sólo ha contemplado hechos producidos con intención delictuosa y no la profesión del editor o redactor de diarios.

Además, hay que tener presente que Káiser no ha reproducido publicaciones ajenas, sino, sencillamente publicado injurias o calumnias. Esto, en la hipótesis en que se coloca el juez.

7.—El inferior, en su sentencia, ha impuesto al acusado Káiser, la pena de dos años y seis meses de penitenciaria, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21, inciso *a*), de la ley de reformas número 4189, contrariando así, abiertamente, el artículo 32 de la constitución nacional, que establece que el congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal.

No es aplicable, excelentísima cámara, el código penal en las provincias, cuando se trata de reprimir los abusos de la libertad de imprenta, que constituyen delitos de calumnia o injuria. El código penal, en esa clase de delitos, es simplemente una ley local para la capital de la república y territorios nacionales, dictada por el congreso, en uso de las facultades que le confiere el artículo 67, inciso 27, de la constitución citada.

Una de las garantías primordiales establecidas por la constitución nacional, es que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso, y esa garantía se ha violado en este caso, desde el momento en que a mi defendido se le ha condenado sin que exista ley que imponga pena.

Si se pretendiera que la disposición aplicada de la ley 4189, está en vigor en la provincia, la tacho, desde ya, como contraria a los artículos 18 y 32 de la constitución nacional, en la parte que reprime la calumnia e injuria, proferidas por la prensa (artículo 21, inciso *a*).

No es ésta una cuestión planteada extemporáneamente, desde que V. E. al dictar pronunciamiento, en caso de que sea condenatorio, tiene forzosamente que estudiar la legalidad de la ley a aplicar y decidir en consecuencia, si ella es anterior al hecho del proceso y si se encuentra en vigor.

8.—El congreso no puede legislar, como lo acabo de decir, sobre delitos cometidos por medio de la prensa.

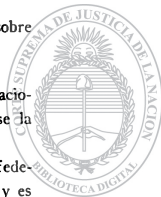
9.—La interpretación del artículo 32 de la constitución nacional no ofrece dudas al respecto, por cualquier lado que se la examine.

a). La letra del artículo citado es bien clara: el congreso federal, dice, no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta, y es evidente que se la restringe cuando se castiga los delitos de pensamiento, cuando se reprimen las ideas.

b). Los antecedentes históricos del referido artículo nos demuestran asimismo cuál fué la mente de sus autores. Como es sabido, esa disposición legal no figuraba en el proyecto de Alberdi; ni en la constitución de 1853, y fué incorporada por el estado de Buenos Aires, en la revisión que se hizo de aquel estatuto en la ilustre convención del 60. En el *Relator* de la comisión examinadora de la constitución, redactado por Mitre, Vélez, Sarmiento, etc., se leen las siguientes palabras: «El congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal .....»

...«Que estos mismos principios habían aconsejado substraer a la acción del congreso de los Estados Unidos la legislación de la prensa, para asegurar así a la libertad de pensar, un derecho anterior y superior a toda constitución.

»Que, sin hacer de ello un cargo inútil, la comisión debía recordar haberse publicado una carta del presidente de la confederación, conminando a un gobernador de provincia porque no reprimía el espíritu de crítica de un diario, caracterizando con sus verdaderos nombres la resurrección de la cinta colorada; y que si en esta reprobación del diario, de un uso que ley ninguna ordena, no estando obligado nadie a hacer acatar ni respetar lo que no es legal, con cuanta más razón debía tomarse esta facultad de restringir la prensa en materias más graves. Que la historia contemporánea había justificado plenamente la previsión de los pueblos que impusieron a fines del siglo pasado, al congreso federal, esta limitación de facultades. Que ninguna nación del mundo había llegado a establecer principios re-





gulares, pues dejando a los legisladores la facultad de reglamentar la libertad de la prensa, algunos no habían podido detenerse en la fatal pendiente que lleva hasta suprimirla o someterla al juicio del ejecutivo, sin formas, como acontece en Francia. Que la Inglaterra había intentado en vano dar una ley sobre imprenta, y desistido de ello el parlamento, en presencia del peligro de atacar la libertad en su base, dando al legislador el derecho de reglamentarla; y que en Sud América, ningún estado había llegado a resultado estable ni satisfactorio. Que en presencia de estas dificultades, los publicistas de las repúblicas estaban contestes en declarar la libertad de la prensa, derecho reservado por el pueblo; y como la libertad de conciencia, que es otra forma de la libertad del pensamiento, fuera del alcance de la legislación, dejándole al abuso de ella su carácter de libelo ante las leyes ordinarias. Que en países como los nuestros, en que las comunicaciones y contacto eran difíciles, la educación del pueblo defectuosa y limitada, las prácticas administrativas irregulares o viciosas, y la tendencia a lo arbitrario inherente a todos estos defectos, la prensa, con todos sus inconvenientes de detalle, ejercía una poderosa y saludable influencia, poniendo de manifiesto lo que habría interés de ocultar, interesando a unos pueblos en la suerte de otros y difundiendo por la discusión y la publicidad una masa de luces, que, de otro modo, no llegaría a los extremos de la república. Que el ensayo feliz de la absoluta libertad de imprenta hecho nueve años en Buenos Aires, había desacreditado los especiosos argumentos contra ella, y que, además, entrando hoy Buenos Aires en la confederación, entraba con sus libertades conquistadas, y no siendo a las provincias dañoso, en manera alguna, que Buenos Aires tenga libertad de imprenta, esta restricción de legislar debía ser aceptada.»

El doctor Vélez, al discutirse el artículo 32, agregaba lo siguiente: «Voy a exponer los motivos de esta reforma, ya que no lo hacen los que la han propuesto. La reforma importa decir que la imprenta debe estar sujeta a las leyes del pueblo en que se use de ella. Un abuso de la libertad de imprenta, sujetaría el juicio a los tribunales federales, sacando el delito de su fuero natural. Si en una provincia como Buenos Aires no hubiera leyes de imprenta o los abusos de ella fueran sólo castigados por el juez correccional, como otra cualquiera





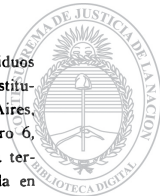
injuria, ¿por qué daríamos facultad al congreso para restringir la libertad de imprenta, darle otra pena a los delitos de imprenta, o imponer a los diarios restricciones o gravámenes que hicieran dificultosa su existencia?»

Las provincias, después de la sanción de la constitución, promulgaron diversas leyes locales que reprimían los delitos de calumnia e injuria propagados por medio de la prensa y esas leyes se encuentran en vigor en la actualidad.

c). La interpretación auténtica del alcance del artículo 32 que nos ocupa la han dado el congreso y el poder ejecutivo de la nación, como resulta claramente establecido de la discusión del código penal, que tuvo lugar en la sesión de 25 de octubre de 1885, y del proyecto enviado por el poder ejecutivo al senado en 1886. El ministro doctor Posse, como el doctor Tejedor, autor del código penal, el congreso y el poder ejecutivo nacional, han entendido siempre que el código penal no comprendía los delitos de imprenta.

d). La jurisprudencia de la suprema corte de la nación, en reiterados fallos, ha declarado, «que el artículo 32, tuvo el propósito de limitar las facultades del congreso como legislatura nacional, dejando a las locales el poder de reglamentar la libertad de imprenta y de reprimir los abusos que, con ella, se cometieran». Véanse fallos de la corte de la nación: tomo 10, pág. 361; tomo 17, pág. 110; tomo 30, pág. 112; tomo 113, pág. 263; tomo 114, pág. 60; tomo 115, pág. 92; fallo publicado en la jurisprudencia de los tribunales, entre de diciembre de 1911, pág. 7. (causa Ramos Mejía contra Mulhal), y sentencia de julio 14, del corriente año, insertada en el *Diario de Sesiones* de la cámara de diputados de la provincia, correspondiente al 24 del citado mes.

En el considerando 4.º de la sentencia de la suprema corte nacional, que se registra en el tomo 114, pág. 68, se dice: «Que el citado artículo 32, prohibió al congreso que estableciera la jurisdicción federal sobre la imprenta, porque se estimó que con ésta no podrían cometerse *delitos de carácter nacional*. La sociedad puede reglamentar y aún reprimir el abuso, pero esa reglamentación y esa represión son privativas de la soberanía provincial, es decir, son privativas de la sociedad en que el abuso se comete y a la cual puede dañar inmedia-



tamente, ya sea a ella sola, todo su conjunto o ya a los individuos aisladamente. (Informe de la comisión examinadora de la constitución federal, presentado a la convención del estado de Buenos Aires, edición de 1870, pág. 74, redactor de la misma comisión número 6, acta de la sesión ordinaria del 1.º de mayo de 1870; acta de la tercera sesión ordinaria de la convención nacional *ad hoc*, reunida en Santa Fe, 23 de septiembre de 1860).

Los tribunales de provincia, se han pronunciado en el mismo sentido, como puede verse en la notable sentencia de la cámara de apelaciones del Rosario, en la cual el doctor Pesenti, que votó en primer término agotó la cuestión. Pongo a disposición del tribunal esa luminosa sentencia de la cual acompaño copia.

10.—Alguna vez en el país, con más argucia que ciencia, se ha querido establecer la distinción entre abuso de la libertad de imprenta y delitos comunes cometidos por medio de la prensa. Esa distinción no tiene base legal: siempre se ha entendido en el país que se abusa de la libertad de imprenta injuriando o calumniando a los particulares, y esa fué la intención de los constituyentes del 60 y la tradición legislativa argentina. El reglamento sobre libertad de imprenta de 20 de abril de 1811—el decreto de 26 de octubre del mismo año—la ley de 11 de octubre de 1822—la ley de mayo 9 de 1828 y la de 17 de septiembre de 1857, estaban inspirados en esas ideas.

#### 11.—Conclusiones.

Fundado en las precedentes consideraciones, sostengo:

1.º—Que no existe en los artículos acusados ni calumnia ni injuria contra el querellante, desde que a él, personalmente, no se le ha imputado ningún hecho punible, real ni falso (condición esencial de la calumnia), limitándose su autor a criticar los errores, faltas o delitos cometidos en la administración municipal de Luján que estuvo a su cargo, sin individualizar los autores que esos errores, faltas o delitos, y a incitar al señor Saborido, como jefe de esa administración, a averiguar la verdad de los hechos para castigar a sus autores.

2.—Que no se ha probado que mi defendido don Juan G. Káiser sea el autor de las publicaciones acusadas; y

3.—Que aun admitiendo la existencia del delito y que se hubiese probado que Káiser fué su autor, no podría aplicarse el código penal para reprimirlo: a) porque el artículo 32 de la constitución nacional prohíbe al congreso legislar sobre delitos de imprenta; b) porque el código penal es repugnante a dicha prescripción constitucional en la parte aplicada en esta sentencia; c) porque el juez *a-quo* ha violado el artículo 18 de la constitución de la nación, en cuanto establece que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. En el caso de autos no hay ley que castigue el delito imputado a Káiser.

Termino, excelentísima cámara, esta expresión de agravios, y pido se anule la sentencia apelada o se la revoque en todas sus partes.

## II

### SENTENCIA DE LA CÁMARA 3.ª DE APELACIÓN DE LA PLATA

En la ciudad de La Plata, a 28 de noviembre de 1914, reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la excelentísima cámara 3.ª de apelación para pronunciar sentencia definitiva en la querella seguida por don Diego Saborido contra don Juan G. Káiser por calumnias e injurias, se procedió a practicar la insaculación prescripta por el artículo 173 de la constitución de la provincia y 14 del reglamento de las cámaras, resultando de ella que en la votación debía observarse el orden siguiente: Doctores Míguez, Goñi, Salas.

Apelada la sentencia de primera instancia, por el querrellado y su defensor, el tribunal, de acuerdo con el artículo 598 del código de procedimiento, resolvió plantear y votar las siguientes



## CUESTIONES:



- 1.º—¿Es nula la sentencia recurrida?
  - 2.º—En los escritos insertos en los periódicos agregados de fojas 5 a fojas 8, ¿se imputa al querellante la comisión de hecho o hechos constitutivos de delitos, en su carácter de funcionario público?
  - 3.º—En las mismas publicaciones, ¿se deshonra, desacredita o menosprecia al querellante?
  - 4.º—¿Hay prueba de que sea el querellado el autor de esos escritos?
- Caso negativo:
- 5.º—¿Está probado que él los ha publicado o reproducido?
  - 6.º—¿Corresponde, por ser director el acusado, responsabilizarlo como autor de las publicaciones acusadas?
  - 7.º—¿Obró el procesado con voluntad criminal?
  - 8.º—¿Se ha probado la verdad de las imputaciones?
  - 9.º—¿Cómo debe calificarse el hecho a que se refiere la segunda cuestión?
  - 10.—¿Como el tratado en la tercera?
  - 11.—¿Concurre la agravante de reiteración de delito?
  - 12.—¿Qué pronunciamiento corresponde?

En la cuestión PRIMERA el señor juez doctor Míguez, dijo:

Estimo que no procede la nulidad de la sentencia apelada, por defecto de forma, por cuanto se ajusta en un todo con los requisitos que impone el artículo 510 del código de procedimiento en materia penal. La nulidad de todo el procedimiento hasta la sentencia inclusive, por no haberse tomado indagatoria al acusado, es también improcedente, puesto que si se creía que era necesaria esa indagatoria, debió reclamarse en primera instancia y no dejar consentir el procedimiento (artículo 531 del código de procedimiento).

Por otra parte, de los términos de los artículos 760 y 761 del código de procedimiento se desprende, con toda claridad, que no se debe tomar indagatoria al acusado por calumnias e injurias, desde



el momento que se establece que si el querellado no comparece a la audiencia de conciliación, el querellante deberá deducir la acusación, y en el procedimiento criminal y correccional no es procedente la acusación y la defensa, antes de levantarse y cerrarse el sumario, para lo cual ha debido decretarse prisión preventiva, la que no procede en este caso (artículo 451 del código de procedimiento).

El artículo 766 del código de procedimiento es de aplicación sólo en el caso que en el título de la calumnia e injuria no esté marcado el procedimiento a seguir, pero no en el caso que presenta la defensa, en que el trámite a seguir está perfectamente determinado. No se ha violado pues el artículo 9.º de la constitución de la provincia, desde que el acusado ha hecho su defensa por escrito y desde que en ese artículo no se establece que la defensa debe de ser verbal.

La nulidad de la sentencia por haberse condenado al prevenido de acuerdo con la ley 4189, también la considero inadmisibile. La ley 4189, en la parte que reprime la calumnia e injuria proferidas por medio de la prensa, no es violatoria de los artículos 18 y 32 de la constitución nacional, puesto que no restringe la libertad de la prensa, sino que pena a los que se valen de ella para cometer un delito común; ni establece sobre ella la jurisdicción federal, desde que es una ley de fondo, dictada de acuerdo con el artículo 67, inciso 11, de la constitución nacional, y cuya aplicación corresponde a los jueces provinciales, de acuerdo con el procedimiento que rige en cada provincia.

La prensa, como instrumento de civilización, requiere la mayor suma de libertad para poder ejercer su ministerio con eficacia. Tanto los pueblos como los gobiernos han comprendido que debían eliminar las restricciones que pesaban sobre la prensa en otro tiempo; y se han dictado leyes liberales que, rodeando de garantías la libre comunicación de ideas y opiniones por medio de la prensa periódica, la han ayudado a que se constituya en una institución independiente, sirviendo al pueblo en sus múltiples y complejos intereses, siendo a la vez censor de los malos actos de los mandatarios y dando su aplauso a todo aquello que importa un bien para la comunidad.



Pero la libertad de la prensa no es más esencial ni merece más protección que cualquiera de las otras libertades.

Ninguna libertad, para ser bien amparada, ha menester de ser colocada en situación privilegiada. Al contrario, requiere ser considerada al nivel de las demás.

La prensa no necesita gozar de impunidad para cometer delitos; ella es suficientemente libre en este país, a pesar de que los delitos que por medio de ella se cometan estén regidos por el derecho común. La garantía que ofrece el artículo 32 de la constitución nacional, alcanza sólo a aquellos actos que no son susceptibles de una calificación legal, y que no constituyen sino extravíos de doctrina o de opinión. De esta manera se asegura para la prensa una acción amplia. Pero este derecho no es absoluto, ilimitado, sino sujeto, como todos los demás, a las leyes que reglan su ejercicio. Si así no fuera, la libertad degeneraría en licencia. Dejo establecido que la ley no alcanza a aquellos actos que no son susceptibles de una calificación legal y que no pueden constituir sino extravíos de doctrina o de opinión considerados como abusos de la libertad de la prensa, amparados por el artículo 32 de la constitución nacional; pero que, si, pena aquellos hechos que, cometidos por medio de la prensa, son calificados de delitos. Mas por la segunda parte del artículo 32 de la constitución nacional se prohíbe dictar leyes que establezcan la jurisdicción federal sobre la prensa. La ley 4189, ¿es violatoria de esa disposición, en la parte que legisla sobre calumnia e injuria? No.

La ley 4189 es ley de fondo, dictada de acuerdo con el artículo 67, inciso 11, de la constitución nacional, y el artículo 32 se refiere a los jueces que deban juzgar los delitos cometidos por medio de la prensa, que son los del fuero provincial y el procedimiento a seguir, que es la facultad que se han reservado las provincias. Respecto a la constitucionalidad de la ley 4189, tratándose de delitos de calumnia e injuria, cometidos por medio de la prensa, la suprema corte de la provincia ha declarado, con fecha de septiembre próximo pasado, que ésta es de aplicación en esos casos, pues no se trata de *abusos* de la libertad de imprenta, sino de la perpetración del delito de injurias cometido por medio de la prensa y legislado por los artículos 179, 180, inciso 2, del código penal.

Voto por la negativa, en virtud de que no se han violado los artículos 18 y 32 de la constitución nacional.

Los señores jueces doctores Goñi y Salas, por los mismos fundamentos, votaron en igual sentido.

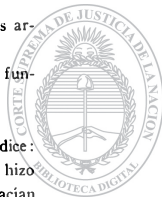
En la cuestión SEGUNDA el doctor Miguez dijo:

En el periódico *La Opinión*, fecha 30 de abril de 1912, se dice:

«Hubo un inspector municipal que al separarse del empleo hizo una publicación sosteniendo que en las planillas mensuales se hacían figurar peones imaginarios; y eso, que en cualquier parte del mundo constituye una defraudación, un robo de dineros públicos, no es considerado como un *cargo concreto* por los defensores asalariados de esa administración.»

Ante esa acusación clara, precisa, determinada, cualquier jefe de administración tiene el deber ineludible de realizar una investigación amplia y pública para conocer a los culpables y castigarlos; y al no hacerlo, se hace cómplice solidario del delito.

En estos cargos se imputa el delito de malversación, desde que, al sostenerse que los peones que figuran en las planillas son imaginarios, se afirma que se apropian del dinero destinado al pago de éstos. Y si alguna duda cupiera respecto de a quién se dirige esa imputación, ella se disipa leyendo el mismo periódico, fecha 7 de mayo de 1912, corriente a fojas 8, en el que se dice: «Si el coronel Saborido quiere verdaderamente hacer la luz sobre los procederes de su administración, investigue la verdad de la acusación gravísima formulada contra ella, de haberse hecho figurar peones imaginarios en las planillas mensuales de pago, justifique la inversión o la retención de los fondos recolectados en Carlos Keen, y publique el detalle de las órdenes de pago expedidas por él desde que está al frente de la administración.» En estos cargos se vuelve a imputar al querellante el delito de malversación, puesto que se le dice que no ha dado a los fondos, producto de una subscripción, el destino que debía darles. Más concreto aún, si cabe, se es en la publicación corriente a fojas 6, en la que se afirma: «Si el comisionado y los que lo representan y manejan, supieran cuidar mejor los intereses de la comuna y los suyos propios, economizarían las fuertes cantidades empleadas bajo





distintas denominaciones en remunerar a los tristes defensores que tienen en los redactores del papelucho oficial.»

En este cargo también se imputa al querrelante el delito de malversación, desde el momento que se le dice que da un destino indebido a los fondos municipales. Los hechos que se le atribuyen al querrelante encuadran dentro de lo dispuesto en el artículo 27 de la ley 4189. Y que las imputaciones se dirigen al querellante no hay duda, pues en el periódico de fojas 6 se le individualiza. Por otra parte, «para la existencia de los delitos de calumnia e injuria contra persona determinada, no es preciso nombrar ésta de una manera expresa, cuando por el contexto del sueto o artículo calumnioso o injurioso se conoce claramente aquella a quien se quiere aludir, pues de otra suerte dependería de la habilidad del escritor el poder denigrar y ofender impunemente a toda clase de personas omitiendo con cautela sus nombres o títulos distintivos.»

En consecuencia, voto por la afirmativa.

Los señores jueces doctores Goñi y Salas, por los mismos fundamentos, votaron en igual sentido.

En la cuestión TERCERA el doctor Miguez dijo:

Voto por la afirmativa, puesto que en el periódico agregado a fojas 8, se dice a la administración de la comuna de Luján que «a la incorrección y falta de honradez une la desidia, la incapacidad y la inacción».

Estas expresiones constituyen, clara y manifestamente, una injuria grave en contra del jefe de la administración comunal, que lo era el querellante, pues se le imputa una falta de moralidad que tiende a mermar y perjudicar considerablemente la fama del agraviado.

Los señores jueces doctores Goñi y Salas, por los mismos fundamentos, votaron en igual sentido.

En la cuestión CUARTA el doctor Miguez dijo:

Voto por la negativa, pues estimo que en autos no existen elementos de juicio suficientes para declararse al acusado autor de las publicaciones corrientes a fojas 5, 6, 7 y 8.

Los señores jueces doctores Goñi y Salas, por los mismos fundamentos, votaron en igual sentido.





En la cuestión QUINTA el doctor Míguez dijo:

Voto por la afirmativa. En el escrito de defensa se confiesa el querellado director del periódico *La Opinión* pues dice: «La jurisprudencia de nuestros tribunales exige como condición indispensable para que ese delito exista, el dolo especial, y jamás podrá comprobarse me haya movido a publicar los artículos acusados otra intención ni otro propósito que procurar se corrijan los abusos», etc., etc.

Para que una declaración importe una confesión, no es indispensable que se preste verbalmente, sino que basta que reúna los requisitos del artículo 485 del código de procedimiento, lo que ocurre en el caso *sub judice*.

De lo contrario, no existiría la prueba de confesión en los delitos de calumnia e injuria en que no presta indagatoria el acusado. Respecto de que el acusado sea el que subscribe el escrito de fojas 56, no cabe duda, desde que fué a él a quien se le notificó de la acusación. Pero si esta prueba no fuera suficiente para demostrar que el acusado es el director de *La Opinión*, en el acta de fojas 72 está su declaración franca al respecto. Esa acta no la invoca como prueba de confesión, porque no se trata de una confesión prestada en este juicio, pues si así fuera sería nula, por haber sido prestada bajo juramento. Se trata de una declaración prestada ante otra autoridad con motivo de otro juicio, y en la cual, espontáneamente, el hoy acusado se declaró director del periódico *La Opinión*. No se ha violado, pues, el artículo 18 de la constitución nacional. El testimonio de esa acta agregado a este juicio, es el testimonio de un documento público en el cual consta que el acusado es el director del periódico agregado a fojas 5, y por lo cual la considero como plena prueba para votar, como lo hago, por la afirmativa, de acuerdo con el artículo 483 del código de procedimiento.

Los señores jueces doctores Goñi y Salas, por los mismos fundamentos, votaron en igual sentido.

A la cuestión SEXTA el doctor Míguez dijo:

El querellado, como director del periódico *La Opinión*, es responsable de las publicaciones aparecidas en su periódico. La defensa sostiene que el artículo 4.º, letra d), de la ley 4189, salva la responsabilidad del director respecto de los hechos que se cometan por



medio de su periódico. El artículo citado excluye de responsabilidad a los editores, cajistas, impresores, grabadores, etc., pero no al director, que es responsable, de acuerdo con el artículo 21, letra d), de la ley 4189.

La cooperación del editor, cajista, etc., no se produce con propósito criminal, ni con el objeto de lesionar derechos, sino con el fin de explotar una industria, como medio de satisfacer las necesidades de la vida. Pero de otra manera, si el cajista, grabador, etc., fueran responsables y se diera por sentado que prestaban sus servicios con voluntad criminal, sucedería que se restablecería la censura previa a manos de la ignorancia. El director es distinto, y presta un concurso consciente. Él es el que revisa todos los originales y sabe cuáles son los artículos que caen bajo la sanción legal; si los da a la publicidad, no es ignorando el perjuicio que van a ocasionar; luego procede de mala fe. Por esto nuestra ley lo hace responsable. Voto, pues, por la afirmativa.

Los señores jueces doctores Goñi y Salas, por los mismos fundamentos, votaron en igual sentido.

En la cuestión SÉPTIMA el doctor Míguez dijo:

Comprobada la falsa imputación de un delito que tenga obligación de acusar el ministerio público, y no emergiendo de los autos presunciones favorables al acusado, se presume que ha procedido con voluntad criminal, de acuerdo con el artículo 6.º del código penal, puesto que la ley no ha establecido expresamente que se necesita el dolo especial para considerar al autor de la especie calumnioso, reo de ese delito.

Esta es la doctrina de nuestro código, y la considero exacta. El ataque al honor o la dignidad de una persona, hecho verbalmente, puede ser irreflexivo, cometido en un momento de apasionamiento.

El delito cometido por medio de la prensa no es espontáneo; ha existido deliberación. El agente, en este caso, no puede escudarse con la falta de dolo. Voto, pues, por la afirmativa.

El señor juez doctor Goñi dijo:

Que la disposición del artículo 6.º del código penal no era aplicable al caso, puesto que ella se refiere a hechos clasificados de delitos; en el caso de autos, recién sería clasificado el hecho como delito.



una vez que esté probada la falsedad de la imputación. En esa situación, probada la falsedad, recién se verá que hubo dolo, puesto que hubo la imputación falsa, de donde surge evidente la intención criminal de hacer un mal, existe entonces la intención contraria a la libertad e integridad personal que la constitución consagra en beneficio de toda persona. Voto, pues, por la afirmativa.

El señor juez doctor Salas dijo:

No considero, como el señor juez que lleva la palabra, que sea aplicable al delito de calumnia la presunción de dolo que establece el artículo 6.º del código penal, pues consistiendo ese delito en la falsa imputación de una acción delictuosa acusable de oficio, es elemento integrante del mismo la falsedad de la imputación.

Pero siendo el honor y la dignidad derechos garantidos por la constitución nacional y de la provincia, no puede ni debe suponerse como exacta toda imputación que importe una disminución del concepto de que goce el individuo social; y si bien es de interés general que se hagan públicas las infracciones a las leyes represivas y principalmente las llevadas a cabo por funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, no es menos cierto que el verdadero remedio contra esas acciones no es la imputación pública, más o menos apasionada, sino la denuncia de ellas ante la justicia, para que ésta imponga al que ha violado los preceptos legales la pena que corresponda; y a este respecto no debe confundirse la crítica más o menos imparcial o enconada, pero legítima, de los hechos públicos de las personas, tendientes al alto propósito de mejorar la administración, con la inculpación de hechos concretos, cuya represión está encomendada al poder judicial.

En otro orden de ideas, es de tener en cuenta que, al acusar el inculpado al autor de la publicación, lo pone en condiciones de llevar a juicio todos los elementos necesarios para demostrar la exactitud de sus afirmaciones o su buena fe al respecto.

Así lo ha entendido nuestra legislación, estableciendo en el artículo 178 del código penal que, si el autor de la imputación lo probase, quedaría libre de pena. Posteriormente, la ley 4189 suprimió esta disposición, análoga al artículo 470 del código español, fuente de nuestra legislación en esta materia, considerando que era innece-



saría, pues si se castigaba la falsa imputación de un delito, era obvio que si la imputación era exacta no podía ser considerada como constitutiva del acto delictuoso que la ley reprimía.

Así lo ha resuelto uniformemente el tribunal supremo de España al interpretar al citado artículo 470. y los nuestros al aplicar el antiguo artículo 178 del código penal.

En consecuencia, teniendo en cuenta que, si bien no es el dolo general regido por el artículo 6.º del código penal el integrante de esta clase de delitos, sino el dolo especial emergente de la falsedad del hecho inculpado, dolo especial que debe presumirse, atento lo establecido en el artículo 18 de la constitución nacional y artículo 9.º de la provincia, y que aparece confirmada en el caso *sub judice*, por las circunstancias particulares de la causa, voto por la afirmativa.

En la cuestión OCTAVA el doctor Míguez dijo:

La prueba de testigos presentada por el acusado para comprobar la verdad de las imputaciones hechas contra el querellante en el periódico *La Opinión*, no ha dado resultado positivo, puesto que los testigos no son peritos para dar sus opiniones, sino que deben depone sobre los hechos respecto de los cuales tuvieran conocimiento.

En cambio, el querellante, por medio del informe de fojas 197, ha comprobado su corrección en el manejo de los dineros públicos (artículo 482 del código de procedimiento), voto, pues, por la negativa.

Los señores jueces doctores Goñi y Salas, por los mismos fundamentos, votaron en igual sentido.

En la cuestión NOVENA el doctor Míguez dijo:

El hecho a que se refiere la cuestión segunda, debe calificarse como calumnia, delito previsto por el artículo 177 del código penal y penado por el 21, letra a), de la ley 4189.

Los señores jueces doctores Goñi y Salas, por los mismos fundamentos, votaron en igual sentido.

En la cuestión DÉCIMA el doctor Míguez dijo:

El hecho a que se refiere la cuestión tercera debe calificarse como de injuria grave, delito previsto por los artículos 179 y 180, inciso 2, del código penal, y penado por el artículo 21, letra b), de la ley 4189.



Los señores jueces doctores Goñi y Salas, por los mismos fundamentos, votaron en igual sentido.

En la cuestión UNDÉCIMA el doctor Míguez dijo:

Concurre el agravante de reiteración de delitos, de acuerdo con lo que prescribe el artículo 85 del código penal, puesto que son distintas imputaciones las que ha hecho el acusado, unas de carácter calumniosos y otros injuriosos.

Los señores jueces doctores Goñi y Salas, por los mismos fundamentos, votaron en igual sentido.

En la cuestión DUODÉCIMA el doctor Míguez dijo:

Corresponde no hacer lugar al recurso de nulidad interpuesto, y confirmar con costas la sentencia apelada.

Los señores jueces doctores Goñi y Salas, por los mismos fundamentos, votaron en igual sentido.

Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces.

MÍGUEZ. — GOÑI. — SALAS.

Ante mí:

*Emiliano F. de la Puente (hijo).*

## SENTENCIA

La Plata, noviembre 28 de 1914.

### RESULTANDO:

1.º—Que no es nula la sentencia recurrida (artículo 510, código de procedimiento).

2.º—Que está probado que en los escritos insertos en los periódicos agregados de fojas 5 a fojas 8, se imputa al querellante, la comisión de hecho o hechos constitutivos de delitos, en su carácter de funcionario público.

3.º—Que lo está, que en las mismas publicaciones se deshonra, desacredita o menosprecia al querellante.

4.º—Que no hay prueba de que sea el querellado el autor de esos escritos.



5.—Que está probado que él los ha publicado o reproducido.

6.—Que corresponde, por ser director el acusado, responsabilizarlo como autor de las publicaciones acusadas. (Artículo 21, letra *d*) de la ley 4189).

7.—Que obró el procesado con voluntad criminal. (Artículo 6.º del código penal).

8.—Que no se ha probado la verdad de las imputaciones. (Artículo 482 del código de procedimiento).

9.—Que el hecho a que se refiere la cuestión segunda, se califica de calumnia. (Artículo 177 del código penal y 21 letra *a*) de la ley 4189).

10.—Que el tratado en la tercera, se califica de injuria grave. (Artículos 179 y 180, inciso 2.º del código penal, y 21 letra *b*) de la ley 4189).

11.—Que concurre la agravante de reiteración de delitos. (Artículo 85 del código penal).

12.—Que corresponde imponer al querellado Juan G. Káiser, la pena de dos años y medio de penitenciaria, accesorias de ley, fijándose en un año la inhabilitación y pago de las costas procesales.

Por tanto, no se hace lugar al recurso de nulidad, interpuesto y se confirma la sentencia apelada de fojas 235, con costas al recurrente. (Artículo 175 del código de procedimiento). Notifíquese y devuélvase.

E. G. MÍGUEZ.—JUAN C. GOÑI.—GABINO SALAS.

Ante mí:

*Emiliano F. de la Puente (hijo).*



### III

**RECURSO EXTRAORDINARIO DEDUCIDO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DE LA SENTENCIA CONDENATORIA  
QUE PRECEDE.**

1. Interposición del recurso extraordinario. — 2. En el caso concurren los requisitos del artículo 14, inciso 3, de la ley nacional número 48: *a)* discusión en el pleito de una cuestión federal; *b)* qué debe entenderse por superior tribunal de provincia.

Tomás Jofré, defensor de Juan G. Káiser, en el juicio que le sigue don Diego Saborido, por calumnias e injurias, a V. E. digo:

1.—Que vengo a interponer para ante la suprema corte de justicia nacional, el recurso extraordinario que autoriza el artículo 14 de la ley número 48, de 14 de septiembre de 1863.

2.—El inciso 3.º de ese artículo establece que puede apelarse ante la suprema corte, de la sentencia definitiva pronunciada por los tribunales superiores de provincia, cuando la inteligencia de alguna cláusula de la constitución, o de un tratado o ley del congreso, o una comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional, haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título, derecho, privilegio o exención que se funda en dicha cláusula y sea materia del litigio.

Corresponde, entonces, dada la naturaleza del recurso que demuestre que concurren en el caso los requisitos exigidos por la disposición legal citada.

*a).* He sostenido en este juicio que no es aplicable el código penal en las provincias, cuando se trata de reprimir los abusos de la libertad de imprenta que constituyen delitos de calumnia o injuria; el código penal, en esa clase de delitos, es simplemente una ley local para la capital de la república y territo-



rios nacionales, dictada por el congreso, en uso de las facultades que le confiere el artículo 67, inciso 27 de la constitución citada; que una de las garantías primordiales establecidas por la constitución nacional, es que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso, y que esa garantía se ha violado en este caso, desde el momento que a mi defendido se le ha condenado sin que exista ley que le imponga pena.

He tachado las disposiciones de la ley 4189, en la parte en que reprimen los delitos de calumnia e injuria, como repugnantes a los artículos 18 y 32 de la constitución nacional.

He sostenido asimismo, que el congreso no puede legislar sobre delitos cometidos por medio de la prensa.

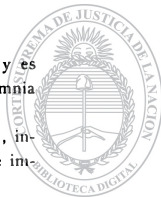
En efecto, la interpretación del artículo 32 de la constitución nacional, no ofrece dudas al respecto por cualquier lado que se la examine. *a)*. La letra del artículo citado, es bien clara: el congreso federal, dice, no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta, y es evidente que se la restringe cuando se castigan los delitos de pensamiento, cuando se reprimen las ideas. *b)*. Los antecedentes históricos del referido artículo, nos demuestran asimismo, cuál fué la mente de sus autores. Como es sabido, esa disposición legal no figuraba en el proyecto de Alberdi, ni en la constitución de 1853, y fué incorporada por el estado de Buenos Aires, en la revisión que se hizo de aquel estatuto en la ilustre convención del 60. En el *Relator* de la comisión examinadora de la constitución, redactado por Mitre, Vélez, Sarmiento, etc., se leen las siguientes palabras: «El congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal...»

Reproduzco en lo demás mi escrito de expresión de agravios.

Sostuve en el juicio, que a Káiser no se le podía imponer pena fundada en una ley del congreso, por cuanto se oponían a ello el citado artículo 32 y el 18 de la constitución nacional. Este último establece que no hay pena sin ley.

La provincia de Buenos Aires puede castigar los delitos de





calumnia o injuria, por una ley emanada de su legislatura, y es la única que puede aplicarse, tratándose de delitos de calumnia o injuria propagadas por medio de la prensa.

He pretendido además, que si se aplicara el artículo 21, inciso a) de la ley nacional 4189, se restringiría la libertad de imprenta, violándose el citado artículo 32.

He invocado el artículo 18 de la constitución nacional, en cuanto establece que nadie puede ser penado sin ley anterior al hecho del proceso.

El camarista que llevó el voto en primer término en el acuerdo, ha desestimado esas alegaciones, sosteniendo que «La ley 4189, en la parte que reprime la calumnia e injuria proferidas por medio de la prensa, no es violatoria de los artículos 18 y 32 de la constitución nacional, puesto que no restringe la libertad de la prensa, sino que pena a los que se valen de ella para cometer un delito común; no establece sobre ella la jurisdicción federal, desde que es una ley de fondo dictada de acuerdo con el artículo 67, inciso 11 de la constitución nacional, y cuya aplicación corresponde a los jueces provinciales de acuerdo con el procedimiento que rige en cada provincia. La prensa, como instrumento de civilización, requiere la mayor suma de libertad para poder ejercer su ministerio con eficacia...

»Pero la libertad de la prensa no es más esencial ni merece más protección que cualquiera de las otras libertades.

»Ninguna libertad para ser bien amparada, ha menester ser colocada en situación privilegiada. Al contrario, requiere ser considerada al nivel de las demás.

»La prensa no necesita gozar de impunidad para cometer delitos, ella es suficientemente libre en este país, a pesar de que los delitos que por medio de ella se cometan, estén regidos por el derecho común. La garantía que ofrece el artículo 32 de la constitución nacional, alcanza sólo a aquellos actos que no son susceptibles de una calificación legal y que no constituyen sino extravíos de doctrinas o de opinión. De esta manera se asegura para la prensa una acción amplia. Pero este derecho no es absoluto, ilimitado, sino sujeto como todos los demás a las leyes



que reglan su ejercicio. Si así no fuera, la libertad degeneraría en licencia. Dejo establecido que la ley no alcanza aquellos actos que no son susceptibles de una *calificación legal* y que *no pueden constituir sino extravíos de doctrinas o de opinión, considerados como abusos de la libertad de la prensa*, amparados por el artículo 32 de la constitución nacional, pero que, sí, pena aquellos hechos que, cometidos por medio de la prensa son calificados de delitos. Mas, por la segunda parte del artículo 32 de la constitución nacional, se prohíbe dictar leyes que establezcan la jurisdicción federal sobre la prensa. ¿La ley 4181 es violatoria de esa disposición en la parte que legisla sobre calumnia e injuria? No.

»La ley 4189, es ley de fondo dictada de acuerdo con el artículo 67, inciso 11 de la constitución nacional, y el artículo 32 se refiere a los jueces que deban juzgar los delitos cometidos por medio de la prensa, que son los del fuero provincial, y el procedimiento a seguir que es la facultad que se han reservado las provincias. Respecto de la constitucionalidad de la ley 4189, tratándose de delitos de calumnia e injuria, cometidos por medio de la prensa, la suprema corte ha declarado con fecha de septiembre ppdo., que ésta es de aplicación en estos casos, pues no se trata de abusos de la libertad de imprenta, sino de la perpetración del delito de injuria cometido por medio de la prensa y legislado por los artículos 179 y 180, inciso 2.º del código penal».

Los otros vocales de la excelentísima cámara se adhirieron al voto anterior que vino a formar la sentencia.

Quiere decir, entonces, que en el pleito se ha producido la discusión a que se refiere el artículo 14, inciso 3.º de la ley 48 citada, y que la resolución ha sido en contra del derecho o exención invocado.

b). Es evidente también, que V. E. en el caso de autos es el superior tribunal de provincia a que se refiere el citado artículo 14.

El recurso extraordinario de inconstitucionalidad ante la suprema corte de justicia provincial, no procede en el caso de autos, por ajustarse la sentencia de V. E. a las disposiciones de



los artículos 173 y 178 de la constitución de la provincia y al artículo 10 de la ley provincial de 21 de julio del corriente año.

En lo que se refiere al recurso de inaplicabilidad de ley o de doctrina legal, tratándose de una sentencia confirmatoria, es igualmente improcedente: artículo 548, inciso 2.º del código de procedimiento en lo criminal.

Me permito transcribir aquí lo que he dicho en mi libro *Manual de Procedimiento Criminal*: La sentencia, para ser recurrible por la vía extraordinaria que nos ocupa, ha de emanar del superior tribunal de provincia, en el caso. Así, en la provincia de Buenos Aires, donde existe una suprema corte de justicia, cámaras de apelación y jueces de 1.ª instancia, cada uno de ellos puede ser tribunal superior de provincias, si de acuerdo con las leyes locales conoce en un asunto en última instancia. Los jueces de 1.ª instancia, son tribunal superior en los asuntos que les van en apelación de la justicia de paz; las cámaras de apelación en las causas criminales, donde la pena confirmatoria no pasa de veinticinco años de presidio y en otros casos; y la corte en los casos que determina el artículo 157, inciso 6.º de la constitución de la provincia. Si el jefe de policía, por ejemplo, resuelve en primera y última instancia una cuestión que afecte al derecho federal, revestirá en el caso, el carácter de tribunal superior de provincia. Fallos de la suprema corte, tomos 96, pág. 336; 107, pág. 263; 114, pág. 16, y 116, pág. 138\*.

Por lo expuesto, sírvase V. E. concederme el recurso extraordinario que dejo fundado para ante la suprema corte de justicia de la nación.

MEMORIA PRESENTADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  
NACIÓN EN LA MISMA CAUSA



1. Antecedentes. — 2. Alcance del artículo 32 de la constitución nacional: *a)* las palabras de Vélez en la convención reformadora de la constitución; *b)* jurisprudencia de la corte. — 3. Interpretación del artículo constitucional por el congreso y legislaturas de provincia: *a)* proyecto Tejedor; *b)* una opinión del doctor Filemón Posse; *c)* discusión de una ley de imprenta en el senado de la nación; *d)* ley de la provincia de Santa Fe; *e)* idem de la de Entre Ríos; *f)* idem de la de Santiago del Estero; *g)* idem de la de La Rioja; *h)* idem de la de San Luis; *i)* idem de la de San Juan; *j)* idem de la de Córdoba; *k)* idem de la de Buenos Aires. — 4. Lo que pensaba Elizalde en la convención reformadora de la constitución de Buenos Aires de 1853. — 5. La censura previa y el artículo 32 citado. — 6. Falsa distinción entre abusos de imprenta y delitos de imprenta. — 7. La provincia de Buenos Aires posee leyes de imprenta. — 8. Petición de principio de la cámara 3.ª — 9. Conclusión.

1.—Los antecedentes del caso pueden exponerse en dos líneas. El acusado dirigía un periódico que denunció malos manejos en los dineros de la comuna de Luján. El comisionado del gobierno, que lo era el coronel Saborido, dedujo acusación contra el periódico que reclamaba luz en la inversión de las rentas públicas.

Los tribunales de La Plata declararon que no había prueba de que el acusado fuera el autor de las publicaciones, y lo condenaron a sufrir la pena de dos años y medio de penitenciaría.

Se ha discutido en el pleito, si los delitos de calumnia e injuria, cometidos por medio de la prensa, caen bajo la sanción del código penal, o, si, por el contrario, se encuentran sujetos a las leyes provinciales.

La cámara *a quo* ha declarado lo primero en la sentencia apelada, condenando a mi defendido, por lo que otros han escrito.



2.—La discusión principal ha girado sobre el artículo 32 de la constitución nacional que dice: «El congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal».

El origen de ese artículo, la interpretación legislativa y judicial, que ha recibido en el país, nos demuestran que corresponde a las soberanías provinciales dictar leyes para castigar los delitos que se cometen por medio de la prensa.

Ni el proyecto de Alberdi, ni la constitución de 1853, contenían disposición alguna análoga a la del artículo transcrito. Fué en la convención revisora de 1860, que se introdujo la enmienda, tomándola de la constitución de Estados Unidos.

a). Más de una vez se han citado las palabras del doctor Vélez, pronunciadas en el seno de la convención: «La imprenta debe estar sujeta a las leyes del pueblo en que se use de ella. Un abuso de la libertad de imprenta, NO PUEDE SER UN DELITO, diré así NACIONAL.»

b). La jurisprudencia que V. E. ha sentado en diversas épocas, nos dice: Que el artículo 32 tuvo el propósito de limitar las facultades del congreso como legislatura nacional, dejando a las locales el poder de reglamentar la libertad de imprenta y de reprimir los abusos que con ella se cometieran. Tomo 10, pág. 361; tomo 17, pág. 110; tomo 30, pág. 112; tomo 113, pág. 263; tomo 114, pág. 60; tomo 115, pág. 92. Causa Ramos Mejia con Mulhal. etc.

En la causa seguida a Teodoro Antilli y Apolinario Barreira, V. E., confirmando una ilustrada sentencia de la cámara criminal de esta capital, reafirmó aquella doctrina, al establecer que el artículo 32 tuvo el propósito de limitar las facultades del congreso, como legislatura nacional, dejando a las locales la facultad de reglamentar la libertad de imprenta y de reprimir los abusos que con ella se cometieran.

3.—La interpretación que ha recibido el artículo 32 de la constitución, por parte de las legislaturas de provincia y aún por el congreso de la nación, es un antecedente digno de tomarse en



cuenta. Son los hombres políticos los que generalmente aciertan en la interpretación de las leyes constitucionales, habituados como se hallan al manejo de la cosa pública, que consiste precisamente en poner en movimiento y dar vida a las instituciones.

Y nuestros políticos han entendido siempre que el congreso podía reglamentar la libertad de imprenta, solamente como legislatura local, sin extender su imperio al territorio de las provincias.

a). En el proyecto de código penal del doctor Carlos Tejedor, se decía, en el artículo 4.º: «Las disposiciones de este código no comprenden... 2.º Los delitos de imprenta, etc.». La nota a ese artículo dice: que no comprende los delitos de imprenta el código, a mérito de lo dispuesto por el artículo 32 de la constitución nacional.

b). Al discutirse en la cámara de diputados de la nación, el código penal, sobre la base del proyecto de Tejedor, el ministro de justicia, doctor Filemón Posse, explicando, por qué se había suprimido el artículo 4.º citado, decía: «Después se expresa en ese título lo que no se legisla; pero para saber sobre qué se legisla, basta leer lo que se legisla».

El código no legisla sobre delitos militares. Basta con que no legisle, para que se sepa que no legisla sobre esos delitos.

«¿Por qué no dice que no legisla sobre delitos de marina? Basta que no legisle para que se sepa que no lo hace».

«Entonces, pues, esta parte es perfectamente inútil».

c). En el senado de la nación, se ha discutido por los principales hombres públicos argentinos... Cortés, Posse, Del Valle, un proyecto de ley de imprenta destinado exclusivamente a regir en la capital de la república. El poder ejecutivo nacional envió al congreso un proyecto análogo en 1887, redactado por los doctores Aguirre y Ruiz de los Llanos.

Las provincias han reclamado, con empeño, el derecho que les acuerda la constitución, de legislar sobre los abusos de libertad de imprenta, y al efecto han dictado una legislación apropiada.

d). Santa Fe dictó su ley de imprenta el 2 de octubre de



1876. En ella se define la calumnia y la injuria en términos equivalentes a los del código penal, y se establece que los autores de las mismas, serán reprimidos con 100 a 2.000 pesos de multa. Esa ley fué completada por la de octubre 16 de 1882 y por la de noviembre 10 de 1889. Las leyes locales y el código penal, fijan diferente pena para los delitos de calumnia e injuria, cometidos por la prensa y son, por consiguiente, inconciliables.

Preveo, no obstante, una objeción. El código penal es posterior a la ley de imprenta de Santa Fe, y ésta ha quedado de hecho sin vigor, al sancionarse aquél. No lo han entendido así los tribunales provinciales y han declarado aplicable la ley local, imponiendo a los autores de delito de injuria y calumnia la penalidad que la misma establece, haciendo una interpretación correcta del artículo 32 de la constitución nacional. He citado en mis escritos anteriores una ilustrada sentencia de los tribunales del Rosario sobre este punto, y a ella me remito.

c). La provincia de Entre Ríos dictó su ley de imprenta el 28 de julio de 1887, vale decir, con posterioridad a la vigencia del código penal. Los artículos 9 y 10, definen los delitos de calumnia e injuria, y el artículo 19 fija la penalidad diferente también de la del código nacional.

f). Santiago del Estero, en su ley orgánica de los tribunales, promulgada el 20 de septiembre de 1900, establece que los delitos de calumnia e injuria, cometidos por medio de la prensa, serán juzgados a elección del demandante, por las disposiciones de la ley de imprenta de 24 de julio de 1885, o por las disposiciones del código penal.

g). La ley de imprenta de la provincia de La Rioja, de 2 de noviembre de 1877, define y castiga los delitos de injuria y calumnia, cometidos por medio de la prensa. El 16 de diciembre de 1913, otra ley modificó la anterior, sin novar, respecto de sus ideas cardinales.

h). La provincia de San Luis ha dictado tres leyes de imprenta: la del 15 de septiembre de 1877, la de 26 de septiembre de 1882 y la vigente, que lleva fecha 8 de noviembre de 1898. En todas ellas—anteriores y posteriores al código penal—se definen



los delitos de calumnia e injuria, cometidos por medio de la prensa, y se establece el castigo muy diferente por cierto, al que fija el código penal de la república.

i). La provincia de San Juan, en su ley de 22 de julio de 1871, establece el jurado que funciona a diario en la actualidad y en cuanto a la penalidad, ha seguido las mismas huellas de las leyes citadas.

j). La provincia de Córdoba, dictó el reglamento provisorio de 1821, el decreto de 15 de septiembre de 1823, y la ley vigente de 1878, que establece multa de cien a quinientos pesos, para los autores de los delitos de calumnias e injurias, cometidos por medio de la prensa.

Existen, además, dos proyectos del poder ejecutivo: el uno de 1887, y el otro de julio 14 del año pasado. En este último, se establece que la pena del delito de imprenta será únicamente pecuniaria y no podrá exceder de dos mil nacionales, ni bajar de doscientos.

Esta rara coincidencia de los políticos argentinos, que no se encontraron en constante comunicación en el pasado, nos demuestra—como la prueba en las matemáticas—, que el artículo 32 de la constitución nacional, tiene el alcance que nosotros le atribuimos. Las mismas maneras de ver surgen de la realidad de las cosas, porque sólo la verdad se presenta uniforme e igual al humano criterio.

k). No me he ocupado, expofeso, de la provincia de Buenos Aires, en el capítulo anterior, porque deseaba demostrar que en ella se acentúa, aún más si cabe, el criterio que predominó en la convención de 1860, al discutirse el artículo 32 de la constitución.

Al sancionar las provincias su ley de imprenta, de 1.º de octubre de 1822, existían ya antecedentes patrios en pleno vigor, como el reglamento sobre libertad de imprenta, de 20 de abril de 1811, y el decreto de 22 de octubre del mismo año, que creó una junta protectora, encargada de declarar si había o no crimen en la publicación acusada. La ley del 22, estableció el procedimiento que había de seguirse en tales juicios. Más adelante, el 9 de mayo de 1828, otra ley definió los abusos de imprenta





en el artículo 1.º, y estableció la penalidad en el artículo 3.º. El 15 de septiembre de 1857, se dictó una ley que establece que las acciones de los particulares por injurias, calumnias o difamaciones que se cometan por la prensa, podrán ser deducidos ante los jueces ordinarios.

Todo esto significa; que en la provincia existen leyes de imprenta que no han sido derogadas, desde que el código penal no rige la materia; y que los tribunales locales han podido aplicar pena al acusado, sin necesidad de recurrir a leyes nacionales.

El derecho constitucional de la provincia de Buenos Aires, reconoce los mismos principios. El artículo 15 de la constitución de 1873 establece que «la libertad de la palabra escrita o hablada es un derecho asegurado a todos los habitantes de la provincia. En consecuencia, todos pueden publicar por la prensa sus pensamientos y opiniones, siendo responsables de su abuso ante el jurado, que conocerá del hecho y del derecho, con arreglo a la ley de la materia, sin que, en ningún caso, la legislación pueda restringir esta libertad, ni limitarla por medidas preventivas».

Al discutirse ese artículo en la convención citada, donde se sentaban los hombres más ilustres del país: Sarmiento, Alsina, Vélez, Rawson, Vélez Sársfield, Gutiérrez, Quintana, Tejedor, Mitre, López, Del Valle, Irigoyen, Moreno, Costa, etc., se puso en claro cuál era su alcance.

4.—Voy a permitirme citar la opinión de Elizalde:... «Efectivamente, señor—decía—cuando la convención de Buenos Aires, reformadora de la constitución nacional, se ocupaba de este asunto, tuvo lugar un hecho que nos llamó mucho la atención: el presidente de la confederación, por medio de una carta dirigida al gobierno de Córdoba, lo incitaba a tomar medidas que importaban la supresión de un diario que era afecto a la causa que representaba Buenos Aires, y contraria a la del gobierno del Paraná. Entonces nos apercibimos de que era necesario, para garantizar la libertad de la prensa «ponerla fuera de la acción del congreso», y de los tribunales nacionales, y fué ésta precisamente la razón que se tuvo para hacer la enmienda. En el *Redactor*



de la convención, está consignado este principio en el informe que se presentó a la misma convención. Pero yo citaré solamente las palabras del miembro informante doctor Vélez, cuando presentó el artículo a la sanción de la convención, porque son tan concluyentes, que no puede abrigarse la menor duda.

El doctor Vélez, decía lo siguiente: «La reforma importa decir que la imprenta debe estar sujeta a las leyes del pueblo en que se hace el abuso de la libertad de imprenta.»

Estas ideas no tuvieron contradicción ninguna, y fué aprobado el artículo por la convención, como había sido propuesto por el doctor Vélez, quedando, desde entonces, establecido que los tribunales nacionales no podían conocer en los delitos de imprenta, y que el *congreso no podía dictar leyes restrictivas de la libertad de imprenta*, que lo único que podía hacer el congreso era *dictar leyes de imprenta para la capital de la república y para el territorio federalizado*; pero nunca podía dictar leyes de imprenta que rigieran en la provincia. Tan es así, señor, que por el artículo que acaba de proponerse, se reconoce expresamente, que son las legislaturas de provincias las que reglamentarán las leyes de imprenta.

Por consiguiente, señor, desde que la imprenta está regida por las leyes que dicten las legislaturas de provincias, es claro que los abusos de la libertad de imprenta no pueden ser sometidos a los tribunales federales. Parece, señor, que hubiera cierta irregularidad, que en una provincia se pudiera atacar a las autoridades y a los empleados nacionales, y que éstos tuvieran que venir a provocar el juicio ante el jurado provincial: pero así fué precisamente, como quisimos que se entendiera la reforma, reforma que puede ser buena o mala; pero que, una vez hecha ha venido a ser parte de la constitución que todos tenemos que respetar.

Los Estados Unidos dieron una ley, que fué una especie de prueba que duró solamente dos años, estableciendo los hechos que se tenían por abusivos de la libertad de imprenta. Esta ley fué atacada de inconstitucional, fué combatida por muchas legislaturas, y aun cuando los tribunales la aplicaron en algunos



casos, fué borrada a los dos años de haberse dictado. Desde entonces el congreso no se ha atrevido a dar más leyes restrictivas de la libertad de imprenta.» Convención constituyente de Buenos Aires, tomo I, pág. 510.

5.—Se dice que, cuando en la constitución nacional se establece que el congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta, ha querido prohibir la censura previa, pero en ninguna manera poner trabas para que aquél establezca la penalidad contra los que cometen delitos de calumnia e injuria, por la prensa. Hay error en esa afirmación. El artículo 32 es más amplio, como lo hace notar Cooley, y de no ser así, estaría demás la prescripción del artículo 14 de la misma constitución, que establece que los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio... «de publicar sus ideas por la prensa, sin censura previa». El congreso federal, no puede establecer la censura previa, como no puede dictar leyes sobre libertad de imprenta.

6.—Otro de los argumentos que se han hecho, consiste en decir que la constitución nacional, en el artículo 32, se ha referido a los abusos de la libertad de imprenta, lo que es muy distinto a los delitos de calumnia e injuria, cometidos por medio de la misma.

Las leyes patrias y la doctrina, nos demuestran que la distinción carece de fundamento legal.

El artículo 2.º del decreto de 26 de octubre de 1811, decía: «El abuso de la libertad de imprenta es un crimen. Su acusación corresponde a los interesados, si ofende los derechos particulares; y a todos los ciudadanos, si compromete la tranquilidad pública, la conservación de la religión católica o la constitución del estado. Las autoridades respectivas impondrán el castigo, según las leyes».

Para ese decreto el delito común era un *abuso* de imprenta, y el abuso de imprenta era un delito común.



La ley provincial de octubre 1.º de 1821 establecía, en su artículo 2.º, que el juicio y castigo de todo *abuso* de la libertad de la prensa, correspondía a las justicias ordinarias. Es el mismo concepto del decreto anterior.

Para la ley de mayo 9 de 1828, comete *abuso* de la libertad de imprentas, el que ofende con sátiras e inventivas el honor y reputación de algún individuo, o ridiculiza su persona o publique defectos de su vida privada, designándolo con su nombre y apellido. Artículo 1.º.—Más adelante, se agrega en la misma ley, que todo *abuso* de la libertad de imprenta será castigado al menos con la multa de quinientos pesos, en beneficio del agraviado, etc.

Son, pues, perfectamente sinónimos *abuso* de la libertad de imprenta y delitos de *calumnias e injurias* cometidos por medio de la prensa.

La vieja intuición de abusos de la libertad de imprenta y delitos cometidos por medio de la prensa, ha sido rechazada por la doctrina uniforme de los tratadistas, y jamás se aceptó en las diversas leyes patrias que han regido en el país. La misma doctrina se consagra en todas las leyes de imprenta que han sancionado las provincias argentinas.

7.—No existe el temor, en cuanto a la provincia de Buenos Aires se refiere, de que los delitos de imprenta como el que motivó este proceso, puedan quedar impunes; su penalidad ha sido claramente establecida en la ley citada de 1828.

Debo agregar, que la acusación del coronel Saborido, lo ha sido en su carácter de funcionario público, y que, por consiguiente, no es aplicable la ley de 1857, que se refiere solamente a los particulares.

Al discutirse, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, la ley de 1857, el general Mitre hizo constar que ella se refería a los *particulares* y no comprendía a los funcionarios públicos, en su carácter de tales. (*Diario de sesiones* de la cámara de diputados, año 1857, pág. 333 en adelante).



8.—La sentencia de la cámara tercera de La Plata, sostiene que, cuando se impone dos años y medio de penitenciaría a un periodista por artículos que no ha escrito, no se restringe la libertad de imprenta, sino que se castiga a los que se valen de ella para cometer un delito común.

Con esta petición de principio, se desconoce el alcance y la filiación histórica del artículo 32 de la constitución. Llámese a los delitos de imprenta delitos *sui generis* o delitos comunes, el caso es que el congreso no tiene poder para definirlos o castigarlos.

La prensa, agrega la misma sentencia, no necesita gozar de impunidad para cometer delitos.

Jamás ha pretendido mi parte semejante cosa.

La provincia tiene leyes que definen los delitos de calumnia e injuria y fijan su penalidad. Mía no es la culpa, si no han sabido sus tribunales aplicar esas leyes, que ninguna autoridad legal ha derogado.

La garantía que ofrece el artículo 32 de la constitución—continúa diciendo la misma cámara—, alcanza sólo a aquellos actos, que no son susceptibles de una calificación legal y que no constituyen sino extravíos de doctrina y de opinión...

Ese párrafo es inaceptable, como ya lo he demostrado. Los extravíos de doctrina y de opinión quedan reservados a Dios y exentos de la autoridad de los magistrados. Los mahometanos están en error, según los cristianos y vice versa. Nadie los persigue, ni castiga, por tal divergencia. La argumentación de la cámara se cierra con este párrafo: «La ley 4189, es ley de fondo, dictada de acuerdo con el artículo 67, inciso 11, de la constitución nacional y el artículo 32, se refiere a los jueces que deben juzgar los delitos cometidos por medio de la prensa y el procedimiento a seguirse, que es la facultad que se han reservado las provincias».

Hay en ese párrafo más errores que renglones; pero son ellos tan palmarios, que ofendería la ilustración de V. E. si entrase a ocuparme de ellos, se rebaten por su simple lectura.

9.—Por lo expuesto, a V. E. pido: Declare insubsistente la sentencia apelada, por haber condenado a mi mandante sin ley anterior al hecho del proceso, desde que no es aplicable el código penal en los delitos de imprenta, cometidos en las provincias. Artículos 18 y 32 de la constitución provincial.

TOMÁS JOFRÉ.



V

SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**Don Diego Saborido, contra don Juan G. Káiser, por calumnias e injurias**

SUMARIO: Las leyes locales, ya sean dictadas por las legislaturas de provincia o bien por el honorable congreso en ejercicio de la atribución consignada en los incisos 14 y 27 del artículo 67 de la constitución respecto a la capital y territorios nacionales, son las que deben reglamentar el ejercicio de la libertad de imprenta, determinando las sanciones con que se reprimirán sus abusos, y los tribunales que conocerán de las respectivas causas. En consecuencia, una sentencia de un tribunal de la provincia de Buenos Aires que funde en las disposiciones del código penal de la nación la represión de delitos de imprenta, sin invocar disposición alguna de carácter provincial por la que las sanciones de aquel código hayan sido incorporadas a la legislación local sobre la materia, contraria al artículo 32 de la constitución y al 18 de la misma, por el que «ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo FUNDADO EN LEY ANTERIOR AL HECHO DEL PROCESO».



2.°—Que la decisión ha sido contraria al derecho invocado por el recurrente y que ha fundado en dicha cláusula y en el artículo 18 de la constitución, por cuyo motivo el tribunal que lo ha condenado aplicando para ello el código penal, le ha concedido el recurso extraordinario del artículo 14, inciso 3.°, ley número 48.

3.°—Que la sentencia de la cámara 3.ª de apelaciones en lo criminal de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, condena a don Juan G. Káiser, director del periódico *La Opinión*, de la ciudad de Luján, a la pena de dos años y medio de penitenciaría, accesorios de ley, fijándose en un año la inhabilitación, aplicando los artículos 6, 85, 177, 179, 180, inciso 2.°, del código penal, y artículo 21, letras a, b y d, de la ley número 4189, reformatoria del mismo código, en la causa en que don Diego Saborido, vecino de Luján, comisionado del poder ejecutivo a cargo de la municipalidad de ese partido, en el expresado carácter de funcionario público y en el de particular, inicia querella por calumnias e injurias contra don Juan G. Káiser, director del periódico *La Opinión*, de dicha ciudad, o contra quien resulte autor de las publicaciones aparecidas bajo el título de LA ADMINISTRACIÓN CALAMITOSA y La acusación o La Opinión en el nombrado periódico.

4.°—Que, con arreglo al artículo 32 de la constitución, el congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal, y de los antecedentes que motivaron esa reforma, introducida en la convención de 1860, ella significa que el honorable congreso, en su carácter de legislatura nacional, no puede legislar sobre la prensa reglamentando el derecho de publicar ideas y reprimiendo abusos posibles en el uso de tal derecho, porque los constituyentes quisieron dejar esa facultad a las soberanías locales (fallos tomo 114, página 60; tomo 115, página 92, nota 1.°).

5.°—Que, en efecto, en el número 6 del Redactor de la comisión examinadora de la constitución federal presentado con el informe de la misma, se hizo constar que si se añadía que la prensa no había de caer bajo la jurisdicción federal, era porque la constitución argentina encargaba al congreso la codificación de las leyes y podía,



por tanto, dictarlas sobre libertad de imprenta<sup>3</sup>; y después de citar como antecedente de la reforma una carta del presidente de la Confederación conminando a un gobernador de provincia porque no reprimía el espíritu de crítica de un diario, agregaba: «que la historia contemporánea había justificado plenamente la previsión de los pueblos que impusieron a fines del siglo pasado al congreso federal esta limitación de facultades<sup>3</sup>; lo que significaba que en la de dictar los códigos no estaba comprendida la de reglamentar los delitos de imprenta, debiendo notarse que la observación del *Redactor* era exacta respecto a la jurisdicción federal, pues que no se había introducido todavía la salvedad relativa a los códigos que se admitió posteriormente en el informe leído en la sesión del 25 de abril de 1860.

6.\*—Que en el informe escrito, después de referirse a la discusión consignada en el *Redactor*, agregaba: «La sociedad puede reglamentar y aun reprimir el abuso; PERO ESA REGLAMENTACIÓN Y ESA REPRESIÓN ES PRIVATIVA DE LA SOBERANÍA PROVINCIAL; es decir, es privativa de la sociedad en que el abuso se comete, y a la cual puede dañar inmediatamente, ya sea a toda ella en su conjunto, ya a los individuos aisladamente», a que agrega: «y existiendo precedentes (aunque no de carácter legal) que hacen presumible una intervención indebida del gobierno federal EN MATERIA TAN PRIVATIVA DE LA SOBERANÍA PROVINCIAL, es prudente precaverse contra tales probabilidades, como lo hicieron los Estados de Norte América en las enmiendas que presentaron al congreso» (*Diario de sesiones* de la convención del Estado de Buenos Aires, edición de 1860, página 97).

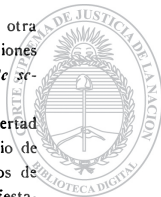
7.\*—Que en la sesión del 1.º de mayo de 1860, el miembro informante, refiriéndose a la proyectada reforma, o sea al artículo 32 de la constitución vigente, manifestaba: «La reforma importa decir que la imprenta debe estar sujeta a las leyes del pueblo en que se use de ella. Un abuso de la libertad de imprenta nunca puede ser un delito, diré así, nacional. El congreso, dando leyes de imprenta, sujetaría el juicio a los tribunales federales, sacando el delito de su fuero natural. Si en una provincia como Buenos Aires, no tuviera leyes de imprenta o los abusos de ellos fueran sólo castigados por el juez correccional, como otra cualquiera injuria, ¿por qué daríamos fa-



cultad al congreso para restringir la libertad de imprenta, darle otra pena a los delitos de imprenta, o imponer a los diarios restricciones o gravámenes que hicieran dificultosa su existencia?» (*Diario de sesiones* citado, página 191).

8.—Que nada autoriza la distinción entre abusos de la libertad de imprenta y delitos de injuria y calumnia cometidos por medio de ella, para sostener que solamente los primeros fueron excluidos de la legislación general del congreso. No lo justifican las manifestaciones citadas del *Redactor* y del informe escrito de la comisión examinadora, ni la exposición del miembro informante en la discusión del artículo 32 de la constitución, que constituyen su interpretación auténtica. Tampoco puede fundarse en las disposiciones sobre la prensa conocidas en la época de la reforma a que aludía el número 6 del *Redactor*. El reglamento de 22 de abril de 1811 se ocupaba de la «calificación y castigo de los delitos que se cometen por el abuso de la libertad de la imprenta», y el decreto de 26 de octubre del mismo año disponía, en su artículo 2.º, «el abuso de esta libertad es un crimen. Su acusación corresponde a los interesados, si ofende derechos particulares y a todos los ciudadanos si compromete la tranquilidad pública». Las leyes de la provincia de Buenos Aires de 11 de octubre de 1822 «sobre los abusos de la prensa», se ocupaba de «los abusos atentatorios al orden público y las autoridades constituidas», al mismo tiempo que de «los abusos de la libertad de la prensa contra personas y derechos privados»; la de 9 de mayo de 1828, que incluía entre los impresos abusivos de la libertad de la imprenta, «las que ofenden con sátiras e invectivas al honor y reputación de algún individuo o ridiculicen su persona», etc. (artículo 1.º); y, finalmente, la de 17 de septiembre de 1857, según la que «las acciones de los particulares por injurias, calumnias o difamaciones que se cometan por la prensa, como también las que, en su caso, corresponde intentar a los fiscales del Estado, podrán ser deducidas ante los jueces ordinarios, los cuales las juzgarán por las leyes civiles o criminales».

9.—Que corrobora lo anterior las disposiciones consignadas en las constituciones provinciales adoptadas después de la reforma de 1860, relativas al ejercicio del derecho de legislación sobre la pren-



sa como comprendida entre las facultades reservadas y en las leyes reglamentarias vigentes en muchas de ellas.

La misma constitución de la provincia de Buenos Aires, en su artículo 11, concordante con el artículo 177 del código penal, que define el delito de calumnia, prescribe que en los delitos de imprenta «el jurado admitirá la prueba como descargo, siempre que se trate de la conducta oficial de los empleados o de la capacidad política de personas públicas». A ello se agrega que poco después de aceptada por la convención de Santa Fe, en su 3.ª sesión ordinaria del 23 de septiembre de 1860, la reforma consignada en el artículo 32 de la constitución, la honorable cámara de diputados de la nación desechó un proyecto sobre nombramiento de una comisión encargada de redactar una ley reglamentando la libertad de la prensa (*Diario de sesiones* de 1863—diputados—, páginas 129 a 138).

10.—Que, de otra parte, el proyecto de código penal del doctor Tejedor y el que redactara la comisión revisora del mismo, hacían constar que sus disposiciones no comprendían las contravenciones de policía, los delitos militares, los de fuero nacional y los delitos de imprenta, «a mérito, decía la nota del codificador, de lo dispuesto en el artículo 32 de la constitución general»; y si esa restricción no aparece en el código vigente, desde el 1.º de marzo de 1887, fué porque se la consideró innecesaria por hallarse consignada en la carta fundamental.

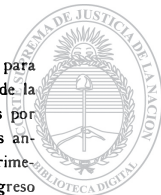
11.—Que el miembro informante de la comisión de códigos de la honorable cámara de diputados, refiriéndose a la disposición citada del código penal, hacía constar lo siguiente:

«El artículo 2.º dice que este código no comprende las contravenciones a las disposiciones de policía, los delitos de imprenta, los de fuero militar, del fuero nacional, penados por leyes especiales.

Es sabido que un código no comprende las contravenciones de policía, cuando no están expresamente establecidas, como en el código francés.

Los otros incisos del artículo a que se refiere son también inútiles, desde que está consignado el principio en nuestra constitución.» (*Diario de sesiones*. Diputados 1885, II, página 722.)





12.—Que no obstante la prolija enumeración de derechos para todos los habitantes de la nación, consignada en el artículo 14 de la constitución, entre las que se encuentra el «de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa», los reformadores de 1860, por los antecedentes que menciona el *Redactor*, tomaron de la enmienda primera a la constitución americana la prohibición impuesta al congreso de dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta, agregando lo siguiente: «o establezcan sobre ella la jurisdicción federal».

13.—Que con esa última cláusula se entendió reservar a las provincias la represión de los delitos de imprenta, inhibiendo al congreso de dictar leyes generales sobre la materia para toda la nación aunque se consignaran los códigos que el congreso podía dictar; pues, como se hizo constar en el número 6 del *Redactor*, explicando la agregación de esa cláusula, «y que si en la primera se añadía que la prensa no había de recaer bajo la jurisdicción federal, era porque la constitución argentina encargaba al congreso la codificación de las leyes y podía, por tanto, dictarlas sobre libertad de imprenta».

14.—Era esto último lo que se quería evitar en los códigos y fuera de ellos con una fórmula cuyo alcance se explica, teniendo presente que la reserva respecto a la jurisdicción sobre materias codificadas fué introducida posteriormente al *Redactor*, o sea en el informe escrito del 3 de abril de 1860, y por eso en éste ya no se alude a la facultad de dictar los códigos, sino a la de dictar las leyes que requiera el establecimiento del juicio por jurados. (*Diario de sesiones* citado, edición de 1860, página 97.)

15.—Que son, pues, las leyes locales, ya sean dictadas por las legislaturas de provincia o bien por el honorable congreso en ejercicio de la atribución consignada en los incisos 14 y 27 del artículo 67 de la constitución respecto a la capital y territorios nacionales, las que deben reglamentar el ejercicio de la libertad de imprenta, determinando las sanciones con que se reprimirán sus abusos y los tribunales que conocerán de las causas respectivas, pues que el artículo 32 de la constitución no se opone a la represión de los delitos que puedan cometerse por medio de la prensa, pero esa reglamentación y

esa represión es privativa de la sociedad en que el abuso se comete, como decía el miembro informante en la convención de 1860.

16.—Que, en consecuencia, de lo que precede, debe reconocerse que la sentencia del tribunal de la provincia de Buenos Aires, fundando en las disposiciones del código penal de la nación la represión de delitos de imprenta, ha contrariado el artículo 32 de la constitución y el 18 de la misma, por el que «ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo FUNDADO EN LEY ANTERIOR AL HECHO DEL PROCESO», no habiéndose invocado disposición alguna de carácter provincial, por la que las sanciones de aquel código hayan sido incorporadas a la legislación local sobre la materia.

Por estos fundamentos, así se declara revocándose la sentencia apelada en la parte que ha sido materia del recurso. Notifiquese con el original, y repuestos los sellos devuélvanse.

A. BERMEJO. — NICANOR G. DEL SOLAR. —

D. E. PALACIO.—J. FIGUEROA ALCORTA.





# IMPUESTOS MUNICIPALES

*Son embargables.*





# EMBARGABILIDAD DE LAS RENTAS MUNICIPALES



**Tomás Jofré y otro contra la municipalidad del Salto,  
sobre embargo**

1

En mi carácter de acreedor de la municipalidad del Salto, solité de las autoridades judiciales de la provincia de Buenos Aires se embargase los impuestos que a la misma debían liquidarse en el ministerio de hacienda, de acuerdo con leyes locales. Sostuve que el artículo 494 del código de procedimiento civil, en cuanto establece que «no podrán embargarse las rentas públicas ni los bienes públicos, y sí solamente los que constituyan el patrimonio privado de las personas públicas», modificaba el artículo 42 del código civil, que permitía «que las personas jurídicas pudieran ser demandadas por acciones civiles y hacerse ejecución en sus bienes», y, por consiguiente, que aquella prescripción era repugnante al artículo 67, inciso 11, y su concordante el artículo 31 de la constitución nacional.

En este caso el código civil era, según mi opinión, ley suprema que no podía modificar el código de procedimiento de una provincia.

Los tribunales de Mercedes dictaron las dos sentencias que van a continuación:



AUTO DEL JUEZ EN LO CIVIL

Mercedes, septiembre 2 de 1914.

AUTOS Y VISTOS:

No estando permitido el embargo de las rentas públicas ni los bienes públicos, y sí solamente los que constituyan el patrimonio privado de las personas públicas, conforme a lo dispuesto por el artículo 494 *in fine* del código de procedimiento, no se hace lugar a lo peticionado por los actores en el escrito de fojas.—D. Díez GÓMEZ.—Ante mí: *Daniel G. Miró*.

RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA I.<sup>a</sup> DEL DEPARTAMENTO DEL CENTRO

Mercedes, octubre 23 de 1914.

Y VISTOS:

Por sus fundamentos, se confirma el auto apelado de fojas 175, con costas (artículo 311 del código de procedimiento).—HERNÁNDEZ.—ORTIZ.—Ante mí: *Angel J. Bregazzi*.

De esta última sentencia interpuse el recurso extraordinario de que informa el escrito que va a continuación:

II

RECURSO EXTRAORDINARIO DEDUCIDO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

1. Interposición del recurso.—2. Procede: a) porque se ha cuestionado una ley provincial como repugnante a la constitución nacional; b) porque la providencia que niega un embargo, es definitiva; c) porque la resolución apelada es contraria a la ley y a la jurisprudencia de la suprema corte nacional.

1.—Que interpongo para ante la suprema corte de justicia nacional el recurso extraordinario que autoriza el artículo 14 de la ley nacional número 48.





**2.—La procedencia del mismo es manifiesta:**

a). En el pleito se ha puesto en cuestión la validez del artículo 494, tercer apartado, del código de procedimiento civil de la provincia, bajo la pretensión de ser contrario al artículo 42 del código civil y por consiguiente repugnante al artículo 67, inciso 11, y su concordante artículo 31 de la constitución de la nación. Se ha cuestionado también la inteligencia de una cláusula de la constitución. La resolución de V. E. ha sido en favor de la validez de la ley de provincia y en contra del derecho invocado por nuestra parte.

El caso, cae, pues, bajo el artículo 14, incisos 2.º y 3.º de la ley nacional número 48.

b). La sentencia dictada por V. E. es definitiva en el sentido de la procedencia del recurso ante la corte nacional, desde que la cuestión resuelta no puede reverse en juicio ordinario. La suprema corte de la nación lo ha resuelto así en un caso análogo. Tomo 114, página 33.

c). Como ya lo he dicho, en la letra a) de este escrito se ha discutido en el pleito una cuestión federal. Mi parte solicitó embargo en los fondos que la municipalidad del Salto, tiene depositados en la contaduría general de la provincia, a lo cual no se me hizo lugar, por tratarse de bienes públicos no sometidos al secuestro.

La jurisprudencia de la suprema corte nacional, se he pronunciado invariablemente en contra de lo resuelto por V. E. Pueden verse los fallos de dicho tribunal, que se encuentran en los tomos 27, página 69; 39, página 170; 118, página 420; 103, página 373; 113, página 158; 119, página 117 y 372. En este último fallo, la corte declaró que el dinero embargado en su carácter de cosa fungible, no es equiparable a los bienes del estado afectados a un servicio público y por lo mismo indispensable a la subsistencia de la persona jurídica de existencia necesaria y exentos por ello de todo embargo. (Tomo 116, página 80).

La sentencia emana del superior tribunal de provincia, carácter que reviste V. E., por cuanto de acuerdo con las leyes locales, no es viable el recurso ante la suprema corte de justicia de esta provincia. Fallos de la suprema corte nacional; tomo 96, página 336; tomo 107, página 263; tomo 114, página 16; y tomo 116, página 138.



Por lo expuesto, sirvase V. E., concedernos el recurso interpuesto y ordenar se eleven los autos a la suprema corte nacional, con emplazamiento de las partes.

### III

#### DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Buenos Aires, 2 de febrero de 1915.

#### Suprema corte:

El recurso en cuya virtud se trae este juicio a conocimiento de V. E. es procedente, en razón de haberse discutido la validez de una ley de provincia, bajo la pretensión de ser repugnante a la constitución nacional, y ser la decisión recaída favorable a la validez de la mencionada ley. (Artículo 14, inciso 2.º ley 48, fallos tomo 114, página 33).

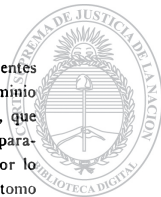
Los recurrentes solicitaron un embargo sobre fondos pertenecientes a la municipalidad del Salto, que les fué denegado a mérito de lo que dispone el artículo 494 del código de procedimiento, civiles y comerciales de la provincia de Buenos Aires, que en la parte pertinente prescribe: «Tampoco podrán embargarse las rentas públicas ni los bienes públicos, y sí solamente los que constituyan el patrimonio privado de las personas públicas, con sujeción a lo dispuesto en el código civil». El recurso interpuesto se funda en que dicha prescripción es contraria al artículo 42 del mencionado código, y por consiguiente, repugnante al artículo 67, inciso 11 y su concordante, el artículo 31 de la constitución nacional.

De acuerdo con las facultades que en materia de legislación ha atribuido la constitución al congreso nacional, corresponde a éste dictar los códigos que constituyen las leyes comunes de la nación, estando prohibido a las provincias legislar sobre esta materia, una vez que el congreso hubiere sancionado dichas leyes, las que forman la ley suprema de la república, a la que las autoridades provinciales



están obligadas a conformarse, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones de provincia (artículo 31 y 67, incisos 11 y 105 de la constitución nacional). Fuera de la legislación de fondo, incumbe a las provincias dictar los códigos de procedimientos y demás leyes reglamentarias destinadas a poner en ejercicio las facultades que están deferidas a los gobiernos respectivos, siendo entendido que esta atribución no puede tener por alcance limitar o restringir las reglas del derecho común que forman la legislación general del país.

El código civil que legisla en lo referente al estado y condición de las personas, sus obligaciones y derechos, sus bienes, la manera de adquirirlos, transferirlos o perderlos, determina que las personas jurídicas, entre las que incluye al Estado, la Iglesia, cada una de las provincias y sus municipios, son sujetos activos y pasivos del derecho privado, están sometidos a la ley común y son susceptibles de ser demandados y ejecutados en sus bienes particulares (artículos 41 y 42). Siendo esto así, no ha podido un código de provincia substraer a la acción de los acreedores de los poderes públicos de las mismas, cuando actúan como personas jurídicas, los bienes pertenecientes a éstos, que constituyen por mandato de la ley la garantía establecida para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones contraídas por dichas personas jurídicas. Si otra fuera la doctrina legal, como lo ha declarado esta corte suprema en un caso análogo (fallos, tomo 25, página 432), podría producirse el caso inmoral de que una municipalidad tomase dinero de los ciudadanos, y, faltando a sus compromisos de pago, se beneficiara a costa de esos ciudadanos, que habrían honrado su crédito, quedando sin medios eficaces y legales de impelerla al cumplimiento de sus deberes. Con arreglo a esta teoría, las municipalidades, como las demás personas del derecho privado, en cuanto obran en esta calidad, con prescindencia de las funciones públicas que además revisten, están sometidas a las prescripciones del código civil, que ha sido dictado por el congreso en virtud de una atribución constitucional, excluyente de toda otra legislación sobre las materias que abarca, y, por tanto, el desconocimiento de una ley provincial de las disposiciones del citado código, implica atacar las reglas que en orden a la legislación del país consagran los artículos 31 y 67, inciso 11, de la constitución.



No puede argumentarse que las rentas o dineros pertenecientes al gobierno o las municipalidades constituyan parte de su dominio público, por cuanto, consistiendo el dinero en una cosa fingible, que puede ser substituída por otra de la misma calidad, no es equiparable a los bienes del Estado afectados a un servicio público y, por lo mismo, exentos de todo embargo (fallos, tomo 116, página 80; tomo 119, página 372).

Por lo expuesto, pido a V. E. se sirva revocar la resolución apelada en cuanto la denegación del embargo pedido afecta las disposiciones de la constitución nacional y del código civil que dejo enumeradas.

HORACIO R. LARRETA.

#### IV

#### SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Buenos Aires, junio 26 de 1915.

#### VISTOS:

Los del recurso extraordinario entablado por el doctor Tomás Jofré y don Agustín Villalba, contra sentencia pronunciada por la cámara primera del departamento del centro de la provincia de Buenos Aires, en autos seguidos por aquéllos contra la municipalidad del Salto, sobre cobro de honorarios, de los que en lo pertinente, resulta:

Que, dictada la sentencia de remate de fojas 135, los ejecutantes mencionados solicitaron embargo hasta la suma de cuatro mil novecientos doce pesos con noventa y siete centavos moneda nacional en la cantidad que pudiera corresponder a la municipalidad por su parte en el impuesto a las bebidas alcohólicas, naipes y tabaco, y otros vigentes en la provincia de Buenos Aires, sosteniendo que no se oponía a ello el artículo 494 del código de procedimiento de la provincia, porque no era aplicable al caso, y porque, si lo fuera, sería contrario al artículo 42 del código civil, que tiene que primar sobre las leyes



locales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67, inciso 11, y artículo 31 de la constitución nacional (fojas 164).

Que los tribunales locales no hicieron lugar a esa solicitud, en atención a que el artículo 494 citado no permite el embargo de las rentas y bienes públicos (autos de fojas 175 y 182 vuelta).

Y CONSIDERANDO:

Que, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 33 y 42 del código civil, las municipalidades pueden ser demandadas por acciones civiles y puede hacerse ejecución en sus bienes.

Que las rentas generales de las provincias y de sus municipalidades no figuran entre los bienes públicos (artículos 2340, 2342, inciso 3.º, y 2344 código civil), de las que sólo pueden disponer como poderes y no como personas jurídicas, pues están destinadas a gastos administrativos de toda clase, muchos de carácter eventual o que no son indispensables y urgentes, y al cumplimiento de obligaciones regidas por el derecho común.

Que, en tal concepto, el dinero proveniente de los impuestos se encuentra, en lo que hace al pago de los acreedores de las municipalidades y a las medidas de seguridad pedidas por aquéllas, en distintas condiciones que los inmuebles puestos fuera del comercio por su consagración especial a un servicio público.

Que, en todo caso, no aparece de autos, ni se ha alegado, que el pago de los gastos judiciales que se cobran esté excluido de los que puede hacer la municipalidad del Salto, por su ley orgánica y presupuesto, ya en carácter de poder público, ya de persona jurídica, o que el embargo de que se trata imposibilite el funcionamiento regular de la institución.

Por ello, de acuerdo con lo resulto en casos análogos y lo dictaminado por el señor procurador general, se declara que el artículo 494 del código de procedimiento de Buenos Aires, en la forma que ha sido interpretado y aplicado, es contrario al artículo 42 del código civil, y, en su consecuencia, se revoca el auto apelado. Notifíquese con el original, repóngase el papel y devuélvase.

A. BERMEJO. — NÍCANOR G. DEL SOLAR.  
M. P. DARACT.—D. E. PALACIO.



# GOBIERNOS EXTRANJEROS

*Son demandables ante los tribunales argentinos.*







# GOBIERNOS EXTRANJEROS



## I

El gobierno nacional dedujo, por intermedio del procurador del tesoro, doctor López, acción reivindicatoria de 66.000 hectáreas de campo contra el doctor Rodolfo Mones Cazón. Antes de contestar la demanda manifesté: que los campos reivindicados fueron vendidos por el mariscal López, presidente del Paraguay, a madame Lynch; que los sucesores de ésta los enajenaron, a su vez, a mi cliente; que, de acuerdo de nuestro código civil, citaba de evicción al gobierno del Paraguay para que viniese a hacerse parte en el pleito— si lo estimaba conveniente.

La secuela de esa incidencia y su resultado se detallan en las páginas que van a continuación:

### VISTA FISCAL DE PRIMERA INSTANCIA

Señor juez:

En el presente caso estimo conducente que V. S. ponga en conocimiento de S. E. el señor ministro de relaciones exteriores la articulación promovida a los efectos de que la haga saber a S. E. el señor ministro plenipotenciario y enviado extraordinario de la República del Paraguay acreditado ante nuestro gobierno, para que aquélla se sirva tomar la intervención que reputare conveniente en el presente juicio. Octubre 30 de 1915.—Fdo.: SAÚL M. ESCOBAR.



**II**

**SENTENCIA DEL DOCTOR ANCHIORENA**

Buenos Aires, noviembre 8 de 1915.

Atento el precedente dictamen y pudiendo existir interés para la República del Paraguay en que sus autoridades conozcan la existencia del presente juicio, hágase saber como lo indica el señor procurador fiscal, debiendo el demandado, señor Mones Cazón, contestar el traslado ordenado a fojas 107 vuelta en el término de ley. --  
Fdo.: ANCHORENA.

**III**

**VISTA FISCAL DE SEGUNDA INSTANCIA**

Buenos Aires, julio de 1916.

Excelentísima cámara:

Si bien la citación de evicción no importa una demanda contra el citado, sino un aviso en forma, a fin de que tome intervención en la causa, si así fuere su voluntad, comporta, sin embargo, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 2108, 2118 y 2119 del código civil, la obligación de responder al comprador, en caso que fuere vencido en el juicio, del precio recibido y de todos los daños y menoscabos que le viniesen por esta razón.

Según los términos de la estipulación contenida en el artículo 3.º del tratado de derecho civil internacional, sancionado por el congreso sudamericano de derecho internacional privado, que se reunió en Montevideo el 25 de agosto de 1888, el Estado del Paraguay, en el carácter de persona jurídica, tiene capacidad para adquirir derechos

y contraer obligaciones en nuestro territorio, de conformidad a nuestras leyes, en cuyo caso podría quedar sometido a la jurisdicción de nuestros tribunales.

Empero, observo que la intervención que se atribuye en el presente caso al gobierno del Paraguay, como antecesor del demandado don Rodolfo Mones Cazón, no emana de la persona jurídica, sino de la entidad soberana que también encarna dicho gobierno, así como de actos que, en tal carácter, aparecen realizados fuera de nuestro territorio, con relación a cosas situadas dentro de él, y sobre las cuales aquel Estado pretendió ejercer jurisdicción o invocar derechos de dominio que, como lo declaró la suprema corte nacional en su luminoso fallo de fecha 30 de diciembre de 1911, no existieron ni fueron jamás reconocidos por el gobierno argentino.

En tal virtud y acatando el principio general de la integridad e inviolabilidad de los estados, entiendo que no puede pretenderse someter al gobierno del Paraguay a la autoridad de nuestras leyes ni a la acción jurisdiccional de nuestros tribunales de justicia, y que todo acto o diligencia que, como la citación de evicción requerida por el demandado señor Mones Cazón, tienda a obtener aquel sometimiento, resultaría absolutamente inoficioso, por lo que, de conformidad con lo expuesto por el señor procurador del tesoro, a fojas 191, y por el procurador fiscal de la instancia a fojas 183 vuelta, soy de opinión que correspondería confirmar el auto apelado de fojas 184.

HORACIO RODRÍGUEZ LARRETA.



## SENTENCIA DE LA CÁMARA FEDERAL

Buenos Aires, agosto 10 de 1916.



## VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que la obligación para el enajenante, impuesta por el código civil, de responder al adquirente por la evicción y salir a su defensa en juicio, ha de entenderse en general, respecto de hechos y personas sometidas a las leyes de la nación.

Que si bien el gobierno del Paraguay, como persona jurídica, puede, voluntariamente, comparecer ante los tribunales argentinos, ello no implica para los jueces la obligación de emplazarlo ni invitarlo a someterse a su jurisdicción.

Que, a objeto de salvaguardar los derechos que cree tener, ya que considera que el gobierno del Paraguay debe responderle por la evicción, el recurrente puede usar de otros medios para llevar a conocimiento de aquel gobierno la demanda que le ha sido instaurada, sin acudir a la intervención en este caso oficiosa y por ello improcedente, de los tribunales de justicia.

Que, por lo tanto, no corresponde tampoco el aviso de la existencia de este litigio que se manda dar en el auto de fojas 184 al representante diplomático del gobierno del Paraguay, debiendo tramitarse la causa con arreglo a la ley procesal.

Por ello, y oído el procurador fiscal de cámara, se confirma el auto de fojas 184, en cuanto dispone que don Rodolfo Mones Cazón conteste el traslado conferido a fojas 107 vuelta, dejándose sin efecto la parte que ordena dar aviso de la iniciación del pleito al ministro plenipotenciario y enviado extraordinario de la República del Paraguay. Notifíquese, devuélvase y repóngase las fojas en primera instancia.

A. URDANARRAIN.—DANIEL GOYTIA.—J. N. MARTIENZO.—MARCELINO ESCALADA.



V

1. Antecedentes del curso. — 2. Procedencia del recurso: a) la sentencia aunque dictada en un incidente, es definitiva; b) se ha cuestionado la inteligencia de una cláusula constitucional; c) término para deducir el recurso.

En esta controversia, mi parte, usando de un legítimo derecho, citó de evicción al gobierno del Paraguay.

El inferior no hizo lugar a la citación, pero mandó dar aviso del pleito al señor ministro del Paraguay en la República Argentina. Por su parte, V. E. ha revocado ese auto, declarando que los tribunales argentinos no tienen el deber de emplazar ni invitar siquiera a los gobiernos extranjeros a someterse a su jurisdicción.

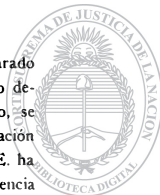
De ese pronunciamiento, corriente a fojas , vengo a deducir el recurso extraordinario que autorizan los artículos 6.º de la ley 4055 y 14 de la ley número 48, que pido se me conceda para ante la suprema corte de justicia nacional.

Voy a demostrar que en el caso de autos concurren todos los requisitos exigidos por la ley para la procedencia del recurso extraordinario:

a). La sentencia de que recorro es definitiva, artículo 6.º de la ley 4055 y 14 de la ley 48. Dentro de la tramitación de un pleito pueden promoverse cuestiones independientes al fondo del mismo, y la sentencia que les pone fin es definitiva en el sentido de las leyes citadas, si no es posible volver sobre ellas en adelante.

Es por eso que la suprema corte ha resuelto que reúne el carácter de sentencia definitiva, la resolución que no hace lugar a un embargo, dentro del juicio ejecutivo. Véase fallos de la suprema corte, tomo 114, página 33, y causa seguida por Tomás Jofré y Agustín Villalba contra la municipalidad del Salto.

En el caso *sub judice* yo he pedido que el gobierno del Paraguay sea citado de evicción a fin de que comparezca al juicio y se haga



cargo de mi defensa. Resolviendo la incidencia, V. E. ha declarado que dicho gobierno no debe ser citado. Luego entonces, yo debo defendermie, exponiéndome a que mi enajenante, llegado el caso, se niegue a sanearme la cosa por no haber cumplido con la obligación de citarlo. Sobre la cuestión resuelta no es posible volver, y V. E. ha pronunciado a su respecto la última palabra, dictando una sentencia definitiva.

b). El caso es de aquellos que, de acuerdo con el artículo 14 de la ley número 48, pueden llevarse ante la suprema corte. Dicho artículo, en su inciso 3.º, establece que procede el recurso extraordinario que estoy fundando, cuando la inteligencia de alguna cláusula de la constitución o una ley del congreso haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título, derecho, etc., que se funda en dicha cláusula y sea materia del litigio.

Yo he sostenido en este pleito que, de acuerdo con el artículo 100 de la constitución nacional, los Estados extranjeros pueden estar en juicio ante la justicia federal; y que igual doctrina ha sentado la corte federal, y V. E. ha resuelto que el gobierno del Paraguay no puede ser citado, aun cuando sea voluntaria su comparecencia. El punto ha sido resuelto, entonces, contra un decreto que me acuerda la constitución nacional. Se ha resuelto, pues, una cuestión federal.

c). El recurso lo deduzco dentro de los cinco días que me acuerda la ley. (Fallos de la suprema corte, tomo 114, página 209.)

Por lo expuesto, a V. E. pido me conceda el recurso extraordinario interpuesto.



creada por el artículo 100 de la constitución, que en su parte final prevé las causas que se susciten entre un vecino y un Estado extranjero. Este artículo ha reproducido lo dispuesto por la cláusula 2.<sup>a</sup> (artículo III de la constitución de los Estados Unidos), que menciona entre los casos a los que se extiende el poder judicial, las controversias entre un Estado o los ciudadanos de éste y un Estado extranjero. Por aplicación del artículo 100 citado, esta corte suprema ha declarado que el particular que demanda a un gobierno extranjero debe recurrir al juez de sección para que éste transmita la demanda, por intermedio del poder ejecutivo nacional, al representante de la nación demandada, que aceptará o declinará a su arbitrio la jurisdicción. (Fallos, tomo 123, página 58.)

En el caso *sub judice*, la citación de evicción del gobierno del Paraguay se ajusta a la doctrina establecida en el fallo mencionado, desde que, hecha la citación, el mencionado gobierno resolverá si acepta o no la jurisdicción de los tribunales argentinos, siendo indispensable, para que esto ocurra, que se decrete por el tribunal en que el litigio está radicado, la notificación de la demanda interpuesta, que es la única forma legal de que llegue a su conocimiento. Por otra parte, no es posible desconocer al demandado el derecho que le acuerda el artículo 2108 del código civil, a los efectos de mantener su acción contra el enajenante originario, de la que no podría hacer uso si los tribunales se negaran a dar trámite a la citación de evicción, cuya misión autorizaría a dicho enajenante a eximirse del cumplimiento de las obligaciones que le incumben.

Por lo expuesto, pido a V. E. se sirva revocar la resolución apelada, en cuanto deja sin efecto la orden de dar aviso de este asunto y de la citación de evicción al señor ministro plenipotenciario de la República del Paraguay.

JULIO BOTTET.





Excelentísima corte:

Vicente F. López, procurador del tesoro, en representación del gobierno nacional, en autos con los señores Durañona y Mones Ca-zón, en el incidente por citación de evicción, por este último promovido, con el mayor respeto, a V. E. expongo:

Que vengo a pedir a V. E. en el presente memorial, confirme el fallo de la excelentísima cámara por el que no hace lugar al pedido de citación de evicción que formuló el apelante.

El caso es, en realidad, muy sencillo, excelentísima corte, y sólo me explico la insistencia del demandado como un medio para ganar tiempo y hacerlo perder al gobierno que persigue la reivindicación de tierras públicas, que deben volver cuanto antes al estado, su legítimo dueño.

Si alguna duda pudo abrigar el contrario, acerca de su falta de derecho, para citar de evicción al gobierno del Paraguay, por imperio de la justicia argentina, ella debió desaparecer por completo ante el luminoso fallo de la excelentísima cámara.

Tan severo es, que ni siquiera admite que el juez federal haya podido hacer saber a ese gobierno la demanda entablada, pues ello implicaba, en verdad, una actitud emergente de su investidura judicial versus el gobierno de un país extranjero que no le conoce, ni tiene por qué conocerle en tal carácter, y a ese efecto.

Es de lógica doctrina el fallo, aún en esta parte, excelentísima corte, y es acertada la calificación de oficiosa que atribuye a la actitud del señor juez de la instancia.

Por lo demás, lo que pretende el recurrente no es eso que ya le fué acordado, si no, lisa y llanamente, que se cite de evicción al gobierno del Paraguay. A ello me opuse en razón de la soberanía que es de donde deriva el imperio judicial. Un juez no puede conminar a un gobierno extraño a comparecer ante su tribunal. Esto no puede ni siquiera ser discutido.



Como lo establece la excelentísima cámara, el hecho de la jurisdicción, para entender en litigios en que sea parte un gobierno extranjero, en nuestro país, a título de persona jurídica, implica su presentación voluntaria en juicio, su espontaneidad, pero no involucra, por cierto, el derecho a comunicarle y a notificarle demandas, ni mucho menos a emplazarlo para que aquí venga a litigar.

Por tanto, a V. E. pido, con el mayor respeto:

Se digne confirmar el fallo apelado y mande V. E. que el contrario conteste derechamente la demanda, como lo tengo solicitado. Con costas, al actor, aunque procedan ellas, sin necesidad de declaración expresa por tratarse de un incidente.

Es justicia, etc.

V. F. LÓPEZ.

## VIII

### **Memoria presentada por el Doctor don Tomás Jofré**

1. Antecedentes del caso. — 2. Fundamentos de la cámara federal para negar el pedido de citación de evicción y su refutación. — 3. Alcance de la citación de evicción con respecto al demandante y demandado.

1.—Los antecedentes del caso pueden resumirse en cuatro palabras. El señor procurador del tesoro se ha presentado ante la justicia federal, entablando demanda reivindicatoria de un campo de cien mil hectáreas, situado en el territorio de Formosa. Los demandados somos don Aristóbulo Durañona y el subscrito.

Entre nuestros causantes figura el gobierno del Paraguay, que enajenó a título oneroso la cosa que se reivindica.

Por mi parte, pedí ante el juez que conoce de la causa, que se citara de evicción al gobierno del Paraguay.

La excelentísima cámara federal no ha hecho lugar a mi solicitud y de esa resolución recurri a V. E.,

2.—Dos son las razones en que se funda la cámara *a quo* para

negarse a citar de evicción al gobierno del Paraguay, y de ellas voy a ocuparme brevemente y por su orden.

Según dicho tribunal, la obligación impuesta al enajenante de responder al adquirente por la evicción y salir a su defensa, ha de entenderse en general, respecto de hechos y personas sometidas a las leyes de la nación.

El código civil no establece el distingo que hace la cámara, y la constitución preceptúa en su artículo ciento, que corresponde a la corte suprema y los tribunales inferiores de la nación el conocimiento y decisión de todas las causas que se susciten por un vecino contra un Estado o ciudadano extranjero.

La ley 4055, de 11 de enero de 1902, ha reiterado ese pensamiento en su artículo 2.º

Luego, entonces, es posible que el gobierno del Paraguay comparezca ante nuestra justicia, desde que así lo establece la constitución en los artículos 100 y 101, que la cámara *a quo* ha aplicado erróneamente.

Agrega el citado tribunal, que si bien el gobierno del Paraguay puede, voluntariamente comparecer ante los tribunales argentinos, ello no implica para los jueces la obligación de emplazarlo ni invitarlo a someterlo a su jurisdicción.

Es exacto, suprema corte, que los gobiernos extranjeros sólo pueden estar en juicio por su propia y espontánea voluntad, pero no lo es menos que el caso de autos es típico en ese sentido. No se trata de traer a juicio al gobierno del Paraguay en contra de su voluntad, sino de hacerle saber que existe una demanda de la cual quizá le convenga tener conocimiento.

3.—El artículo 2108 del código civil, establece que el enajenante debe salir a la defensa del adquirente, citado por éste en el término que designe la ley de procedimiento, en el caso de que un tercero le demanda la propiedad o posesión de la cosa; pero eso no significa que el enajenante esté obligado a mostrarse por parte en los autos.

La citación de evicción es una medida que beneficia al enajenante y al adquirente. Al primero porque por ese medio lo pone en





condiciones de defenderse contra una posible acción futura de daños y perjuicios; al segundo porque así salvaguarda y conserva sus derechos contra el que le vendió una cosa que no era suya.

Los estados extranjeros y la nación argentina, no pueden ser demandados, en ciertos casos al menos, sin su consentimiento, pero pueden ser citados de evicción.

Es con justa razón que V. E. ha dicho que «aunque sea verdad que la nación no puede ser demandada sin su consentimiento, no lo es menos que la citación de evicción no importa una demanda, sino el aviso en forma y en el momento oportuno, a efecto de que tome intervención en la causa a que la citación se refiere, si así fuere su voluntad». (Fallos de la suprema corte, tomo 82, página 42.) Esa sentencia es de rigurosa aplicación a nuestro caso, en que se solicita se haga saber al gobierno del Paraguay que ha sido citado de evicción para que concorra, si así lo cree conveniente. No existe, pues, ninguna coerción legal en contra de dicho estado y bastaría su simple silencio para que la causa siguiera adelante sin más ulterioridades.

La cuestión tiene en cambio importancia capital para mis derechos.

El artículo 2110 del código civil, preceptúa que la obligación de la evicción cesa si el vencido en juicio no hubiese hecho citar de saneamiento al enajenante, lo que significa que la omisión de ese trámite perjudicaría mis derechos futuros.

El respecto que merecen los gobiernos extranjeros, por parte de los tribunales de mi país, no puede llevarlos hasta el punto de perjudicar los legítimos derechos de un ciudadano argentino. Si yo fuera vencido en el juicio de reivindicación que me ha promovido el gobierno de la nación, tendré derecho a reclamar una legítima indemnización del gobierno del Paraguay, si he conseguido hacerle saber la existencia de este juicio por medio de una citación de evicción. Si no consigo ese intento, habré perdido todos mis derechos.

Es verdad que la cámara federal me indica que puedo usar de otros medios para llevar a conocimiento del gobierno del Paraguay la demanda que me ha sido instaurada, pero no es menos cierto de que tales medidas son ineficaces. La citación de evicción no se hace



por acto notarial ni por carta, sino de acuerdo con los trámites que fijan las leyes de procedimiento y el código civil.

Si yo me dirigiera al gobierno del Paraguay, poniendo en su conocimiento la existencia de este litigio, no conseguiría los propósitos de una citación de evicción. Los autos seguirían su curso ordinario. Yo tendría que contestar la demanda y el gobierno del Paraguay se vería en la imposibilidad de defender sus derechos y los míos si así lo deseara.

Creo haber demostrado, suprema corte, que la cámara federal de esta ciudad ha aplicado erróneamente los artículos 100 y 101 de la constitución nacional y 2 de la ley 4055, al declarar que no puede citarse de evicción al gobierno del Paraguay, y es por eso que solicito se revoque la sentencia apelada y se haga lugar a la citación de referencia.

## IX

### RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE

Buenos Aires, diciembre 28 de 1916.

#### VISTOS Y CONSIDERANDO:

1.º—Que la sentencia recurrida, denegatoria de la citación de evicción solicitada y del aviso decretado en el auto de fojas 184, se funda en que «si bien el gobierno del Paraguay, como persona jurídica, puede voluntariamente comparecer ante los tribunales argentinos, ello no implica para los jueces la obligación de emplazarlo ni invitarlo a someterse a su jurisdicción», agregando que la intervención de los tribunales de justicia en este caso, sería oficiosa y por ello improcedente.

2.º—Que el principio elemental de la ley de las naciones, según el cual un Estado soberano no puede ser sometido a la potestad jurisdiccional de los tribunales de otro (Fallos, tomo 8, página 58), no se opone al comparendo voluntario a que se refiere la sentencia



apelada, siendo evidente desde luego, que tal arbitrio puede ejercerse indistintamente en el carácter de demandante o demandado.

3.—Que es ésta la doctrina de nuestras instituciones, en tanto comprenden a los estados extranjeros entre las personas jurídicas susceptibles de derechos y obligaciones, y en consecuencia, demandables (artículos 32, 34 y 42 código civil), y en cuanto establecen para tales casos la jurisdicción federal a que se refiere la constitución (artículo 100) en las causas «entre una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero», jurisdicción que surte sus efectos, según la interpretación consagrada, con la limitación impuesta por el principio de derecho público precedentemente recordado.

4.—Que, con arreglo a estos antecedentes, nada obsta en el caso de autos para que se haga lugar a la citación de evicción que el recurrente funda en las garantías legales invocadas, sin que el deber de los tribunales argentinos de amparar tales derechos pueda considerarse una intervención ofensiva, desde que se acuerda a petición de parte legítima, y sin que ello importe un acto coercitivo para el gobierno del Paraguay, el que, conforme a la interpretación antes aludida y a la naturaleza misma del caso, aceptará o declinará a su arbitrio la jurisdicción, en ejercicio de su derecho, como persona jurídica o de su soberanía como Estado independiente. (Fallos, tomo 123, página 58.)

5.—Que, por lo demás, corresponde observar que en el *sub lite* la presentación del citado no es obligatoria sino facultativa (Fallos, tomo 90, página 135; tomo 91, página 315), pues como lo tiene declarado esta corte, la citación de evicción no es una demanda, sino un aviso en forma y en la oportunidad debida, a fin de que el enajenante tome intervención en la causa si así fuere su voluntad (Fallos, tomo 82, página 41), y, en consecuencia, el emplazamiento de evicción no importa en estos autos traer a juicio al gobierno del Paraguay, sino facilitarle los medios de defender el título del demandado en la forma determinada por la ley que rige el caso.

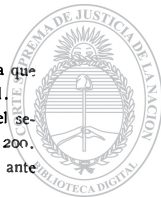
6.—Que dadas las conclusiones precedentes, no se afecta principio alguno de soberanía, notificándose en forma al representante diplomático del gobierno del Paraguay, por intermedio del poder eje-

cutivo nacional, que ha sido citado de evicción en esta causa, para que pueda salir a la defensa del adquirente si así fuere su voluntad.

Por estos fundamentos, y atento lo expuesto y pedido por el señor procurador general, se revoca la sentencia apelada de fojas 200. Notifíquese original y devuélvase, debiendo reponerse el papel ante el juzgado de origen.

NICANOR G. DEL SOLAR.—D. E. PALACIO.—  
J. FIGUEROA ALCORTA.

---



## EXHORTOS

*Los emanados de piezas de la  
República no necesitan legalizarse  
para ser cumplidos.*







# LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS



## I

### ANTECEDENTES

La rutina — ese bichito sutil y molesto que anida en el cerebro de los burócratas con preferencia a otros sitios — se opone con tenacidad a dar curso a los exhortos que proceden de jueces de la república si no se encuentran legalizados.

Un juez de la Pampa—en la Pampa la cosa puede pasar—me devolvió un exhorto que carecía de tal requisito. La cámara federal de La Plata revocó ese pronunciamiento y mandó que el juez diese curso al exhorto.

Magistrado tan inteligente como el doctor Martín y Herrera procedió con el criterio de su colega de la Pampa. La cámara comercial revocó su auto.

La corte de la nación, en cien casos ha sentado la buena doctrina de que los exhortos no necesitan legalización. ¿Bastará esto para vencer las resistencias de la rutina?

El tiempo lo dirá.

## II

### ESCRITO DEL DOCTOR TOMÁS JOFRÉ

1. Antecedentes del caso. — 2. Los exhortos no necesitan legalizarse para ser cumplimentados. — 3. Jurisprudencia de la suprema corte.

1.—Ante el juzgado de comercio del doctor Martín y Herrera, secretaria del doctor Jorge Casares, presenté un exhorto librado



por el señor juez de primera instancia en lo civil y comercial de la tercera nominación, segunda circunscripción, de la ciudad de Santa Fe, doctor Antonio F. Cafferata, en los autos sobre convocatoria de acreedores de don Alberto P. Assereto.

El juez exhortado, de acuerdo con la vista fiscal, no hizo lugar a su tramitación por no estar legalizado y lo mandó devolver.

2.—Los exhortos no necesitan legalizarse para ser cumplimentados, bastando como requisito extremo la firma del juez, del secretario y los sellos.

Aun cuando el inferior no cita ley, es evidente que ha aplicado mal el artículo 2.º de la ley nacional número 44 de 26 de agosto de 1863.

3.—En efecto; la corte suprema de justicia de la nación, en el tomo I de sus fallos, pág. 385, 1.ª serie, tiene resuelto que: «los procedimientos judiciales de que habla el artículo 2.º de la ley nacional de 26 de agosto de 1863, son aquellos que, obrados por un tribunal de provincia, se quieren hacer valer ante los jueces de otra como comprobantes o como título de algún derecho, no las comunicaciones entre jueces de distintas provincias, de cuyo género son los exhortos u oficios que se dirigen, encargándose el desempeño de diligencias relativas a los asuntos de que conocen, pues éstos no necesitan de más formalidad, para ser tenidos por auténticos, que la subscripción del exhortante y la atestación del escribano con que actúa, ni ha sido costumbre revestirlos de otras solemnidades especiales». El mismo tribunal se ha pronunciado en análogo sentido en los tomos 15, página 211, serie 3.ª; 52, página 188; 94, página 340, etc. (Véase también Joaquín V. González, *Manual de la constitución argentina*, página 728.)

En consecuencia, solicito de V. E. declare mal denegado el recurso por el inferior, y, pronunciándose sobre el fondo, se sirva resolver que el juez exhortado debe cumplimentar el exhorto dirigido a que he hecho referencia, sin que sea necesaria su legalización.

SENTENCIA DE LA CÁMARA COMERCIAL

Buenos Aires, etc.



AUTOS Y VISTOS:

La disposición del artículo 3.º de la ley número 5133, de 19 de septiembre de 1907, en que se funda el auto de fojas 5, que motiva la queja traída ante esta cámara, se refiere a actos o procedimientos que procedan de corporaciones u oficios que no pertenezcan al orden judicial, y es, por consiguiente, inaplicable a los exhortos que los jueces de una provincia dirigen al de otra. Igualmente inaplicable a esa clase de comunicaciones es el artículo 2.º de dicha ley, por no hallarse enumeradas entre los actos que en el mismo se mencionan.

Teniendo presente, además, que la suprema corte de la nación ha declarado reiteradamente «que las comunicaciones entre los jueces de distintas provincias no necesitan de más formalidades para ser tenidas por auténticas que la firma del juez exhortante y la atestación del escribano con que actúa». (Véase entre otros, fallos de la suprema corte de justicia de la nación, tomo I, página 385, y tomo 94, página 340.)

Por ello, se revoca el auto de fojas 5, y devuélvanse estas actuaciones al recurrente a los efectos a que hubiere lugar, previa reposición de sellos.



# SEGUNDA PARTE

## DERECHO PENAL





# CAUSA DE VICENTE DALIA

---



## I

### ANTECEDENTES

Publicamos a continuación un artículo que escribimos criticando el código de procedimiento de 1906, con motivo de la causa de Dalia, la acusación fiscal y las sentencias condenatorias de 1.ª y 2.ª instancia dictadas contra el procesado, así como el recurso que dedujimos a la corte y el fallo del alto tribunal, plenamente absolutorio para el mismo.

### UNA LEY INICUA (I)

«Artículo 548.—El recurso de inaplicabilidad de ley no procede contra las sentencias confirmatorias de los fallos de primera instancia, a no ser que se trate de la pena capital, o privativa de la libertad por tiempo indeterminado». (Código de procedimiento en lo criminal.)

Esta es la más inicua de las leyes que se haya dictado jamás en la provincia de Buenos Aires. Es un paso atrás; una enmien-

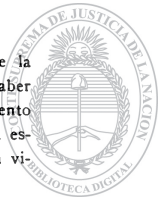
---

(1) No hago crítica de personas. Combato instituciones. Un comisario de policía, tiene facultad para declarar culpable a un ciudadano. El juez del crimen encarcela por simple auto de trámite. Las cámaras — con tres jueces — hacen mayoría con dos.

Estamos bajo un régimen de atraso — en plena España absolutista.

A la administración de justicia le hace falta su 89.





da atrevida a la constitución del estado. Los abogados de la cámara llevan sobre su conciencia la responsabilidad de haber dictado ley semejante.—Verdad que el código de procedimiento en lo criminal fué sancionado sin discusión, a la carrera, sin estudio; y para que todo fuera incorrecto y anómalo entró en vigencia cuando aún no estaba publicado.

Lo que pasa con nuestras leyes es algo que no sabría calificar.

Si un habitante de la provincia es condenado indebidamente a pagar mil pesos, tiene derecho para que la corte case la sentencia y le haga cumplida justicia.

Si a ese mismo individuo le aplican veinticinco años de presidio, no puede ir a la corte por inaplicabilidad de ley y tiene que conformarse con su suerte; no le queda más recurso que pudrirse en una cárcel, si la muerte, más piadosa que los hombres, no pone fin a sus martirios.

La anomalía es palmaria: la ley garante el patrimonio y deja desamparada la fama, la libertad y el honor.

¡Señores diputados, que horror! (1).

Un juez me condena injustamente—apelo a la cámara.—Este tribunal—colegiado según la ley—Mentiras de la ley—divide sus opiniones:—una condena—la otra absuelve—Son las cabezas pensantes del tribunal.—El tercero—un imbécil o un haragán—cuando no ambas cosas a la vez—saca una moneda del bolsillo y la arroja sobre la mesa: si cae cara, condena; si cruz, absuelve.—Cuando además de ser imbécil y haragán, es un malvado, condena siempre. (2).

Estas no son reminiscencias de la Iliada, como dijera del Valle. Hay casos en la historia...

Así como el filósofo antiguo demostraba el movimiento andando, voy a evidenciar las iniquidades de la ley con ejemplos que andan y sangran.

En mi clínica personal puedo citar:

---

(1) Palabras de Castelar en un momento solemne.

(2) No me refiero a personas determinadas; pero eso es lo que pasa con harta frecuencia en las cámaras de apelación formadas por tres miembros.



A Zenobio Valdez condenado a diez años de presidio en primera y segunda instancia y absuelto más tarde a mérito de recursos llevada a la corte.

A Vicente Peralta condenado por el juez del crimen y la cámara a grave pena de penitenciaría y absuelto por la corte.

Pero el caso más grave de todos es uno reciente.—Procesado Vicente Dalia por homicidio el juez del crimen le impuso la pena más grave del código: *veinticinco años* de presidio, que la cámara del centro confirmó.—Bien merecía cuatro tiros, dijo el agente fiscal; pero se le hacía gracia de la vida por existir sólo prueba circunstancial.—En cambio se le mandaba a Sierra Chica, para que saliera a los sesenta años convertido en un guiñapo, si era capaz de soportar durante un cuarto de siglo la áspera vida del forzado.

La suprema corte de justicia en una bien fundada sentencia acaba de absolver de culpa y cargo a Vicente Dalia, y lo manda poner en libertad.

El presidario de ayer goza hoy de libertad y el hombre muerto para la familia y la sociedad ha vuelto a la vida, recuperando lo que dos sentencias le quitaban.

Ahora bien: Valdez, Peralta, Dalia y cien más cuya inocencia ha declarado el alto tribunal, estarían hoy purgando delitos imaginarios en las cárceles si cuando la cámara dictó esas sentencias hubiera ya regido el código actual.—Bajo su vigencia Valdez, Peralta y Dalia no habrían podido recurrir en casación, y las sentencias condenatorias habrían tenido que cumplirse.—La ley iniqua tendría en su *haber cuarenta años* de presidio para los defendidos de un sólo abogado.

Repitamos: ¡señores diputados, qué horror!

Y lo que se evitó en el pasado, empezará a repetirse ahora. — ¿Será esto posible? ¿No habrá alguien que haga modificar la ley iniqua, la ley de atraso, la ley de barbarie?

¿Habrá que escribir en los frontis de las cámaras de apelación de la provincia *lasciate ogni speranza?*...

Más adelante encontrará el lector las sentencias en la causa de Vicente Dalia.—No publico mis defensas, porque lo creo in-

necesario a los fines que me propongo en este folleto: la modificación de la ley inicua (1).

TOMÁS JOFRÉ.



## II

### ACUSACIÓN FISCAL

Señor Juez:

De autos resulta que Vicente Dalia era deudor, según su propia declaración corroborada por las de varias otras personas—de una suma de dinero a Ángel Di Giacomo, que apareció *muerto violentamente* según opinión médica y de profanos, en una tapera en campo de propiedad o arrendado por Dalia.

Se ha probado, como es posible probar estas cosas, que Dalia visitaba casi todos los días y a veces varias veces en el mismo día la tapera en que se encontró el cadáver y que al entrar y salir tomaba precauciones para que no se le viera en esas inmediaciones. Se ha probado, que en el día en que desapareció Di Giacomo éste estuvo con Dalia en la tapera, circunstancia que éste último niega.

De la declaración de Dalia resulta que él abonó a Di Giacomo lo que le debía, y que el pago lo efectuó en el día antes de la desaparición, habiendo abonado adelantado; siendo de notar que había demorado anteriormente el pago de pequeña cantidad debida a Di Giacomo.—Dalia no conserva recibo—y ha hecho saber a varias personas que había pagado a Di Giacomo sin que nadie le hubiera interrogado sobre tal circunstancia.

Ha sostenido Dalia que Di Giacomo se había ausentado el día o en la noche del día, de la desaparición, se lo ha dicho a

(1) Estas páginas fueron escritas hace más de diez años. La legislatura de la provincia de Buenos Aires acababa de darse un nuevo código de procedimiento, que resultaba inferior al derogado. La nueva ley había suprimido sin meditación, el recurso extraordinario de inaplicabilidad conocido en Europa bajo el nombre de casación y yo la criticaba con alguna viveza. Hoy esas críticas sirven de antecedente para medir el camino recorrido por el código de procedimiento penal de 1915, de que soy autor.



varias personas y ha negado esta circunstancia después al declarar ante el señor comisario instructor y ante V. S.

Pretende Dalia probar la *negativa loci*—o *el alibi* sin resultado; pues hay varias personas que lo han visto en la tapera el día de la desaparición, y él niega esa circunstancia, sosteniendo que permaneció en su casa poniendo como testigo a su propia madre—testigo que si hubiera sido interrogado (creo que no lo ha sido sobre esa circunstancia) sería atacable por ser la madre del procesado y por ser unipersonal—*testis unus testis nullus*.

La muerte se ha producido, según opinión médica, por traumatismo en el cráneo. Puede haber sido el golpe aplicado con el martillo encontrado en casa del procesado y esa presunción se fortalece con el resultado del análisis químico de las manchas que el martillo presentaba, las que, según la Dirección de salubridad de la Provincia—*son con toda probabilidad de sangre humana*.

Los procedimientos científicos empleados en nuestra época, permiten determinar con toda precisión tal circunstancia, teniendo en cuenta entre otras cosas el diámetro de los glóbulos rojos de la sangre, diámetro que varía de especie a especie.

No hay, pues, temor de que el informe químico sea erróneo, es por el contrario acerto y no dubitativo en opinión de este Ministerio.

El procesado Dalia tenía interés en la desaparición de Di Giacomo y no se ha demostrado en ninguna forma que otras personas lo tuvieran.

Consta de manera fehaciente que Dalia gastaba últimamente en cosas que anteriormente no acostumbraba. Ha comprado revólver y dos relojes—no ha sido interrogado sobre el objeto de estas compras, etc., etc.

Ha pagado suscripciones de diarios en dos ocasiones con billetes de cien pesos—siendo así—que no trabajaba tan holgadamente para tener billetes de tan gran valor en cantidad y que él mismo ha declarado que Di Giacomo tenía siempre fondos en sus bolsillos; y—el móvil del crimen parece haber sido el robo desde que se encontró dado vuelta hacia afuera el bolsillo derecho del pantalón de la víctima al exhumarlo, etc., etc.



Que se le ha visto en los alrededores de la tapera a Dalia con una pala, el día de la desaparición.

Que abonaba con largueza y sin comprobar el trabajo que le hacían sus peones.

Que habiendo dicho anteriormente que el dinero y billetes de cien pesos que tenía provenían de haberlo ganado en las carreras y de que se lo había prestado un hermano y recibido un pago del señor Ronglione ha negado ante el comisario y ante V. S. que hubiera ganado en las carreras—y se ha comprobado por declaraciones que no ha sido visto en las carreras.

Que el pago que sostiene Dalia haber efectuado a Di Giacomo de lo que le debía, dice lo efectuó en presencia de Falcone—individuo cuyo paradero se ignora.

Observa este ministerio que no se ha comprobado que el hermano de Dalia ni que el señor Ronglione haya el primero prestado y el segundo pagado a Dalia lo que éste afirma, etc., etc.

Que en los careos se ha turbado, según consta en autos, el procesado Dalia en tanto que los testigos se han mantenido firmes y aun cuando este ministerio no da mayor importancia a los careos solos, les da cuando coadyuvan como en el presente caso, con las otras probanzas.

Este ministerio opina que no basta que el procesado niegue el hecho que se le atribuye e impute—que es suficiente para condenar de acuerdo con la doctrina admitida por el código de procedimientos en el libro II Título XV. — que hayan presunciones o indicios varios, graves, precisos y concordantes como lo ha establecido la jurisprudencia constante y uniforme de los tribunales argentinos.

Las circunstancias que en desorden, dada la premura con que debe este ministerio expedirse, han sido enunciadas anteriormente y que constituyen en su opinión presunciones e indicios que reúnen los siete caracteres exigidos y enunciados por el artículo 305 del código de procedimientos criminal que autorizan a considerar a Vicente Dalia como autor del homicidio realizado con *premeditación y alevosía* en la persona de Angel Di Giacomo.

Aun cuando no consta en autos, el que firma recuerda haber visto en la última visita de cárcel, al procesado Dalia, el que es

quebrado de la espina dorsal, vulgarmente llamado jorobado — hombre de aspecto enfermizo y sin fuerzas—quien para realizar el hecho que se le atribuye ha tenido necesariamente que obrar dado su físico, en condiciones que lo colocan como alevoso.

Por las circunstancias referidas, y teniendo en cuenta las opiniones de los autores respecto de alevosía, entre otros Groizard, Crivellari, y Viada, y especialmente Groizard — tomo I, páginas 428 a 439 de su obra «El Código Penal de 1870» y las demás circunstancias de autos, este ministerio acusa a Vicente Dalia, como autor del homicidio de Angel Di Giacomo realizado con premeditación y alevosía (artículo 84 incisos 2.º y 4.º del código penal) y pide a V. S. se sirva dictar sentencia condenándolo a sufrir la pena de *presidio por veinticinco años*. (Artículo 17, capítulo I—Delitos contra la vida—N.º 1 de la ley N.º 4189 con reclusión solitaria en los aniversarios del crimen (artículo 64 del código penal)—y demás accesorios legales (artículo 63 código penal) teniendo en cuenta que la ley N.º 4189 es más benigna que el código penal anterior, vigente a la época de la comisión del delito; puesto que y debe considerarse en opinión del que firma la pena de presidio de veinticinco años, más leve que la de presidio por tiempo indeterminado—(artículo 48 del código penal) argumento de los artículos 73 y 74 del código penal derecho de gracia—y considerando que, según el artículo 55 del código penal, no se impondrá la pena de muerte cuando sólo haya pruebas de presunciones, por vehementes que sean; circunstancia que concurre en el presente caso y que hace imposible la aplicación de la pena de muerte—pena, que sin esa circunstancia, sería la aplicable, según lo establecen expresamente los artículos 95, inciso 1.º, del código penal anterior, y 17, capítulo 1.º. Delitos contra la vida número 3.º, letra A—y así lo pido al juzgado.



## SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mercedes, etc.



## Y VISTOS.—CONSIDERANDO:

1.º — Que está probado el cuerpo del delito de homicidio a Angel Di Giacomo. La partida de defunción de fojas 40 y el informe médico citado, lo comprueban con arreglo a los artículos 104 y 80 del código civil y 207, 271 y 203 del de procedimientos en lo criminal.

Al acta en que constaba la diligencia de identificación no pueden hacerse, con éxito, las objeciones que dirige la defensa: los firmantes, por ese solo hecho producido en presencia de Domingo Di Giacomo, hijo de la víctima, a quien se hizo entrega del cadáver, han establecido la identidad de éste.

El mismo Domingo Di Giacomo es el que se presenta después apoderando al doctor Ballesteros para querellarse contra Dalia por homicidio al padre, no admitiéndosele el rol que pretendía por no haber justificado legalmente el parentesco fojas 137 y 135. En cuanto a que el informe sobre la muerte es de un solo perito, basta tener presente que dada la naturaleza y situación de los traumatismos, aun sin título facultativo podría establecerse su gravedad: cuando en el cráneo de un cadáver se encuentran lesiones como las descritas, el criterio legal de la prueba no difiere del de la apreciación común (artículo 270 inciso 3.º y 272 — última parte — código de procedimientos).

2.º — Que la identidad del autor y el procesado Dalia, lo está igualmente por las presunciones que satisfacen las exigencias del artículo 305 del código de procedimientos. Las contradicciones apuntadas por la defensa en algunas declaraciones no afectan lo fundamental de los relatos y aun su existencia es materia de sutil apreciación, como cuando al referirse a una hora dice un testigo que era en la mañana y otro que a las doce:



El motivo en que se funda el desconocimiento de valor científico al informe de la dirección de salubridad sobre si las manchas del martillo eran o no de sangre, es un método de investigación, que los peritos reputan falaz como lo ha establecido no hace mucho la mencionada oficina técnica, y en cuanto a que el mismo informe lleva la firma de un solo perito que no aceptó el cargo bajo juramento, es también una razón más aparente que real, porque se trata del dictamen de una oficina creada, entre otros fines, con el de asesorar en los casos como en el *sub judice*, oficina cuya organización interna tiene los elementos necesarios para contralorear los análisis que fundan sus informes; ella dispone, precisamente, de los aparatos y elementos de investigación de que no disponen los peritos particulares.

Exigir a sus empleados el juramento que a los peritos destituidos de carácter oficial fuera como exigirlo a los médicos de tribunales y de policía lo que es innecesario a todas luces.

La constancia en el texto de las actas de declaraciones del nombre de la persona que firma por no saberlo hacer el testigo, tampoco es un vicio de la prueba porque la ley, no ha exigido tal requisito, no existen las razones, que en las escrituras públicas, por ejemplo.

3.° — Que existe prueba de las circunstancias de premeditación y alevosía.

Ella no se deriva solamente del informe médico sobre el estado del cadáver, como afirma la defensa; resulta del conjunto de circunstancias referidas por varios de los declarantes citados, y están, además, apoyadas en la naturaleza del hecho y el fin evidente del robo, sobre lo que no ha de dudarse ante la forma en que se encontraron las ropas del cadáver, testigos elocuentes, e intachables del despojo.

4.° — Que ante esas circunstancias, tanto en el anterior como en el código vigente, la pena de que Dalia sería pasible, aparte la naturaleza de la prueba, *es la de muerte*. Por aquella ley, sería, en defecto de la muerte, la pena de presidio por tiempo indeterminado, por esta la de presidio de diez a veinticinco años, según el inciso 1.° capítulo I, artículo 17 de la ley 4189.

Por estos fundamentos de conformidad con lo dictaminado por





el ministerio fiscal fallo definitivamente condenando a Vicente Dalia, como reo de homicidio a Ángel Di Giácomo, perpetrado con premeditación y alevosía en Chacabuco, el 12 de julio de 1903, a *la pena de presidio por veinticinco años* que con las accesorias, establecidas por el artículo 63 del código penal, sufrirá en Sierra Chica, computada la prisión preventiva; fijándose en cuatro años el tiempo de la vigilancia policial después que cumpla la principal, debiendo además reponer las fojas de este proceso. Todo, ello, con arreglo a las disposiciones citadas y a las de los artículos 49, 52, 55 y 61 del código penal y 90, 91 y 93 del de procedimientos en lo criminal.

ANACLETO LLOSA.

Ante mí:

*Daniel M. Otamendi.*

#### IV

#### SENTENCIA DE LA CÁMARA

Mercedes, etc.

Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que precede y concordantes de la sentencia apelada, se confirma ésta, declarándose que, con arreglo al artículo 62 del código penal, la pena de veinticinco años impuesta debe cumplirse en penitenciaria. Y notando el Tribunal que en el escrito de fojas 120, el defensor se ha servido de términos que no pueden por ningún concepto ser tomados por cultos y cuyo empleo que no aparece justificado por las necesidades de la defensa, arguye falta de consideración y de respeto, téstense sin más trámite las palabras subrayadas en el mencionado escrito (artículo 56 del código de procedimiento).

Hágase saber y devuélvase.

J. MAURICE.—NICOLÁS VILA (1).—  
CARLOS BENAVIDEZ.

Ante mí:

*Enrique A. Stolbizer*



V

RECURSO EXTRAORDINARIO DEDUCIDO POR LA DEFENSA

1. Dedución del recurso de inaplicabilidad de Ley.—2. Oscuridad del caso y disparidad de opiniones.—3. Antecedentes.—4. Hechos que se declaran probados en la sentencia de la cámara y su análisis: a) La muerte de Angel Di Giácomo y la identidad de su cadáver; b) para que la prueba de presunciones tenga valor, es necesario que conste la existencia del cuerpo del delito por pruebas directas.—5. Análisis de la prueba circunstancial: a) No está probado que el acusado y la víctima anduvieran juntos el día del hecho; b) no se puede deducir una presunción de otra; c) las visitas del acusado al lugar del crimen; d) las deudas de Dalia y sus gastos excesivos; e) el martillo con que se supone se cometió el delito.—6. Las declaraciones de testigos observadas por las partes deben mandarse ratificar.—7. Las presunciones de autos no resisten los caracteres exigidos por la ley para formar plena prueba.—8. La alevosía y la premeditación no pueden presumirse: deben resultar plenamente probadas.

1. — Interpongo de la sentencia condenatoria pronunciada en esta causa el recurso de inaplicabilidad de ley que pido se me conceda para ante la Suprema Corte de Justicia.

2. — No es ésta una de las causas en que los hechos se presentan con la debida claridad hasta el punto de que los magistrados llamados a resolverla voten y opinen de una manera uniforme. No; y por el contrario: la sentencia condenatoria carece de la fuerza y convicción que a tales pronunciamientos les da la unanimidad.

---

(1) El doctor Nicolás Vila en un fundado voto reconoció la inocencia de Dalia, opinando por la absolución.



En primera instancia el señor agente fiscal doctor Lorenzo Ruiz a fojas 81 decía: «que la prueba rendida en autos no revestía el carácter de plena prueba de presunciones suficientes para fundar una condenación y pedía la absolución de culpa y cargo del prevenido».

En segunda instancia el señor fiscal de cámara considera improbadas las circunstancias de premeditación y alevosía calificando en consecuencia el hecho como homicidio simple. La pena tratándose de un hecho cometido antes de la ley de reformas número 4189, sería pues de ocho años de presidio.

En el tribunal también se dividieron las opiniones: de un lado el señor vocal doctor Maurice fundó su voto por la condenación y del otro el señor vocal, doctor Vila, lo fundó en el sentido de la absolución.

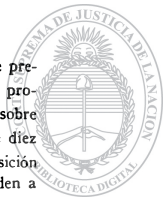
La sentencia de V. E. ha salido, pues, trabajada por encontradas opiniones y esa es la razón que me mueve al tentar el recurso extraordinario que voy a fundar.

3. — El 12 de agosto de 1903 un hijo de Ángel Di Giácomo denunció en la comisaría de Chacabuco la desaparición de su padre, ocurrida desde un mes antes de iniciarse en consecuencia las averiguaciones del caso. Practicadas éstas se encontró un cadáver en una tapera de la quinta alquilada por Dalia. Este fué detenido y el proceso se llevó delante, pero con el solo propósito ya definido de robustecer las sospechas de su culpabilidad. (Voto del doctor Vila en el acuerdo).

4. — Para proceder con orden vamos a estudiar separadamente cada uno de los hechos que se dan por probados en el acuerdo:

a) Se declara acreditada la muerte de Angel Di Giacomio, al votar la cuestión primera: pero para llegar a tal conclusión V. E. ha violado las leyes que gobiernan la prueba como paso a demostrarlo. Se funda tal declaración de hecho en el testimonio de Rafael España, quien manifiesta a fojas 4, que encontró el cadáver de una persona DESCONOCIDA, siendo identificada en ese momento por don Domingo Di Giácomo, hijo del desaparecido.

Este testimonio carece de valor legal para justificar que el cadá-



ver encontrado es el de Di Giácomo, porque al testigo no se le preguntó—en la forma que determina el artículo 243 del código de procedimiento—sobre si le afectaban los impedimentos legales ni sobre la edad que tenía. Nadie nos garante si el testigo era menor de diez y ocho años o si estaba afectado de tachas legales. En esa deposición se ha violado el artículo 243 citado, por lo cual es nula, en orden a lo dispuesto por el artículo 607 del mismo código.

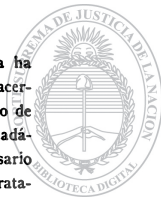
Luego entonces, cuando V. E. afirma que la declaración del oficial España fué prestada bajo juramento y CON LAS DEMÁS FORMALIDADES QUE LA LEY PRESCRIBE ha violado las leyes de la prueba consignadas en los artículos que dejo citados.

La diligencia de exhumación de fojas 5 carece de valor y V. E. ha violado también al resolver lo contrario las leyes de la prueba. Esa diligencia no fué leída a las personas que la suscriben, requisito indispensable para su validez; los testigos del acto nada dicen porque nada se les ha preguntado y no hay constancia que conocieran a Di Giácomo.

Cierto es que V. E. agrega: \*que si bien no consta que se les haya interrogado a los testigos por la razón de su conocimiento esa OMISIÓN debe considerarse suplida desde el momento que durante la instrucción del proceso NADIE HA PUESTO EN DUDA que el cadáver encontrado fuera el de Angel Di Giácomo, por lo que sin duda el inferior no consideró necesario ratificar esa diligencia\*.

La afirmación no ha podido hacerse en presencia de lo que manifesté en el capítulo III de mi escrito de fojas 120 en el cual sostuve, que no se había comprobado la identidad del cadáver encontrado. Allí decía el abogado que suscribe: la duda surge y sería horrible una condena contra Dalia si mañana se presentase sano y salvo Di Giácomo.

Además para identificar el cadáver de Di Giácomo debió procederse en la forma que determina el artículo 166 del código de procedimiento. Verdad es que V. E. asevera que la identificación por medio de testigos sólo es requerida por la ley cuando se trata de persona desconocida; y en este caso el cadáver encontrado fué desde el primer momento reconocido por Domingo Di Giacomo. Mas, al hacer tal declaración V. E. ha violado la regla de prueba que niega



valor legal al dicho de un solo testigo. Ese testigo ni siquiera ha declarado en los autos, pues otros son los que se encargan de hacerlo a su nombre. Así, pues, se ha violado el artículo 253 del código de procedimiento y la ley 32 título 16, partida 3, al declarar que el cadáver era de persona conocida porque el oficial España o el comisario Gallardo manifestaran que Domingo Di Giácomo dijo que se trataba de su padre.

Además, V. E. ha aplicado erróneamente el artículo 166 del código de procedimiento, por cuanto en el caso sub-judice el oficial España, que fué quien descubrió el cadáver dice que se trataba de un *desconocido*.

La persona *desconocida*, a que se refiere el artículo 166 del código de procedimientos, es la que no es conocida del juez instructor, pues de lo contrario jamás se presentaría el caso de encontrar un cadáver que no puede ser reconocido por alguien.

Saluto, en el tomo II, página 281, comentando el artículo 126 del código de procedimiento italiano análogo al nuestro dice: antes de pasar a la autopsia del cadáver el juez debe asegurarse de su identidad haciendo la descripción exacta del reconocimiento por medio de personas que hayan conocido al extinto a los cuales se les haga prestar *juramento* de todo lo cual se levantará acta.

No hay, pues, prueba legal de que el cadáver, encontrado en la quinta de Dalia sea el de Di Giácomo, y si V. E. lo ha declarado así es porque ha violado las leyes de la prueba contenida en los artículos 245, 255, 166, 607 y demás que dejo citados.

b) Demostrado como queda que no consta el cuerpo del delito imputado a Dalia la prueba de presunciones de que se hace mérito en la sentencia de V. E. carece de valor legal para dictar una sentencia condenatoria.

En efecto para que pueda hacerse valer contra un reo la prueba de presunciones es requisito indispensable que el cuerpo del delito conste por medio de pruebas directas e inmediatas (artículo 305, inciso 1.º, del código de procedimiento).

En el caso de autos, lo que se imputa a Vicente Dalia no es haber muerto a un hombre cualquiera, en cuyo caso el cuerpo del delito estaría probado, sino de haber dado muerte a Di Giácomo, cuyo de-



ceso no se ha probado, por los medios que requiere la ley. Luego, entonces, al dar valor de prueba legal a las presunciones acumuladas, V. E. ha violado la ley de la prueba consignada en el artículo 305, inciso 1.º, citado.

5.—Mas, supongamos que el cuerpo del delito hubiera sido comprobado por pruebas directas e inmediatas y entremos al estudio de las demás presunciones que se hace valer contra el prevenido.

a) Se da por probado que el 12 de julio de 1903, «Dalia y Di Giácomo, a eso de mediodía salieron juntos de la casa del primero, y tomaron en dirección a la tapera; que Dalia regresó a la entrada del sol y que nadie vió ya a Di Giácomo hasta que se encontró su cadáver». Para llegar a esta conclusión la mayoría en el acuerdo ha tenido que violar la regla de prueba que contiene el artículo 305, inciso 7.º, del código de procedimiento. Los indicios deben fundarse en hechos reales y probados y nunca en otras presunciones o indicios.

¿Qué elementos de prueba ha tenido V. E. para dar por establecido que Dalia y Di Giácomo salieron juntos en dirección a la tapera el día indicado?

La declaración de los testigos Anselma Cejas y Vicente Vichiondo de fojas 12 y 13. Mas tales declaraciones no pueden ser invocadas para dar por probado el hecho sentado por V. E., en atención a que se contradicen en sus dichos, y es sabido que en tal caso éste no vale. (Acuerdos y sentencias de la suprema corte de justicia, tomo 6, página 177, serie 4.)

Además, el testigo Vichiondo tiene catorce años, por lo cual su declaración no vale ni como simple presunción (artículo 223, inciso 1.º, del código citado, y acuerdos y sentencias de la corte, tomo 3, página 138, serie 5).

En el peor de los casos, para mi defendido, quedaría la sola declaración de la Cejas, que sólo tendría valor de presunción. Así, resulta que V. E. establece lo siguiente: se presume que Dalia y Di Giácomo salieron juntos en dirección a la tapera, y de esta presunción saca otra para dar por demostrado que el primero dió muerte violenta al segundo. Tal modo de analizar la prueba circunstancial es contraria a las leyes de la prueba (artículo 305, inciso 1.º)

Otro indicio de culpabilidad lo saca V. E. de la contradicción que encuentra entre la declaración de Dalia y de su propia madre; tal contradicción no existe, como puede comprobarse con la lectura de las constancias de autos.

b) Otro indicio se hace consistir en que Dalia dijo a varias personas al día siguiente de la desaparición de Di Giácomo, que sabía dónde se encontraba éste.

Para dar por probado este hecho, se invoca la declaración del testigo Ventre; pero el dicho de un testigo sólo vale como presunción y de ella se hace surgir otra. Hay también aquí violación de la ley de la prueba que ya he citado (artículo 305, inciso 5.º)

c). Se da por probado que Vicente Dalia llegaba con frecuencia hasta la tapera, donde se encontró el cadáver, tratando de guardar precauciones.

Me permito transcribir aquí los fundados argumentos aducidos por el señor vocal doctor Vila, en el acuerdo: «Pues bien; encuentro que eso es inverosímil. Los actos humanos deben tener alguna explicación racional, y las tales visitas no las tienen».

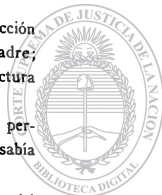
No puede atribuirse al propósito de hacer desaparecer los rastros del delito, porque no hay en ello la menor señal ni puede relacionarse con nada, a no ser, con el intento de llamar la atención de los vecinos, dada la forma en que se dice que se realizaban.

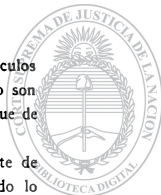
Por otra parte este indicio tampoco ha sido demostrado por prueba legal, pues los testigos que apoyan la declaración de hecho de V. E. carecen de valor legal como más adelante voy a evidenciarlo.

d) Se da por establecido que Dalia era deudor de Di Giácomo a la fecha de la desaparición de éste; pero siempre violando las leyes que gobiernan la prueba de los hechos.

En efecto para llegar a tal conclusión se invoca el dicho de la esposa de Di Giácomo que lo es Concepción Lucci y se agrega que «por otra parte, según Ventre, el procesado le manifestó que la cuenta la había pagado el doce, no habiendo presentado recibo el procesado para justificar el pago, etc.

También se dice que Dalia carecía de recursos para satisfacer la deuda.





En estas declaraciones se han violado los siguientes artículos del código de procedimiento; el 253, desde que los testigos no son hábiles, ni concuerdan en lugar y tiempo; el 305 inciso 7, porque de una presunción se saca otra.

Los gastos excesivos que hacía Dalia después de la muerte de Di Giácomo. Tal hecho no ha sido demostrado y aun cuando lo hubiese sido carecería de importancia.

e) La existencia del martillo que le fué secuestrado a Dalia que lo tenía escondido debajo del colchón de su cama, el que según el informe de la dirección general de salubridad conservaba manchas con toda probabilidad de sangre humana.

El martillo encontrado por la policía, según la diligencia de fojas 21, lo fué debajo de un colchón donde estaba mezclado con otros objetos existentes allí. Eso es todo lo que hay respecto del martillo. No ha podido, pues V. E. sin violar las leyes de la prueba, dar por sentado algo que no consta en autos; esto es: que el martillo estaba **ESCONDIDO**.

Al apoderarse la policía del martillo, éste no tenía las manchas de sangre que luego le aparecieron en la dirección de salubridad y eso es lo que afirmé en mi escrito de defensa de primera instancia.

Ese martillo no puede hacerse valer como pieza de convicción contra mi defendido, porque el acta de secuestro no está firmada por la persona en cuyo poder se halló o en su defecto por dos testigos y V. E. al resolver lo contrario ha violado los artículos 162 y 607 del código de procedimiento.

La contra prueba de que las manchas de sangre no las tenía el martillo cuando fué secuestrado, la tiene V. E., en la afirmación del médico, doctor Canale, corriente a fojas 39.

Más, aun dando por sentado que las irregularidades cometidas carezcan de importancia V. E. siempre habría violado el artículo 305 inciso 7 al hacer valer esta presunción contra el prevenido.

Hay una presunción de que el martillo encontrado en casa de Dalia tenía manchas de sangre humana y de esa presunción se hace surgir otra, la de culpabilidad de mi defendido.

El informe médico de fojas 76 vuelta, no se ajusta a los procedimientos aconsejados por la ciencia cuando dice que las manchas





encontradas en el martillo son con toda probabilidad de sangre humana.

Los glóbulos rojos existen no solamente en la sangre humana, sino también en la de otros animales.

Strassmann en su Manual de medicina legal — traducido por Carrara — dice a este respecto: Estamos de acuerdo con la opinión de Virchow, Struve, Offmann y con todos los que opinan que después del disecamiento de los corpúsculos se agrietan, siendo imposible medir tales corpúsculos. Por eso es imprudente opinar sobre el origen de las manchas, etc. Página 461.

Al dar valor de prueba legal a ese informe médico V. E. ha aplicado erróneamente el artículo 289, inciso 3 del código citado, desde que las conclusiones a que arriba el perito no son conforme a los principios de su ciencia o arte.

Se invoca igualmente contra Dalia el hecho de haber gastado más de lo regular y se agrega que la presunción que de este hecho surge no puede ser otra que ese dinero pertenecía a la víctima desde que CONSTA EN AUTOS que Di Giácomo llevaba un rollo de dinero. Lamento que V. E. no haya concretado esa constancia de autos relativa al dinero que tenía la víctima, pues, por más que la he pesquisado no me ha sido posible encontrarla.

6.—En mi escrito de fojas 123 observé las declaraciones de los testigos Concepción Lucci, Luis Vergez, Rosa Marino, Anselma Cejas, Vicente Vichiondo, Cayetano Chiancha, Cesáreo Gómez, Rosario Brilla, Lucio Chiancha; el careo de fojas 30 y 31 y declaraciones de fojas 35, porque no sabiendo firmar los testigos, el juez instructor no les había nombrado otra persona que firmara la declaración.

V. E. dice que todas esas declaraciones son válidas porque se encuentran firmadas por otra persona después de haberlas ratificado el testigo.

Hay en esto una errónea aplicación de los artículos 240, inciso 1 y 241 del código recordado. La ley manda que el juez nombre para que acompañe al testigo otra persona que firmará la declaración. En el caso de autos esa formalidad debió resultar cumplida del acto



mismo; y en el acta no aparece el nombre de la persona que aparece firmando a ruego.

Lo que la ley quiere es que el firmante a ruego esté presente en el acto de la declaración y en el caso sub-judice es seguro que eso no sucedió: tomada la declaración el juez instructor buscó al primero que encontró a mano para remedar el cumplimiento de una forma legal.

Era obligación del inferior mandar ratificar esas declaraciones porque habían sido *observadas* por la defensa, la que señaló de un modo concreto los defectos o irregularidades que las afectan. Acuerdos y sentencias de la suprema corte, tomo 4, página 122 serie IV.

Luego entonces, V. E. al fundar la condena de Vicente Dalia en las declaraciones de testigos que no merecen fe por la causal apuntada, ha aplicado erróneamente los artículos 427 y 254, inciso 4 del código citado.

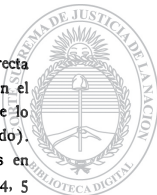
7.—Mas, supongamos que los hechos practicados por Dalia estuvieran justificados y aun así no existiría la prueba de presunciones demostrativa de su culpabilidad. Todos esos hechos como lo dice el señor vocal doctor Vila, no excluyen la posibilidad de que otro haya sido el autor, o que el delito se haya cometido en otro lugar o en otro día, de acuerdo o no con Dalia; sin excluir tampoco la posibilidad de que éste sea inocente y se encuentre comprometido por un concurso de circunstancias o coincidencias que no sería por cierto una novedad ante la justicia del crimen.

No se tiene ningún dato preciso para reconstruir el hecho: no se sabe en realidad cómo, cuándo, ni dónde ha ocurrido.

El hallazgo del cadáver en la tapera que es el hecho más grave no prueba más en contra de Dalia que en contra de cualquier otro, pues si bien la tapera está en su quinta se halla a cuatro cuerdas de su casa habitación.

En cuanto al martillo, aun dando por probado que sus manchas fueran de sangre humana y que el instrumento se adaptaba perfectamente a la lesión, no por ello quedaría excluida la posibilidad de que Dalia no hubiese sido más que un encubridor.

Ahora bien es de la esencia de la prueba circunstancial que de



la combinación de los indicios resulte una conformidad tan directa y tan clara entre la persona del inculpado y el delito que según el curso ordinario y natural de las cosas no se pueda suponer que lo haya cometido ninguna otra persona que el inculpado. (Voto citado).

Al declarar V. E. que concurre la prueba de presunciones en la forma que lo ha hecho, ha violado el artículo 305, incisos 3, 4, 5 y 6, porque como lo he demostrado, los indicios no revisten los caracteres legales para hacer prueba legal. También se ha violado el artículo 13 del mismo código, pues, la duda resulta de la misma votación de esta causa y ella debió resolverse en favor del reo y no en su contra como se ha hecho.

Si a todo esto se agrega que el comisario de policía fijó sus sospechas desde el primer momento, aun antes de haber acumulado pruebas, en la persona de Vicente Dalia; que fijado tal punto de partida como se evidencia en el telegrama de fojas 1, era necesario llegar a su término porque todo hombre, cuando se ha forjado una hipótesis, trata de comprobarla; nada de extraño tiene que aparezcan ciertas anomalías en el proceso que demuestra el deseo de hacer resaltar la culpabilidad de este hombre.

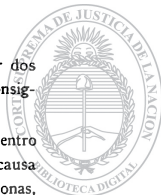
Había por allí un testigo, hombre de malos antecedentes que desapareció después de la muerte de Di Giácomo y cuando se instruía el proceso el cual prestó una declaración que el doctor Vila califica de sospechosa por sus propios términos.

Estos son hechos que contribuyen a debilitar la prueba acumulada en autos y que deben poner en guardia a los jueces para evitar un error, que en este caso es posible y verosímil.

8.—Ha declarado V. E. en su fallo condenatorio que está probado que Vicente Dalia, con la circunstancia calificativa de alevosía y la agravante de premeditación, cometió el hecho.

Aun dando por justificado el homicidio tales circunstancias no han sido probadas y al arribar V. E. a semejante conclusión lo ha hecho con violación de las leyes de la prueba.

En efecto el médico no ha podido afirmar que la herida fué inferida por la espalda a menos de haber presenciado el hecho. Ese dictamen por otra parte, constituiría un sólo indicio en el peor de



los casos y para que éstos tengan valor de prueba deben ser dos cuando menos. Luego V. E. ha violado la regla de prueba consignada en el artículo 305, inciso 2, del código citado.

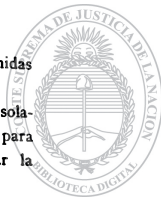
Voy a permitirme transcribir aquí lo que al respecto encuentro en la obra de Viada sobre el código penal de 1870: En una causa sobre el delito de PARRICIDIO o cualquier otro contra las personas, ¿cabe apreciar la circunstancia de ALEVOSÍA si no consta de un modo positivo como ocurrió el hecho?

En cierta causa notable de parricidio hubo la sala de lo criminal de la Audiencia de Barcelona, de apreciar dicha circunstancia agravante, derivándola de deducciones e hipótesis más o menos presumibles, y condenar en su consecuencia al procesado a la pena de muerte. Mas, propuesto por el ministerio fiscal recurso de casación por infracción de ley contra dicha sentencia, porque en ella se apreció sin fundamento bastante, la expresada circunstancia, declaró el Tribunal Supremo HABER LUGAR a él, consignando la importante doctrina de que las circunstancias que aumentan o disminuyen la responsabilidad NO PUEDEN SUPONERSE NI PRESUMIRSE, sino que han de resultar de hechos PROBADOS; y que no apareciendo de los relativos al proceso en cuestión los DETALLES de la comisión del delito, ni la FORMA en que se llevó a cabo, la circunstancia agravante de alevosía apreciada por la sala se funda únicamente en una presunción más o menos fuerte pero no en hecho alguno que le sirviera de fundamento legal, por lo que en tal concepto infringió los artículos 10 número 2 y 81 del código (sentencia del 4 de noviembre de 1878 publicada en la Gaceta de 18 de enero de 1879, tomo 1, página 255).

El mismo autor trae otro caso análogo en el tomo III, página 16, cuestión III, donde se dice que la declaración de la víctima no basta para comprobar la alevosía.

La cámara criminal de la capital de la República ha declarado con reiteración que la alevosía no puede resultar de un informe médico. Y es natural que así suceda desde que tal informe no sería otra cosa que una presunción equívoca.

En la sentencia de que me vengo ocupando se ha violado pues



la doctrina que dejo enunciada y las leyes de la prueba contenidas en el artículo 305 citado.

En cuanto a la premeditación digo lo mismo agregando solamente que V. E. no dice cuáles son los hechos en que se funda para declararla, violando así la prescripción que manda demostrar la culpabilidad del reo.

En la hipótesis desfavorable en que me he colocado para Dalia el homicidio cometido por éste, no estaría regido por el artículo 95 inciso 2 del código penal y 17, inciso 1 de la ley número 4189 que V. E. ha aplicado erróneamente desde que se trataría de un homicidio simple sino por el artículo 96 inciso 2 y la pena que le correspondería es la de ocho años de presidio para cumplirla en penitenciaría artículo 52 del código penal.

## VI

### SENTENCIA DE LA SUPREMA CORTE

SUMARIO: — 1. Si los indicios tomados en cuenta por la sentencia de la cámara, no están probados unos o no conducen los demás a la culpabilidad del acusado y aun cuando uno de ellos revista cierta gravedad, éste por sí sólo es insuficiente para constituir la prueba legal de presunciones por cuanto el inciso segundo del artículo 305 del código de procedimiento, requiere que la prueba circunstancial se constituya por varias presunciones y que éstas revistan las condiciones de graves, precisas y concordantes. — 2. Establecido que los indicios o presunciones no reúnen los requisitos exigidos por el artículo 305 del código de procedimiento, la declaración de la cámara que constituyen prueba legal, es violatoria de dicha disposición.

### VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Suprema corte de justicia:

El defensor del procesado interpone el recurso de inaplicabilidad de ley contra la sentencia de fojas 161 y lo funda en que la cámara ha infringido las leyes de la prueba o las ha aplicado erróneamente, al dar por comprobado el cuerpo del delito y por accredi-



tado que Vicente Dalia, es el autor del homicidio de Ángel Di Giacomo, con la circunstancia calificativa de alevosía y la agravante de premeditación.

Presenta con tal motivo numerosas y variadas observaciones, pero como no todas vienen en forma pertinente, porque algunas carecen de la cita de la ley que se considera violada o no aplicada o no se expresan en el concepto en que lo ha sido, solo se tomarán en cuenta en esta vista, las que reúnan los requisitos enunciados, a cuyo efecto serán analizadas con relación a lo que la sentencia decide respecto de cada una de las cuestiones que plantea.

Dilucidando la primera de estas cuestiones, la cámara empieza por relacionar la circunstancia del proceso que tienen conexión con el cuerpo del delito: denuncia de la desaparición de Angel Di Giacomo; descubrimiento que efectuó el oficial España, de un cadáver, en la quinta que arrendaba Vicente Dalia, reconocimiento inmediato que hizo de ese cadáver Domingo Di Giacomo; exhumación ordenada por el comisario Gallardo y presenciada por él con asistencia de dos testigos y del médico de policía; examen facultativo e informe que expidió este funcionario; y finalmente entrega del cadáver a Domingo di Giácamo en su carácter de hijo de la víctima. Apoyado en estos elementos de juicio, en el acta de fojas 40 y en lo que disponen los artículos 131, 293 y 296 del código de procedimiento, el tribunal por el voto unánime de sus miembros, declara que hay mérito bastante para dar por debidamente justificado el homicidio de Angel Di Giácamo.

Ahora bien, contra esta declaración opone en primer lugar el recurrente, que la cámara viola en un doble sentido de las leyes que gobiernan la prueba.

Al dar por comprobada la muerte de Angel Di Giácamo, por que tal pronunciamiento reposa en el testimonio único de Rafael España, que además no fué interrogado en la forma que determina el artículo 243 del código de procedimientos.

Al establecer que por tratarse de persona CONOCIDA, no debió hacerse la identificación en la forma que indica el artículo 166 del mismo código, porque tal circunstancia sólo consta por la manifestación que hizo Domingo Di Giácamo al oficial España o al

comisario Gallardo, de que el cadáver era el de su padre; lo que importa infringir el principio del artículo 253 del código de procedimiento y la ley 32, título 16, partida 3.ª, que quitan todo valor al dicho de un testigo.

Considero infundadas ambas objeciones.

El pronunciamiento de la cámara no reposa únicamente en el testimonio de Rafael España, como se asegura, sino en el conjunto de antecedentes que he mencionado con prolijidad, entre los que figuran como principales, fuera del indicado, la diligencia de exhumación de fojas 5, el informe médico de fojas 37 y el acta de defunción de fojas 40, de tal manera, que aun cuando fuera objetable el primero, siempre quedarían bastantes elementos de prueba no objetables para mantener el voto de la cámara en la cuestión de hecho que resuelve, por cuya razón no podría reverla V. E. de acuerdo con la jurisprudencia establecida; e independientemente de esto, opino que no se ha infringido el artículo 243 del código de procedimiento, porque este artículo marca reglas para el examen de testigos y el oficial España concurrió a declarar ante el comisario Gallardo, como empleado y no como testigo, constituyendo en realidad la actuación de fojas 4 una diligencia procesal encaminada a dejar constancia fehaciente del cumplimiento de una función policial dispuesta por quien tenía facultades para ello (artículos 125 y 131 del código de procedimiento).

La segunda objeción es tan insubsistente como la primera.

Después de establecer que existe un doble reconocimiento del cadáver de Angel Di Giácomo, uno efectuado por su hijo Domingo en presencia del oficial España y después ante el comisario Gallardo y el otro por los testigos que concurrieron a la diligencia de fojas 5; agrega la sentencia, que por otra parte la identificación por medio de testigos sólo es requerida cuando se trata de personas desconocidas, ocurriendo en este caso que el cadáver encontrado fué reconocido desde el primer momento por Domingo Di Giácomo como el de su padre, sin que tal reconocimiento haya sido puesto en duda. La cámara, como se ve, no da mayor ni menor valor al dicho de un testigo, sino que demostrada la existencia de un doble reconocimiento, invoca como ulterior consideración e interpretando correctamente





un precepto de la ley, que la identificación formal no era necesaria porque la persona no era *desconocida*, desde que fué *reconocida* de inmediato; y luego, pues, es indudable que no promedia la violación del artículo 253 del código de procedimiento, ni de la ley de partida que se cita, pudiendo aún añadir a lo dicho que el testimonio de fojas 40 comporta también un reconocimiento, porque Salvio Cadelago, que conocía a Ángel Di Giácomo (véase fojas 19), es el que denuncia su fallecimiento, habiéndose levantado el acta de defunción en presencia del certificado médico que indica su nombre y mediante la declaración de los testigos Remo Capredoni y Donato Di Paolo (hijo) de haber visto su cadáver. Este documento y los que mencioné anteriormente constituyen plena prueba de las enunciaciones que contienen, de conformidad a lo que disponen los artículos 108 y 80 del código de procedimiento y 26 de la ley de registro civil.

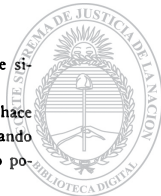
Refiriéndose a la misma cuestión primera planteada por el acuerdo, pretende el recurrente que la sentencia infringe el inciso 1.º del artículo 305 del código de procedimiento, porque hace valer contra el procesado la prueba de presunciones cuando el cuerpo del delito no consta por pruebas directas; pero, como las consideraciones que preceden, demuestran la inexactitud del aserto, creo excusado ocuparme de una observación que, por tal circunstancia, viene a quedar absolutamente desvirtuada.

---

Al resolver la segunda cuestión, y por mayoría de votos, la sentencia declara que Vicente Dalia es el autor de la muerte de Ángel Di Giácomo; decisión que su defensor impugna sosteniendo que para llegar a ella se violan las siguientes leyes de la prueba:

Las del inciso 7.º del artículo 305 del código de procedimiento, porque se da por comprobado que Dalia y Di Giácomo salieron juntos de la casa del primero en dirección a la tapera a las 12 m. del día 12 de julio de 1903, regresando Dalia a la entrada del sol, solo y sin que nadie volviera a ver a Di Giácomo, cuando tales hechos sólo constan por las declaraciones de Anselma Cejas y Vicente Vichicondo, que son inaceptables por contradictorias y cuando por ser Vichi-





condo un muchacho de 14 años de edad, su declaración no vale si- quiera como simple indicio.

La de los artículos 162 y 607 del mismo código, porque se hace valer el martillo como pieza de convicción contra el acusado, cuando la diligencia de secuestro no está firmada por la persona en cuyo po- der se encontró o, en su defecto, por dos testigos.

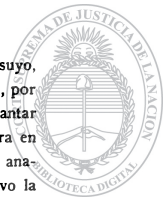
La de los incisos 5.° y 7.° del citado artículo 305, porque se saca una presunción de lo que manifestó Dalia a varias personas al día siguiente de la desaparición de Di Giácomo, de que él sabía dón- de estaba, cuando esa manifestación consta únicamente por el dicho de José Ventre.

La del artículo 253 e inciso 7.° del 305, porque se establece que Dalia era deudor de Di Giácomo y carecía de recursos para pagarle, apoyándose tal declaración en los testimonios de la esposa de Di Giá- como y de José Ventre, testigos inhábiles y que no concuerdan en lu- gar y tiempo.

La del artículo 13 del código de procedimiento, porque, resultan- do de la votación de la cámara que ha habido duda, desde que se ha producido disidencia, ella debió resolverse a favor y no en contra del procesado.

Ahora bien; el hecho de haber salido juntos Dalia y Di Giáco- mo de casa del primero en dirección a la tapera, el día y a la hora que se indican, consta del proceso por la declaración de la mujer An- selma Cejas y del menor Vicente Vichicondo, de 14 años de edad, y el otro hecho de que Dalia regresó solo y a la entrada del sol por el dicho del mismo menor Vichicondo y el de la mujer Rosa Marino. Los testigos no se contradicen, pero la declaración de Vichicondo no puede computarse, porque lo prohíbe el artículo 223 del código de procedimiento, resultando entonces que las de Anselma Cejas y Rosa Marino constituyen meras *presunciones* de los hechos que, re- spectivamente, afirman; y como de estos hechos saca la sentencia una *presunción* de culpabilidad en contra del reo, es evidente que infrin- ge el inciso 7.° del artículo 305.

Pienso que es también atendible la observación relativa a la di- ligencia de secuestro, que sin duda alguna no se ajusta a lo que ex- presa e imperativamente exigen los artículos 158 y 162; y aunque



es verdad que Dalia, a fojas 50, reconoció el martillo como suyo, este reconocimiento no cubre la invalidez de la diligencia, que, por otra parte, es también ineficaz, porque habiéndose omitido levantar acta descriptiva de su estado, no es posible asegurar que existiera en el martillo, cuando se efectuó el secuestro, la mancha que después analizó la dirección de salubridad, siendo de notar por lo significativo la información que suministra a fojas 39 el médico de polica, de que aquél no contenía mancha alguna que se pareciera a sangre. Estos antecedentes, la poca firmeza del informe pericial que enuncia probabilidades y no una certidumbre de que la encontrada fuera sangre humana y la circunstancia de no constar que el martillo se adaptara a la lesión que ocasionó la muerte a Di Giácomo, quitan, a mi juicio, en absoluto todo valor probatorio a este elemento de convicción que toma en cuenta la mayoría de la cámara.

Las otras observaciones las considera infundadas.

Es cierto que la sentencia establece, tomando como base de declaración de José Ventre, que al día siguiente de la desaparición de Di Giácomo, el procesado manifestó conocer su paradero, asegurando que se había ausentado de la localidad; pero el hecho de haberse referido a la ausencia, que es el esencial, consta no sólo por la declaración de José Ventre, sino también por la de Concepción Lucci y Salvio Cadelago.

No es tampoco exacto que la circunstancia de ser Dalia deudor de la víctima repose únicamente en los testimonios de José Ventre y de Concepción Lucci, ni que la sentencia funde una presunción contraria al reo, tomando como punto de apoyo esta circunstancia y la de carecer Dalia de recursos para pagar la deuda. Fuera de Concepción Lucci, declaran que Dalia era deudor de Di Giácomo los testigos Mateo Pedoto, Cesáreo Gómez, Rosario Brilla, Salvio Cadelago, Francisco J. Oliden, Pedro Chiancha, y Luis Chiancha, y el hecho lo confiesa el mismo procesado, aunque pretendiendo que le pagó la deuda el día 11 de julio; descargo del que es forzoso prescindir porque no aparece justificado, máxime cuando en el cadáver no se encontró suma alguna. Esto establece la sentencia, y agrega que, por otra parte, llama la atención que, después de haber desaparecido Di Giácomo, Dalia gastase más de lo regular en personas de sus condi-



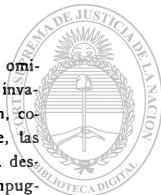
ciones y mostrase hasta tres billetes de cien pesos sin justificar la procedencia del dinero, que no podía ser el que recibió de Ronglione, porque éste no alcanzaba a cubrir el crédito de Di Giacomo. De todos estos hechos indudablemente comprobados y no de los que menciona el recurrente, deduce la mayoría del tribunal que dicho dinero debió pertenecer a la víctima que, según consta de autos, llevaba cierta cantidad envuelta en unos papeles.

No hay, pues, tal infracción del artículo 253 ni de los incisos 5.º y 7.º del artículo 305 del código de procedimiento, y ocurre lo propio respecto de las que se alega por haber dictado la cámara pronunciamiento en contra del reo, cuando la disidencia que se produjo en la votación acusa una duda que debió resolverse a su favor; porque el artículo 13 del código de procedimiento no está incluido entre las leyes de la prueba y porque, aunque lo estuviera, jamás podría atribuirse semejante alcance a la disidencia producida, que tanto valdría como reconocer, contra toda razón de lógica y hasta de buen sentido, que el voto de la minoría debe primar sobre el de la mayoría. La mayoría del tribunal, en este caso, no muestra criterio vacilante, sino seguro; no trepida en declarar la culpabilidad del reo, sino que la declara sin vacilaciones y luego entonces no hay duda que resolver ni artículo 13 que aplicar.

Además de las infracciones que acabo de analizar, sostiene el recurrente que la sentencia interpreta erróneamente el inciso 1.º del artículo 240, el artículo 241, el inciso 4.º del artículo 254 y el artículo 427 del código de procedimiento.

Su razonamiento es el siguiente: La cámara da por probado que Vicente Dalia llegaba con frecuencia hasta la tapera tratando de guardar precauciones, hecho inverosímil y respecto del cual no existe prueba legal porque no valen las declaraciones de los testigos que lo afirman; no valen, dice, porque no sabían firmar; y si bien aparecen firmando otras personas a su ruego, no figuran sus nombres en el cuerpo de las diligencias, y porque, habiendo sido observadas las declaraciones, debieron ser ratificadas en el plenario.

En contra de lo que afirma el recurrente, puede asegurarse que las declaraciones revisten las formas legales, porque están firmadas por otras personas después de ratificados los testigos,



que son los requisitos que señala el artículo 241, sin que la omisión de sus nombres en el cuerpo de las diligencias pueda invalidarlos, porque dicho artículo no ordena que se mencionen, como sería necesario para que fuesen nulas. Por otra parte, las frecuentes visitas que hacía Dalia a la tapera después de la desaparición de Di Giácomo, constan por las declaraciones impugnadas y también por las no impugnadas de los testigos José Ventre y Jerónimo Montes, suficientes éstas últimas para darlas por justificadas, y esas visitas, lejos de ser inverosímiles son tan reales y positivas que motivaron el inmediato descubrimiento del crimen a raíz de la denuncia. (Ver fojas 4.)

Finalmente, las observaciones que hacen necesaria la ratificación de las declaraciones, son las que afectan su contenido y no su forma, según el concepto claro del artículo 427 del código de procedimiento, y de todos modos, las que formula el recurrente no pueden ser traídas hasta V. E., porque no es permitido alegar infracciones de las leyes de la prueba por vicios de procedimiento, que debieron ser reclamados en la misma instancia en que se produjeron (página 126, tomo VI, serie 4, acuerdos y sentencias).

---

En síntesis: de la exposición que precede se desprende que son pertinentes dos de las numerosas alegaciones que comprenden el recurso deducido y que habrá de prescindir de los hechos que con ellas se relacionen, porque la sentencia ha violado a su respecto las leyes que rigen la prueba. Esto no obligará, empero, a modificar el pronunciamiento, porque resultan del proceso otros muchos hechos debidamente comprobados y surgen presunciones bastantes en cantidad y calidad para constituir plena prueba en contra del reo; la mayoría del tribunal los enumera con prolijidad y los aprecia con acierto, y aunque pudieran objetarse ciertos detalles, aunque no todos los indicios fueran igualmente directos y precisos, es innegable que la fuerza del conjunto impone el convencimiento de que Vicente Dalia y no otro, es



el autor del crimen que se le imputa. Este criterio, que sin dejar de ser estricto, permite, sin embargo, adaptarse a las modalidades propias de cada caso, es el científico y práctico, porque la ley debe aplicarse siempre con el espíritu de sana justicia, que inspira y vivifica sus disposiciones, dándoles nervio y eficacia, manejada de otra manera, encerrada en el molde estrecho de un formulismo rígido, serviría de amparo al delincuente, se convertiría en un organismo inerte, en un instrumento inadecuado para la defensa social, que es en definitiva la razón que justifica el principio dominante a que obedece todo sistema de represión penal, cualquiera que sea la escuela a que pertenezca.

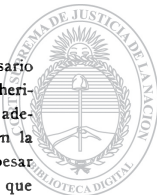
---

Pero así como conceptúo bien fundadas las declaraciones de la sentencia, en cuanto a la existencia del cuerpo del delito y a la culpabilidad del procesado, me parecen inadmisibles las que recaen sobre las circunstancias agravantes de premeditación y alevosía y de conformidad con el recurrente considero violado el artículo 305 del código de procedimiento.

La cámara declara probada la alevosía, porque en el informe médico de fojas 37 se hace constar que la lesión se produjo estando el malhechor atrás de la víctima, lo que coincide con la naturaleza y situación de la herida de Di Giácomo y demuestra que el procesado procedió a traición, tomándolo desprevenido, resultando, además, que lo llevó con engaños a un paraje solitario, para proceder a mansalva.

Pues bien, todo esto descansa sobre el terreno movedizo de las suposiciones.

«Los asertos de un dictamen pericial acerca de hechos que son ajenos a la ciencia médica, como ser las circunstancias que acompañan la perpetración del crimen no tienen eficacia legal», según lo ha declarado V. E., y luego entonces el hecho de que el victimario estuviera atrás de la víctima no aparece acreditado en forma, máxime cuando las conclusiones del informe y la situación de la herida no excluyen la posibilidad de una lucha y de



una caída o resbalón, de Di Giácomo, que dieran a su adversario una superioridad momentánea que le permitiese inferir la herida, pudiendo tanto haberse producido ésta de atrás para adelante, como de arriba para abajo, lo que explicaría también la circunstancia de que Dalia saliera ileso de la contienda, a pesar de sus condiciones físicas, como dice la sentencia, por más que del proceso no resulte que fueran inferiores a las de Di Giácomo. Tampoco se puede establecer con base seria, que el procesado lo llevó con engaños a un paraje solitario para proceder a mansalva, porque nada autoriza semejante suposición; en primer lugar, no consta legalmente que salieran juntos en dirección a la tapera, porque tal hecho sólo lo afirma un testigo válido, luego después este testigo y el otro que ha sido tachado, con razón, los han visto ir caminando a la par, pero no han oído ni declaran que Dalia empleara maquinaciones o subterfugios para que Di Giácomo lo siguiese, cabiendo aún dentro de las hipótesis de que hubiera habido invitación de parte de aquél, que ella fuese sincera y obedeciese, por ejemplo, al móvil de conseguir su ayuda para extirpar cicuta y arrancar sauces, cuyo propósito había manifestado Dalia a algunos testigos, y, por último, el paraje donde se cometió el crimen no puede calificarse de solitario, porque la proximidad de sus viviendas fué la que permitió a los vecinos ver con frecuencia a Dalia alrededor de la tapera, después de la desaparición de Di Giácomo, lo que revela conjuntamente con la fotografía de fojas 42, que era visible a todos los vientos. En una palabra, no se encuentra justificado ningún antecedente inductivo de traición o engaño, que autorice el pronunciamiento a que arriba la sentencia en una cuestión tan grave y de tanta trascendencia para la graduación de la pena.

Sucede lo mismo con lo relativo a la premeditación. La cámara deduce que el crimen debió ser resuelto de antemano, porque así lo indican el lugar y la forma en que se consumó, pero estas deducciones no son lógicas. El lugar nada induce por sí mismo, y la forma — por falta de testigos presenciales y la confesión del procesado — ha quedado envuelta en el misterio.



Entre tanto V. E. ha declarado respecto de la premeditación: «que para dar por establecida esta circunstancia agravante, así como cualquier circunstancia que implique mayor responsabilidad del procesado, la prueba debe ser completa, concluyente, de modo que los hechos de los cuales deban inducirse las presunciones, han de estar revestidos de tales caracteres, que no dejen en el ánimo la menor duda que entre la determinación y la acción el agente persistió en la realización del acto, al fin ejecutado». Ahora bien, de autos no aparece un indicio, uno solo siquiera, que fundadamente permita presumir que el acto criminoso fué la resultante de una determinación deliberada y persistente. La víctima y el victimario fueron juntos o se encontraron en la tapera, originándose allí una de tantas discusiones producidas entre ambos, según dichos de testigos, con motivo del crédito del primero, los ánimos se exaltaron, sobrevinieron los insultos y brotó recién entonces la idea del crimen en la mente del procesado, fecundada por el propio calor de la disputa. Esta suposición vale tanto como la que admite la sentencia y el hecho de ser ambas verosímiles y posibles dentro de los elementos del juicio que el proceso suministra, indica bien claramente que el tribunal no ha podido pronunciarse en el sentido de la mayor culpabilidad del reo, porque en todo caso, estaría éste amparado por el principio del artículo 13 del código de procedimiento, que manda estar a lo que sea más favorable.

---

Fundado en las consideraciones expuestas, opino, pues, en definitiva, que deben mantenerse las declaraciones de la sentencia relativas a la existencia del cuerpo del delito y a la persona del delincuente, pero no las que establecen la circunstancia calificativa de la alevosía y la agravante de premeditación.

Opino también, como consecuencia de tales premisas, que la sentencia aplica erróneamente el inciso 2, artículo 95 del código penal e inciso 1, artículo 17 de la ley 4189, correspondiendo



aplicar el inciso 2, artículo 96 del código penal, durante cuya vigencia se perpetró el crimen.

Sírvase V. E. así resolverlo e imponer al procesado Vicente Dalia la pena de ocho años de presidio, con sus accesorias legales.

JULIO N. ROJAS.

La Plata, etc.

#### ACUERDO

En la ciudad de La Plata, reunida la suprema corte de justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa seguida contra Vicente Dalia por homicidio, se procedió a practicar la insaculación prescripta por el artículo 173 de la constitución, resultando de ella que en la votación debía observarse el orden siguiente: doctores Varela, Alsina, Acevedo.

#### ANTECEDENTES

Procesado Vicente Dalia por el delito de homicidio, fué condenado por uno de los jueces del crimen del departamento del centro, a sufrir la pena de veinticinco años de presidio, con sus accesorias legales y reposición de fojas del proceso.

Recurrida esta sentencia, fué confirmada por la cámara respectiva, contra cuyo fallo se ha deducido el recurso de inaplicabilidad de la ley.

Oído el señor procurador general, llamados autos y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, la suprema corte resolvió plantear y votar la siguiente



## CUESTIÓN

¿Existe en la sentencia recurrida la inaplicabilidad de ley alegada?



## VOTACIÓN

El doctor Varela dijo:

Se motiva el recurso diciendo: que la sentencia de la cámara ha infringido las leyes de la prueba, las que han sido aplicadas erróneamente a los hechos al dar por comprobado el cuerpo del delito y por acreditado que Vicente Dalia es el autor del homicidio de Angel Di Giácomo, con la circunstancia calificativa de alevosía y la agravante de premeditación.

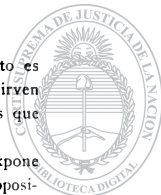
El defensor ha hecho un estudio prolijo y demostrativo del modo y forma como entiende han sido violadas las leyes de la prueba, y por mi parte excuso reproducir todos y cada uno de los párrafos de su escrito de fojas 184, bastando, a mi propósito, su enunciación.

Por punto general la corte, cuya misión se reduce a decidir si la ley ha sido bien o mal aplicada, no tiene rol respecto de los hechos, éstos se aceptan como bien juzgados, pues la corte sólo conoce de la aplicación de la ley en que los tribunales de justicia en última instancia fundan su sentencia (inciso 6, artículo 157).

Pero este principio general y dominante puede y debe sufrir excepción el algún caso, tal es, cuando las leyes de la prueba hubieran sido violadas; en este caso la ley habría sido mal aplicada, nada importa que la ley violada pertenezca a la materia de la prueba, pues tanto puede haber inaplicabilidad en esa materia como en la de puro derecho.

Es con este criterio que voy a examinar y juzgar el recurso interpuesto.

La primera cuestión que formula la defensa es la relativa a la comprobación del cuerpo del delito.



Pienso que la sentencia de la cámara sobre este punto es ajustada a las constancias del proceso, a los hechos que sirven para la determinación del cuerpo del delito, y a las leyes que informan el criterio legal.

El voto del camarista que lo hace en primer término expone circunstanciadamente los hechos demostrativos de esa proposición y las leyes que lo declaran comprobados.

Nada tendría que agregar al respecto, tanto más si se tiene presente lo informado por el señor procurador general sobre este mismo punto; quiero, sin embargo, observar que según nuestras leyes esos elementos son suficiente para dejar comprobado el cuerpo del delito.

En efecto: los artículos 166 y 167 del código de procedimiento en lo criminal sólo legislan para los casos en que la persona fuere desconocida, o la en que no haya testigos de reconocimiento, lo que no sucede en el caso sub-judice, desde que la persona era conocida y además el cadáver ha sido reconocido por su hijo, lo que hace innecesario se practicaran las otras medidas a que se refiere la ley.

Las observaciones que al respecto hace el defensor no son procedentes, por no ser violatorias de las leyes que rigen la prueba.

El segundo motivo, referente a que se han violado las leyes de la prueba al establecer que Vicente Dalia es el autor del homicidio, por mi parte, lo encuentro justificado.

En este sentido el voto del doctor Vila es decisivo en mi opinión. El estudio que en él se hace de todas las constancias del proceso, la separación de los indicios, su comparación, su calificación, su fuerza de convicción y su carencia de valor probatorio legal han sido establecidos de una manera acabada y concluyente, en el sentido de dejar demostrado que no ha sido probada la culpabilidad del sindicado.

Reproduzco en toda su extensión ese voto, y sólo agregaré que las presunciones o los indicios que se derivan de este proceso no revisten los caracteres que constituyen prueba, es decir,

que excluyan la facilidad del error, y si no existe prueba, no hay delincuencia determinada.

Podrá decirse, sin embargo, que de la causa resultan algunos indicios que ponen en duda la inocencia del sindicado, pero esto no bastaría para someter a éste a un castigo; se oponen a ello el artículo 13 del código de procedimientos en lo criminal y la ley 12, título 14, partida 3.<sup>a</sup>

Por lo demás, las presunciones no son graves, precisas y concordantes, ni dejan en el ánimo judicial el convencimiento profundo de que el delito no puede haber sido cometido por otro que Dalia, cualidades todas requeridas en esta especie de prueba por la ley, la doctrina y la jurisprudencia (artículo 304 e incisos 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 305 del código de procedimiento en lo criminal).

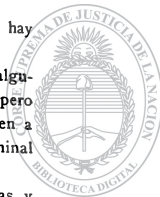
El procesado no está confeso de su delito, y la prueba derivada de la declaración de los testigos Anselma Cejas y Vicente Vichicondo, según puede verse a fojas 12 y fojas 13 es contradictoria, con la circunstancia de que este último testigo puede serlo al solo objeto de la indagación sumaria (artículo 223, inciso 1, código citado), y como elemento de fuerza plena probatoria su declaración debe ser desechada, juzgándola con arreglo a las reglas de la sana crítica.

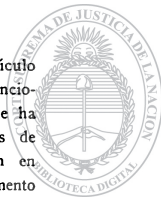
No existe en este proceso la prueba de dos testigos que, reuniendo todas las exigencias de la ley, establezca la pena a que se refiere el artículo 253.

Por ello y concordantes del escrito de fojas 184, relacionados con esta cuestión, soy de opinión que existe la inaplicabilidad de las leyes de prueba a que me refiero y que, en consecuencia, debe mandarse poner en libertad al procesado.

El doctor Alsina dijo:

El recurrente alega que la cámara ha violado las leyes de la prueba que invoca, artículos 234, 245, 253, 255, 166 y 607 del código de procedimiento anterior, en lo criminal, y la ley 32, título 16, partida 3.<sup>a</sup>, al declarar probada la muerte de Angel Di Giacomio, y para ello se funda en que al testigo España no se le





hicieron las preguntas generales determinadas por el artículo 243 citado; la observación carece de eficacia, porque el mencionado España no ha sido examinado como testigo, sino que ha declarado como agente a quien se encomendaron diligencias de investigación, dando cuenta de su cometido; su exposición en ese carácter es la que la cámara ha aceptado como elemento de prueba de la identificación del cadáver de la víctima en esta causa, al expresar bajo la fe del juramento que una vez removida la tierra a que se refiere, encontró el cadáver de una persona desconocida, la que en ese acto fué reconocida por don Domingo Di Giácomo, como padre del mismo y llamado Angel Di Giácomo. Alega, además, el recurrente que la diligencia de exhumación carece de valor a los efectos de la identificación, porque la diligencia no fué leída a las personas que la subscriben, y al admitirla la cámara ha violado las leyes de la prueba, pero las únicas que al respecto invoca son los artículos 166 y 253 del código de procedimiento, y la ley 32, título 16, partida 3.º.

El artículo 166 no es aplicable al caso, porque él se refiere a la identificación de personas *desconocidas*, no únicamente para el juez de instrucción, como sostiene el recurrente, sino para cualesquiera otras personas que vean el cadáver, hasta tanto se presenten las que pueden dar razón suficiente de su conocimiento.

El número de estas personas no lo determina la ley. ni establece las formas para su testimonio, pudiendo, por consiguiente, ser una sola, que dé razón suficiente de su conocimiento, y con mayor motivo cuando ésta sea persona de la familia, como en el caso de autos, un hijo del muerto.

No es aplicable tampoco el artículo 253 del código de procedimiento, que se refiere a los testimonios que deban hacer plena prueba de hechos controvertidos en los juicios, ni la ley 32, título 16, partida 3.º, que tenía el mismo objeto, derogada hoy por las disposiciones del código de procedimiento, y que, como las demás de partida sobre la prueba, sólo pueden invocarse como elementos o principios de doctrina.

No resultando en el caso violada disposición expresa, nin-

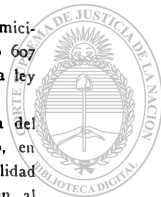
guna relativa a la identificación del cadáver en caso de homicidio, es infundada también la violación alegada del artículo 607 del código de procedimiento, que, por otra parte, no es una ley de la prueba, sino una regla general de procedimiento.

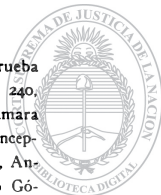
Establecida por la cámara como probada la existencia del cuerpo del delito, la muerte violenta de Ángel Di Giácomo, en cuya declaración, como se ha visto, no existe la inaplicabilidad de la ley que la defensa ha alegado, se ha declarado también, al votar la cuestión segunda del acuerdo, por prueba circunstancial de conformidad con el artículo 305 del código de procedimiento, que el autor del delito es el acusado Vicente Dalia.

El recurrente alega en primer lugar que la cámara ha violado en esta parte el citado artículo 305, porque, según el inciso 1 de éste, para admitir la prueba de presunciones contra el reo, se requiere que el cuerpo del delito se halle probado, por pruebas directas e inmediatas, y en el caso sub-judice, en el que no se trata sólo de establecer si el acusado es autor de la muerte de un hombre cualquiera, sino de Angel Di Giácomo, no habiéndose probado el deceso de éste, aquella prueba es ineficaz.

En este concepto el recurso es infundado, desde que, como se ha visto, no exista la inaplicabilidad o violación de las leyes invocadas por el recurrente, en el pronunciamiento hecho por la cámara, declarando legalmente probado el homicidio de Angel Di Giácomo.

Pero aun establecido así el cuerpo del delito, el recurrente alega la violación del citado artículo 305 del código de procedimiento, porque a su juicio, los indicios que la causa ofrece contra el procesado no reúnen los caracteres que aquella disposición exige para que las presunciones constituyan prueba legal. Consigna esta disposición, en su inciso 7.º, la regla general y fundamental de que las presunciones para tener aquél efecto, deben fundarse en hechos reales y probados y nunca en otras presunciones, y corresponde examinar entonces en primer término si los hechos de los cuales la cámara ha derivado las presunciones que admite, se hallan probados en autos: habiéndose impugnado por el recurrente elementos de esa prueba, debo apreciar pre-





viamente si esa impugnación es fundada. En cuanto a la prueba testimonial, se alega errónea aplicación de los artículos 240, inciso 1, y 241 del código de procedimiento, porque la cámara acepta como válidas las declaraciones de los testigos Concepción Lucci, Luis Vergez (no ha sido testigo), Rosa Marino, Anselma Cejas, Vicente Vichiondo, Cayetana Chiano, Cesáreo Gómez, Rosario Brilla, Lucio Chiancha y Martín Bravo, respecto de cuyos testigos, no sabiendo firmar, el juez instructor ha debido nombrarles otra persona que firmase sus declaraciones, y hacer constar ese nombramiento en el cuerpo del acto, a juicio del recurrente, para llenar el fin de la ley, que es que el firmante esté presente en el acto de la declaración. No considero que el nombramiento o designación de persona que firma a ruego deba hacerse constar en la forma que el recurrente pretende, desde que el artículo 241 invocado, no exige esa formalidad, sino que se limita a dejar a la elección del juez, atento el secreto del sumario, la elección de la persona que ha de oír la declaración y su ratificación, para firmar a su ruego (doctrina de la segunda parte de dicho artículo). Basta la firma del juez en el acto y la autorización del mismo por el secretario, para establecer que la persona que aparece firmando por el testigo lo ha hecho hallándose presente.

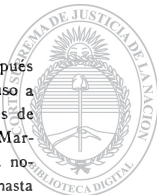
Revestidas de estas formas las declaraciones impugnadas, juzgo injustificada la errónea aplicación de la ley que a su respecto se ha alegado, del mismo modo que la de los artículos 427 y 254, inciso 4.º, del mismo código, fundada en la omisión de ratificación de los testigos, cuyas declaraciones fueron observadas por la defensa a fojas 123, pues dicha observación no se dirigió al fondo de dichas declaraciones, que requiriesen aclaración o ampliación, sino a su forma, como no ajustadas a lo dispuesto por el artículo 241 del código citado, y cuya observación el juez puede juzgar impertinente.

Se alega también errónea aplicación del inciso 3.º del artículo 289 del código mencionado, en cuanto se da valor probatorio al informe de fojas 76 vuelta, porque sus condiciones no son conformes a los principios de la ciencia; pero el recurrente no de-



muestra tal disconformidad, limitándose a citar opiniones acerca de la dificultad de informar sobre el origen de las manchas de sangre, lo que no despoja al informe citado de los fundamentos científicos en que se apoya con prescindencia de la medición del diámetro de los glóbulos sanguíneos disecados, para la conclusión a que arriba de que las manchas examinadas son con toda probabilidad de sangre humana.

Pasando al examen de los hechos, los que la cámara considera probados en autos, como otras tantas presunciones, son los siguientes: *a)*. Que Di Giácomo tenía un crédito contra el acusado; este hecho ha sido reconocido por Dalia, y debe tenerse por probado; *b)*. Que la relación de ambos no era cordial, a causa de que no obstante las reiteradas exigencias de pago de Di Giácomo, no había podido obtenerlo; el cobro reiterado resulta confirmado por la madre de Dalia, fojas 18, la esposa de Di Giácomo a fojas 6 y los testigos Lucio y Pedro Chiancha a fojas 24 vuelta y 25 vuelta, expresando sólo este último que por tal motivo Di Giácomo le había manifestado que estaba disgustado con Dalia; Lucio Chiancha, que supone que por eso estuvieran resentidos, y la viuda de Di Giácomo, que éste se hallaba muy fastidiado por la conducta de Dalia, pero no resulta prueba de que las relaciones entre éste y aquél no fueran cordiales, aun cuando las circunstancias enunciadas puedan hacerlo presumir; *c)*. Que Di Giácomo fué el día 12 de julio muy temprano a casa de Dalia, sin saberse más de él; hasta un mes después, que apareció su cadáver; este hecho resulta reconocido por el mismo Dalia, confirmando el dicho de la viuda de aquél en cuanto a que su marido fué a casa de Dalia ese día, aunque según ésta salió de su casa como a la salida del sol, y según Dalia fué allí como a las ocho de la mañana, declarando la madre de éste, fojas 18, que fué antes de salir el sol, pero no resulta que fuese a cobrar a Dalia, según lo dice la única testigo, en esto la viuda, a fojas 6; *d)*. Que Di Giácomo permaneció en casa de Dalia hasta próximamente las 12 del día; esto no consta, como por error lo afirma la cámara, pues al respecto hay completa discordancia; Dalia dice, fojas 26 vuelta, que se retiró a las diez y media;



la madre de éste, fojas 18, que almorzó con ellos, fueron después al rastrojo a curar un trigo, y de regreso la declarante se puso a hacer la comida, y hecha ésta, comieron, retirándose después de esto Di, Giácomo y Dalia (por la tarde, por consiguiente). Martín Bravo, a fojas 35, que Di Giácomo estuvo el día 11 a la noche, en casa de Dalia, de donde salió después de las nueve, hora hasta la cual el declarante le cebó mate, no volviendo a ver a Di Giácomo, no obstante haberse hallado, según declara, el día 12, en casa de Dalia hasta las nueve de la mañana, hora en que dice regresó éste solo; e). Que Dalia y Di Giácomo salieron juntos de casa del primero, a eso de mediodía, y tomaron en dirección a la tapera, donde se encontró el cadáver del segundo. Estos hechos no resultan probados; ya se ha visto que no consta que Di Giácomo permaneciera en casa de Dalia hasta el mediodía del 12 de julio, y menos que salieran juntos éste y Di Giácomo antes de esa hora, pues la única testigo que menciona esta salida juntos, es la madre de Dalia, y esta misma expresa que el hecho ocurrió después de almorzar y ocuparse de la cura de un trigo, después de ocuparse ella de hacer la comida, y después de comer. Tampoco se ha probado que a ninguna hora se les viera juntos dirigirse a la tapera mencionada, porque sobre esto sólo declara un testigo hábil, Anselma Cejas, a fojas 12, diciendo que los vió a las doce del día más o menos, y el otro testigo que al respecto ha declarado, Vichiondo, a fojas 13, es inhábil, como menor de 14 años de edad (artículo 223, inciso 1 del código de procedimiento en lo criminal), y aun la misma única testigo inhabilita su testimonio, por haber incurrido en contradicción, ante las reglas de la sana crítica, pues dicha testigo Cejas, que ha declarado que vió a Dalia y Di Giácomo dirigirse a la tapera a las doce del día, más o menos (fojas 12), en la misma declaración dice que hallándose en casa de Venta ese día, por la mañana (antes de las doce), dijo en conversación a la viuda de Di Giácomo, como, un hecho pasado, anterior, por consiguiente, a la hora de la mañana en que hablaba, que esa mañana había visto a su marido en compañía de Dalia, en dirección a la tapera; f). Que la afirmación hecha por Dalia de no haber salido de su casa el día 12 de julio,





hasta la noche, se halla contradicha por la propia madre; así parece de la declaración de ésta, fojas 18, aunque dice que la salida fué después de comer, y de las declaraciones de Rosa Marino, fojas 9 vuelta, y José Venta, fojas 10, quienes declaran que Dalia pasó por su casa al entrarse el sol y habló con la primera, pero como no consta a qué hora acabaron de comer Di Giácomo y Dalia, no puede considerarse desvirtuada la declaración de éste, porque al decir que no salió hasta la noche ha podido referirse a la terminación del día, al entrarse el sol, y hacia esa hora haber concluido de comer y salir; g). Que al día siguiente de la desaparición de Di Giácomo, Dalia se manifiesta conocedor del paradero de aquél, diciendo a Venta, que se había ausentado por el tren nocturno del 12; también manifestó a Cadelago, foja 19, que aquél se había retirado de su casa ese día de las diez y media a once de la mañana, para tomar el tren y trasladarse al domicilio de su hijo Domingo, por lo que debe admitirse el hecho de esa manifestación de ausencia del que apareció muerto; h). Que, a partir del día 12 de julio adelante, varios vecinos vieron a Dalia llegar con frecuencia hasta la tapera, donde se encontró el cadáver, penetrar y salir de ella, tratando de guardar precauciones para no ser visto, mientras que antes nunca lo habían visto aproximarse a ese paraje. Así lo declaran, aunque no uniformemente, Fortunato Montes, a fojas 7 vuelta, diciendo que había notado siete a ocho días antes de su declaración, que Dalia solía llegar con frecuencia a caballo, se desmontaba y entraba, saliendo en seguida. Rosa Marino, fojas 9, que llegaba con frecuencia a la tapera, penetrando y saliendo; y notó que al salir algunas veces miraba a todos lados. Venta, a fojas 10, que después del 12 de julio, notó que casi todos los días iba a la tapera Dalia, algunas veces dos por día, permaneciendo allí algunas veces más de una hora; que a veces iba a caballo.

Jerónimo Montes, dice a fojas 16, que lo ha visto ir allí solo y montado, de donde salía al poco rato.

Gregorio Montes, a fojas 8, que Dalia iba todas las mañanas a caballo, que al llegar daba vuelta la tapera y salía en seguida.

Anselma Cejas, fojas 12, lo ha visto a diferentes horas del día.

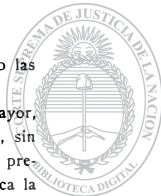


Casiano Montes, fojas 16 vuelta, notó unos 15 días los frecuentes viajes de Dalia a caballo y sus precauciones para no ser visto al entrar y salir; *i*). Que, según los testigos Venta, a fojas 10, y Pedoto, a fojas 14, Dalia les manifestó el día 13 de julio, que había saldado sus cuentas con Di Giácomo, a quien había pagado 307 pesos, hecho que el mismo Dalia declara haber realizado el día 11 por la mañana, sin haber presentado, sin embargo, recibo ni justificativo de dicho pago; *j*). Que después de la desaparición de Di Giácomo, Dalia gastó más de lo regular en personas de su condición, haciendo ostentación de poseer bastante dinero, como lo prueba la exhibición de tres billetes de 100 pesos, reconocida por él, sin haber explicado la procedencia de dicho dinero, dado que los 174 pesos recibidos de Revigione el 5 de julio no alcanzaban ni para cubrir el crédito de Di Giácomo; *l*). Que el arma empleada para herir a la víctima fué un instrumento contundente, según el informe de fojas 37, y al procesado le fué secuestrado un martillo que tenía escondido debajo del colchón de su cama, el que, según el informe de fojas 76 vuelta, conservaba manchas que, del examen practicado, resultaron ser con toda probabilidad de sangre humana.

De los hechos enumerados la cámara ha derivado las presunciones en que ha fundado su fallo condenatorio; pero de ellos, según lo que he expuesto a su respecto, y la debida apreciación de las constancias en que se apoyan, sólo pueden tenerse por legalmente probados, a mi juicio, los comprendidos en los puntos (*a*), sobre relación de crédito y deuda entre la víctima y el procesado; (*c*), que Di Giácomo fué a casa de Dalia el día 12 de julio muy temprano, sin saberse más de él; (*g*), que Dalia manifestó a dos testigos, que Di Giácomo se había ausentado; (*i*), que Dalia ha manifestado a testigos y declarado en la causa que el 11 de julio había cancelado sus cuentas con Di Giácomo, abonándole 307 pesos por ese concepto; (*j*), que el procesado hizo gastos y se le vió cantidad de dinero, sin explicar en un todo su procedencia; y (*l*), que se secuestró de casa de Dalia un martillo, que ha resultado manchado con sangre, con toda probabilidad, humana.



De los hechos mencionados, la existencia de crédito de la víctima contra el reo, carece de relación directa con el delito (incisos 3 y 5, del artículo 305 del código de procedimiento); y lo mismo ocurre con el hecho de haber ido la víctima a casa del procesado en la madrugada del día, desde el cual no se supo más de ella, una vez que el cadáver no fué hallado en su casa, sino en una tapera abandonada a cuatro cuadras de su habitación, donde el cadáver pudo ser llevado por un tercero, y dádose muerte a la víctima en otra parte. La manifestación de haberse ausentado Di Giácomo, hecha por Dalia al día siguiente del que resulta que aquél fué muerto, tampoco tiene relación directa con la criminalidad atribuida al procesado, dado el antecedente de haberle pagado a Di Giácomo su deuda, poniéndole en condiciones de llenar sus deseos de ir a reunirse con su hijo Domingo en Trenque Lauquen, según éste declara a fojas 3, y lo confirma el testigo Cadelago a fojas 18 vuelta, diciendo que «Di Gicomo debía trasladarse al lado de su hijo, y no lo podía hacer, por no haber podido cobrar a Dalia.» Es verosímil entonces que, dada la realización del pago, Di Giácomo resolviera su viaje, y comunicara a Dalia su resolución, pudiendo éste creerle ausente, y fundarse en esto la manifestación hecha a los testigos. Aparece de gravedad como presunción, el hecho de la presencia reiterada de Dalia, en la tapera donde se halló el cadáver de Di Giácomo, después del día de su desaparición, según varios testigos, pero, como lo observa la minoría de la cámara, los testimonios que establecen aquel hecho no satisfacen ante las reglas de la sana crítica, pues mientras algunos de los testigos han observado la ida de Dalia allí, todos los días, entrando y saliendo a la tapera en seguida, otros dicen que lo hacía después de un rato, y otros que iba casi todos los días, y a veces dos por día, permaneciendo dentro aún más de una hora; también se declara por otro, que Dalia daba vuelta a la tapera, y salía, haciendo esto todas las mañanas, yendo, según todos los testigos menos uno, siempre a caballo, y no obstante esto, se dice haber notado que tomaba precauciones para no ser visto, oponiéndose a esto, precisamente la circunstancia de ir tan frecuentemente.



de día y a caballo, cuando podía hacerlo a pie, y buscando las sombras.

La inverosimilitud de estas declaraciones es aún mayor, dada la falta de explicación posible de esas visitas diarias, sin objeto ostensible, y que si hubiere de atribuirsele el único presumible, de observación del estado de las cosas, no se explica la permanencia interior por ratos, y menos hasta por una hora, como se ha visto. En cuanto a la manifestación hecha por Dalia, de haber pagado su deuda a Di Giácomo, no podía considerarse como una presunción contraria al procesado, sino en el caso de ser falso el hecho, lo que no resulta justificado, y ha podido tener lugar ante las reiteradas exigencias de Di Giácomo, y el recibo de fondos por Dalia en los primeros días del mismo mes (doscientos sesenta y cuatro pesos), que, con otras sumas en su poder, pudieron habilitarle para abonar a aquél la deuda actual, que era de doscientos y tantos pesos, y adelantarle parte del arrendamiento a su pedido, según ha declarado, atento su viaje, quizá de prolongada ausencia, a Trenque Lauquen.

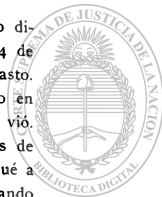
El recibo de esos fondos, por el contrario, puede presumirse como explicación del delito por un tercero, en conocimiento del hecho y de la próxima ausencia de la víctima, habiendo sido, como ha resultado, su móvil el robo, en presencia del estado del bolsillo del pantalón que vestía la víctima, vuelto por completo, y en el cual, según consta en autos, acostumbraba a guardar aquél su dinero (declaraciones de fojas 114 y 25 vuelta).

En cuanto a los gastos y dinero que se le vió a Dalia después de la desaparición de Di Giácomo, lo gastado en casa de Vega fué sólo 20 pesos en un revólver, y dos días antes dos relojes, pagados al contado, no viéndole más dinero. El testigo Gacitúa, a fojas 24, dice haberle visto varias veces en casas de negocio, donde gastaba, que le conocía por persona pobre e ignora de dónde sacaría dinero; según Oliden, a foja 23, se suscribió al diario *El Mentor*, abonando dos mensualidades, una adelantada, con un billete de 100 pesos, y pretendiendo después cambiar dos billetes más del mismo valor, Zignel, a fojas 21 vuelta, declara que el 19 de julio Dalia estuvo en su casa de negocio

haciendo algunos gastos, y al pagar notó que tenía mucho dinero en el tirador; que el domingo pasado (declara el 14 de agosto) estuvo nuevamente en su casa e hizo también gasto. Que Dalia decía tenía bastante dinero por haberlo ganado en las carreras, pero que el declarante estuvo en éstas y no lo vio.

El procesado ha reconocido los hechos de las compras de revólver y relojes, y el haber tenido en su poder cuando fué a la imprenta de *El Mentor*, tres billetes de 100 pesos, explicando la procedencia de dos de ellos, uno recibido de un hermano, y el otro en 174 pesos que le pagó a Revoglione el 5 de julio, y niega haber dicho a Zignel que había ganado dinero en las carreras.

Es evidente que, si como afirma, abonó a Di Giácomo el 11 de julio 307 pesos, y el 19 poseía sólo en billetes de 100 pesos, 300, resulta que ha tenido en el mes de julio más de 600 pesos, de los cuales sólo ha explicado la procedencia de 274. Es, sin duda, sospechosa la posesión de ese dinero, en un hombre de sus condiciones, pero no aparece que pueda relacionarse directamente con la muerte y robo a Di Giácomo, pues no consta que éste tuviera en la fecha en que aparece muerto, más que los 125 pesos a que se refieren las declaraciones de fojas 24 y 25 vuelta, y que los testigos declaran que guardó en el bolsillo derecho del pantalón, el mismo que resultó dado vuelta y vacío al descubrir el cadáver, y tanto más, en el supuesto que sea falso el pago que Dalia dice haberle hecho el día 11; por otra parte no es verosímil que en los 125 pesos que tenía Di Giácomo y contó el testigo Luis Chiancha, hubiera un billete de 100 pesos siquiera. Hay que admitir que la gran cantidad de dinero que se dice vista en poder de Dalia después del 12 de julio, no ha podido provenir del robo y muerte a Di Giácomo, y, por consiguiente, el hecho, si bien induce a sospechas sobre la legítima posesión del dinero por Dalia, carece de relación directa con el delito de que se trata. Tampoco la tiene la circunstancia probada por las declaraciones de Cayetana Chiana, a fojas 14, y Mateo Pedoto, a fojas 15, de que después de la desaparición de Di Giácomo, fué Dalia a la casa ocupada por la viuda de éste, a intimarle que la deso eupara, y a la vez a exigirle la entrega de varios objetos que





dijo haber comprado a Di Giácomo; esta circunstancia carece de relación directa, porque sin mediar el delito, dada la creencia de Dalia en la ausencia de aquél y el pago de su deuda, pendiente la cual se explicaría que no tuviese exigencias para la desocupación de su propiedad, ha podido proceder así, tanto más teniendo en cuenta las relaciones poco cordiales que existían entre Di Giácomo y su mujer, y en cuanto a los objetos reclamados, pudo retender por un abuso de confianza en sus relaciones de deudor solventado de Di Giácomo, comprender en la suma pagada el precio de aquellos objetos, como comprados, aprovechando la ausencia de aquél.

Por último, el secuestro de un martillo, al parecer manchado de sangre, de casa de Dalia, tampoco puede dar origen a una presunción legal contra éste; en primer lugar, se ha alegado por el recurrente, por razón de dicha diligencia, que la cámara ha violado los artículos 162 y 607 del código de procedimiento, al aceptarla como pieza de convicción.

El artículo 607 invocado, sanciona la nulidad de los procedimientos obrados con violación de las disposiciones expresas del código, y de la diligencia de secuestro de fojas 20 vuelta, no resultan que se hayan llenado las formas prescriptas por los artículos 158 y 162 del mismo, que tienen por objeto asegurar la identidad, estado y condiciones de los objetos secuestrados, mediante la intervención directa de la persona en cuyo poder se encuentren, quien debe firmar las diligencias.

En este concepto se halla justificada la violación del citado artículo 162, no constando en forma alguna aquella intervención y firma, ni que en el mismo acto se sellara el paquete conteniendo el martillo secuestrado, el que resulta del certificado de fojas 52, que fué remitido al juzgado sin precaución de garantía alguna: lo que invalida la diligencia, a los efectos de tenerse aquel instrumento como pieza de convicción, notándose también la contradicción resultante entre la aseveración del pesquisante, de tener dicho martillo, al parecer, manchas de sangre en el momento del secuestro, y la declaración posterior del médico de policía, a fojas 39, de no encontrar en aquel mancha alguna que parezca de sangre. Pero aun con-

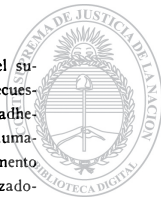
cediendo eficacia a la diligencia del secuestro, el hecho de haberse encontrado aquel martillo en casa del procesado, y suponiendo que tuviera manchas de sangre, no podría servir ese hecho de presunción contra Dalia, como autor de la muerte de Di Giácomo, aun reconocido como suyo como lo ha sido, desde que esta presunción no se fundaría en el hecho probado de que con este instrumento se lesionó a la víctima, sino en la presunción de que así haya sido.

Y esta misma presunción pierde su fuerza, en presencia del informe médico de fojas 38 y sus láminas descriptivas, en el que se manifiesta hendido el cráneo en toda su extensión en forma regular, hasta el punto de fractura en pequeñas piezas de los extremos de los huesos parietal, temporal y occipital, por razón de la ley de las bóvedas, esta fractura, según dicho informe, y en presencia de las dimensiones del martillo descripto en el informe de fojas 76 vuelta, que da a la base de la cabeza del mismo, un cuadrilongo de 28 centímetros por 23 milímetros de sus lados, o sea una parte superficie de seis centímetros y 44 milímetros cuadrados, que da un diámetro aproximado de dos centímetros y medio. No es verosímil que un golpe único asestado con una pieza de hierro de esa superficie, con la fuerza necesaria para producir la fractura constatada, haya producido la hendidura uniforme del parietal, sin haber triturado el cuero cabelludo en el punto del choque, y causado una fractura local y más profunda en el parietal, proporcionada a la cara del martillo aplicable sobre él.

Esa hendidura regular y uniforme descripta por el informe citado, es más verosímil que sea el resultado de un recio golpe con un cuerpo duro más o menos plano como una pala o un grueso madero, por ejemplo, que explicaría también la gran fuerza con que su empuje de atrás adelante arrojó a la víctima de bruces sobre el pavimento, produciendo la equimosis observada en el hueso frontal, que el mismo informe citado constató.

La sola presunción, y así desvirtuada, de que con el martillo mencionado se haya lesionado a la víctima, y la presunción que importa la *probabilidad* de que la sangre hallada por el análisis en *aquél*, sea sangre humana, según el informe de fojas 76 vuelta, no pueden fundar una presunción contra el acusado, en las condiciones del in-





ciso 7, del artículo 305 del código de procedimiento, aun en el supuesto de que pueda admitirse la validez de la diligencia de secuestro de aquel instrumento, al que no era verosímil que pudieran adherirse por cualquier circunstancia, algunas partículas de sangre humana de las diversas manos por las que ha pasado hasta el momento de ser empaquetado y lacrado para remitirlo a la oficina analizada, desde el 14 de agosto, fojas 20 vuelta, hasta el 24 del mismo, fojas 75, y dada la remisión intermedia de fojas 39.

Del análisis hecho de los diversos indicios tomados en cuenta por la cámara, en relación con la prueba de los hechos que le sirven de base, aun cuando alguno revistiere alguna gravedad por su relación en el delito, como es el relativo a las visitas atribuidas al procesado a la tapera donde se halló el cadáver de la víctima, sería insuficiente por sí sola esta presunción para constituir prueba del hecho principal inquirido, o sea la acción directa de aquél en la muerte de Di Giácomo, requiriéndose por el inciso 2.º del artículo 305 del código de procedimiento en lo criminal, que la prueba circunstancial se constituya por varias presunciones, y que éstas revistan las condiciones que la misma disposición determina.

Consideradas en su conjunto y apreciadas como quedan las presunciones o indicios que de la causa aparecen, soy de opinión que no reúnen los requisitos que el citado artículo 305 exige, para tenerlas como prueba legal, y que en consecuencia la cámara, al atribuirles aquel valor, votando la cuestión segunda de su acuerdo, ha incurrido en la violación alegada de esa disposición legal.

No existiendo prueba según ésto, de que el procesado sea el autor del homicidio que motiva esta causa, prescindo de examinar la justificación del recurso deducido en cuanto a la inaplicabilidad de la ley que se alega con relación a las declaraciones del tribunal sobre las circunstancias agravantes del delito; y por las consideraciones expuestas y concordantes del voto precedente, doy el mío también por la afirmativa, y en el concepto indicado, debiendo en consecuencia revocarse la sentencia recurrida y absolver de culpa y cargo al procesado, de acuerdo con el artículo 511 del código de procedimiento en lo criminal, ordenándose su inmediata libertad.





El doctor Acevedo por idénticos fundamentos emitidos en los votos precedentes, dió el suyo también por la afirmativa, en la cuestión planteada.

Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces de la suprema corte.

D. ALSINA.—ACEVEDO.—T. VARELA.

Ante mí:

*Enrique B. Prack.*

#### SENTENCIA

La Plata, etc.

#### Y VISTOS.—CONSIDERANDO:

1.º—Que los diversos indicios tomados en cuenta por la cámara, en relación con la prueba de los hechos que les sirven de base, como queda demostrado en el acuerdo, no están probados unos o no conducen los demás a la culpabilidad del acusado, por carecer aquellos hechos de relación directa con el delito.

2.º—Que aun cuando alguno revistiese cierta gravedad por dicha relación con el delito, como es el referente a las visitas que según se dice hacía el procesado a la tapera en que se halló el cadáver de la víctima, tal presunción sería insuficiente por sí sola para constituir prueba del hecho principal inquirido, requiriéndose por el inciso 2.º del artículo 305 del código de procedimiento en lo criminal, que la prueba circunstancial se constituya por varias presunciones y que éstas revistan las condiciones que la misma disposición determina.

3.º—Que habiéndose establecido en el acuerdo que los indicios o presunciones que fundan la sentencia de la cámara no reúnen los requisitos que exige el citado artículo 305 para tenerlas por prueba legal, resulta que dicho tribunal, al atribuirles aquel valor, ha incurrido en la violación alegada de la citada disposición legal.

Por éstos y demás fundamentos del acuerdo que precede, se declara que existe en la sentencia recurrida la inaplicabilidad de ley alegada y que no habiendo prueba de que el acusado sea el autor del homicidio, de que fué víctima don Angel Di Giácomo, se le absuelve de culpa y cargo, debiendo ser puesto inmediatamente en libertad, con declaración de que la formación del proceso no afecta su buen nombre y fama.

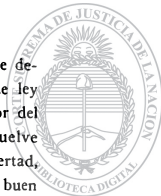
Devuélvase a la cámara de su procedencia.

DALMIRO ALSINA. — PEDRO P. ACEVEDO. —  
TEODORO VARELA.

Ante mí:

*Enrique B. Prack.*

---





# CAUSA DE ZENOBIO VALDEZ

---



## I

SENTENCIA CONDENATORIA DEL JUEZ DOCTOR J. FLORENCIO ORTIZ

Y VISTOS.—CONSIDERANDO:

1.º — Que no puede argumentarse con la defensa en el sentido de sostener con los antecedentes del proceso su ineficacia como prueba para demostrar la existencia del delito de rapto, y que, en su consecuencia, deba juzgarse el hecho por lo que resulta de la confesión del acusado.

Aun con la hipótesis de que la menor hubiera fugado de la casa de corrección donde se asilaba y fuera a hospedarse en casa de Valdez, el delito se ha consumado lo mismo, por cuanto habiendo cesado lo autoridad como encargado de la guarda de la menor por la intervención del juez de menores bajo cuya potestad se encontraba, él no podía disponer de su persona, ocultándola, y su deber entonces era, ante la conducta observada por la asilada, restituirla a poder de quien dependía.

Se descubre, pues, a través de la excusa invocada por el procesado un propósito deshonesto al retener en su poder a la me-

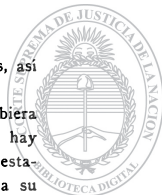


nor fuera del hogar marital, circunstancia que induce presunción sobre aquella intención que convenía naturalmente ocultarla a las miradas de la esposa, en obsequio a la armonía y felicidad del hogar.

Y la prueba de que el propósito al raptar a la menor era de atentar contra su honestidad, la tenemos en los informes médicos. El delito de violación y no de estupro, atento a que la víctima tenía 11 años de edad, según partida agregada a foja 32, se ha consumado, no obstante la negativa del acusado, que pretende desautorizar esa prueba corroborante de la opinión de la menor. Esos dictámenes que se relacionan intimamente entre sí y tienen una conexión inmediata con el hecho averiguado y reunen los requisitos legales, hacen plena prueba con arreglo al artículo 293 del Código de Procedimientos, desautorizando así todas las manifestaciones en contrario y excusas desprovistas de seriedad alegadas por el encausado Valdez para eludir la culpabilidad en que ha incurrido, todo lo que no permite aceptarlas en orden a lo que se dispone en la última parte del artículo 265 del código citado.

La circunstancia de que hace mérito el defensor de haberse encontrado en la vagina de la menor restos de liquido espermático y que el coito ha debido tener lugar un día antes del examen como se establece en el informe de fojas 24, nada prueba en favor de la inocencia de Valdez, porque si bien entonces ya se hallaba detenido y, por tanto, no pudo tener contacto con ella en la fecha supuesta, conviene no prescindir de los demás datos del informe, que dice que por el estado de la vagina, completa cicatrización de las carúnculas himenales, el primer coito ha debido operarse diez o quince días antes del reconocimiento, es decir, en el período de tiempo en que Valdez tuvo a la menor vagando con ella de domicilio en domicilio, y antes de ser aprehendidos por la policía, lo que viene también a corroborar el dicho de Filomena de que el coito tuvo lugar cuando la llevó y la trajo su raptor del puesto de Suárez.

2.° — Que de acuerdo, pues, con los artículos 304 y 305 del código de procedimiento, debe darse por probado los delitos de



rapto y violación de la menor Filomena o Miguela Burgos, así como que su autor fué el prevenido Zenobio Valdez.

3.° — Que partiendo de la base de que el rapto se hubiera consumado con consentimiento de Filomena, desde que no hay prueba suficiente para sostener que Valdez la sustrajo del establecimiento donde se asilaba, como ella sostiene, y atenta su edad de 11 años, el caso se halla comprendido en las disposiciones combinadas de los incisos 1 y 2, letra i, artículo 19, continuación de la ley de reformas al código penal, que castiga con penitenciaría de 3 a 6 años.

4.° — Que no existiendo entre el ofensor y la ofendida ninguno de los casos de parentesco previstos en el mismo artículo, letra d, y no tratándose de estupro, como califica la acusación, sino de violación, para que sea aplicable la sanción impuesta en la letra b, combinada con la c, corresponde imponer la pena que fija el inciso a, sub inciso 1, del recordado artículo 19, para el expresado delito de violación o sea la de 6 a 15 años de penitenciaría.

5.° — Que no concurre ninguna causal que pueda atenuar la responsabilidad, artículo 83 del código penal.

6.° — Que la pena del delito o delitos cometidos no excluye la obligación de indemnizar el daño causado, artículo 47 del mismo código y 1011 del código civil).

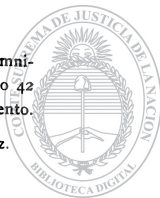
Por estos fundamentos y los concordantes del dictamen del ministerio fiscal, no obstante lo pedido por la defensa, fallo definitivamente esta causa, con arreglo a las prescripciones del artículo 438 del código de procedimientos; condenando al procesado Zenobio Valdez como reo de los delitos de rapto y violación de la menor Filomena o Miguela Burgos, a la pena de 10 años y 6 meses de penitenciaría, que deberá cumplir en la cárcel de Sierra Chica, descontándosele oportunamente la prisión preventiva que lleva sufrida en la forma dispuesta en el artículo 49 del código penal, con las accesorias del artículo 62 y su concordante artículo 63, fijándose el tiempo de la inhabilitación y de la vigilancia de la autoridad, después de cumplida la condena en 3 años y 6 meses y 3 años, respectivamente; declárase a su cargo las

costas del proceso y déjase a salvo la acción civil por indemnización de perjuicios a que por derecho hubiere lugar, artículo 42 del código penal, 90 y 439, inciso 2, del código de procedimiento.

J. FLORENCIO ORTIZ.

Ante mí:

*Camilo Giovanelli.*



## II

### ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

1. En los delitos de violación y rapto es indispensable la denuncia de parte, salvo los casos especiales determinados por ley.—2. Prueba de la edad de la víctima.—3. El delito de rapto no está probado.—4. Tampoco lo está el de violación.—5. Análisis del informe médico.—6. Ley aplicable.—7. Consideraciones finales.

1. — No me explico como ha podido seguirse esta causa sin base ni fundamento legal, sin denuncia de parte, en una palabra.

El artículo 141 del código penal dice: «No se procederá a formar causa por los delitos expresados en el presente título (violación, rapto, etc.), sino por acusación o denuncia de la interesada, o de la persona bajo cuyo poder se hubiere hallado cuando se cometió el delito.

Si el delito se cometiere contra una impúber que no tenga padres ni guardador, puede acusar cualquiera del pueblo y procederse de oficio.»

En el caso de autos, excelentísima cámara, no está probado que Miguela Burgos sea impúber, ésta tenía padres y, no obstante, el juicio se ha seguido de oficio.

¿Quién es el denunciante del delito de violación por que ha sido condenado Valdez?

Nadie, porque el señor Ham, que se dice guardador de la menor, denunció a mi defendido por rapto, sin imputarle violación.

La cámara criminal de la capital de la república tiene declara-



do: que tratándose de la violación de una menor impúber la desidia de sus padres o guardadores, faculta el procedimiento de oficio SI EL HECHO FUERE PÚBLICO Y NOTORIO. I. 4 página 105.

En el presente caso no ha existido esa publicidad a que se refiere dicho tribunal. Nadie sabía que la menor Miguela hubiera sido violada; lo ignoran los testigos, lo ignora el guardador señor Ham. Es sólo el comisario de policía quien sabe tal hecho, preguntando a la menor en esta forma: si cuando Valdez la llevó al campo tuvo con este alguna aproximación sexual, etc.

¿Con qué facultad, con qué motivo hacía el comisario tal pregunta? ¿Quién le había autorizado para ir a pesquisar en la conciencia de una menor atentados al pudor que quizá no han existido?

No lo sé, excelentísimo señor, pero lo sé es que carecía de facultades para ello, que procedía ilegal y arbitrariamente, fuera de la órbita de sus atribuciones.

Por algo la ley ha negado la acción pública cuando existen padres de la menor; por algo ha querido que hechos de esta naturaleza no trasciendan, ni vayan a buscar solución ruidosa a los estrados judiciales. Es que, como dice un autor español, la ley tiene interés primordial en que sea siempre castigado este delito; pero por razones de respeto a las consideraciones de orden privado, debidas a las personas de las víctimas, no extrema su derecho hasta el punto de ejercerlo de un modo absoluto, antes lo condiciona, de suerte que no se convierta su ejercicio en un daño para los seres mismos objeto y víctima del atentado. Groizart T. V página 245.

No hay, pues derecho para ir a constatar judicialmente un delito que por previsiones de alto interés público debió quedar en la penumbra.

En cuanto a la denuncia formulada por el señor Ham sobre el delito de rapto, observo que ese señor carecía de personería para ello.

No aparece comprobado cual es la autoridad pública que investiga, porque mi defendido le negó siempre el carácter de defensor o juez de menores que se atribuía.

Mas, supongamos por un momento que se hubiese constatado





tal hecho ¿tendría personería para guardar a la menor Miguela Burgos?

De ninguna manera.

El señor Ham reconoce que esa menor tenía madre a la que aquél por sí y ante sí privó del derecho de patria potestad;

Esto es ilegal y nulo. Los padres sólo pueden ser privados de la patria potestad previo juicio ordinario, ha dicho la jurisprudencia en mil casos; y son los jueces los únicos que pueden decretar semejante privación, artículo 309 y 329 del código civil.

Se comete error de lógica en la sentencia, una petición de principio, al afirmar que la menor Miguela se encontraba bajo la guarda y protección del juez de menores señor Ham.

¿Desde cuándo aquí, pregunto yo, las violaciones a la ley, pueden crear un derecho? ¿Desde cuándo las ampara la justicia?

El guardador de la menor Miguela era mi defendido, quien la tenía a nombre de la madre de aquélla, careciendo el señor Ham de derecho sobre la persona de Miguela.

Luego, entonces, el pretendido juez de menores señor Ham no podía legalmente denunciar el delito de rapto que se imputa a Valdez, ni podía seguirse en su contra juicio criminal, por que ello importaba un procedimiento de oficio que no permite la ley.

2.—¿Qué edad tiene la víctima de esta pretendida violación?

El juez en su sentencia dice, que tenía once años según la partida agregada a fojas 32.

Esa partida carece en absoluto de valor legal.

La madre de la menor, Joba Burgos, afirma que su hija Miguela nació el 5 de febrero de 1892 en Rojas, fecha que no concuerda en manera alguna con la que expresa la partida de mi referencia.

Pero lo que es más grave, lo que debió estudiar el inferior, lo que debió llamarle fuertemente la atención es la diferencia de nombre entre el de la víctima y el que se consigna en la partida de nacimiento: ¡Miguela aparece convertida en Filomena!

Cuando se trata de declarar un heredero por mil pesos, cuando sólo median intereses pecuniarios los jueces jamás admiten partidas en las que aparezcan errores como el anotado, sin previamente exi-



gir su subsanación por medio de pruebas completas; y aquí tal hecho se considera de poco momento, sin importancia; y sin embargo se impone pena de penitenciaría por diez años y medio!

En autos hay elementos de convicción demostrativos de la edad de la víctima que para nada se han tomado en cuenta en la sentencia recurrida, quizá porque eran favorables para un desgraciado.

El señor Ham, al hacer la denuncia del delito de rapto a fojas 5, dice que la menor tenía doce años; Arzubi repite lo mismo a fojas 14 y el comisario instructor a fojas 15 afirma que la menor Miguela aparenta tener doce años.

De un lado nos encontramos con una partida que nada prueba, que constata el nacimiento de persona diversa y del otro con reiteradas declaraciones que la desvirtúan.

La elección no era dudosa, y si lo fuera bastaría con el artículo 13 del código de procedimientos para resolverla en favor del procesado. Es precisamente todo lo contrario lo que ha hecho el juez de la causa, al dar valor a lo que no lo tiene, olvidando que vale más absolver al culpable que condenar al inocente.

Además, al fiscal incumbía la prueba de la edad de la víctima por que así lo determina el artículo 411 del código penal.

¿Por qué habría de presumirse lo odioso?

He dicho al pasar, que la mujer es púber a los doce años y voy a tratar de demostrarlo.

Escríbe, dice que la pubertad es la edad en que uno se reputa con aptitud para reproducirse; (verbo pubertad) y el diccionario de la academia: que pubertad es la época de la vida en que empieza a manifestarse la aptitud para la reproducción.

Se podría objetar que el código civil en el artículo 127 preceptúa que son menores impúberes los que aun no tuvieron la edad de catorce años cumplidos, pero a esto replico:

1—Que el código penal no ha dicho que la pubertad se determinará por lo que al respecto establezca la ley civil.

2. — Que aquel artículo ha sido derogado por el artículo 9 inciso 4 de la ley de matrimonio.

Cuando de delitos contra la honestidad se trata hay que tener en cuenta que aumenta su gravedad en los casos en que la



victima no sea apta para la reproducción, y la mujer lo es a los doce años.

Así pues, si la menor Miguela Burgos era púber, mal pudo procederse de oficio, sin denuncia de la madre, sin denuncia de nadie en una palabra.

A este respecto voy a permitirme citar las elocuentes palabras de Groizar, que dice:

En nuestra práctica recordamos un caso que explica mejor que los largos razonamientos que aquí podríamos emplear, nuestro modo de ver sobre esta materia y sus fundamentos. Una mujer fué sorprendida en un camino por dos hombres, que intentaron violarla; a sus gritos, pidiendo socorro, acudió una pareja de la guardia civil, a cuya vista huyeron los agresores. Interrogada por los guardias, les manifestó que los dos miserables que acababan de huir, habían tratado de violarla. Los agentes de la autoridad dieron cuenta del caso al juzgado, y éste comenzó a proceder. Entre las primeras diligencias por él acordadas lo fué el reconocimiento por facultativos, de la ofendida. Esta se negó tenazmente a prestarse a la práctica de semejante diligencia, diciendo que el hecho no había sido consumado, pero aun cuando lo hubiera sido, antes de sufrir la vergüenza y la vejación, del exámen pericial, prefería la impunidad de los delincuentes. El juzgado insistió en que la diligencia se llevara a cabo, puesto que una vez el delito denunciado a la guardia civil, su autoridad no tenía límites para llegar hasta el fin en la comprobación del delito. Del auto del juez la interesada apeló a la audiencia, alegando que no había denunciado el delito de violación, sino que se había limitado a pedir a gritos socorro para librarse de la agresión que sufría, y que si de tentativa de violación había hablado a la guardia civil, había sido no como denuncia judicial del hecho, sino respondiendo a sus preguntas, y para justificar su demanda de auxilio. La sala de la audiencia, de que formaba parte el que escribe estas líneas, estimó justa esta razón y revocó el auto apelado, y por falta de denuncia de la ofendida se declaró nulo todo lo actuado. Tomo V, pág: 245.

Resumiendo lo expuesto, creo haber demostrado:



- a) Que este juicio no tiene base legal, por haberse procedido sin denuncia de la interesada ni de la madre.
- b) Que el defensor de menores señor Ham no ha denunciado el delito de violación.
- c) Que dicho señor Ham no era el encargado de la guarda de la menor.

3. — Mas, supongamos que la causa haya podido seguirse de oficio, sin denuncia de parte, que sea letra muerta el artículo 141 del código penal, que nada valga la opinión de los tratadistas, y examinemos la prueba rendida en autos.

¿Es ella bastante para condenar?

La menor se encontraba en el asilo de San José del pueblo de Salto, de donde fugó el 26 de agosto de 1903, según lo afirma el informe de la superiora de dicho establecimiento, a fojas 27.

La citada Miguela dice que fué Valdez quien la sacó del asilo, y la sentencia del señor juez del crimen sostiene que éste ha cometido el delito de rapto por no haber restituido a la menor a poder de quien dependía.

He demostrado que Miguela no dependía del señor Ham, y aunque así no fuera, en ningún caso, el acto de omisión que se atribuye a Valdez podría hacerlo pasible de delito.

En vano he buscado este *rapto por omisión* en el código penal, porque no se encuentra.

Cómo la menor Miguela ha pasado de los doce años, caso de haber existido rapto, éste no sería punible, en orden a lo dispuesto por el artículo 135 del código penal.

Si se tiene en cuenta que Miguela Burgos estaba contra su voluntad en el asilo; que era lo suficientemente espabilada para vestirse de hombre y andar en esa forma por la casa de sus relaciones; que habiéndose criado en casa de Valdez era natural que lo buscara a éste, nada de extraño tiene que se saliera sola del asilo.

Las presunciones que pesan sobre Valdez y de que hace mérito la sentencia, están muy lejos de reunir los caracteres que exi-



ge el artículo 305 del código de procedimientos para hacer prueba legal.

Una vez que la menor Miguela Burgos se hubo presentado donde estaba mi defendido, es lógico que éste tratase de ocultarla porque ya sabía por propia experiencia cómo las gastaba el señor Ham, quien se la quitó antes, y por sí y ante sí privó a la madre de la patria potestad.

No me explico, entonces, por qué se le hace a mi defendido cargo por tal hecho.

4.—Vengamos ahora al delito de violación para demostrar que no existe prueba de la culpabilidad de Valdez. Este llevó a la menor Miguela el 25 o 26 de agosto de 1903 al establecimiento que administra en el partido del Salto Bernardo Arzubi, de donde la sacó el 30 del mismo, para conducirla al puesto de Donato López, dejándola allí hasta el 9 de septiembre, (declaraciones de Arzubi y López corrientes a fojas 14 y 15 respectivamente).

¿Cuándo se cometió la violación?

La menor Miguela, dice: que al llevarla Valdez al puesto de Donato López, la bajó del caballo en el campo y la hizo acostar en el suelo, y amenazándola que la iba a degollar sino accedía a sus deseos y haciéndole fuerza, logró ser satisfecho por dos veces que repitió la noche que la trajo del puesto de López.

La inverosimilitud de esta declaración salta a la vista. No es posible creer que Miguela se intimidase tan fácilmente cuando no dice que Valdez llevase armas con que hacer efectiva su amenaza. No gritó, no pidió auxilio.

Afirma que Valdez le hizo fuerza y sin embargo no apareció en su cuerpo una sola equimosis, ni un solo rasguño.

Valdez la saca del asilo San José y la lleva a lo de Arzubi sin que sea violada; es recién después que comete el delito.

Nada dice Miguela de lo que le había pasado, ni comunica a persona alguna la violación, y al contrario, narra los hechos con palabras que le envidiaría una mujer avezada a esta clase de incidentes.



No puedo resistirme a transcribir aquí las palabras de Groizard que parecen escritas para este juicio.

«La resistencia de la mujer debe ser seria, persistente, manifestándose por gritos en demanda de auxilio o por cualquiera otra clase de actos de enérgica fuerza que realmente demuestren la oposición de su voluntad a la del autor de la fuerza. La simple negativa no es bastante. Cuando los labios dicen que no, pero no es toda la posible la resistencia que la mujer opone con su cuerpo, hay lugar a sospechar que, más que a salvar su honor, a salvar las apariencias de su honor es a lo que aspira. La soledad del lugar elegido o aprovechado por el agresor, la denuncia inmediata de la mujer, el estado de indignación con que se presenta después de cometido el delito, su aspecto físico, las ropas desgarradas, los cabellos sueltos, las señales violentas, las lesiones en el rostro o en el cuerpo, son los indicios propios de la resistencia. Pero ni esos indicios son los únicos que pueden ser estimados, ni todos ellos juntos, bastantes para constituir, en todos los casos, una prueba irrecusable. Los jueces deben proceder con GRAN PRUDENCIA Y CAUTELA EN MATERIA TAN ESPINOSA, para no confundir las apariencias con la realidad, y lograr poner bien en claro el estado de la voluntad de la mujer durante todo el período de tiempo en que tuvo lugar la acometida y la resistencia. Tomo V, página 86. Y luego en la página 89 agrega: Los anales del foro ponen este hecho en evidencia: «la resistencia de la mujer contra un sólo hombre, bien sustentada, es casi siempre bastante para impedir la consumación de la conjunción carnal».

¿Dónde están, pregunto yo, en el caso de autos, los extremos a que se refiere Groizard? ¿Dónde los signos suministrados por el cuerpo de la víctima, que enumeran los autores de medicina legal?

Legend du Saulle en el tomo III, página 381 de su clásica obra, dice a este respecto: Esta comprobación es más importante que lo que se pudiera creer a primera vista, porque si la presencia de ciertas contusiones profundas y externas excluye muy probablemente la complicidad de la joven en culpables super-



cherías, practicadas con el fin de sacar dinero, la existencia de otras por su poca importancia deben fijar la atención del hombre de ciencia sobre una simulación posible y ponerle en el camino de la verdad.

5.—Estudiemos ahora el valor científico y legal del informe médico del doctor X.

«La menor ha sido objeto de un acto carnal (coito) con un individuo del sexo masculino, cuyo miembro es de pequeñas dimensiones». ¡Magister dixit!

Sostengo que no hay médico por sabio que sea cuya ciencia alcance donde llega la ciencia del doctor X.

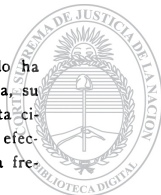
Legrand du Saulle afirma que puede haber ausencia del himen sin que haya habido violación, ni comercio carnal consentido por la mujer... En fin, agrega, la ruptura del himen puede ser el resultado de la introducción brusca y violenta en la vagina de un cuerpo de un diámetro más grande que el de la abertura dejada por el diafragma formada por el himen, un bastón, un alfilerito, el dedo, como en un caso citado por Pinaud, pueden desgarrarlo lo mismo que el miembro viril, un salto, una separación brusca de los muslos, la equitación, y ciertos hábitos profesionales, pueden producir el mismo resultado. t. III, página 384.

Hasta una vela, agregó yo, puede producir iguales desgarramientos que el pene.

Lea V. E. los modelos de informe médico que se encuentran en Casper, examine los que trae Legludic t. I, pág. 57 y verá que ninguno se atreve a afirmar que una defloración es producida por el pene: hablan siempre de un cuerpo duro y voluminoso como el miembro viril; pero no se producen con el absolutismo del doctor X.

Mas, lo que es un problema, lo que es dudoso obscuro, preñado de dificultades, en la Salpêtrière, aparece sencillo, fácil, con la diafanidad de la ignorancia, para un médico de aldea, perdido en la inmensidad de la pampa argentina; ¡felices los que no dudan!

Pero prosigamos:



«No puedo precisar de una manera categórica, cuándo ha tenido lugar el acto carnal, pero por el estado de la vagina, su contenido, (resto de líquido espermático) y por la completa cicatrización de las carúnculas himenales debe de haberse efectuado hace doce o quince días, y haberse repetido con poca frecuencia y especialmente un día antes de su examen».

El doctor X afirma en este párrafo algo que no podría probar ni demostrar científicamente.

No hay médico que sea capaz de evidenciar que el primer coito causante de la ruptura himenal, ha tenido lugar quince días antes de su examen pericial.

Cuando la defloración es antigua, dice Divergie, citado por Legrand du Saulle, no se le puede señalar nunca época; y en materia de violación una desfloración se *considera antigua al cabo de ocho o diez días* (tomo 3, página 385).

Casper en su obra sobre medicina legal, tomo I, página 129, adhiere a las palabras de Divergie que dejamos transcritas.

Le Gludic afirma que las desfloraciones antiguas son imposibles de precisar en qué época han tenido lugar (pág. 106.)

Si una desfloración es vieja a los ocho días ¿cómo puede precisarse quince días después, la época en que se verificó? De ninguna manera. El hecho habrá ocurrido hace quince días, hace dos meses o dos años, todo es vago y conjetural.

Parece también que el doctor X, cree que la falta de himen es signo de violación.

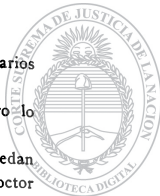
No siempre es cierto como puede verse en Orfila, tomo I, página 136; en Husk, *Encyclopedie anatomique*, tomo V, página 472; en Richet, *Traité pratique de anatomie chirurgicale*, página 722; en Garimond, de *L'hymen*, tomo IV, página 394 y otros.

Afirma también este médico que encontró restos de esperma en la vagina de la menor Miguella Burgos.

¿Es esto posible?

Es en vano que he buscado en los textos de medicina legal tal antecedente comprobatorio de la violación, a menos que se trate de cadáveres. Ningún médico afirma que sea posible en-





contrar esperma en la vagina de la mujer después de varios días de violación.

Por el contrario, en Orfila, edición francesa, encuentro lo siguiente:

No puedo silenciar, con ocasión de los líquidos que puedan encontrarse en la vagina un *error grave* cometido por el doctor M... en un informe sobre violación. Llamado para constatar el estado de las partes sexuales de una joven de trece años y nueve meses, que se creía había sido violada nueve días antes, este médico concluía que el acto de la cópula se había consumado y se apoyaba entre otras cosas en que en la presencia de una *cierta* cantidad de esperma que él había retirado de la vagina, tomo I, página 155.

Orfila declara que esto es imposible.

Además el doctor X, no nos dice cómo pudo constatar que de líquido espermático se trataba, ni el método que se valió para llegar a tal conclusión; no sabemos si practicó examen microscópico, si descubrió la existencia de espermatozoarios; en una palabra, no sabemos nada, de este médico que lo sabe todo.

Paso ahora a estudiar el valor jurídico de este curioso documento.

El doctor X, no ha ajustado su informe a lo que determina el artículo 289 del código de procedimientos. No se ha hecho una descripción de la persona o cosa objeto del informe.

No basta decir que se ha practicado varios y numerosos exámenes de las partes genitales, sino que debe expresarse, como, en qué forma, usando de qué procedimientos científicos, se han hecho tales exámenes, para que el magistrado pueda convencerse de lo científica o empírica de la conclusión a que se arriba. Mitermayer, página 184.

No es esto sólo. El informe médico legal, tiene en este caso capital importancia, es el eje alrededor del cual gira todo el proceso y el punto culminante de los debates judiciales.

En la precipitación por condenar, se ha olvidado por el inferior una regla general de procedimiento: que los peritos deben ser dos.



En el caso de autos, pudieron ser habidos dos médicos, desde que hay tres en el pueblo del Salto; no había peligro en el retardo y el caso era no de poca, sino de mucha importancia.

Todo indicaba y pedía a gritos la intervención de dos médicos, porque así lo requería la gravedad de la causa y no obstante sólo se exige un sólo informe, el que jamás puede servir para imponer pena tan grave y tremenda como la de diez y medio años de penitenciaría.

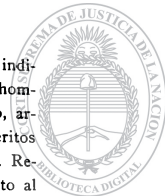
Voy a permitirme citar el ilustrado voto del doctor Capdevila quien en una causa criminal decía: El inciso 3 del artículo 270, autoriza el informe de un sólo médico, cuando el caso sea de poca importancia, pero esa poca importancia no ha podido referirse a la naturaleza de la causa, porque entonces la ley habría dicho, cuando no se trate de un delito grave, sino a la naturaleza misma del informe, a su importancia científica en el proceso, es decir, que aquélla depende exclusivamente de la sencillez del caso examinado que no deje lugar a duda alguna, y de la precisión de las conclusiones científicamente establecidas y perfectamente acentuadas, tomo I, página 259 S. 5.º. Fallos de la Suprema Corte.

En el caso sub-judice, Excelentísima Cámara, existía la gravedad de la causa y existía la gravedad a que se refiere la opinión que queda transcripta. ¿Y qué cosa más grave, señor, que un delito por violación donde la pena puede llegar a quince años de penitenciaría?

No lo ha entendido así el señor juez y lo siento por él, por mi defendido, por la administración de justicia.

Podría objetarse quizá que en el Salto sólo existía y existe un sólo médico de policía, pero a esto replico con las palabras de los doctores Dimet y Alsina en el fallo citado: «La circunstancia de no existir en la localidad más que un médico de policía, no explica la omisión del requerimiento por la policía de otro facultativo.

De los otros informes médicos, producidos por el doctor Míguez y un empleado del Departamento de Salubridad, sólo me ocuparé brevemente.



Carecen de valor: a) porque se trata de una prueba indirecta que ni siquiera tiene el valor de una presunción de hombre; b) porque ninguno de estos médicos prestó juramento, artículo 273 del código de procedimientos; c) porque los peritos han dado su informe separadamente, sobre puntos diversos. Reproduzco aquí las consideraciones jurídicas aducidas respecto al informe del doctor X.

¡Y pensar, Excma. Cámara que un juez de derecho, ha fundado sus conclusiones en estas piezas de medicina legal, para imponer diez y medio años de penitenciaría!

6.—En este juicio, Excma. Cámara, todo es extraño y anormal, parece que una hada maligna hubiese guiado a los acusadores de Valdez haciéndoles acumular irregularidades sobre irregularidades.

Nadie denuncia el delito de violación y sin embargo se sigue proceso de oficio saltando por sobre el artículo 141 del código penal; era menester el informe de dos médicos, y sólo existe el de uno solo, ostentando su pobreza y su invalidez legal; Valdez clama a su defensor (1) para que pida un careo con la menor, le exhibe pruebas de su inocencia y no se hace nada, sino es presentar un escrito de dos líneas, que malamente podría calificar de defensa. Y para llenar la medida se aplica una pena contenida en ley no vigente a la época del delito. Ni la sombra de una duda ha asaltado al fiscal ni al juez sobre la ley que debía aplicarse. Diez y medio año de penitenciaría, es pena tan grave que merecía su aplicación un instante de meditación.

Cuando Zenobio Valdez me pidió que lo defendiese, manifestándome con lágrimas en los ojos que no podría pagarme mi trabajo, cuando me juró su inocencia, sentí compasión, pero no podría explicar a V. E. mis sentimientos cuando me hube impuesto del proceso. Este hombre, me dije, no puede ser condenado y no lo será!

El inferior aplica a mi defendido la ley de reformas al có-

---

(1) No he defendido a este hombre en 1.<sup>a</sup> instancia, habiéndome hecho cargo de su causa cuando ya estaba condenado.—T. J.



digo penal, sin entrar a averiguar si el delito se cometió a no durante su vigencia.

Es el 30 de septiembre cuando se dice que Valdez violó a Miguela.

A la ley de reformas se le puso el cúmplase por el presidente de la república, el día 22 de agosto de 1903 y como tal ley no determina la fecha en que debe entrar en vigor, es necesario dilucidar tal punto.

¿Qué reglas se aplican en general para determinar la vigencia de una ley?

Rivarola nos dará la respuesta: «El código civil establece las reglas generales para la aplicación de las leyes PARA LOS DEMÁS CÓDIGOS Y LEYES en cuanto guarden silencio al respecto (tomo I, pág. 117).

El código civil en el artículo 2, preceptúa que las leyes no son obligatorias sino después de su publicación y desde el día que ellas determinen. Si no designan tiempo, la ley publicada en la ciudad donde reside el gobierno nacional o el gobierno de la provincia, es obligatoria desde el día siguiente de su publicación; en los departamentos de campaña, ocho días después de publicadas en la ciudad capital del estado o capital de la provincia.

Así, pues, la ley de reforma al código penal sólo entró en vigencia en los partidos de la provincia de Buenos Aires, a los diez y seis días después de publicada en la capital de la república, vale decir el 8 de septiembre de 1903. Esta es la opinión de Rivarola (tomo I, página 119; de Llerena, comentario al artículo 2 del código civil).

Los delitos que se imputan a Zenobio Valdez han sido cometidos antes de esa fecha, por lo cual no puede aplicárseles la ley de reformas sino el código penal, que tiene penas mucho más benignas. En la hipótesis de que hubiese cometido el rapto y la violación de la menor, le correspondería... pero no, para qué vamos a discutir penas que no llegarán a aplicarse.

7.—Me ocuparé ahora de algunas cuestiones que no he tratado en los capítulos anteriores.



El juez *a quo*, dice en su sentencia: «Se descubre en el proceder del acusado un propósito deshonesto al retener en su poder a la menor, fuera del hogar marital, circunstancia que induce presunción sobre aquella retención que convendría naturalmente ocultarla a las miradas de la esposa, etc.»

Claramente se ve, que el inferior saca una inducción de otra olvidando que los indicios es necesario que se funde en hechos reales y probados y no en otras presunciones o indicios. (artículo 305, inciso 7 del código de procedimiento).

El juez acepta; el informe médico del doctor X, en lo que es contrario a Valdez y lo rechaba en lo que le es favorable, violando regla tan fundamental como la del artículo 13 del código citado. *In dubio pro reo*.

¿Para qué continuar?

La ilustración de V. E. salvará las omisiones de esta defensa y sabrá revocando la sentencia apelada y hacer cumplida justicia a Zenobio Valdez.

Por tanto: ruego a V. E. que al fallar en definitiva esta causa, lo haga, conforme lo dejo pedido, que así es justicia, etc.

### III

#### VISTA DEL FISCAL DE CÁMARA

Mercedes, etc.

Excma. Cámara:

En el escrito de expresión de agravios precedente, se plantean, desarrollan y desenvuelven con claridad y método, las distintas cuestiones que surgen del estudio de este proceso.

Después de un concienzudo análisis de la prueba allegada en autos y de un amplio desenvolvimiento de los verdaderos principios que rigen el caso sub-judice, la defensa llega a la demostración plena y concluyente de la insubsistencia de los fundamentos del pronunciamiento recurrido.



En el deseo de evitar inútiles repeticiones, el fiscal reproduce las consideraciones aducidas en el escrito de referencia y opina que V. E. debe revocar la sentencia apelada de fojas 75.

PEDRO I. HERNÁNDEZ.

#### IV

La Cámara de apelación de Mercedes confirmó en todas sus partes la sentencia del juez doctor Ortiz, e impuso al acusado la pena de diez años y medio de penitenciaría.

De esa sentencia recurrió la defensa por medio del escrito que publicamos en el capítulo siguiente.

#### V

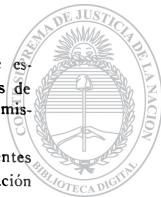
RECURSOS EXTRAORDINARIOS DEDUCIDOS POR EL DOCTOR TOMÁS JOFRÉ

1. Interposición de los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley.—2. Procedencia del recurso de inconstitucionalidad.—3. Fundamentos del recurso de inaplicabilidad de ley: a) procedimiento de oficio; b) la ley penal no puede aplicarse extensivamente; c) el dictamen de un solo perito carece de valor.—4. Dos declaraciones contradictorias se neutralizan.—5. Análisis de la prueba de indicios.—6. Fecha en que entró en vigor en la provincia de Buenos Aires la ley de reformas al código penal.

1. — De la sentencia condenatoria de Valdez, dictada por el tribunal, interpongo los recursos de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley y doctrina, los que pido se me concedan para ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

2.—Procede el recurso de inconstitucionalidad cuando las resoluciones pronunciadas por los tribunales, lo hayan sido con violación de las formas y solemnidades prescriptas por la constitución.

En la sentencia dictada por V. E. se ha violado el artículo



172 de la constitución, que manda que en las sentencias se establezcan primero las cuestiones de hecho y en seguida las de derecho, votándose separadamente cada una de ellas y en el mismo orden.

La primera cuestión la ha planteado V. E. en los siguientes términos: ¿La denuncia de fojas 5 es bastante para la formación de esta causa, tanto respecto del delito de rapto como del de violación?

Al votar este punto, se han involucrado cuestiones de hecho y de derecho. Para proceder en la forma que prescribe el artículo constitucional citado, era indispensable plantear las siguientes cuestiones: a) ¿En poder de quién se encontraba la menor Miguela Burgos a fines de agosto y principios de septiembre del año pasado? (cuestión de hecho). b) ¿La denuncia del guardador de esa menor por el delito de rapto autorizaba el procedimiento de oficio en el delito de violación? (cuestión de derecho).

V. E. en vez de hacer la debida reparación, ha involucrado el hecho al derecho, bastando leer el voto de la cuestión de que me vengo ocupando para convencerse de ello. Al votar esa cuestión se discute qué edad tenía la víctima Miguela Burgos; si era o no púber; la persona en poder de quien se hallaba; puntos de hecho; y luego se entra a considerar el alcance que debe darse al artículo 141 del código penal, y si basta la denuncia del rapto para proceder de oficio en el delito de violación. Estas dos últimas cuestiones son de puro derecho.

Al votar la siguiente cuestión, se analizan cuestiones de hecho como es la de saber si resulta acreditado en autos el rapto de la menor Filomena Burgos y al mismo tiempo se discute el valor legal que pueda tener el informe de un sólo perito. El hecho y el derecho resultan, pues, involucrados contra la prescripción del artículo 172.

La quinta cuestión fué planteada así: ¿Qué pronunciamiento debe dictarse?

Parecería, pues, que V. E. iba a resolver una cuestión de derecho y así lo hizo en efecto en parte declarando que la ley de



reformas al código penal, entró a regir el 31 de agosto de 1903 en los Departamentos de campaña, debiendo juzgarse el delito cometido por Valdez con arreglo a lo dispuesto por el artículo 19, a), inciso 1.º de dicha ley. Mas también se plantean y resuelven en esta cuestión puntos de hecho que tienen capital importancia, y sin que antes hayan sido discutidos ni estudiados. Se dice que el primer coito tuvo lugar el treinta de agosto de 1903 y fué repetido en la noche del 10 de septiembre, existiendo reiteración. Si V. E. hubiera cumplido con el artículo 172 de la constitución que manda separar las cuestiones de hecho de las de derecho, habría tenido que dividir la quinta cuestión del acuerdo en las siguientes: a) ha existido reiteración; b) cuándo tuvo lugar el primer coito; c) cuándo el segundo. También habría sido necesario formular otra cuestión de derecho para resolver la ley que debía aplicarse.

Todo esto, pues, demuestra que la sentencia de V. E. no se ajusta a la forma y solemnidades prescriptas por la constitución en su artículo 172.

3.—En cuanto al recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal fácil va a serme evidenciar sus fundamentos.

a) V. E. ha aplicado falsa o erróneamente el artículo 141 del código penal, que prohíbe proceder de oficio en los delitos contra la honestidad. El guardador de la menor señor Ham denunció a mi defendido como autor del rapto, pero no le imputó violación. Luego entonces, no pudo ni debió procederse de oficio respecto de este último delito.

Los delitos de rapto y de violación son distintos, con sus caracteres típicos, y ni la ley ni la doctrina pueden jamás confundirlos.

b) Cuando V. E. interpreta extensivamente el artículo 141, viola la doctrina aceptada. Los principios sobre que reposa el derecho de castigar, dice Haus, prohíben al juez aplicar la ley penal extensivamente o por analogía, es decir, a casos que no entran en sus términos, aun cuando ellos estén comprendidos en sus motivos, aun cuando conste que el legislador lo ha silenciad-





do por olvido o por error. (*Droit penal belge*, tomo I, número 150).

Cuando la ley ha preceptuado que en el delito de violación, sólo puede ponerse en movimiento la justicia por denuncia de partes no puede hacerse decir, salvo caso de que se haya denunciado el delito de rapto.

c) Ha violado V. E. las leyes que gobiernan la prueba al dar por sentado que Ham fuera el tenedor de la menor, porque tal hecho sólo resulta de la propia declaración de éste y un sólo testigo no basta para dar por justificado un hecho.

La sentencia de que recurro, aplica erróneamente la ley al considerar que Valdez cometió el delito de rapto, por el hecho de retener a la menor y agrega: «el sólo hecho de haberla detenido en su poder hasta el momento de ser detenido, basta para determinar en el concepto de la ley la existencia del rapto».

Ninguna ley impone a una persona la obligación de devolver a los menores a poder de sus guardadores, so pena de ser considerados raptos. El fraude a que se refiere el artículo 19 de la ley 4189, debe ejercerse sobre la raptada y en el caso de autos, no se ha dicho por V. E. que concurra tal requisito.

d) También ha aplicado V. E. erróneamente el artículo 270, inciso 3.º del código de procedimientos criminales, al dar valor legal a un informe médico como el de fojas 24, que emana de un sólo perito.

Podría objetarse quizás que en el Salto sólo existía y existe un sólo médico de policía, pero a esto replico con las palabras de los doctores Dimet y Alsina en el fallo citado: «la circunstancia de no existir en la localidad más que un médico de policía no explica la omisión del requerimiento por la policía de otro facultativo».

El artículo 270, inciso 2.º del código de procedimiento, ha sido erróneamente aplicado por V. E., pues una violación no desaparece en una hora, que sería el tiempo necesario para llamar otro médico en un pueblo que cuenta con tres facultativos. Debíó, pues aplicarse la primera parte del mismo artículo por las razones que dejo aducidas.



4.—Cuando en la sentencia que vengo analizando se da valor legal a la declaración de la menor Miguela Burgos, se aplica erróneamente el artículo 252 del código de procedimiento que ordena a los jefes apreciar, al resolver, la fuerza probatoria de las declaraciones, según las reglas de la sana crítica.

La menor dice: Zenobio Valdez me violó, y éste niega el hecho, luego entonces, la sana crítica nos enseña que estas dos declaraciones se neutralizan (Framarino, Lógica de las pruebas, tomo II, página 128).

5.—Al declarar V. E. probado el delito de violación que se imputa al procesado, aduciendo para ello la prueba de presunciones, ha violado los artículos 304 y 305 del código de procedimientos.

Es el inciso 1.º del artículo 305 el que más directamente ha sido violado por su errónea aplicación. El cuerpo del delito, para que haya plena prueba por presunciones o indicios, debe constar por medio de pruebas directas e inmediatas.

Ya he demostrado que el informe del doctor Wals carece de valor legal, y en cuanto a la declaración de la víctima, jamás puede ser prueba directa (artículo 223 del código citado).

Falta, entonces, la prueba directa que haga admisible la de presunciones, y V. E. al dar importancia a tan débiles indicios, ha aplicado erróneamente la ley.

Las contradicciones del procesado no reúnen el carácter, en este, caso de una presunción que pueda invocarse en su contra como una presunción de culpabilidad, cuando no existe ni siquiera justificado el cuerpo del delito.

Al dar valor V. E. a los informes de fojas 57 y 63, ha violado el artículo 273 del código citado, que establece terminantemente que los peritos aceptaran el cargo bajo juramento. No han cumplido con tal formalidad los referidos peritos.

Se sostiene en la sentencia de que recurro, que el coito tuvo lugar el 30 de agosto de 1903, siendo reiterado en la noche del 9 al 10 de septiembre. Al hacer esta declaración V. E. ha violado las leyes de la prueba. ¿Cuáles son los fundamentos en que se



apoya esta declaración? Solamente, excelentísimo señor, reposan en la declaración de la menor, no corroborada por presunción alguna que permita precisar esas fechas. La sana crítica, lo he dicho ya, enseña que el dicho de una menor, de la víctima, no puede servir de prueba legal ante la negativa del inculpado. Resulta, pues, violados, el artículo 223, inciso 1.º, desde que la víctima es menor de diez y ocho años; el 252, desde que es contrario a la sana crítica dar valor al dicho de un testigo solo. (Testis unus, testis nullus, el artículo 13, que sienta el principio de que in dubio pro reo).

¿Y, quién no va a sentir vacilar su espíritu al resolver si la violación tuvo lugar antes del 30 de agosto o después de esa fecha? ¿Quién no va a dudar al resolver si fué el 8 o el 9 cuando se cometió el delito?

6.—Y digo el 8 o el 9 de septiembre porque recién en esta última fecha entró a regir la ley de reformas 4189. Luego, cuando V. E. declara que la citada ley entró a regir el 30 de agosto, aplica erróneamente el artículo 2 del código civil. La ley publicada en la capital de la República entra a regir ocho días después en la capital de las provincias y ocho días más tarde en los departamentos de campaña, porque se sigue un sistema progresivo de vigencia.

Por último, cuando V. E. aplica el artículo 19, letra a) y letra i), número 2, procede erróneamente, desde que el delito, caso de haberse llevado a cabo, habría tenido lugar antes de la vigencia de la ley 4189.

La ley aplicable, en el peor de los casos, sería el código penal en sus artículos 135 y 127, inciso 1.º y 128, inciso 3.º y la pena a aplicar de cuatro años y medio de penitenciaría.

Al aplicar pena diversa ha violado V. E. el artículo 18 de la constitución nacional.

VI

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Suprema corte de justicia:

El defensor del procesado Zenobio Valdez, ha interpuesto los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley y doctrina legal contra la sentencia de fojas 96, que condena a su defendido a la pena de diez años y seis meses de penitenciaría por considerarlo autor de los delitos de rapto y violación. Funda el primero de los recursos expresados en la infracción de las formas y solemnidades prescriptas por el artículo 172 de la constitución, la que dice haberse producido: 1.° al involucrarse en la cuestión primera del *acuerdo*, puntos de hecho y de derecho, puesto que se ha discutido, en la misma, la edad de la menor y su pubertad, puntos de hecho, y el alcance que debe darse al artículo 141 del código penal, punto de derecho; 2.° al haberse tratado en la cuestión segunda los puntos referentes a la constatación del rapto y al valor legal que debe atribuirse al informe de un sólo perito, involucrándose el hecho y el derecho; y 3.° al haberse establecido en la cuestión quinta las fechas de los coitos, punto de hecho, y la ley que debía ser aplicada, punto de derecho.

En el escrito de expresión de agravios, corriente a fojas 84, el defensor planteó una cuestión previa referente al alcance de la disposición contenida en el artículo 141 del código penal, formulando diversos supuestos para sostener que, de acuerdo con ese precepto, no pudo instruirse un sumario a su defendido y que, en el peor de los casos, sólo fué procedente por el delito de rapto denunciado a fojas 5.

La cámara, al votar la cuestión primera, ha resuelto el punto fundamental que le fué sometido, exponiendo con todo orden cada una de las alegaciones del recurrente sin omitir el examen de los detalles contenidos en el escrito de fojas 84. El defensor mismo no sostiene que se haya omitido la discusión de sus argumentos, limitándose a decir que se han involucrado cuestiones.





A mi juicio, el defecto que indica el recurrente, no se ha producido. La constitución, al establecer la división en cuestiones de los puntos sometidos a la decisión de los tribunales colegiados, ha querido evitar la posibilidad de que pudiera producirse un acuerdo de opiniones sobre la solución final de un capítulo del juicio cuando hubiera disidencias sobre algunos puntos de carácter previo de los que dependiera esa solución, pero no ha pretendido que la separación alcance a cada una de las proposiciones controvertidas, siempre que, respecto de cada una de éstas, exista mayoría de opiniones, como ocurre en el caso sub-judice, porque entendiéndolo de un modo contrario, siempre habría inconstitucionalidad en las sentencias de las cámaras, pues bastaría el análisis para encontrar la posibilidad de dividir las cuestiones formuladas. Tal interpretación se ajusta a la doctrina expuesta por Bellot, y ha sido consagrada por la jurisprudencia de esa suprema corte. (Ley de procedimientos civiles del Cantón de Ginebra con la expresión de motivos por P. F. Bellot, 4.ª edición, página 41; sentencia de esa suprema corte dictada el 14 de noviembre de 1903, libro 29 de acuerdos y sentencias, página 481).

En el caso para decidir el punto de derecho discutido, era indispensable referirse a las circunstancias de hecho que lo motivaban, y, por tanto, la cámara procediendo con método, debió tratar, como lo hizo, esas diversas cuestiones incidentales que se referían a la misma fundamental sin necesidad de plantear una para cada detalle.

La cuestión segunda del *acuerdo* se refiere al delito de rapto. Al tratarla, no se ha omitido la discusión de ninguna de las alegaciones hechas a fojas 84, y si la cámara se ha referido al informe del perito doctor Walhs, ha sido porque éste constituía uno de los elementos que tendían a comprobar el hecho fundamental controvertido. Entiendo por eso y de acuerdo con lo expuesto más arriba, que tampoco se ha incurrido al votarse esa cuestión del *acuerdo* en la inconstitucionalidad denunciada.

Para determinar la ley que debía aplicarse al caso, era indispensable que la cámara estableciera previamente la fecha del



delito, puesto que se discutía la aplicabilidad del código penal o de la ley número 4189 de reformas al mismo. Las cuestiones de derecho, derivan siempre de puntos de hecho, puesto que ellas tienden a determinar los preceptos legales que corresponden aplicar al caso que se somete a la decisión de un tribunal, que no puede sino surgir de un hecho aceptado o discutido y por tanto sentar esos puntos cuando ellos han sido controvertidos, constituye una referencia necesaria que no hay para qué tratar separadamente cuando, respecto a la existencia o inexistencia de los mismos, se ha formado mayoría en el tribunal, y más aún, cuando, como ocurre en el caso, el defensor no ha hecho una discusión especial sobre tales hechos, limitándose a sostener incidentalmente, como lo hace a fojas 84, que ellos no se encuentran comprobados.

Creo, por ello, que tampoco se ha incurrido en la infracción del artículo 172 de la ley fundamental, al votarse la cuestión quinta, y, en consecuencia, opino que debe desestimarse el recurso de inconstitucionalidad interpuesto.

—

El defensor alega como primera causal de inaplicabilidad, la errónea aplicación del artículo 141 del código penal, que prohíbe proceder de oficio en los delitos contra la honestidad, sosteniendo que la denuncia hecha por el señor Ham se refirió al delito de rapto, y que, por tanto, no ha podido seguirse un juicio sobre violación.

El artículo 141 del código penal, colocado en el capítulo de las disposiciones comunes a los delitos de violación, estupro y rapto, establece que «no se procederá a formar causa por esos delitos sino por acusación o denuncia de la interesada, o de la persona bajo cuyo poder se hubiese hallado cuando se cometió el delito». Ese precepto tiende, como lo ha establecido la doctrina, a que no se revelen y publiquen los atentados al pudor sino cuando la víctima o sus guardadores, según el caso, así lo quieran, pues puede suceder que éstos prefieran la impunidad del delincuente a la vergüenza que el conocimiento del hecho



puede arrojar sobre sus personas. (Aguirre. El código penal, página 213).

Ahora bien, el perjuicio a la moral privada se causa cualquiera que sea el atentado al pudor que se denuncie; la ley si bien no ha dado al denunciante el poder de castigar al delincuente, le ha reconocido el derecho, en virtud de razones muy atendibles, de poner en movimiento a la justicia, librando a su voluntad la iniciativa del sumario.

La ley número 4189 de reformas al código penal, al establecer en el artículo 19, inciso i, subinciso 3.º, la independencia de los delitos expresados en el título III del libro 2.º, determina claramente la extensión del precepto, puesto que dice «a los efectos de la acumulación de las penas» y no sería de buena interpretación darle un alcance distinto al que se establece claramente en la misma disposición.

Además, es preciso tener en cuenta que el artículo 141 no sólo está colocado en un capítulo de disposiciones comunes, sino que se refiere a *los delitos expresados*, lo que hace suponer que la denuncia para uno, infiere el derecho de ejercitar la acción pública con respecto a los otros que se descubrieren. Puesta en movimiento la justicia, no es posible suponer que haya sido la mente del legislador que se detenga por simples formulismos; desaparecido el motivo que impedía procesar; destruidas la excepción creada *propter pudorem familiae*, la acción pública debe recobrar todo su vigor.

Agrega el recurrente que la cámara ha violado las leyes de la prueba al establecer que Ham fuera el guardador de la menor, porque ese hecho sólo resulta acreditado por la declaración del mismo Ham y de un testigo.

No habiéndose indicado cuáles son las leyes de la prueba violadas, cuáles las disposiciones infringidas y cuál la declaración del testigo a que se hace referencia, V. E. no puede entrar a la consideración de ese punto como lo ha resuelto en casos repetidos. (Acuerdos y sentencias, serie 3.º, tomo 4.º, página 127; serie 4.º, tomo 9, página 489).

Sostiene también el defensor, que se ha aplicado errónea-



mente la ley al considerar que Valdez cometió el delito de rapto por el hecho de retener a la menor, pues ninguna ley impone la obligación de devolver los menores a poder de sus guardadores, bajo pena de considerar al que no lo hiciera como reo del delito de rapto, agregando que el fraude a que se refiere el artículo 19 de la ley número 4189 debe ejercerse sobre la raptada, requisito que no se ha dicho por la cámara haya concurrido en el caso.

La mayoría del tribunal, al votar la cuestión segunda del acuerdo, ha establecido que el solo hecho de haber el procesado retenido a la menor hasta el momento de su detención, caracteriza el rapto, «no siendo en este caso menester que mediase fuerza, intimidación o fraude, porque tratándose de una menor de doce años, el consentimiento que pudiera haber prestado, no es circunstancia que modifique el delito». Esta última parte de la declaración no ha sido impugnada, lo que bastaría para que se considerase inconvencible; pero, a pesar de decir el tribunal en el párrafo transcrito que el solo hecho de la retención caracteriza el rapto, agrega en el siguiente: «Resta examinar una otra circunstancia que la ley exige como condición *sine qua non* para que la sustracción o retención de una mujer pueda calificarse de rapto. Me refiero al propósito o mira deshonesto con que procede el raptor».

Resulta, pues, que la cámara considera necesario para que exista el delito de rapto, la concurrencia de dos condiciones: el hecho de la retención y la mira deshonesto con que ésta se produce.

De modo que, aun cuando se considerase inconvencible la declaración referente a la retención de la menor por no haber sido objetada en forma, como el recurrente ha atacado las leyes de la prueba en que se ha fundado la cámara para considerar probada la mira deshonesto, es preciso estudiar esa circunstancia a los efectos de determinar si ha existido el delito acusado.

Ahora bien, como la cámara encuentra que el propósito deshonesto ha sido en el caso la violación de la menor, se hace necesario ocuparse de las observaciones formuladas por el defensor respecto de los hechos en que el tribunal funda su pronunciamiento para declarar que exista el referido delito de violación.





Alega el recurrente en ese sentido, que la cámara ha aplicado mal el inciso 3.º del artículo 270 del código de procedimiento en lo criminal, al dar valor a un informe médico emanado de un solo perito, cuando el caso era de importancia, en razón de la pena, que podría elevarse hasta quince años de penitenciaria, y por la dificultad del caso examinado, como que se trataba de comprobar las huellas de la violación.

Los términos en que se halla redactada la disposición referida, obligan a examinar cada caso como lo ha hecho V. E. en los fallos pronunciados en las páginas 257, tomo I, pág. 267, tomo II de la 5.ª serie, a fin de establecer si es o no de poca importancia, teniendo en cuenta la poca naturaleza del mismo y las dificultades que puedan presentarse para llegar a conclusiones científicas perfectamente asertivas en razón de la insuficiencia de los datos suministrados por la inspección pericial, o por la falta de relación directa entre éstos, el acto imputado y la persona que se presume autora del mismo.

Para determinar si el caso que ha motivado el informe del doctor Wals que se impugna era o no de importancia, hay que ocurrir en primer término a la enseñanza de los médicos legistas.

Los autores de medicina legal señalan a los facultativos las precauciones que deben tomar cuando se trata de expedir un dictámen en un proceso de violación, indicando todos ellos las dificultades que ofrece la materia.

Lacassagne (*Précis de médecine judiciaire*, pág. 498), resume en las siguientes palabras la extensa exposición que hace sobre lo que debe comprender el examen de la víctima y de los demás datos que pueden concurrir a la demostración de los delitos de violación y de la persona del autor del mismo: «Si en toda circunstancia judicial, como dice M. Penard, es necesario pesar rigurosamente cada palabra del informe es sobre todo a propósito de los atentados a las costumbres que la nitidez, la concisión y la sobriedad de las conclusiones son indispensables.» Orfila (*Tratado de medicina legal*, tomo I, página 155), dice, refiriéndose a esta materia: «Son tales en ocasiones las dificultades que se presentan, que debe proceder el médico con la ma-



» por reserva para deducir consecuencias.» Y Zúno (*Compendio de medicina legal*, página 624) manifiesta: «Es necesario ser muy prudente al practicar el examen de una mujer que se dice desflorada y no dejarse llevar a pronunciar un juicio del cual puede depender el honor y la libertad de los ciudadanos.»

Por otra parte, basta examinar en cualquiera de los autores citados la serie de requisitos que aconsejan a los facultativos que deben practicar el examen de una mujer que se dice violada para comprender la dificultad del dictamen y la importancia de la cuestión, pues la pericia debe servir como elemento de prueba para acreditar el elemento material del delito.

En el presente juicio, negado categóricamente por el procesado que hubiera tenido tratos carnales con la menor Filomena y acusado por ésta de haber tenido contacto con ella en dos ocasiones, atentas las dificultades que la comprobación de las afirmaciones de la misma presentaba por el tiempo transcurrido y la naturaleza de los actos imputados, así como por la influencia decisiva que habrá de tener la prueba pericial en la solución de la causa, determinaban la importancia capital de la misma.

Entiendo, por tanto, que ha sido necesario en el caso, el examen de más de un perito, y que la cámara al dar fuerza legal al dictamen de fojas 24, ha aplicado erróneamente el inciso 3.º del artículo 270 del código de procedimiento en lo criminal.

El defensor alega igualmente la infracción de los artículos 252, 304 y 205 del código de procedimientos citado, la que dice haberse producido al apreciar las presunciones que determinaron la conclusión de ser Valdez autor del delito acusado.

Debiéndose decidir que el informe de fojas 24 carece de valor, y siendo ese dictamen la única prueba de la existencia del cuerpo del delito, según lo estableció la cámara al votar la cuestión 3.ª del *acuerdo*, éste no se encuentra acreditado y por tanto, no puede entrarse a considerar si median o no presunciones en vista de la expresa disposición contenida en el inciso 1.º del artículo 305 del código de procedimiento en lo criminal, el que resulta infringido por la cámara.

Tampoco es necesario tratar la alegación formulada por el



recurrente acerca de la ley aplicable al delito de violación, desde el momento que ha de resolverse que tal delito no se encuentra probado.

Si se decide, como opina este ministerio, que no se halla acreditado el delito de violación, que fué considerado por la cámara como la mira deshonesta del rapto denunciado, y se tiene en cuenta que el mismo tribunal consideró este propósito como una condición *sine qua non* de la existencia de dicho rapto, es necesario concluir que tampoco se ha probado este último delito desde el momento que se ha declarado faltar una de sus condiciones indispensables.

En consecuencia, corresponde declarar que en la sentencia recurrida se ha aplicado erróneamente los artículos 270, inciso 3.º del código de procedimiento en lo criminal y 19 de la ley número 4189, debiendo absolverse al reo de las imputaciones hechas por falta de prueba para condenarlo.

Sírvase V. E. así decidirlo.

IGNACIO M. GÓMEZ.

La Plata, etc.

## VII

### SENTENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

#### ACUERDO

En la ciudad de La Plata, reunida la suprema corte de justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa seguida contra Zenobio Valdez, por rapto y violación, se procedió a practicar la insaculación prescripta por el artículo 173 de la constitución, resultando de ella que en la votación debía observarse el orden siguiente: Doctores Capdevila, Rojas, Di-met, French, Alsina.

#### ANTECEDENTES

Procesado Zenobio Valdez por los delitos de rapto y violación a la menor Filomena o Miguela N., fué condenado por el juzgado del crimen del departamento del Centro, a cargo del doctor J. Florencio Ortiz, a sufrir la pena de diez años y seis meses de penitenciaría, accesorias legales y pago de costas; sentencia que fué confirmada por la de la cámara respectiva.

Contra el fallo de dicho tribunal, se han interpuesto los recursos de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley.

Oído el señor procurador general, llamados autos y encontrándose la causa en estado de sentencia, la suprema corte resolvió plantear y votar las siguientes:

#### CUESTIONES

1.ª — ¿Existe en la sentencia de fojas 96 la inconstitucionalidad alegada?

Caso negativo.

2.ª — ¿Está justificada la inaplicabilidad de ley que invoca el recurrente?

#### VOTACIÓN

En la primera cuestión propuesta, el doctor Capdevila dijo:

La cámara ha formulado como primera cuestión del acuerdo la siguiente: ¿La denuncia de fojas 5 es bastante para la formación de esta causa, tanto respecto del delito de rapto como del de violación?

Para resolverla, ha discutido diversas cuestiones alegadas por la defensa: la edad de la menor que se dice raptada y violada (fojas 97); la personería del denunciante (fojas 97 vuelta), y si la denuncia relativa al rapto, autoriza a investigar si hubo o no violación, fojas 99 vuelta.





Esos diversos puntos que son capitales en el proceso, que envuelven cuestiones de hecho y de derecho independientes entre sí, y están subordinados a disposiciones legales de distinto orden, no han podido involucrarse en una sola cuestión, para ser tratados y resueltos conjuntamente, sin violar el artículo 172 de la constitución que se ha invocado por el recurrente.

Lo mismo sucede con la cuestión segunda, que comprende dos principales: la de existencia de raptor, y la de quien sea su autor.

Igual defecto tiene la tercera: en la que conjuntamente se discute si existe violación comprobada, y si también lo está que su autor sea el procesado. La existencia de un delito, y la persona de su autor, forman dos cuestiones perfectamente caracterizadas, que deben tratarse con separación, como lo ha establecido la jurisprudencia de esta corte, interpretando el precepto constitucional ya citado.

Por las razones expuestas, voto por la afirmativa.

Los doctores Rojas, Dimet, French y Alsina, por los mismos fundamentos del voto que antecede del señor vocal doctor Capdevil, dieron el suyo también por la afirmativa.

Dado el resultado de la primer acuestión, el tribunal omitió ocuparse de la segunda.

Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces de la suprema corte.

FRENCH. — DIMET. — ROJAS. — CAPDEVILA. —  
D. ALSINA.

Ante mí:

*Héctor Perdriel.*

La Plata, etc.



## Y VISTOS.—CONSIDERANDO:

1.º — Que la cámara ha involucrado al votar la cuestión primera del acuerdo, diversos puntos de hecho y de derecho capitales en el proceso, independientes entre sí, que están subordinados a disposiciones legales de distinto orden y que no han podido comprenderse en una sola, y resolverse conjuntamente sin violar el artículo 172 de la constitución que se ha invocado por el recurrente.

2.º — Que lo mismo sucede al votar la segunda cuestión, que comprende las declaraciones de la existencia del rapto y la de quien sea su autor, y en la tercera, en que se trata de la violación y de quien la haya cometido, cuestiones que han debido tratarse separadamente, como lo ha establecido la jurisprudencia de esta corte.

Por estos fundamentos y los consignados en el acuerdo que precede, se declara que en la sentencia recurrida existe la inconstitucionalidad alegada, por quebrantamiento de las formas establecidas por el artículo 172 de la constitución.

En consecuencia, pase este proceso a la cámara 3.ª de apelación del departamento de la capital para que sea nuevamente fallado, y hágase saber a la de su procedencia.

NESTOR FRENCH.—CARLOS DIMET.—JOSÉ M. ROJAS.—  
JOSÉ A. CAPDEVILA.—DALMIRO ALSINA.

Ante mí:

*Héctor Perdriel.*

VIII

SENTENCIA DE LA CÁMARA 3.ª DE LA PLATA



En la ciudad de La Plata, reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la excelentísima cámara 3.ª de apelaciones, para pronunciar sentencia definitiva en la causa seguida a Zenobio Valdez, por raptor y violación de una menor, se procedió a practicar la insaculación prescripta por los artículos 173 de la constitución de la provincia, y 14 del reglamento de las cámaras, resultando de ella que en la votación debía observarse el orden siguiente: doctores Lozano, Acevedo, Lecot.

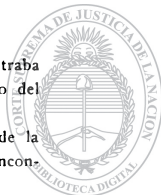
Anulada por la suprema corte la sentencia de fojas 96, dictada por la cámara de apelaciones del departamento del centro, confirmatoria de la de 1.ª instancia, que imponía al procesado Zenobio Valdez la pena de diez años y seis meses de penitenciaría y accesorias legales correspondientes, se resolvió por el tribunal, a la que le fué remitida la causa para nuevo fallo, que atenta su naturaleza y las alegaciones diversas hechas por la defensa en el juicio, y teniendo además en cuenta que contra la sentencia de fojas 75 se han deducido recursos de apelación por el acusado y su defensor, debían plantearse y votarse las siguientes

CUESTIONES

1.ª — ¿La disposición del artículo 141 del Código Penal autoriza a ejercer la acción privada que ella confiere en los casos de delitos contra la honestidad a los encargados de la guarda de la menor en el momento de su comisión, solamente cuando no tenga padres o éstos no ejercen la patria potestad?

En caso afirmativo:

2.ª — ¿Está probado que Jova Burgos era madre de la menor Filomena o Miguela Burgos y ejercía la patria potestad en la fecha en que se presumen perpetrados los crímenes que han originado este proceso?



3.ª — ¿Debe estimarse que la menor Miguela se encontraba bajo la guarda legal del defensor de menores del partido del Salto, don Guillermo Ham?

4.ª — ¿Cuál es la fecha probable de la desaparición de la menor Miguela del asilo «San José», del Salto, donde se encontraba depositada por el defensor de menores?

5.ª — ¿Se ha justificado legalmente que en la fecha a que se refiere la anterior cuestión la presunta víctima tuviese menos de doce años de edad?

6.ª — ¿Ha ejercitado legalmente el defensor, señor Ham, su acción, que, como guardador le confiere la ley penal, para denunciar, como lo hizo, a la autoridad policial el delito de rapto perpetrado contra su defendida?

7.ª — ¿Puede estimarse que los efectos de la expresada denuncia, en el caso *sub judice*, se extienden virtualmente al delito de violación cuando de las averiguaciones practicadas han resultado presunciones vehementes de su comisión por la misma persona a quien se denunció como raptor?

8.ª — ¿Está probado que el 26 de agosto de 1903 la menor Filomena Miguela Burgos fugó del asilo «San José», situado en el partido del Salto, en compañía de otra persona, a quien se le atribuye haberla incitado a que abandonara ese lugar?

En caso negativo:

9.ª — ¿Está probado que la referida menor al abandonar sola el citado asilo donde moraba por orden de su guardador, se dirigió a otros lugares, donde estuvo retenida contra su voluntad por otra persona?

En caso afirmativo de la cuestión 8.ª:

10.ª — ¿Se ha comprobado legalmente que Zenobio Valdez fué autor único del hecho a que se refiere la cuestión 8.ª?

En caso afirmativo de la 9.ª:

11.ª — ¿Se ha probado que Zenobio Valdez fué el autor de la retención forzada a que se refiere la cuestión 9.ª?

12.ª — ¿Existe en autos prueba legal bastante de que la menor Filomena o Miguela Burgos fué desflorada el 30 de agosto de 1903?





En caso negativo:

13.\* — ¿Existe prueba bastante de que dicha menor realizara el primer coito en una fecha posterior a la determinada en la cuestión precedente?

En caso afirmativo:

14.\* — ¿Cuál es la fecha en que debe estimarse realizado esa primera unión sexual?

15.\* — ¿Se reiteró el coito en una época posterior?

16.\* — ¿Cuál es la fecha en que debe estimarse producida esa reiteración?

17.\* — ¿Efectuóse con la menor algún coito posterior al 10 de septiembre de 1903?

18.\* — ¿Debe considerarse comprobado legalmente que Zenobio Valdez fué quien tuvo el primer concúbito con la menor Miguela, a que se refiere la cuestión 13.\*?

19.\* — ¿Fué autor del que se comprende en la cuestión 15.\*?

En caso afirmativo de la 17.\*:

20.\* — ¿Lo fué también del mencionado en la cuestión 17.\*?

En caso afirmativo de la 8.\*:

21.\* — ¿Debe calificarse de rapto el hecho a que se refiere la cuestión 8.\*?

En caso afirmativo de la 9.\*:

22.\* — ¿Corresponde calificar como delito de rapto el hecho enunciado en la cuestión 9.\*?

23.\* — ¿En qué fecha debe estimarse legalmente que entró en vigencia en el partido Salto, jurisdicción del departamento judicial del centro, la ley número 4189, titulada de reformas al código penal?

En caso que se resolviera que la víctima tenía 12 años cumplidos:

24.\* — ¿Hubo fuerza o intimidación por parte del violador al efectuar el primer coito?

25.\* — ¿Debe calificarse del delito de violencia el hecho a que se refiere la cuestión 12.\*?

26.\* — ¿Medió fuerza o intimidación en el caso a que se refiere la cuestión 15.\*?



27.ª — ¿Se ha de calificar como violación el hecho a que se refiere la cuestión 15.ª?

28.ª — ¿Hubo fuerza o intimidación en el caso a que se refiere la cuestión 17.ª?

29.ª — ¿Se trata en tal supuesto del delito de violación?

En caso negativo de una o más de las cuestiones que inmediatamente preceden:

30.ª — ¿Cuál es la calificación legal que corresponde al hecho mencionado en la cuestión 12.ª?

31.ª — ¿Cuál es la que debe asignarse al de la cuestión 15.ª?

32.ª — ¿Qué calificación corresponde al de la cuestión 17.ª?

33.ª — ¿Existe alguna atenuante que computar a favor del procesado Valdez?

34.ª — ¿Qué pronunciamiento debe dictarse en definitiva?

En la cuestión primera el señor juez, doctor Lozano, dijo:

Hay que relacionar entre sí las disposiciones contenidas en los dos párrafos del artículo 141 del código penal para penetrar debidamente al espíritu o intención legal que los preside. Si bien tomadas de las congéneres del artículo 463 del código penal de España, en su adopción han sufrido alguna variante encaminada, indudablemente, a restringir menos el ejercicio de la acción privada, que originan los delitos contra la honestidad.

En los casos de violación y rapto basta, según el artículo originario, la simple denuncia de la persona interesada: de sus padres, abuelos o tutores, y conforme al nuestro ya citado, la de la agraviada o la *«de la persona bajo cuyo poder se hubiese hallado cuando se cometió el delito»*.

Quiere decir entonces que el precepto legal argentino, a este respecto, es más ampliativo que el hispano, porque no determina nominativamente a quienes confiere, en particular, la acción persecutoria, sino que la acuerda en general, a todo aquel que está encargado de dirigir la persona de la que se presume ofendida en su honor; de manera pues, que además del padre, de la madre y del tutor, pudiendo éste ser el abuelo u otro pariente, estarán facultados para ejercer dicha acción, cualesquiera otras personas



que sin habérseles discernido expresamente el cargo de tutor o guardador, tengan bajo su custodia y cuidados a la agraciada en virtud de su incapacidad civil por menor edad.

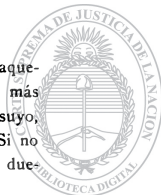
Pero nótese que nuestra ley penal, aparte de que ha querido que en caso alguno, no quede sin defensa el honor mancillado, ya sea que se trate de violación, como de estupro o rapto, cuando aquella resuélvase hacer, dispone también que cuando se trate de una impúber que no tenga padres ni guardador, pueda acusar cualquiera del pueblo o procederse de oficio.

Combinando pues, ambos preceptos, se infiere necesariamente, que la mente legal es suplir siempre la falta de aquellos que por los vínculos naturales de la paternidad, o por los que la semejan, aunque artificialmente, cuidando la persona del menor, no quede éste abandonado y sin defensa ante las funestas consecuencias que se originan de su honor ultrajado.

Más este propósito no debe entenderse que va hasta el punto de conceder el ejercicio tan delicado de acción semejante, que en muchos casos puede conducir a resultados acaso contraproducentes, así sin tramitación alguna, y de un modo indiferente, concediéndolos a unos u otros. En manera alguna ha podido ser esa el intento, porque de tal modo no habría verdadera consecuencia con el otro propósito más primordial, sin duda, de reservar en los casos de que se trata de una impúber, a las personas que sean sus padres o la guarden como pupila, el ejercicio de la acción.

En términos más concretos quiero expresar que no se trata de una mera substitución de personas, o sea de que si los que con mayor o preminente derecho no lo hacen, lo efectúen los que le sigan, porque la misma ley española aun cuando las nombra, no ha querido eso, sino únicamente establecer quiénes son los que pueden accionar, entendiéndose que lo harán los últimos cuando existan los anteriores.

Si el delito, por su naturaleza, ofende no solamente la honra de la agraviada, si que también de reflejo la de toda una familia, es a su jefe verdadero guardador de esa honra a quien compete el encargo de velar por ella, y el de pesar y medir todas



las alternativas que puedan emerger del hecho de denunciar aquello que acaso está cubierto por el velo del misterio. Nadie más que él puede disponer a su absoluto albedrío, de lo que es suyo, esto es, de lo que, hasta cierto punto, es su propia honra. Si no quiere, pues, que ésta salga hecha jirones a la plaza pública, dueño exclusivo es de esa su final determinación.

Es indispensable, por lo tanto, que no existan padres, que no se conozca su paradero o domicilio, esto es, que haya verdadera ignorancia de su existencia o también en el caso de que estuvieran privados legalmente de la patria potestad para que pueda suponerse como huérfana desvalida a la persona del menor, y sea entonces reemplazado por un tutor o un simple guardador o encargado de su defensa y entonces, le queda a éste la posibilidad legal de determinarse en tal sentido, y en último caso, o sea en aquel en que ese guardador no existiera, surge la acción popular u oficial.

Tal es la inteligencia que en mi sentir debe acordarse a las disposiciones recordadas; por ello voto afirmativamente.

Los señores jueces doctores Acevedo y Lecot, por análogas razones votaron en igual sentido.

En la cuestión segunda, el doctor Lozano, dijo: No existe en la causa un documento suficientemente comprobatorio a su respecto. El agregado a fojas 32, no demuestra otra cosa que el nacimiento de *Filomena* como hija *ilegítima* en la fecha que se indica, (5 de julio de 1892).

De la declaración de Jova Burgos (fojas 29 vuelta) que se atribuye la maternidad de la nombrada *Filomena* o *Miguela*, dando ciertos datos sobre el particular, entre ellos, el que se refiere a la duplicidad de nombres, se desprende la manifestación expresa de que hasta la fecha no se había presentado a reconocerla como su hija natural.

No creo necesario, por consiguiente, agregar nada más para dar mi voto por la negativa, el cual fundo por lo dispuesto por los artículos 328 y 332 del código civil y 263, 268 y 296 del código de procedimiento en lo criminal.



Los señores jueces doctores Acevedo y Lecot, por análogas razones votaron en igual sentido.

En la cuestión tercera, el doctor Lozano, dijo: De lo resuelto en la cuestión anterior, se desprende que en la fecha presuntiva de la comisión de los delitos que han originado esta causa, la menor Miguela no tenía padres reconocidos legalmente, ni tampoco se ha alegado tuviera tutor legítimo o dativo.

Por otra parte, en la denuncia misma de fojas 5, se expresa por el señor Ham que la referida menor se hallaba depositada en el asilo «San José», sito en el partido de Salto, y que procedía por informaciones de la superiora del citado asilo, acerca de la fuga del establecimiento que acababa de realizar dicha menor.

Teniendo, pues, presente lo que se determina en el artículo 396 del código civil respecto de los niños admitidos en los hospicios o casa de expósito por cualquier título, voto por la negativa.

Los señores jueces doctores Acevedo y Lecot, por análogas razones, votaron en igual sentido.

En la cuestión cuarta el doctor Lozano dijo:

Según la declaración del señor Ham, defensor de menores del Salto, fué el 26 de agosto de 1903 cuando la menor Miguela fugó del asilo (ver fojas 27 y 30). Esta fecha concuerda con la expresada en la declaración de Bernardo Arzubi (fojas 14) y la de Donato López (fojas 15), José Panillo (fojas 19), Tránsito R. de Panillo (fojas 20) y Manuela Panillo (de fojas 20 vuelta).

De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 252 a 254 del código de Procedimiento, voto en sentido de que la fecha de desaparición de la menor del asilo, fué la expresada del 26 de agosto.

Los señores jueces doctor Acevedo y Lecot, por análogas razones, votaron en igual sentido.

En la cuestión quinta el doctor Lozano dijo:

Insiste la defensa en el capítulo III de su escrito de fojas 84,



en que no existe prueba satisfactoria acerca de la edad de la presunta víctima, por carecer de valor legal la partida de nacimiento, cuyo testimonio corre a fojas 32, pues aquélla pertenece a una menor nombrada *Filomena*, entre tanto que la denuncia de fojas 5, origen del procedimiento invocado, refiérese a *Miguela Burgos*, y en ésta como en testimonios y parte oficial corrientes en autos, se nombra a dicha menor, atribuyéndole la edad de doce años.

Mas el proceso acusa datos tan revelantes de que en el caso no se trata de distinta persona, que no habría peligro de error al afirmarlo. Concuerda la fecha del nacimiento indicado por Joba Burgos, que se dice madre de esa menor, la del nombre de la denunciante ante el registro civil (Aniceta Peralta), y el de *Filomena* designada por la misma y que sirvió para la busca de la partida en el mismo lugar que se señala como del nacimiento, y hasta la razón de ponerle ese nombre, siendo satisfactoria la explicación de su cambio por el de *Miguela*.

Después de todo, la diferencia de edad atribuida a la menor por otras personas, no tiene más valor que el de un simple parecer, sin apoyo científico alguno, y en poco discrepa del que resulta de la dicha partida.

Esa pretendida falta de identidad ha debido justificarla la defensa, y no habiendo realizado de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 80 y 86 del código civil y 296 del código de procedimiento, voto por la afirmativa.

Los señores jueces doctores Acevedo y Lecot, por análogas razones, votaron en igual sentido.

En la cuestión sexta el doctor Lozano dijo:

Ha quedado establecido que la menor *Miguela* estaba asilada, y si bien en las direcciones y administraciones de esos asilos u hospicios reside la tutela de esos menores presumidos huérfanos o desvalidos, atento lo que se preceptúa en el artículo 396 del código civil, no debe olvidarse que la institución de la defensoría de menores, si bien de carácter administrativo, está instituida en todas las ciudades de la República para velar por la



buena dirección y manejo de las personas de los menores que no tengan padres conocidos o tutores legales, y entre sus múltiples deberes se encuentre el de impedir se les produzca daños corporales o maltratos, y el de representarlos legalmente ante quien corresponda al hacer la denuncia de delitos contra ellos, cometidos, cuando así lo reputé convenientes a los intereses de esos que de otro modo quedarían desamparados.

Si la superiora del asilo «San José» del Salto, denunció al defensor señor Ham la fuga de la menor como presuntiva de raptó, ejerció una atribución propia de su cargo, y librada a su criterio, al efectuar la denuncia y tanto más cuanto que como se ha dicho, careciendo la expresada Miguela de padres que la hubieran reconocido o de verdaderos guardadores, surgía de suyo, hasta la acción popular para la denuncia, (2.º párrafo del artículo 141, código penal).

Voto, en consecuencia, por la afirmativa.

Los señores jueces, doctores Acevedo y Lecot, por análogas razones, votaron en igual sentido.

En la cuestión séptima, el doctor Lozano dijo:

Mucho se ha discutido en esta causa sobre el punto, llegando la minoría del tribunal de apelación del centro a estimar que la denuncia de fojas 5, limitada al delito de raptó, no era bastante para formar proceso también por violación.

Pero resueltas las cuestiones precedentes en el sentido que lo han sido por este tribunal, la expresada cuestión no tiene ya la trascendencia que a *prima facie* pudiera haber presentado.

En primer lugar, el fundamento capital del silencio del denunciante, a cuya iniciativa ha subordinado la ley el ejercicio de la acción penal en los delitos contra la honestidad, es más aparente que real, si se considera que descubierto el velo que oculta a las miradas extrañas, la comisión de un raptó, que siempre es perjudicial para la honra de la raptada desde que se verifica con «miras deshonestas», y se autoriza la secuela de un procedimiento en que tiene que intervenir el ministerio público, haciendo forzoso el más completo esclarecimiento de los elementos que consti-



tuya el delito denunciado, es consecuencia ineludible, que si en la investigación se descubre, en la necesidad de inquirir sobre la existencia de los propósitos deshonestos atribuidos al raptor, la existencia de un estupro o violación, que no es la simple denuncia que sostiene el séquito de la causa sino la *querella* del ministerio público, la que pudiera dar margen a la procesación por los delitos mencionados, además del de raptor, desde que el desistimiento por perdón de la parte ofendida, como en el caso de adulterio, no estorbaría la conclusión de la causa por absolución o condena.

Pero aparte de todo eso, tratase como ya se ha dicho de una menor impúber (artículo 127 del código civil) y desvalida, luego por acción popular y *ex officio* puede procederse atento lo que se determina claramente en el artículo 141 ya citado.

Voto por ello afirmativamente.

Los señores jueces doctores Acevedo y Lecot, por análogas razones, votaron en igual sentido.

En la cuestión octava el doctor Lozano dijo:

La única constancia procesal a este respecto, es la declaración de la menor Miguela, insuficiente como medio de prueba, ya por la circunstancia de su corta edad, ya también porque no puede ser relacionada con otros datos del proceso, para tener por comprobado legalmente, que fué en efecto, sacada del asilo por el acusado, ni mucho menos que éste la incitara verdaderamente para la fuga, atento lo que se dispone en la ley 12, título 14 de la partida 3.ª y artículos 223, incisos 1.º y 253 del código de procedimiento, voto por la negativa.

Los señores jueces doctores Acevedo y Lecot, por análogas razones, votaron en igual sentido.

En la cuestión novena el doctor Lozano, dijo:

No expresa la menor Miguela Burgos que el acusado la retuviera contra su voluntad, en tal o cual paraje determinado, si bien refiere lo de su fuga en compañía de aquél y los cambios de habitación que realizó en tales condiciones y en el espacio de pocos días hasta el día 12 de septiembre, en que fué detenida y





entregada al defensor de menores del Salto (ver fojas 17, 22 y 33), así como el atentado contra el pudor que le atribuye al que acusa como raptor.

Más bien parece inferirse lo contrario de las declaraciones prestadas por la familia Panillo y Donato López, en cuyas casas respectivas, moró por algunos días la expresada menor (fojas 15 y 19 a 21).

Atento lo que se dispone en los artículos 252 a 254 del código de procedimiento, voto por la negativa.

Los señores jueces doctores Acevedo y Lecot, por análogas razones votaron en igual sentido.

Habiéndose resuelto negativamente las cuestiones 8.ª y 9.ª, el tribunal resolvió no ocuparse de las cuestiones 10.ª y 11.ª.

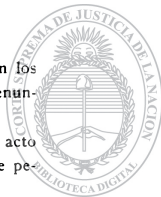
En la cuestión duodécima, el doctor Lozano, dijo:

Estoy conforme con la observación que la defensa hace acerca de la ruptura de la membrana húmen, como signo, que puede ser equivoco si se la presenta como única prueba de desfloración de una virgen por efecto del contacto sexual, no solamente enseña eso Legrand du Saulle, sino todos los médicos legistas más renombrados.

Lo mismo ocurre con relación al punto tan importante de determinar la época de la desfloración y la fecha en que han tenido lugar los actos de la cópula carnal cuando se trata de casos de reiteración de coitos.

Opino pues con la defensa, que hay razón más que fundada para impugnar el valor legal que ha querido acordársele al informe médico de fojas 24, no porque emane de un sólo perito desde que los casos de estupro y violación son precisamente de aquellos llamados de urgencia a que se refiere el inciso 2.º del artículo 270 del código de procedimiento, sino porque tratándose de determinar si hubo o no desfloración reciente, la pericia facultativa ha debido expedirse conforme a lo que se prescribe en el artículo 289 del código de procedimiento.

El citado informe no llena ni medianamente siquiera tan justas exigencias, observándose en él que ni se llega tampoco a



conclusiones terminantemente asertivas, ni menos se invocan los principios de orden científico en que se apoyan las que se enuncian por el perito informante.

¿Por qué estima éste que la menor ha sido objeto del acto carnal con un individuo del sexo masculino, cuyo pene es de pequeñas dimensiones?

Lo dice pero no lo demuestra en forma alguna.

¿Cuándo tuvo lugar el primer coito? Tampoco puede afirmarlo de un modo categórico. Pero no es solamente lo que se observa, sino que el perito asevera que el coito ha de haberse repetido con poca frecuencia, cuando precisamente el signo que presenta como característico o sea de la completa cicatrización de las canículas mirtiformes acusarían todo lo contrario, esto es, un comercio sexual regular, como lo enseña Lestand en su manual de medicina legal (página 21).

Nada nos dice el perito sobre otros signos de sumo valor en ese género de exámenes, cuáles son los relativos a la coloración de las partes genitales, estado de las carnes, de la vagina, temperamento de la menor y otras señales que deben ser observadas.

Fundado pues en estas consideraciones y en lo que se dispone en el artículo 293 del código de procedimiento, doy mi voto por la negativa.

Los señores jueces doctores Acevedo y Lecot, por análogas razones votaron en igual sentido.

En la cuestión décima tercera, el doctor Lozano, dijo:

Fundándome en idénticas consideraciones a las aducidas en la anterior cuestión, doy también mi voto por la negativa.

Los señores jueces doctores Acevedo y Lecot, por análogas razones votaron en igual sentido.

El resultado obtenido en las dos cuestiones precedentes, hizo innecesario que el tribunal se ocupara de las cuestiones 14.<sup>a</sup> a 20.<sup>a</sup> inclusive.

Habiéndose resuelto también afirmativamente la cuestión



5.ª y negativamente las cuestiones 8.ª y 9.ª, omitiéndose la votación respecto de las cuestiones 21.ª a 33.ª inclusive.

En la cuestión trigésima cuarta, el doctor Lozano, dijo:

Teniendo presente lo que se ha resuelto por el tribunal en las cuestiones votadas en este acuerdo, y de conformidad con lo que se dispone en el artículo 440 del código de procedimiento, corresponde absolver libremente a Zenobio Valdez por no haberse comprobado la existencia de los delitos de rapto y violación que le fué imputado; revocándose en consecuencia la sentencia apelada de fojas 75 y ordenándose su inmediata libertad del procesado.

Tal es mi voto.

Los señores jueces doctores Acevedo y Lecot, por análogas razones, votaron en igual sentido.

Con lo que terminó el acto firmando los señores jueces.

LOZANO.—ACEVEDO.—LECOT.

Ante mí:

*Carlos Morales Bustamante.*

Es copia fiel de su original que se halla al folio 75 del libro 18 de Acuerdos y Sentencias en lo criminal de esta excelentísima cámara.—*Carlos Morales Bustamante.*

SENTENCIA

La Plata, etc.

Y Vistos:

Por los fundamentos del precedente acuerdo, se revoca la sentencia apelada de fojas 75, absolviéndose libremente al procesado Zenobio Valdez de los delitos de rapto y violación que le fueron imputados; ordenándose en consecuencia su inmediata libertad. Devuélvase la causa al juzgado de su procedencia, certificándola por el correo.

LOZANO.—ACEVEDO.—LECOT.

Ante mí:

*Carlos Morales Bustamante.*





# CAUSA DE FRANCISCO GUASTIERI

---



## SENTENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA (1)

SUMARIO.—Existe inaplicabilidad de ley cuando los hechos declarados por la cámara son bien constitutivos de la agresión ilegítima con peligro de la vida, y no desconociendo la falta de la provocación suficiente por parte del agredido, condena al procesado a diez años de presidio.

### ACUERDO

En la ciudad de La Plata, etc., reunida la suprema corte de justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa seguida a Francisco Guastieri por homicidio, se procedió a practicar la insaculación prescripta por el artículo 173 de la constitución de la provincia, resultando de ella, que en la votación debía observarse el orde nsiguiente: Doctores Acevedo, Etcheverry, Alsina, Matienzo y Lecot.

### ANTECEDENTES

Procesado Francisco Guastieri, por homicidio en Chivilcoy, ante uno de los jueces del crimen y correccional del departamento del centro, fué absuelto en primera instancia.

---

(1) No publico la defensa ni los recursos que presenté en esta causa, porque no los conservo y no he podido encontrar el expediente. La sentencia corre inserta en los fallos de la suprema corte y le suprimo lo que se refiere a inconstitucionalidad que no prosperó. Mi defendido que había sido condenado por dos cámaras a presidio, fué absuelto por la corte.



Apelada esta sentencia, la cámara la revoca imponiendo al procesado la pena de diez años de presidio y accesoria legales.

Recurrida ésta por inconstitucionalidad, esta corte la anula y remite la causa a la cámara del norte para que pronuncie nueva sentencia.

La cámara del norte revoca la sentencia del juez de primera instancia, condenando a Guastieri a doce años de presidio.

Contra esta sentencia se interpone para ante esta corte, por el doctor Tomás Jofré, el recurso de inaplicabilidad de ley, fundado en la violación de las leyes de la prueba, inaplicabilidad del artículo 81, inciso 8 del código penal, en la errónea aplicación del artículo 17, capítulo I, inciso 1.°, debiendo aplicarse el artículo 17, número 4, inciso D.

Oído el señor fiscal de cámaras, por excusación del señor procurador general, llamados autos y estando esta causa en estado de pronunciar sentencia, la suprema corte resolvió plantear y votar la siguiente

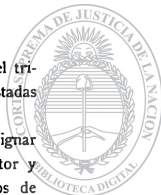
#### CUESTIÓN :

¿Se encuentra justificado el recurso de inaplicabilidad de ley deducido?

En la cuestión planteada el doctor Acevedo dijo:

El primer *motivo* de este recurso, se hace consistir en una mala aplicación de las reglas de la prueba y hermenéutica jurídica al declarar el tribunal sentenciador, que vale más la *confesión* de fojas 13, ratificada a fojas 43, y al quitar valor a la de fojas 65. Esas reglas, según el señor defensor, enseña que la *confesión judicial* para ser prueba, debe prestarse ante *juez competente*; *ser circunstanciada* y extenderse acta formal inmediatamente que sea articulada. Apoya sus conclusiones, el señor defensor, en las enseñanzas de Mittermaier y de Framarino que en parte transcribe a fojas 116 y vuelta de su ilustrado escrito.

Empero, la defensa no ha señalado *concretamente* la ley violada, en una materia que está legislada por el código de procedimientos;



debiendo observarse que tanto la *declaración*, de fojas 34, que el tribunal acepta, como la de fojas 65 que rechaza, han sido prestadas ante la autoridad judicial.

La cámara aplica, pues, el artículo 485 del código, para asignar fe a la indagatoria del inculpado, prestada ante el juez instructor y competente y no a la simple declaración ante los funcionarios de policía.

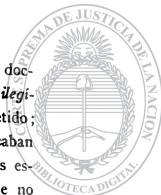
Otra puede ser la doctrina más conveniente en materia de procedimiento penal, apartándose de los textos que rigen actualmente dentro de la legislación argentina; en cuyo concepto las enseñanzas de Framarino, extractadas por el señor defensor, podrían conmover el sistema de procesamiento vigente. Pero esto es ajeno al recurso de inaplicabilidad deducido, que ha de versar sobre infracciones del derecho, tal como se haya organizado por las leyes procesales, o de la doctrina consagrada por la legislación que nos rige.

No obstante lo que dejo expresado, esto es, de no encontrarse fundado el motivo del recurso que dejo analizado; por lo que debe quedar inmovible la decisión de la cámara en que asigna el valor de *confesión* a la indagatoria de fojas 13, ratificada ante juez competente, no obstante ello, reputo demostrada la *inaplicabilidad* de ley y de doctrina sustentada por el señor defensor, en cuanto, yendo al fondo del derecho aplicado, impugna la decisión recaída sobre la cuestión cuarta.

El tribunal *a quo*, acepta como hecho cierto y probado en juicio, el *ataque ilegítimo* de la víctima; declara que esa agresión se inició por vías de hecho, constituida por un acometimiento en que Fabiani sale al encuentro de Guastieri *armado de una sierra* y reconoce que antes del hecho mismo, medió un incidente entre agredido y agresor, en que Guastieri *desarmó* a Fabiani. Pero se detiene para aceptar la *exceptio doli*, con que el inculpado se defiende o excusa su acción, porque encuentra que la variante o modificación introducida en la declaración ulterior de fojas 65, revelan que el acusado no es sincero, desde que ahora alega *que Fabiani le tiró un golpe con la sierra* (lo que antes dijo), *siendo entonces que le produjo la lesión* y que esa sierra cayó de las manos de Fabiani, *después de ser herido*.

Las circunstancias o hechos declarados por el tribunal son bien

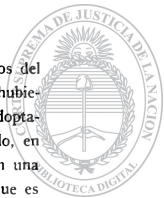




constitutivos de ese estado real, concreto, que la legislación y la doctrina califican de acometimiento injusto y grave. La *agresión ilegítima*, con peligro para la vida o la integridad física del acometido; de ese estado a que se referían las leyes romanas cuando autorizaban el empleo de la violencia *ob tutelam corpori sui*, y que las leyes españolas han previsto, cuando sancionan como un derecho el de no esperar el golpe que puede ser fatal para el agredido, «si viniendo el otro contra él, trayendo en la mano cuchillo sacado, o espada o *palo* u otra *arma cualquier*, con que lo pudiese matar, natural cosa es, e non guiada, que todo ome haga poder de amparar su persona de muerte... e non ha de esperar que el otro le fiera primeramente porque podría acaecer que por el primer golpe que le diera, podría morir el que fuese acometido, e después non se podría amparar».

La defensa *proporcionada adecuada* al ataque, exigida por la doctrina moderna, y que puede verse en las sabias enseñanzas del comentador Groizard, no puede ser la defensa que nace de la repulsión calculada o medida por el agredido; porque en una escena rápida y mientras el agresor mantiene su actitud de violencia que ha iniciado por *vías de hecho*, y no por simples amenazas más o menos formales, demostrando su ánimo hostil, no es dado exigir al acometido toda la serenidad y reflexión que pudieran indicarle no herir o matar. La ley no exige la necesidad absoluta, sino la necesidad *racional*; esto es lo que resulta de las circunstancias en que se encontró el agredido. El momento indivisible en que el acometido ve el peligro actual o inminente; entrando entonces como factor para juzgar de la «necesidad racional» la creencia de buena fe del acometido en el riesgo para su vida o integridad física; buena fe que protege y legitima su acción. Sin duda alguna, es indispensable que existan *vías de hecho* peligrosas, y son éstas las que declara probadas la cámara, aun ateniéndose al primer relato del inculpado (el de fojas 13 *ratificado* a fojas 34), puesto que Fabiani, *armado de una sierra*—instrumento peligroso—avanza sobre Guastieri, y le *tira golpes*; sin que exista solución de continuidad en los hechos, puesto que su actitud de violencia se mantiene en el momento de ser herido.

El tribunal no ha declarado que Fabiani cesare en su agresión cuando fué lesionado, ni el inculpado dice eso en su relato, que acepta



la cámara. La circunstancia de que la sierra cayera de las manos del agresor, es una incidencia que no demuestra que todo peligro hubiera desaparecido; por el contrario Fabiani, según los hechos adoptados por el tribunal—persiste en su ataque. Puede haber existido, en ese instante, una ventaja para el agredido; pero esta ventaja en una escena breve y violenta, no es el exceso en la defensa, desde que es *durante la agresión misma* que el inculpado ha empleado la violencia para repeler aquélla o impedir su continuación.

Y a estas circunstancias referentes al hecho mismo, se agregan las que se constatan por la *declaración de fojas 13*, y que el tribunal sintetiza refiriéndose a un incidente anterior, en que *Guastieri desarmó a Fabiani* (véase fojas 147 del acuerdo), me parece que se acenúa aún más que no hubo exceso en la defensa. En efecto. Fabiani, según esos antecedentes aceptados por el tribunal *a quo* había ya acometido por dos o tres veces a Guastieri, *esgrimiendo un cuchillo* primero, del que fué despojado por el agredido, y un palo después; y debe entonces admitirse la buena fe del agredido, es decir, en creencia y en el peligro cierto ante la tenacidad con que Fabiani volvió a acometerlo, con instrumentos capaces de dañarle, y no dejando ya duda alguna de sus hostiles propósitos.

Estos antecedentes, además despojan de toda importancia a las modificaciones que el acusado introdujera posteriormente (variantes que no son *retractaciones* en el sentido de la ley); porque se explica que el inculpado haya querido afirmar que desnudó un cuchillo ante la agresión de Fabiani, y no precisamente amañar un relato diferente con el intento de desfigurar la verdad; basta observar que en lo fundamental, el procesado no *retracta* sus dichos, es entonces el caso de seguir las enseñanzas del mismo Mittermaier, citado por la cámara, que indican al juez, la conveniencia de no descuidar el contexto en su diversos interrogatorios, no tomando aisladamente sus diversas manifestaciones, si se quiere penetrar en lo posible, la sinceridad con que se producen.

En resumen, yo encuentro en los *hechos* declarados, probados por el tribunal de apelación, aparte de la «agresión ilegítima» admitida, el empleo de un medio racionalmente necesario en el acto de

hacer uso el inculpado del arma que llevaba consigo, y herir de un golpe de *cuchillo* a Fabiani en circunstancias que lo acometía.

En este concepto, y no habiéndose desconocido por la cámara la existencia de «falta de provocación suficiente» de parte del agredido, en relación al ataque imprevisto, juzgo que el acusado ha ejercitado el derecho de repeler la fuerza con la fuerza, al causar a Fabiani la herida que le produjo la muerte: *vis viur repellere licitum est*, y que por tanto, debe aplicarse al caso, el precepto del artículo 81, inciso 8.º del código penal, cuya violación se alega por la defensa; declarándose por esta corte que existe la inaplicabilidad de ley y de doctrina que al efecto se atribuye al fallo dictaminado por el tribunal de segunda instancia.

Voto en el sentido expuesto.

En la misma cuestión, el doctor Etcheverry dijo, que también votaba afirmativamente.

No es necesario, a juicio mío, que me detenga en demostrar la ineficacia y los razonamientos del recurso, en cuanto atañe al vicio de inaplicabilidad de ley y de doctrina, ni encuentro que es fundada la oposición misma, siquiera sea en uno de los motivos de dicho recurso, sobre todo, lo creo tanto menos necesario, cuando la tarea resulta perfectamente cumplida por el voto del primer turno a que adhiero una vez más.

En efecto; si el Tribunal ha encontrado que existía agresión ilegítima (como sucedió ya con igual apreciación del Tribunal del Centro), es extraño que haya decidido que la circunstancia de haberse caído de las manos del agresor el arma en los momentos que el procesado acometió a su vez y mató, que tal circunstancia, decía, prive a la defensa del carácter de tal por no aparecer ya necesaria racionalmente tal actitud. No hay lógica jurídica en esta conclusión, por cuanto la racionalidad del medio, no se aprecia según las reglas generales del juzgador que ve los hechos y su desarrollo fríamente desde su mesa de trabajo, y después de consumado, se aprecia o justifica según la creencia u opinión de buena fe del atacado, y tal como él ha visto el peligro inminente para su vida o integridad física. En este peligro, existiendo agresión ilegítima según el momento crítico





de su culminación y la creencia del protagonista, lo que determina la necesidad racional de la defensa, como lo enseñan Pacheco y Chauveau Adolphe y las doctrinas recibidas en nuestros tribunales, sancionadas también, por reiteradas decisiones de esta suprema corte.

Voto, pues, por la afirmativa.

El doctor Alsina manifestó estar conforme con el voto del doctor Acevedo y concordantes consideraciones del doctor Etcheverry, dando el suyo también por la afirmativa.

Los doctores Matienzo y Lecot, dieron su voto en sentido afirmativo, por análogas consideraciones a las emitidas por los señores jueces doctores Acevedo y Etcheverry en la cuestión planteada.

Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces de la suprema corte:

D. ALSINA. — ACEVEDO. — MATIENZO. —  
LECOT. — ETCHEVERRY.

Ante mí:

*Luis A. Costa.*

#### SENTENCIA

La Plata, etc.

#### Y VISTOS.—CONSIDERANDO:

1.º — Que en cuanto a la mala aplicación de las leyes de la prueba, la defensa no ha señalado concretamente la ley violada, en una materia que está legislada por el código de procedimiento (artículo 485 del código de procedimiento penal);

2.º — Que las circunstancias o hechos declarados por el tribunal, al resolver la cuestión cuarta, son bien constitutivos de ese estado real y concreto que la doctrina y la legislación califican de *acontecimiento injusto y grave de agresión ilegítima*, con peligro de la vida o de la integridad personal;



3.° — Que la cámara no ha desconocido el requisito de «falta de provocación suficiente» por parte del agredido, de donde el acusado ha podido, usando de su derecho, repeler la fuerza con la fuerza, por lo que es de aplicación al caso, el artículo 81, inciso 8.° del código penal.

Por estos fundamentos y demás consideraciones consignadas en el acuerdo que precede, se declara que se ha justificado la de inaplicabilidad de ley.

En consecuencia, déjase sin efecto la sentencia recurrida, y firme la de primera instancia que absuelve al procesado.

Devuélvase la causa a la cámara de su procedencia.

D. ALSINA. — ACEVEDO. — MATIENZO. —  
LECOT. — ETCHEVERRY.

Ante mí:

*Luis A. Costa.*

# CAUSA DE VICENTE PERALTA

---



## SENTENCIA DE LA SUPREMA CORTE

SUMARIO. — La voluntad criminal a que el artículo 6.º del código penal se refiere es la resolución de alcanzar un resultado determinado, como objeto directo y fin propuesto en la deliberación del agente. Cualquier otro resultado imprevisto por éste, aunque constituya delito en sí mismo, no puede presumirse comprendido en la voluntad criminal encaminada a otro objeto.

## ACUERDO

En la ciudad de La Plata, a 29 de marzo de 1915, reunida la suprema corte de justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa seguida a Vicente Peralta, por lesiones, en 25 de Mayo, se procedió a practicar la insaculación prescripta por el artículo 173 de la constitución, resultando de ella que en la votación debía observarse el orden siguiente: Doctores Alsina, French, Rojas Capdevila, Dimet.

## ANTECEDENTES

Procesado Vicente o Juan o Juan Vicente Peralta por lesiones a doña Joaquina Pernea, en 25 de Mayo. *fué condenado* por el señor juez del crimen del departamento del Centro, *a sufrir la pena de*

*cuatro años y seis meses de penitenciaría y accesorias legales, sentencia que ha sido confirmada por la cámara de dicho departamento.*

Contra el fallo del tribunal de apelación se ha deducido por el defensor del procesado, doctor Tomás Jofré, el recurso de inaplicabilidad de ley, fundado en la errónea aplicación del artículo 6.º del código penal y el artículo 17 de la ley número 4189, y sosteniendo que han debido aplicarse al caso los artículos 15, 16, inciso 1.º y 18, inciso 2.º, del mencionado código.

Oído el señor procurador general, llamados autos y encontrándose la causa en estado de sentencia, la suprema corte resolvió planear y votar la siguiente

#### CUESTIÓN :

¿Se halla justificado el recurso de inaplicabilidad de ley deducido?

#### VOTACIÓN

En la cuestión planteada el doctor Alsina dijo :

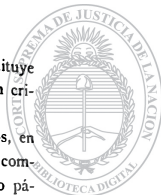
La mayoría de la cámara sintetiza los hechos que motivan este proceso, estableciendo que el acusado Peralta arrojó un vaso contra Frontaura, pero no le pegó a éste, sino a la señora Pernea, que había llegado en ese momento al lugar del hecho ; y fundándose en que la acción de Peralta, al arrojar el vaso, fué voluntaria con el fin de producir un resultado delictuoso, y en que se ha producido un resultado de esta naturaleza como consecuencia inmediata y directa de aquella acción, declara a Peralta responsable como autor voluntario del hecho realmente cometido, o sea de la lesión inferida a la señora Pernea. El defensor, doctor Jofré, impugna esta conclusión, alegando errónea aplicación del artículo 6.º del código penal y del artículo 17, inciso 2.º, de la ley de reformas a dicho código, número 4189, fundándose en que de los autos resulta, según los hechos reconocidos por la mayoría de la cámara, que el procesado no tuvo la voluntad criminal de herir a la mencionada señora, y que si el hecho se





produjo, fué debido a una circunstancia casual y fortuita: la de haberse presentado la víctima en el preciso momento en que Peralta arrojaba el vaso sobre Frontaura. La mayoría de la cámara, si bien no ha aplicado expresamente el artículo 6.º del código penal, ha fundado en su doctrina la responsabilidad del procesado, por la presunción legal de voluntad criminal que aquél declara, en la ejecución de hechos clasificados de delitos; pero el mismo artículo expresa que aquella presunción subsiste, en tanto que no resulte una presunción contraria de las circunstancias particulares de la causa. Ante esta excepción de la ley, es fundada, a mi juicio, la errónea aplicación de la misma que se ha alegado. La lesión recibida por la señora Perna, considerada en absoluto como hecho calificado de delito, haría presumir, según el artículo 6.º citado, la voluntad criminal en su autor, de lesionar a dicha señora; pero relacionada con el hecho primordial reconocido, del lanzamiento del vaso por aquél con intención de dañar directamente a Frontaura, este hecho constituye sin duda alguna una presunción contraria de la voluntad de dañar a aquella señora. La voluntad criminal a que el artículo 6.º del código penal se refiere, es la resolución de alcanzar un resultado determinado, como objeto directo y fin propuesto en la deliberación del agente. Cualquier otro resultado imprevisto por éste, aunque constituya delito en sí mismo, no puede presumirse comprendido en la voluntad criminal encaminada a otro objeto. Son estos resultados imprevistos y que no son consecuencia necesaria o habitual del hecho ejecutado, pero que, según las circunstancias, ha debido o podido prever el agente al realizar su propósito real, los que, sin justificar su acción, le hacen responsable de culpa o imprudencia, según la doctrina de los artículos 16 y 17 del código penal; así, la ley 6.ª, título 15, de la partida 7.ª, previendo casos análogos al de esta causa, decía:—«Peleando dos omes en en uno, si alguno dellos queriendo ferir aquel con quien pelea, firiessse a otro, magüer non lo fiziesse de su grado, tenudo es de fazer emienda; porque como quier él non fizo a sabiendas el daño al otro, pero acaeciò por su culpa.» Hauss, citado por el señor procurador general, y por la defensa, supone el caso de estos autos diciendo: «El mal que se tenía intención de ocasionar a una persona determinada ha sido hecho a otra persona, que el agen-





te no ha tenido en vista: en este caso, el mismo hecho constituye dos infracciones, en la que la una tiene por causa una resolución criminal y la otra una falta de previsión.»

Considero que es ésta la doctrina aplicable al caso de autos, en el que, como dice el señor procurador general, resulta un delito completo, intencional, respecto de Frontaura, previsto por el último párrafo del artículo 17 de la ley de reformas al código penal, y un delito por culpa, respecto de la señora Pernea, comprendido en los incisos 1.º y 4.º del artículo 16 del citado código, relacionado con el inciso 2.º, capítulo II, del referido artículo 17, cuya aplicación hace procedente la inaplicabilidad alegada de esta última disposición.

Por estas consideraciones, y por las concordantes del dictamen del señor procurador general, voto afirmativamente, correspondiendo, en consecuencia, reformar la sentencia recurrida, y de acuerdo con las reglas de los artículos 86 y 52 y 18, inciso 2.º, del código penal, condenar al procesado a la pena de diez meses de arresto.

Los doctores French, Rojas, Capdevila y Dimet, reproduciendo las consideraciones expuestas en el voto que antecede del señor vocal doctor Alsina, dieron también el suyo en el mismo sentido.

Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces de la suprema corte.

DIMET. — FRENCH. — ROJAS. —  
CAPDEVILA. — D. ALSINA.

Ante mí:

*Héctor Perdriel.*



## Y VISTOS.—CONSIDERANDO:

1.º—Que si bien la cámara no ha aplicado expresamente el artículo 6.º del código penal, ha fundado en su doctrina la responsabilidad del procesado, por la presunción de voluntad criminal que ese artículo declara en todo hecho calificado de delito.

2.º—Que la indicada disposición expresa que aquella presunción subsiste en tanto que de las circunstancias particulares de la causa no resulta una presunción contraria.

3.º—Que, relacionada la lesión recibida por la señora Pernea con el hecho primordial reconocido del lanzamiento del vaso por el reo, con intención directa de dañar a Frontaura, este hecho constituye sin duda alguna una presunción contraria de la voluntad de dañar a aquella señora.

4.º—Que la voluntad criminal a que el artículo 6.º se refiere, es la resolución de alcanzar un resultado determinado, como objeto directo y fin propuesto en la deliberación del agente y cualquier otro resultado imprevisto por éste, en que constituya delito por sí mismo, no puede presumirse comprendido en la voluntad criminal encaminada a otro objeto.

5.º—Que tales resultados imprevistos, que no son consecuencia necesaria o habitual del hecho ejecutado, pero que, según las circunstancias, ha debido o podido prever el agente los que le hacen reo de culpa o imprudencia, según la doctrina de los artículos 16 y 17 del código penal y de la ley 6.ª, título 15, de la partida 7.ª

6.º—Que ésta es la doctrina aplicable al caso de autos, debiendo declararse al acusado responsable de un delito intencional respecto de Frontaura, previsto por el último párrafo del artículo 17 de la ley de reformas al código penal, y de un delito por culpa respecto de lesión inferida a la señora Pernea, comprendido en los incisos 1.º y 4.º del artículo 16 del citado código, relacionados con el inciso 2.º, capítulo 2.º, del referido artículo 17.

Por estas consideraciones y las consignadas en el acuerdo que

precede y concordantes del dictamen del señor procurador, se declara que en la sentencia recurrida existe la inaplicabilidad de ley alegada, correspondiendo aplicar al procesado la pena de diez meses de arresto.

Devuélvase a la cámara de su procedencia sin más trámite.

CARLOS DIMET. — NÉSTOR FRENCH. —  
JOSÉ MARÍA ROJAS. — JOSÉ A. CAP-  
DEVILA. — DALMIRO ALSINA.

Ante mí:

*Héctor Perdric'.*



# TERCERA PARTE

---

## DOS CAUSAS RUIDOSAS







## I

### DEFENSA DEL DOCTOR TOMÁS JOFRÉ

1. — Antecedentes del hecho. — 2. — El escrito del querellante. — 3. El carácter de C. — 4. ¿No serán imaginarias las relaciones de C. con Q. A.? — 5. ¿Homicidio o suicidio? — 6. In dubio pro reo.

1. — Aníbal Vanoli y Carolina C., los actores de este drama, se conocieron en 1906, en el partido de Coronel Pringles, de la provincia de Buenos Aires, donde los padres de ambos, gente honorable, poseían establecimientos ganaderos. Carolina tenía a la sazón 22 años de edad y Aníbal 21. Poco tiempo después nació entre ellos una ardiente simpatía que los llevó a proyectar su enlace, a lo que se opuso decididamente el padre de la joven, don J. C. Este, quizá para evitar la realización de ese proyecto, se ausentó a Europa, llevando a su hija, y fué a establecerse en Burdeos, juntamente con su otra hija M., casada con el señor Q. A., que desempeñaba las fun-

---

(1) La causa seguida a Aníbal P. Vanoli, de la que publicamos unas constancias, se encuentra pendiente de sentencia de la cámara criminal de la capital de la república. La prensa periódica ha dado cabida a la acusación fiscal y a la sentencia del juez que condenó a Vanoli. Pero se ha negado a publicar los descargos que han pretendido hacer el acusado, de tal manera que sólo se ha oído una sola campana. Para evitar esa injusticia, insertamos en este libro los escritos que figuran en el texto.



ciones de cónsul de la República Argentina en esa ciudad. En cuanto a Vanoli, permaneció en el país, dedicado a la atención de los valiosos intereses rurales que había heredado de su padre y de los que pertenecían a sus hermanas y a su señora madre (1).

La separación de los novios duró aproximadamente nueve años, que no bastaron a extinguir el amor que había nacido entre ellos, puesto que al regresar de Europa la familia C., en 1915, volvióse a hablar de matrimonio entre Carolina y Vanoli, el que se realizó, finalmente, en esta ciudad el 5 de junio del mismo año (2).

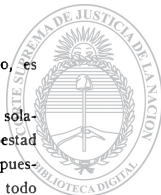
La pareja no fué feliz. Desde el primer momento surgieron problemas que no habían de terminar con la muerte violenta de Carolina, desde que Vanoli continúa aún su calvario y se encuentra bajo la imputación de un crimen horrendo. La noche de bodas Vanoli notó que su esposa no le aportaba la virginidad a que él, con razón, creía tener derecho, y ahincadamente buscó la confesión de la culpa, obteniéndola plena y concluyente: Carolina había sido poseída por Q. A. mucho antes del matrimonio. La impresión que le produjo esa revelación no es para descripta. «Solamente yo sé—nos decía el reo—lo que he padecido, lo que he llorado y lo que he sufrido, en las horas amargas que siguieron al matrimonio.» Y no era para menos: había hecho un casamiento de amor; era robusto, joven, rico, poseía todos los atributos de la virilidad y el hado adverso lo colocaba sin preparación previa, frente a frente a la más cruel de las desilusiones.

Por comparación podemos darnos cuenta de las sensaciones que debieron sacudir a este hombre, recordando las palabras del hermano de la víctima, don E. C., al narrar lo que él sintió cuando Vanoli puso en su conocimiento que Carolina había sido la querida de Q. A. durante los últimos cuatro años. «El haberme faltado el piso bajo los pies — dice el señor C.—, y el derrumbe de toda la casa en ese momento, no me hubiera producido una conmoción tan espantosa como la que experimenté. — ¡Aníbal! ¡Eso no es posible, eso es ho-

---

(1) Véase querrela presentada por don E. C., fojas 144 vuelta.

(2) Véase querrela citada, fojas 148.



rroroso!—exclamé yo, y él, con calma, siguió:—Sí, Eugenio, es cierto; Carola me lo ha confesado» (1).

Si fué esa la impresión que recibió el hermano, afectado solamente por los vínculos de sangre, es fácil imaginarse la tempestad desarrollada en el ánimo atribulado de Aníbal Vanoli, el esposo puesto en ridículo, el amante que veía desplomarse de un solo golpe todo el andamiaje construido en largas horas de ilusiones y esperanzas. En cuanto a la calma que E. C. atribuye a Vanoli sólo nos demuestra el esfuerzo para mantenerla, o el engaño de un observador incapaz de sospechar las misteriosas torceduras que martirizaban aquella alma herida y sufriente.

Por un fenómeno psicológico, difícil de explicar, muchas veces la víctima desea llegar hasta el fondo mismo de las cosas y conocer sus detalles íntimos y medir, en toda su intensidad, la desgracia que lo aplasta, aun cuando para ello sea menester saturarse de dolor y de vergüenza. Y Vanoli escudriñó los repliegues todos del alma de aquella mujer que tan ligeramente había truncado su vida y jugado con su povenir, trayéndole, como regalo de bodas, el deshonor, en vez del sueño largamente acariciado. No podía convencerse de la verdad de los hechos, por más que la brutalidad de la relación escuchada de propios labios de la culpable se los presentaba en toda su fealdad, y, a ratos, la duda llevaba un poco de consuelo a su espíritu, macerado por penas muy hondas, para ser luego nuevamente ateneado por el espectro de hechos pasados e irreparables.

A medida que aumentaba el dolor, más se agrandaba y más crecía, pues nuevas revelaciones le ponían en evidencia que la perversión humana no tiene límite, ni valladar. La infeliz, no solamente había perdido su virginidad física en un contacto brutal de fauno en celo, sino que Q. A. la había pervertido, iniciándola en los secretos de la más degradante prostitución.

La palabra tiene también sus pudores y se resiste a relatar las últimas confidencias que la esposa hiciera al esposo en sus horas íntimas y trágicas.

---

(1) Véase querrela citada, fojas 150.



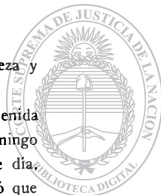


«La hubieras muerto y te hubieras muerto, bestia salvaje», —refiere el querellante que le gritó a Vanoli, al saber que éste había golpeado a Carolina. Es fácil resolver los problemas relacionados con las pasiones humanas cuando ellas no nos hieren, ni nos sacuden, y por eso, seguramente, Vanoli no siguió el consejo del cuñado. Amaba a su esposa en forma obsesionante, como que la había esperado nueve años largos para hacerla suya, y, al mismo tiempo, sentía el dolor lacerante de la injuria, sin explicaciones ni atenuaciones posibles. Lo que le ocurría era estúpido, no se lo explicaba su alma de primitivo, que desconoce las complicaciones femeninas, y ello le traía una mayor desesperanza que contribuía a avivar la llaga abierta en entraña noble y vital (1).

Largas y dolorosas debieron ser las cavilaciones del acusado antes de resolverse por un temperamento que remediase su situación en lo posible. Vanoli es un hombre que goza de buen concepto en los círculos que ha frecuentado. Con razón, ha podido afirmar el comisario Peire, que hizo una investigación por orden del juez de la causa, lo siguiente: «Vanoli es estimado en Pringles por la gente pobre y rica, y todos dan los mejores informes, diciendo que no era ningún calavera — aunque mujeriego — y sí muy trabajador y protector del desvalido» (2).

Se veía de pronto deshonrado ante sí mismo, perdida el respeto y la consideración de que siempre gozó; iba quizá a convertirse en pasto de las murmuraciones malignas, a sufrir el desprecio de sus conocidos, de sus amigos y de los suyos.

2. — Para resolver todos esos problemas morales o para compartir sus penas, se decidió a hablar con el hermano de Carolina, señor E. C. La relación que éste hace en el escrito de fojas 144, a pesar del odio que demuestra para nuestro defendido, debe tenerla muy presente el juzgado. Se trata de un documento que arroja luz a raudales sobre las sombras del proceso. A veces llega la narración,



aun en sus reticencias, a presentar la verdad en toda su crudeza y desnudez.

«Pasados unos quince días—dice el señor E. C.—de la venida de los recién casados a Buenos Aires, se presentó un día domingo por la mañana, Aníbal en casa, manifestando haber llegado ese día solo. Yo lo recibí en cama y a mi pregunta por Carola, contestó que estaba bien. Lo invitamos a que se quedara a almorzar con nosotros y nos prometió hacerlo, retirándose para volver cuando me hubiera levantado. Regresó nuevamente Aníbal y, en un momento en que nos encontrábamos solos en mi dormitorio, se me acercó y me dijo:— «E., tengo que hablarte de un asunto muy grave.» Manifesté una gran sorpresa y lo invité a la sala para estar solos, donde, nuevamente agregó: «Prepárate, E., a oír una revelación terrible.» Mi intranquilidad iba en aumento, y, al pedirle yo que me comunicara de una vez, exclamó: «Carola ha sido la querida de Q. A. durante estos últimos cuatro años» (1).

Hemos citado ya el párrafo donde C. describe sus sensaciones ante las palabras de Vanoli, que podrían condensarse en el verso famoso del poeta del *Infierno*: «Ah, dura terra, perché non ti apristi!»

«Ante la enormidad de la acusación—continúa el señor E. C.—que, por lo espantoso, quise creer que Aníbal no me mintiera, dejamos para más tarde el seguir conversando sobre el asunto, pues en ese momento, mi esposa, alarmada por nuestro prolongado encierro, siendo la hora de almorzar, llamaba con insistencia a la puerta. Traté de serenarme lo posible y con ésta y Aníbal, que no exteriorizaba mayor afectación, no así yo, que no podía simular mi profunda emoción, nos encaminamos a la mesa. Pero ya me fué imposible sobreponerme a la angustia que experimentaba y, levantándome, me encaminé hacia mi habitación, preso de gran dolor» (2).

El mismo señor E. C., más adelante refiere cómo se encontró con su hermana y el diálogo que con ella mantuvo:

«—Carola, es necesario que me lo digas todo, por terrible que

---

(1) Véase querella citada, fojas 149 vuelta, a 150.

(2) Véase querella citada, fojas 150.



sea. ¿Es cierto, Carola, esa horrible revelación que me ha hecho Anibal, de tus relaciones con Q. A.? ¿Dime, Carola, es cierto?...»

«Carola, siempre presa del llanto, entre sollozos y frases entrecortadas, decía:

«—Sí, Eugenio, es cierto. Pero jurando al mismo tiempo que su virginidad no había sido vulnerada. Mas no pudo continuar, pues ya, en el límite de la angustia, por la terrible y larga escena, sufrió un fuerte ataque de nervios» (1).

Los acontecimientos fueron desenvolviéndose en forma anormal. Según C., Vanoli golpeó varias veces a su esposa, por lo cual le increpó su conducta duramente. El desenlace fatal se aproximaba. Aquella mujer iba a morir de muerte violenta, por acción de su propia voluntad, según unos; víctima de la venganza del esposo, escarnecido en su honor, según otros.

Pero no precipitemos la narración.

3. — Antes de entrar a estudiar la forma de la muerte de Carolina, es necesario conocer su estado de espíritu, porque ello ha de contribuir a poner en claro si nos encontramos en presencia de un crimen o de un suicidio.

Aun a riesgo de ser pesados, hemos de abusar de las citas del escrito del querellante C., para documentarnos sobre el carácter de su hermana, y conocer su psicología íntima. Dice aquél que cuando se habló nuevamente de concertar el enlace con Vanoli, el padre de la novia le observó a éste «que, dado el carácter y temperamento especial de Carola, temía no se diera cuenta exacta del paso trascendental que pretendía dar; pues si de ella se exteriorizaba un carácter apacible y bueno, creía, con fundamento, que no fuera mujer capaz de dirigir el manejo de una casa, pues que nunca, en los años vividos a su lado, se había preocupado de ello, dejando a M. que desempeñara esas funciones dirigentes; que, por lo tanto, *se le seguía considerando como una criatura*, sin aptitudes para mujer de un hogar.» Yo intervine en esta conversación—nos dice el querellante—, y, entre



otras cosas, agregué: «Tú, Anibal, estás bajo la obsesión de un simple camote (textual), por los atractivos físicos de Carola, pero temo que entre ustedes no haya la debida compatibilidad de caracteres» (1).

¿Qué había observado el padre en su hija, para considerarla una mujer incapaz, una criatura? Era ella una mujer de más de treinta años, que había viajado y vivido en el extranjero, que poseía además la instrucción de la gente de su fortuna y de su clase.

Solamente algo anormal o extraordinario puede justificar los temores paternos. La defensa no quiere hacer suposiciones, pero rechaza de plano la especie de que el padre y el hermano conocieran las relaciones íntimas de Q. A. con Carolina. Otra tiene que haber sido la causa de aquellos temores.

Pretende asimismo el señor E. C.: «que Vanoli sometía a su pobre víctima a un verdadero martirio, durante la noche en su desenfreno lujurioso, provocando escándalos que la madre de aquél interpretara equivocadamente».

Y luego agrega: «En esos pocos días de vida en común en nuestra casa, si bien nos parecía oír lamentos y quejidos muy apagados, que partían de noche de la alcoba de ellos, no le dimos mayor importancia por ese entonces, pues erróneamente lo interpretábamos como una poca formalidad de parte de ellos. El monstruo, en nuestra compañía, se contenía.»

«Ya instalados en la estancia, tuve necesidad de regresar al pueblo solo, por asuntos personales, dejando allí con ellos a toda mi gente y con el propósito de regresar pasados cuatro o cinco días; pero no habían transcurrido dos, recibí un llamado telegráfico de mi esposa y me trasladé en seguida en automóvil nuevamente a la estancia. Al llegar, noté en los míos, mi mujer y suegra, la expresión de una gran contrariedad y por ellas supe el escándalo ocurrido la noche anterior: «Que Carola había disparado de la cama conyugal, buscando refugio en la cama de mi señora suegra, que ocupaba una pieza contigua a la de ellos. Que, profundamente impresionada por lo ocurrido, quisieron saber de la propia Carola la causa de ese acto, pero que ésta no supo o no quiso dar una explicación categórica.»

---

(1) Véase querrela citada, fojas 147 vuelta, a 148.



«Llamé a Vanoli al patio, manifestándole deseos de hablar con él reservadamente y una vez allí le dije: «Mira, Aníbal, a riesgo de hacerme ya odioso con mis consejos, debo, sin embargo, darte uno más. Ignoro las causas por que Carola haya anoche podido escapar de tu lado, pues de ella no podemos sacar nada, pero, por las dudas, y si es que ello respondiera a un exceso de tu parte en los contactos íntimos, es necesario, si así fuera, trates hasta en eso de adaptarte con su temperamento. Eso es esencial, Aníbal; en un matrimonio, tanto en el trato diario como en las humanas expansiones de la noche debe haber armonía completa. No sea que estés abusando de esa pobre muchacha, mortificándola despiadadamente.» Me aseguró que no, que nada de eso había, que Carola era medio rara en sus cosas y que, por momentos, creía que estuviera mal de la cabeza.» Demostró un poco de contrariedad, que yo, por otra parte, creí muy natural, pues a mí mismo me repugnaba meterme en eso. En fin, me lo prometió y no se habló más de la cosa.

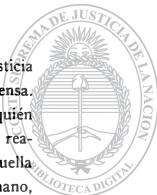
«¡Qué lejos estaba yo de suponer que ese monstruo seguiría haciendo caso omiso de mis consejos y que, al encontrarse solos, volvería nuevamente con su desenfreno a martirizar a esa pobre criatura! ¡Pobre criatura, sí!, cuyas tristezas y angustias a la caída de la tarde, que provocaban esos ataques de nervios, eran producidos por el horror que le causaba la proximidad de la noche, de esa noche terrible que se acercaba, faltándole el coraje suficiente para hablar»(1).

Los hechos que quedan relatados y que ratifican los testigos del sumario, nos demuestran que aquella cabeza a pájaros empezaba a vacilar. No es verosímil, en efecto, que la unión sexual, aún repetida cuantas veces sea posible, produjera a Carolina, el martirio y terror de que nos habla su hermano. Era ella una mujer de más de treinta años, bien conformada para los actos de la generación, casada por amor con un hombre que posee atractivos masculinos, a lo que se agrega que su virginidad había sido sacrificada hacía tiempo en otros altares.....

¿Por qué, entonces, esos horrores? ¿Por qué esa fuga? ¿Por qué esas locas carreras nocturnas en busca de otro lecho protector?

---

(1) Véase querrela citada, fojas 157 a 158.



El acusado se ha negado insistentemente a decirlo a la justicia de instrucción, pero lo ha confiado con medias palabras a la defensa. La infeliz, al sufrir los contactos carnales de Vanoli creía que quien la poseía era Q. A. y sentía más horror por la ficción que por la realidad. Las alucinaciones empezaban a hacerle perder el juicio. Aquella cabeza débil, de que nos habla el padre y a que se refiere el hermano, se estaba perturbando rápidamente.

La tentativa de suicidio de parte de Carolina es otra de las pruebas demostrativas de lo que venimos sosteniendo. Este hecho ha existido. Solamente el apasionamiento puede negarlo. Carolina se disparó un tiro de revólver, que fué a herirla levemente. Lo dice su sirvienta (1), lo confesó ella misma al médico que la asistió (2) y al hermano (3), que corrió a su lado, sin que jamás haya formulado imputaciones contra Vanoli.

Todos estos antecedentes debieron hacerle comprender al procesado que su esposa no se encontraba en sus facultades normales y decidirlo a hacer un viaje a Buenos Aires, donde llegó al 30 de agosto de 1915. Aquí la hizo visitar por facultativos y hasta llegó a recluirla en una casa de salud (4). Larga fué la peregrinación del marido en procura de aclarar lo que le pasaba a su esposa; estuvo con el doctor Ingenieros y con el doctor Barlaro; concurrió al Sanatorio de Flores, al Hospicio de Mujeres y al Instituto Frenopático.

La conducta observada por Carolina en casa de su amiga la señora de C. es otro de los antecedentes que nos ponen de manifiesto el desorden mental que la agitaba poco antes de ocurrir los hechos que motivan el proceso. La interpretación que de esos antecedentes hacen algunos testigos es absolutamente errónea (5).

Los médicos que han atendido a Carolina confirman lo que venimos tratando de demostrar. El doctor José Ingenieros (6) nos dice que Vanoli y su esposa estuvieron en su consultorio el 31 de agosto

---

(1) Véase declaración de Raimunda Martínez, fojas 301 vuelta.

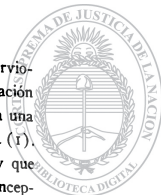
(2) Véase declaración de Manuel B. Cabrera, fojas 210 a 210 vuelta.

(3) Véase querrela citada, fojas 159.

(4) Véase indagatoria del procesado, fojas 43, y declaración de Augusto Osorio, fojas 183 y siguientes.

(5) Véase declaraciones de fojas 63 vuelta y 133, y de fojas 76 vuelta y 136.

(6) Véase declaración de fojas 194 y 194 vuelta.



de 1915, manifestando aquél que ésta se encontraba un poco nerviosa y que, en consecuencia, pedía se le indicara régimen y medicación apropiada. Agrega el mismo testigo «que, a su juicio, Carolina era una mujer muy pobre de espíritu». — El doctor Manuel B. Cabrera (1), manifiesta que ha asistido a Carolina de un ataque de nervios y que le recetó bromuro, y termina con estas palabras: «que él no conceptuaba a dicha señora una persona normal mentalmente, por la serie de observaciones que ha hecho sobre la misma».

El doctor Barlaro, que también conoció a Carolina, prestándole sus servicios profesionales, confirma lo que precede.

4. — A esta altura de la defensa nos asalta una duda que presentamos a la consideración del magistrado que ha de fallar esta causa: ¿no serán falsas las imputaciones que Carolina hacía a su cuñado Q. A.?

No debemos olvidar un antecedente de gran importancia para resolver esta duda: los terrores nocturnos de Carolina que ésta no ha querido o sabido explicar. Se encontró ella más de una vez con su hermano, con su cuñada y la madre de ésta, lejos de la presencia de Vanoli, y no les confesó lo que le pasaba en esas horas, dignas de ser contadas por Edgar Poe o por Hoffmann. ¿Sería por pudor? Hay confidencias que pueden hacerse entre personas del mismo sexo, sobre todo si están vinculadas por parentesco. La familia de C. conocía, como lo hemos visto, los hechos que habían pasado entre Carolina y Q. A., y bien podía informársele de las escenas que se desarrollaban en el lecho conyugal. ¿Callaría, acaso, Carolina por temor? No es admisible. Aníbal se encontraba lejos de ella y, sobre todo, su hermano don E. C. estaba ahí para protegerla y defenderla. Este señor, según lo manifiesta, ha dirigido cartas enérgicas a Vanoli, sin que éste adoptase ninguna actitud (2); lo ha llamado en presencia de Carolina, animal, salvaje, etc. (3), de tal manera que su hermana debía estar segura de su hombría e inclinada, por consiguiente, a las confidencias. Y sin embargo, ha callado.



Lo que ocurría en esas noches «presentadas a la caída de la tarde», sólo lo sabemos por deducción, y por deducción del querellante que, por cierto, carece de la serenidad suficiente para discurrir sobre la muerte de su hermana.

Es más presumible que nos encontramos en presencia de una sistematizada o de una histérica.

Es tanto más racional esto, si se tiene en cuenta que la propia Carolina fué quien confesó a Vanoli y a su hermano C., que Q. A. la había desflorado y que fué ella quien abundó en detalles sobre las relaciones mantenidas con su cuñado.

Eso es anormal y debe llamarnos la atención: las mujeres, generalmente, no confiesan sus propios deslices. Contrastan la sinceridad de las relaciones de Carolina con la reserva observada al ocultar a los miembros de su familia el secreto de sus terrores nocturnos.

Sabemos la explicación atribuida al mutismo de Carolina, estaba la desgraciada bajo la impresión de las brutalidades de Vanoli, pero las brutalidades de que con tanta indignación se nos habla no han dejado rastros capaces de ser percibidos por la autopsia. Y, sin embargo, una presión, por ligera que sea, basta para determinar en las mujeres la producción de equimosis» (1).

«El carácter de las histéricas es fantástico, extravagante, variable e inconsecuente. Tienen amistades y odios muy vivos, que generalmente nada justifica, que aparecen y desaparecen sin motivos apreciables o razonables y que ellas tratan de satisfacer a cualquier precio. Un rasgo característico en ellas es la necesidad de ponerse en evidencia, de llamar la atención, de excitar el interés y la curiosidad, de desempeñar un papel novelesco y aparecer en escena bajo un aspecto cualquiera. Para satisfacer esta necesidad, ciertas histéricas inventan las más extrañas y complicadas historias, y para llenar el papel que han elegido recurren a mentiras hábilmente combinadas y no retroceden delante de ninguna de las consecuencias de la comedia que representan» (2).

«En 1834 una joven de 16 años, María M.... que vivía con

(1) Véase Vibert, *Précis de médecine légale*, Paris, 1900, página 368.

(2) Véase Vibert, *Précis de médecine légale*, Paris 1900, página 709. Véase además, la nota 1, en la página citada y el apéndice, página 883.





su padre, general y director de la escuela de caballería de Saumur, fue encontrada una noche en su dormitorio, extendida sobre el suelo, en camisa, manchada de sangre, un pañuelo atado alrededor del cuello. Declaró que un oficial de la escuela, que había reconocido por ser el teniente de la Roncière, a pesar de las precauciones que él tomaba para ocultar su rostro, había penetrado en su dormitorio, escalándolo y rompiendo un vidrio, e intentando violarla e hiriéndola con un cuchillo en las partes genitales. Después de algún tiempo, la familia de María M. . . . recibió una cantidad de cartas anónimas llenas de ultrajes y de amenazas para ésta, que era, sin duda alguna, histérica. El desgraciado de la Roncière fué condenado a diez años de reclusión, sufrió su pena íntegramente y fué en seguida rehabilitado (en 1849) (1).

Los ejemplos podrían multiplicarse. Corresponde a la familia de C. darnos antecedentes sobre la cuestión que dejamos planteada.

No sería extraño que las alucinaciones de una pobre enferma hayan hecho cargar a Q. A. con una culpa que no cometió y contribuido a la desgracia de dos familias respetables y respetadas!

Era necesario presentar a los actores de este drama tan doloroso como íntimo, para resolver los problemas legales que se ofrecen al estudio de los que intervinimos en la causa, y la ingrata tarea queda cumplida.

5. — ¿Fué asesinada Carolina C.? ¿Se suicidó? Tal es el problema propuesto a la acusación y a la defensa, problema que V. S. debe resolver, teniendo muy en cuenta las observaciones precedentes. El juez de instrucción y el agente fiscal afirman, sin vacilaciones, que se trata de un homicidio. Ellos no dudan. «La facultad de dudar —

---

(1) La cita del texto la tomamos del libro recordado de Vibert, página 710. Esa causa fué seguida a petición del general barón de Morell, por tentativa de estupro de su hija María de Morell. Intervinieron por la acusación dos príncipes de la oratoria francesa: Berryer y Odilon-Barrot. Del primero ha dicho el vizconde de Cormenin en el *Livre des orateurs*: «Berryer es, después de Mirabeau, el más grande orador francés»; y del segundo: «que era dueño de sus pasiones y de su palabra, y calmaba a su alrededor la cólera de los centros y los levantamientos tempestuosos de la derecha. Preparaba y cubría la retirada en los pasos difíciles, con la habilidad de un estratega consumado: era el Fabio de la oposición». Los detalles de la causa de Emilio Clemente de la Roncière, se encuentran en el libro *Los procesos célebres*, de Laribal, tomo I, página 5 en adelante.



ha dicho Anatole France — en la «Isla de los Pingüines» es rara entre los hombres. Un pequeño número de ellos lleva el germen de la duda, que no se desenvuelve sin cultivarla...» «La muchedumbre pingüina ignoraba la duda y por eso Dreyfus fué juzgado secretamente y condenado.»

Veamos los elementos de prueba en que fundan su convicción el juez y el agente fiscal:

a). El juez invoca las relaciones amorosas de Q. A. con Carolina para deducir que el procesado fué el autor de las lesiones de que falleció su esposa. El fiscal niega que esas relaciones hayan existido y agrega con énfasis: «para admitir la posibilidad de semejante situación, es necesaria una prueba tan evidente, tan clara, que hasta resulta *inhumana*» (*inverosímil* debe haber querido decir).

Ambos funcionarios, sin embargo, llegan a idéntica conclusión, aunque parten de bases distintas: Vanoli asesinó a Carolina porque ésta fué querida de Q. A., dice el juez. No, rectifica el fiscal, la mató a pesar de no haber sido la querida de Q. A.

Esto nos demuestra la fuerza del indicio. La ley exige, como condición, para la validez de los indicios, que éstos «conduzcan lógica y naturalmente al hecho de que se trata» (1). En el caso de autos, falta ese requisito, desde que los funcionarios que nos ocupan apoyan su conclusión en hechos diversos, que no pueden conducir lógica y naturalmente a un idéntico resultado.

Dejemos de lado las contradicciones en que incurre la acusación y veamos si ese indicio tiene fuerza suficiente para afirmar la culpabilidad de Vanoli. Las relaciones carnales de Carolina C. con Q. A., anteriores al matrimonio de aquélla con el acusado, no pueden negarse, sin negar la evidencia misma: lo testifica el hermano de la víctima, en términos que no admiten discusiones. ¿Se sigue de ahí que el asesino de Carolina sea su esposo? Puede ser... Es probable... Pero con la misma fuerza se impone al espíritu esta otra conclusión: Carolina se suicidó, porque, al medir la enormidad de su conducta, se dió cuenta del sangriento agravio que había inferido a su esposo, de la mancha arrojada sobre las canas de su padre, de la felonía para

---

(1) Artículo 358, inciso 5.º, del código de procedimiento en lo criminal.



con su hermana, esposa de su amante... Quiso lavar con sangre el fango y procedió bien en la actual organización social.

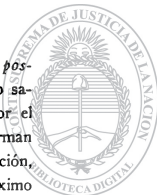
Esto, para el caso de que realmente hayan existido las relaciones entre Q. A. y Carolina. Si el hecho fuera — como lo hemos insinuado — producto del histerismo, el indicio no adquiriría por eso mayor fuerza. En las dos hipótesis, el suicidio se explica. Carolina pudo suicidarse acosada por los remordimientos, y, al darse cuenta que su felicidad ya no era posible, pudo también ser arrastrada a tan extrema resolución por la perturbación de sus facultades mentales.

La presunción analizada nos conduce, pues, con la misma fuerza a probar el suicidio que a demostrar el homicidio. Y con más fuerza el primero que el segundo. En efecto: Vanoli tuvo conocimiento de la falta de virginidad de su mujer y de su traición la noche misma del matrimonio, y no mató. Pudo asesinarla en la estancia, donde los que la rodeaban le eran fieles, y no lo hizo. En su mano estaba procurarse la impunidad en las soledades del campo, y no aprovechó esas circunstancias. Habría ido a matar en plena ciudad, en la vía pública, buscando testigos, y eso es sencillamente estúpido.

b). Otra de las presunciones invocadas por el juez consiste en la intranquilidad que mostró Carolina durante el tiempo que duró la visita que juntamente con su esposo hiciera el día del hecho a la señora de C. «Tal vez presentía o sospechaba el fatal desenlace y de ahí su interés en prolongar la visita referida, que de suyo resultaba bastante larga, y llegar hasta el pedido hecho a su esposo de que la dejara en casa de dicha señora, quien le indicó la pieza que podía destinar a ese objeto».

En otros términos, Carolina sospechaba que su esposo iba a asesinarla y por eso se mostraba intranquila. Tal manera de raciocinar no resiste al más ligero análisis. Una persona que sabe que le acecha un grave peligro, se aleja de él o huye, pero no entrega resignadamente el cuello al filo de la navaja homicida. Casos, como el que presume el señor juez, sólo son concebibles en la fortaleza de Facundo, que marcha impávido hacia la tragedia de Barranca Yaco.

Lo natural era que Carolina se mostrase intranquila, si tenía resuelto en su espíritu el propósito de matarse, o si en su cerebro habían aparecido los primeros síntomas de los sistematizados. Solamente la



suspiciacia femenina de la señora de C., formada naturalmente a posteriori de los hechos, y sin el dominio pleno de los mismos pudo sacar la consecuencia de que Carolina se mostraba intranquila por el presentimiento de lo que le iba a ocurrir. Vanoli y Carolina forman una pareja irreal: aquél demuestra en la mirada su cativa intención, ésta deja adivinar, en su cara, el terror que le inspira su próximo prematuro fin. El asesino hace presentir a su víctima sus dañadas intenciones, seguramente para pregustar la sensualidad del placer de matar, y la cuitada, en vez de buscar protección en la policía, en el seno de los suyos, recurre a la primera amiga que accidentalmente se le atraviesa en el camino, para solicitarle alojamiento.

¿Por qué estaba inquieta la señora de Vanoli? ¿Acaso sentía llegar a su verdugo? ¿O, por el contrario, le flaqueaba el coraje para realizar un propósito ya madurado? ¿Era un síntoma de su enfermedad mental?

Esos son los problemas que nos resuelve la acusación con una simplicidad encantadora, y los resuelve, naturalmente, en contra del procesado... En la duda, en contra del reo...

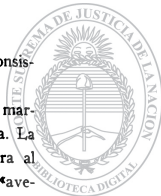
La señora de C., al hablar de las particularidades que ofrecía Carolina la tarde de la tragedia, ha podido equivocarse, porque era la primera vez que la veía después del casamiento, y porque carecía de los elementos de juicio que le explicasen esa conducta. El señor juez de instrucción no tiene esa disculpa, porque él ha conocido o debido conocer las palabras del hermano de Carolina, quién afirma que ésta, «a la caída de la tarde, sufría angustias y tristezas que le provocaban ataques de nervios, por el horror que le causaba la proximidad de la noche» (1).

c). Nadie vió — dice el juez de instrucción — que Carolina tuviera la navaja con que fué herida. ¿Acaso la vió alguien en poder de Vanoli?

La navaja no estaba en la cartera de malla que llevaba colgada del brazo Carolina. Luego, no existía. Vanoli no tenía esa cartera de malla. Luego no ha podido llevar la navaja.

---

(1) Véase querrela citada, fojas 158.



Esta argumentación *ad absurdum* nos demuestra la poca consistencia de la presunción que sacan el juez y el agente fiscal.

d). Según los acusadores de Vanoli, éste ha demostrado marcado interés en poner en evidencia la manía suicida de la víctima. La imputación es inexacta. El acusado jamás ha dicho una palabra al respecto. Fué el juez de instrucción quien, a fojas 59, resolvió «averiguar si la víctima había alguna vez intentado suicidarse». El hermano de Carolina, en su escrito de fojas 144, habló también de la tentativa de suicidio y en forma análoga procedió el comisario Peire, a fojas 95. La defensa conoció esos hechos por informaciones extrañas y creyendo que la justicia los ignoraba, se los hizo saber en el escrito de fojas 138. ¿Dónde está, entonces, el interés del acusado en poner en evidencia la manía suicida de su esposa? El cargo es de una ligereza remarcable. El juez de instrucción resuelve *ex officio* que se averigüe un hecho, y cuando ese hecho se constata, se lo carga en la cuenta al reo.

Y que la tentativa de suicidio existió, nadie puede ponerlo en duda de buena fe. Lo certifican la testigo Raimunda Martínez (1); el hermano de la víctima (2), el médico doctor Cabrera (3) y la bala encontrada en el cadáver al practicarse la autopsia, según el informe médico (4).

El señor juez agrega sobre este particular, que si el procesado hubiera dado cuenta a la justicia oportunamente de la tentativa de suicidio de su esposa, hubiera sido fácil establecer la verdad.

En otros términos: Vanoli debió prever que su esposa atentaría, andando el tiempo, contra su vida nuevamente, y que, con tal motivo, él se vería envuelto en un proceso criminal. Debía denunciar que su esposa se había hecho un disparo, aunque ningún texto legal le impusiera tan penoso deber. Debía curarse en salud...

e). Llegamos a la presunción final, — la más importante, — la única que en puridad de verdad, merece que se la disèque para conocer su importancia en la solución de este proceso. Nos referimos a la

---

(1) Véase declaración de fojas 201, vuelta.

(2) Véase querrela citada, fojas 158 vuelta y 159.

(3) Véase declaración de fojas 210.

(4) Véase fojas 226.



lesión que produjo la muerte de Carolina. Esta ha sido seguramente asesinada—dice el juez—y lo mismo piensa el fiscal. Ambos se fundan en los informes médicos de los doctores Martín Arana y Nicéforo Castellanos (1). En el informe (2), los médicos llegan a esta conclusión: el suicidio posible, el homicidio probable.

Un caso dudoso se interpreta en contra del acusado, invirtiendo la regla del artículo 13 del código de procedimiento en lo criminal.

Analicemos esos informes médicos, para saber si se trata de un homicidio o de un suicidio.

«La víctima presentaba en las regiones superiores y laterales del cuello una profunda herida practicada con instrumento de mucho filo. Es recta y continua, como practicada en un solo golpe. Mide doce centímetros de largo y tiene una dirección casi horizontal, con ligera inclinación de izquierda a derecha y de arriba a abajo, etc.» (3).

En el informe de fojas 179 se agrega: «que los procedimientos cruentos no son los de predilección de la mujer para suicidarse; las de su sexo tienen horror a la sangre, por razones de sensibilidad, y no recurren de ordinario a medios cruentos y menos a heridas incisivas, que dan hemorragias. Hoffmann afirma que el suicidio por heridas en la mujer es relativamente raro. (*Elementos de Medicina legal*, página 253)» (4).

«Referente a las modalidades del suicidio por sección de la parte anterior del cuello, para cumplirlos generalmente se emplea como instrumento una hoja afilada, siendo la navaja de afeitar la más frecuentemente usada. La víctima, en pie o sentada (rara vez acostada), emplea el arma con la mano derecha, si es dextra, y con la cabeza en extensión (echada hacia atrás), circunstancia que, en muchos casos, salva los gruesos vasos, practica la sección de izquierda a derecha, em-

---

(1) Véase los informes de fojas 61 y 179.

(2) Véase el informe de fojas 179.

(3) Véase informe de fojas 61 a 61 vuelta.

(4) Esta opinión de Hoffmann, no la traen los otros autores de medicina legal, como puede verse leyendo a Strassmann, *Manuale di Medicina Legale*, Torino, 1901; Le grand du Saule, *Tratado de Medicina Legal*, Madrid, 1886; Lombroso, *Medicina Legal*, Madrid, Casper, *Medicina Legal*, Madrid, 1896; Vibert, *Médecine Légale*, Paris, 1900; Raffaele, *Perizia Medico Legali*, Nápoles, 1895; de Boismont, *Du Suicide*, Paris, 1865, y otros autores. Durante el corriente año, la prensa ha anunciado por lo menos tres suicidios, de mujeres que se han valido de navajas para darse muerte.



pezando al nivel del músculo externo-cleido-mastoideo y dirigiendo comúnmente el corte hacia la derecha y hacia abajo, desviación que falta cuando se ha guiado el instrumento viéndose en un espejo, en cuyo caso, la herida suele ser perfectamente horizontal (el cadáver autopsiado tenía la herida con la oblicuidad señalada). La altura del corte sobre la línea media es casi siempre entre el hueso hioides y la laringe (igual al caso en estudio). Es común que el arma empiece el corte con mayor energía, dando mayor profundidad a la herida en el extremo izquierdo, por donde empezó, y disminuya gradualmente la fuerza empleada, en lo que debe tener gran parte el elemento dolor, para hacerse más superficial en el extremo derecho, en donde termina, en la forma que llaman cola, sirviendo estos caracteres para inducir el sentido en que ha corrido el arma (esta característica no se ha observado en el presente caso)» (1).

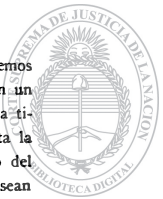
«En los casos de suicidio de este género — dice el citado autor—, se encuentran las más de las veces en el cuello muchas heridas, algunas de las cuales, además de la herida principal y profunda, son pequeñas y sólo interesan la piel o lo que es más frecuente, la laringe puesta al descubierto por la retracción de la piel» (obra citada, página 256). La falta de suficiente energía en el cumplimiento de la resolución tomada, la intensidad del dolor, la incomodidad relativa para herirse a sí mismo, el poco filo del arma en relación al vigor muscular, son otros tantos factores que, reunidos solos, dan los caracteres copiados. (La herida del cadáver de la señora Vanoli era única y profunda)».

«Vibert, en su obra, «*Precis de Médecine Légale*», ed. de 1908, página 311, tratando de los suicidios por instrumentos cortantes, dice lo siguiente: «El arma es detenida algunas veces por la laringe, sobre todo cuando está osificada (en este caso no lo estaba), frecuentemente pasa entre la laringe y el hueso hioides y cuando está bien afilada y VIGOROSAMENTE MANEJADA (2), puede dividir todas las partes blandas y comprender las carótidas y las yugulares, y alcanzar, más

---

(1) Este paréntesis, y todos los que figuran en esta transcripción, pertenecen a los médicos.

(2) Carolina C. de Vanoli, era una mujer de más de 30 años, vigorosa y bien conformada. Para herir profundamente con una navaja afilada, cualquier mano es vigorosa.



o menos, profundamente, la cara anterior de las vértebras. Hemos visto un alienado que se había suicidado cortándose el cuello con un gran cuchillo de cocina: las yugulares, las carótidas, la membrana tiroidea, estaban seccionadas, como todas las partes blandas, hasta la aponeurosis prevertebral, que había sido rozada, el gran cuerno del hioides estaba fracturado... Es raro que las heridas por suicidio sean tan profundas, sobre todo de los dos lados a la vez; del lado en que comienza la lesión penetra en general más profunda y termina superficialmente del lado opuesto. A menos que el suicida sea zurdo (1), tiene el arma con la mano derecha y la conducen de izquierda a derecha y generalmente un poco de arriba abajo. Tal dirección, aunque concordante perfectamente con la idea de un suicidio, puede, sin embargo, observarse en casos de homicidio, sea que el matador haya sorprendido su víctima de atrás, sea que la haya herido por delante. A menudo, el suicida ha repetido el uso del arma; de allí resulta muchas heridas, no solamente sobre la piel, sino a veces sobre los músculos, la laringe y aún los vasos. Estas heridas son, más o menos paralelas, pero no siempre. Estas son, en síntesis, las modalidades que generalmente se observan en las heridas que se inferen los suicidas al consumir sus propósitos, seccionándose la cara anterior del cuello. El estudio comparativo de estas modalidades con las que presentaba la herida del cadáver de doña Carolina C. de Vanoli, no permite una afirmación categórica respecto a si se la produjo ella, u otra persona; pero hay indicios de valor real para presumir lo segundo.

«Hemos afirmado, en nuestra conclusión IV del informe de la autopsia de doña Carolina C. de Vanoli, que el arma que le produjo la herida causante de su muerte, «ha sido esgrimida por una mano vigorosa y firme», deduciendo esta conclusión de los caracteres de la lesión misma que consignamos en el cuerpo del informe, en donde establecemos su profundidad, la semejanza en sus dos extremos y que «es recta, continua, como producida en un solo golpe», sin que esto importe hacer referencia únicamente a la cantidad de fuerza muscular empleada, puesto que esto depende principalmente de la

---

(1) Vanoli, ni su mujer, eran zurdos.





clase y estado de finura en el filo del instrumento usado, del estado de resolución de ánimo y energía de voluntad, bajo los cuales se ha ejecutado un acto que tiene las características reveladoras de firmeza de acción y persistencia de resolución, sin las fluctuaciones propias del ánimo que vacila ante la magnitud de la resolución que cumple; estado tan común en los suicidas y que se demuestra como hemos visto, por la multiplicidad de las heridas y la diversidad de profundidad en su trayecto, debido a las causas que enumeramos (1). Esto no importa excluir en absoluto la posibilidad de un suicidio por los caracteres de esta herida, pues la historia de la medicina legal, registra casos de suicidios por heridas incisas, profundas y extensas, aún en la región antero-lateral del cuello y esta forma de suicidarse se observa con alguna frecuencia en los alienados con perturbaciones mentales de orden excitativo, como los maniáticos, uno de cuyos casos transcribimos de Vibert».

«La observación de las condiciones del cadáver autopsiado por nosotros como perteneciente a la señora Carolina C. de Vanoli, que es el único elemento de juicio de que disponemos, nos permite inferir que se trataba de una mujer joven, sin endurecimientos anormales en sus vasos y cartílagos, bien formada, de cuerpo cuidado, lo que induce a creerla en condición social acomodada, sin callosidades en las manos u otros estigmas de oficios manuales, y con un desarrollo muscular proporcionado a su sexo y a aquellas condiciones».

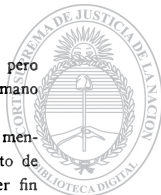
«Ahora bien: a pesar de esta naturaleza física y el sexo de la víctima, es permitido suponer en ella fuerza muscular suficiente para

---

(1) Paul Bourget, el psicólogo femenino, en el mejor libro que ha producido *Le Diable*, narra admirablemente el convenio que hicieron dos amantes para suicidarse. Ella se entrega, para envenenarse después de perder su virginidad, pero él, una vez que la hubo poseído, se arrepintió, diciéndole: "No puedo dejarte morir en mi presencia... Te suplico, Carlota, no me exijas la realización de este proyecto funesto... Cuando compré el veneno, estaba loco, creía que no me amabas, deseaba matarme. ¡Ah, sinceramente!... Pero hoy que tú me amas, que yo lo sé, que tú te has entregado a mí, no, yo no puedo, yo no quiero. Vivamos, amor mío, vivamos, consiente en vivir... Partiremos juntos, si tú quieres. Tenemos el derecho de desposarnos. Somos libres... Y si tú no quieres, si te arrepientes de estas horas de abandono, yo sufriré el martirio; pero, te lo juro, será como si nada hubiera sucedido. Nada de mí turbará tu vida... Pero ayúdame a morir, matarte, a ti... No, no, no me lo pidas más".

La heroína le azota la cara como con un salvazo, diciéndole: cobarde!, cobarde!, cobarde!

Y muere. Es que las mujeres, a las veces, se muestran más resueltas y más energías que los hombres. (Página 305).



causarse a sí misma la herida que ha determinado su muerte, pero no podemos afirmar si sería ella capaz de esgrimir el arma «con mano vigorosa y firme».

«Las modalidades de carácter y las condiciones psíquicas y mentales de la víctima, serían antecedentes de valor, desde ese punto de vista, como los móviles que pudieran haberla impulsado a poner fin a su vida en una forma y en circunstancias que salen de lo común y que importan violencia a los sentimientos de su sexo; el uso de un instrumento, en cuyo manejo, no debía de tener práctica, hiriéndose profundamente con mano vigorosa, sin que el dolor, ni la hemorragia, ni la trascendencia del acto que efectuaba, modificara, en ningún instante de la ejecución, la intensidad de su firmeza».

«Con los elementos de juicio disponibles, llegamos por esta segunda vía de interpretación a conclusión semejante a la primera: EL SUICIDIO POSIBLE, EL HOMICIDIO PROBABLE» (1).

Basta la lectura ligera de estos autos, para convencerse que la opinión dubitativa de los médicos no ha tomado en cuenta elementos de juicio de gran importancia, que, si hubieran sido computadas, habrían inclinado su ánimo decididamente en favor del suicidio. Vamos a hacer caudal de ellos:

a) Los esposos, como consta de la declaración del chauffeur José Moretti (2) y del agente de policía Octavio Romero (3), viajaban en el automóvil de plaza número 823, sentados: a la derecha Carolina y a la izquierda Vanoli. Si éste hubiera sido el heridor, habría producido la lesión en otra forma, que la que detalla la pericia citada, a menos de ser zurdo.

En cambio, la lesión de izquierda a derecha, es perfectamente racional, si se la supone inferida por la propia víctima.

b) La lesión es de arriba abajo. La señora Carolina C. de Vanoli tenía 1m.62 metros, y su esposo 1m.85. Éste es, por consiguiente, más alto que aquélla. Luego, la herida forzosamente debió inferirse de abajo arriba, tanto más, si se tiene en cuenta que ambos cónyuges iban sentados.

---

(1) Véase el informe médico que corre en autos de fojas 179 a 181 vuelta.

(2) Véase declaración a fojas 14.

(3) Véase declaración de oficio 17.



c) En la inspección ocular (1) se dice: «Que del examen de las ropas que vestían Carolina y Vanoli, no se observaban indicios de lucha». Tampoco los médicos que han informado al señor juez de instrucción, han notado que haya habido lucha.

«En caso de homicidio, pueden hallarse cabellos del matador en manos de la víctima, así como también podrán advertirse señales de lucha, tales como equimosis esparcidas por el cuerpo, pedazos y manchas de sangre en el vestido, etc.» (2).

d) Nada nos dicen los médicos sobre el aspecto del cadáver, lo que demuestra que no ofrecía anormalidades.

«La fisonomía del cadáver es tranquila y compuesta en los casos de suicidio, y espantada, airada, en los de homicidio» (3).

e) La profundidad de la herida es otra de las causas que invocan los médicos para inclinarse a favor del homicidio.

La conclusión es falsa, científicamente considerada. Basta leer un libro de medicina legal para convencerse de ello.

Strassman (4) discurre, a este respecto, en los siguientes términos: «Se sostiene más bien y con razón, que las lesiones muy profundas, especialmente si penetran hasta la columna vertebral y si son varias, demuestran la acción de una mano homicida. Pero, a lo menos excepcionalmente, ciertos suicidas despliegan una extraordinaria energía para realizar su propósito, y se infieren lesiones que llegan a la columna vertebral y a las veces penetran en ella». Véase los ejemplos que se citan en la obra mencionada.

f) Los procedimientos cruentos no son de predilección de la mujer para suicidarse.

Inexacto. En «La Nación» del 12 de marzo del corriente año, se encontraba el siguiente telegrama: «TRAGEDIA EN UN TREN.—Serodino.—María Juárez de Cañeti, española, de 34 años, con cinco de residencia en el país, viajaba, el viernes, de Tucumán al

---

(1) Véase fojas 7.

(2) Véase Lombroso, *Medicina Legal*, tomo 2, página 101; Vibert, *Précis de Médecine Légale*, página 309.

(3) Esta opinión que sostiene Lombroso en el libro y página citados, no es compartida por los autores de medicina legal.

(4) Véase *Manual de Medicina Legal*, página 485.



Rosario, en el tren que pasa por Serodino a las nueve de la noche, con tres hijos, de 3, 7 y 14 años, respectivamente».

«En la estación Irigoyen, el guarda le pidió boleto para la menor, por parecer de cuatro años. La Cañeti, no teniendo dinero, asustada de las consecuencias, según el guarda, penetró en el excusado, degollándose con un cuchillo de mesa».

«Prolongándose su ausencia, los pasajeros se dieron cuenta del hecho y, en Serodino, la bajaron, prestando auxilio el médico del pueblo, pero ya era tarde, pues falleció el sábado, siendo sepultada el mismo día».

Durante el corriente año se han suicidado dos mujeres en esta ciudad, empleando para ello navajas de barba.

La cita de Hoffmann, por otra parte, se refiere a lo que ocurre en Austria, que no es aplicable a nuestro país, como acabamos de verlo.

Es cierto que las mujeres generalmente no se deguellan, ni se ahorcan, pero no lo es menos que hay ejemplos de que tal cosa ocurra y principalmente entre nosotros.

En «Yocaste» de Anatole France, el comisario de policía que reconoció el cadáver de una suicida, hizo esta reflexión: «He visto mujeres suicidas, es la primera vez que veo una que se cuelga» (1).

(1) No podemos substraernos a la tentación de reproducir veinte líneas del *Edipo Rey*, de Sófocles, que contiene parte del diálogo entre el PEREGRINO y el CORO de la tragedia griega.

EL PEREGRINO.—Yocaste no existe más.

EL CORO.—¡Infortunada! ¡Quién le ha dado la muerte!

EL PEREGRINO.—Ella misma. De lo que esta muerte tiene de más doloroso se os hace gracia; vosotros no habéis sido testigos de ella. Sin embargo, tanto como me lo permita la fidelidad de mi memoria, os contaré lo que esta desgraciada ha sufrido. Extraviada por la desesperación, después de haber atravesado el vestíbulo del palacio, ella marcha a grandes pasos hacia el tálamo nupcial, arrancando con ambas manos sus cabellos. Una vez ahí, ella cierra por dentro la puerta; luego, evocando la sombra de Laius, recordando este primer himeneo de donde salió un hijo parricida e incestuoso, gime sobre ese lecho, donde, doblemente desgraciada, tuvo de su esposo un esposo e hijos de su hijo. Ignoro cómo pereció en seguida, porque Edipo, que se ha lanzado profiriendo gemidos horribles, nos impidió ver cómo ella murió. Nuestros ojos se habían vuelto hacia él, que, errante de acá para allá, nos pide una espada; quiere saber dónde está la esposa que no es esposa, aquella que lo ha llevado, a él y a sus hijos, en su seno. En su furor, un diós se la descubre, pues ninguno de nosotros osaba responderle. Lanzando un grito terrible y como guiado por alguien, se arroja contra las puertas, las deagronza y se precipita en la cámara nupcial, donde nosotros vemos a la reina colgada de una cuerda fatal. El infortunado, al ver esto, lanza rugidos terribles y desata el lazo funesto. Cuando la desgraciada es extendida en tierra, asistimos a un espectáculo

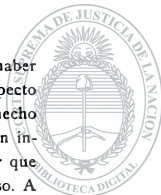


A la larga serie de presunciones que hemos enumerado, debe agregarse la tan importante que significa la actitud de Carolina durante las dos o tres horas que precedieron inmediatamente al hecho. Tan aviesa o tan insólita ha sido esa actitud que los médicos que observaron a Vanoli con fecha de octubre de 1915, creen posible que éste haya sufrido un «shock» moral, pues sólo esa perturbación podría justificar su amnesia de todos los hechos ocurridos durante el considerable lapso de tiempo, transcurrido entre el momento en que la pareja entrara a la casa de la señora de C. y aquél en que el procesado recobrara su conciencia en una sala de hospital.

Y esa amnesia, que los médicos no se atreven a declarar fingida, da cuenta de la intensidad del «shock» moral a que hemos aludido. El hecho no es extraño, por otra parte, siendo Vanoli un sujeto exquisitamente sensible. Así lo han establecido los médicos, en su informe, procediendo, para ello, a una minuciosa discusión sobre su amnesia. Con ese objeto, comienzan por analizar la relación del procesado. Según esa relación, «el seis de septiembre, en circunstancias que acompañaba a su esposa a casa del señor C., reanudóse entre ellos, con más violencia que de ordinario, la continua altercación en que vivían desde que habían contraído matrimonio. Entre reproches y amenazas, de una parte, y actitudes desdeñosas de la otra, Vanoli llegó a exigir una satisfacción a su amor propio, planteando esta cuestión: ¿qué harías tú, si tu cuñado viniera ahora a Buenos Aires? Estando en ésto, llegaron a destino. Durante la visita, se habló mucho del cuñado de su mujer y él se sentía aún más torturado, que cuando, a solas, pensaba en aquel hombre, de manera que, cuanto más oía resonar el nombre que tanto le ofendía, más ansiaba aquella satisfacción. Por lo cual, y porque la querella, anterior a la visita, había quedado viva, aprovechó el primer instante, en que su mujer estuvo sola, que fué el de la salida, para repetirle la pregunta que había quedado en suspenso. Y al recibir una contestación hiriente, quedó atónito; ése es el punto en que comienza su amnesia» (1).

---

(1) Véase informe médico a fojas 348.



Con frialdad técnica, desdeñan luego el dato, a pesar de haber manifestado antes que de la conversación del procesado, respecto de si él había sido tocado en el momento que precedió al hecho por alguna emoción excesiva, conversación en que le hicieron incurrir subrepticamente muchas veces, se desprende que sí, y que su relato, bien que desunido y difuso, no parecía tendencioso. A pesar de todo eso, decíamos, los peritos no dan importancia a la relación del procesado, en vista de que ella puede ser tanto sincera y exacta, como reticente, y de que las más finas investigaciones conducentes a descubrir su grado de sinceridad, serian infructuosas. Prosiguen, pues, su análisis con más importantes elementos.

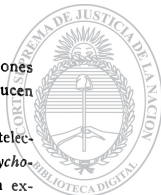
«Que ese relato — dicen — sea real o sea tendencioso, nuestra opinión, respecto a la posibilidad del sujeto a las emociones violentas, está formada: la decepción sufrida, el constante estado de excitación que debía de provocar la nunca extinguida disputa, sus repetidas diligencias a fin de encontrar una solución que pusiera a salvo su desdoro, sin aumentarlo, y los mil detalles que constan en autos, eran otras tantas causas emotivas, capaces de provocar estados más o menos violentos, según como se combinaran y las circunstancias en que actuaran».

«Condición indispensable al desarrollo de las emociones, es, desde luego, la aptitud a la emoción; y Vanoli, según hemos visto en el curso de nuestro examen psíquico, es sujeto emotivo y excitable. Se lo nota conmovido cuando se le habla de temas familiares; se pone pálido, cuando se le renuevan recuerdos tocantes a su matrimonio; tiembla cuando se le nombra a su conuñado».

«Pero, en las condiciones en que él se encuentra al presente, iguales reacciones se obtendrían en un sujeto normal. Y la emoción, para dejar amnesia, ha de ser violenta y excesiva, si no se desarrolla en un loco».

«Sería imposible renovar por la experiencia, un estado emotivo idéntico al que hubiera tenido intensidad suficiente para ser seguido de amnesia. Pero es posible establecer si su emotividad es anormal, investigando si su límite inferior sobrepasa la reacción ordinaria. Para hacerlo, hemos acudido al laboratorio».

«Hemos repetido experiencias que son corrientes en psico-



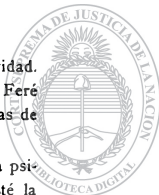
gía experimental. Es sabido que tanto las diversas excitaciones sensoriales, como las emociones o el trabajo intelectual, producen modificaciones circulatorias apreciables».

«Más se ha investigado en ese sentido sobre el trabajo intelectual que sobre las emociones. Pero Gley (en sus *Etudes de Psychologie Physiologique et Pathologique*), hace constar, fundado en experiencias propias y ajenas, que los resultados obtenidos son iguales en todas aquellas excitaciones. Sintetiza las modificaciones aludidas en la producción de estos seis fenómenos: 1.º Aumento del número de los latidos cardiacos, que parece guardar relación directa con la intensidad de la atención; 2.º Dilatación de la arteria carótida y aumento del dicrotismo del pulso carotideo. Fenómenos inversos en la arteria radial; 3.º Estos caracteres son más acentuados cuanto más intensa la atención; 4.º Ellos persisten cierto tiempo después que la actividad cerebral ha cesado; 5.º Estas modificaciones no dependen de cambios de la actividad cardiaca, ni de la respiración; 6.º Están subyugados a la influencia vaso-motriz».

«En la prueba a que sometimos a Vanoli, hemos empleado el pletismógrafo de Lehmann. Debido probablemente a la experiencia a que estaba sometido, su estado emotivo fué constante durante toda ella (Vanoli tiene ordinariamente 55 a 60 pulsaciones por minuto). Pero los más triviales motivos de conversación, que siempre eran incluidos en la dirección de su espíritu, a fin de que las modificaciones no fueran debidas a la intensificación de su atención, producían variaciones apreciables. Mayores fueron esas modificaciones cuando se trataba de provocarle emociones ligadas al motivo del proceso y máximas, cuando se le ha hecho el relato completo de asuntos que a simple vista lo emocionan».

«Los gráficos que acompañamos a este informe, revelan los fenómenos señalados por Gley. La experiencia ha dado, pues, resultado positivo, y confirma el que desprendiéramos de nuestro examen psíquico».

«Otra razón más nos inclina a pensar que la emotividad de Vanoli es anormal. Y es que las obsesiones, fenómenos que, si bien atenuados, son reales y efectivos en su espíritu, son conside-



radas por muchos autores como perturbaciones de la emotividad. La opinión no es unánime, pero tiene muchos partidarios y Feré ilega hasta considerar las obsesiones como formas sistemáticas de la emotividad». (Feré. *La Pathologie des Emotions*).

«No es que la amnesia de que tratamos, esté ligada a la psicastenia que padece el sujeto, por el sólo hecho de que lo esté la obsesión (que supone enfermedad de la emotividad). Recuérdese que las amnesias sintomáticas fueron ya descartadas y que ahora nos estamos ocupando sólo de las que son independientes de toda afección mental. Pero es innegable que, en caso de que la amnesia sea real y dependa de la emoción, la psicastenia del sujeto es muy significativa».

«Las emociones enormes, por su forma o por su intensidad, aparecen con frecuencia en la psicastenia; Dupré (*Regis, Precis de psychiatrie*, página 42) asigna especial importancia a la constitución emotiva. Eso no quiere decir que ellas hayan de ser seguidas de amnesia total, pero significa sí que Vanoli habría estado preparado para que se realizase la primera condición de las amnesias por emoción: la existencia de una emoción enorme».

«En pocas palabras, y para rematar la cuestión: Vanoli es un sujeto emotivo; puede haber sido tocado por una emoción violenta, y puede haber olvidado todo lo sucedido en el curso de esa emoción» (1).

En el siguiente capítulo del informe pericial, se enumeran los signos de presunta realidad y los de presunta simulación, referentes a la amnesia y bien que ambos son ahí considerados equivalentes, a nuestro juicio, prevalecen los primeros. Pero ello no hace al caso; lo que nos interesa ahora dejar establecido, es que si el criterio técnico considera que la amnesia de Vanoli, pudo ser real y que, siéndolo, ella no pudo ser debida a otra cosa que a intenso «shock» moral, éste demostraría la actitud insólita de Carolina, explicando al mismo tiempo la coincidencia de que su impulso suicida con la ausencia mental del procesado.

---

(1) Véase informe médico, de fojas 348 vuelta a 350 vuelta.





6.—Los médicos no han podido determinar si Carolina C. se suicidó o murió por acción de tercero, como no han podido decirnos, si la amnesia invocada por el acusado es simulada o real. Esto significa que el caso de autos es de duda y que el artículo 13 del código de procedimiento debe aplicarse.

Una ley de partida, establece que los juzgadores deben estar más inclinados y aparejados para librar los hombres de pena, que para condenarlos en los pleitos que claramente no puedan ser probados o que fueren dudosos, pues más santa cosa es y más derecha de quitar al hombre de la pena que mereciese por el yerro que hubiese hecho, que darla al que no la mereciese, ni fuere responsable (1).

En mil casos, los tribunales han hecho aplicación de este principio de piedad, que es al mismo tiempo una regla de sana filosofía. Como lo enseña Garraud, el procedimiento criminal no tiene por único y solo objeto la persecución de los malhechores, sino también la protección de las gentes honradas. No es necesario suponer que todo acusado sea un culpable y es necesario admitir, salvo la prueba en contrario, que todo acusado es un inocente. La inversión de la presunción de inocencia no es concebible si faltan los signos exteriores, como ocurre que permitan clasificar al inculpado en una categoría antropológica o sociológica (2).

La conciencia del magistrado jamás puede permanecer tranquila si fulmina grave pena en casos como el que nos ocupa, ya que la duda surge en todas las constancias del proceso, sin que nos sea permitido asegurar la culpabilidad del reo. De muchas cosas oscuras no puede jamás surgir la luz y aquí sobran los puntos interrogantes y los problemas que no han podido solucionar los médicos legistas con toda su conciencia y caudal de personales observaciones. Absolviendo, V. S. podrá quizá cometer un error, desde que un malvado quedaría impune; pero, condenando, se comete la más grande de las iniquidades, desde que la pena bien podría descargar sobre la cabeza de un inocente.

(1) Ley 9, título 31, partida 3.ª

(2) Garraud, *L'Instruction Criminelle*, tomo I, página 487.



## VISTA:

La causa por homicidio seguida de oficio y por querella de J. C., contra ANÍBAL PALMIRO VANOLI, sin sobrenombre ni apodo, argentino, de treinta años de edad, casado, hacendado, alfabeto y domiciliado en el partido de Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires y accidentalmente en esta capital, Santiago del Estero, 1045, tercer piso.

## Y CONSIDERANDO:

1.º Que se le imputa haber dado muerte a su esposa María Carolina C., hecho ocurrido como a las cuatro y media p. m. del 6 de septiembre del año próximo pasado, en el interior de un automóvil de alquiler.

2.º Que el señor agente fiscal a fojas 382, solicita la pena de veinticinco años de presidio, la querella a fojas 540, el máximo de la pena y la defensa a fojas 412 y 548, la absolución de culpa y cargo del procesado.

3.º Que de la declaración del agente Octavio Romero fojas 18 y 112, chauffeur José Moretti, fojas 14 y 91, testigos José Volpi, fojas 29, L. Harriot de Castañeda fojas 64 y 133, Ana Bennet de Harriot fojas 77 y 136 y Filomena Riservelt fojas 251, informes médicos de fojas 25 y 27, de la asistencia pública de fojas 256, autopsia de fojas 61 y 179, inspección ocular de fojas 243, partida de defunción de fojas 38, arma certificada a fojas 34, diligencia del comisario instructor de fojas 4 y declaraciones del inculpado fojas 41, 98 y 269, se comprueba que el día y hora mencionados, los esposos Vanoli, después de permanecer de visita en casa de la señora Leonor Harriot de Castañeda, sita Pueyrredón 1869, subieron en la puerta de la misma en el automóvil de alquiler número 823, guiado por el chauffeur José Moretti, el que había sido hecho parar por una persona de la servidumbre de aquella,



a indicación de la misma, y por haber pretendido Vanoli ir personalmente en su busca, quien solicitó fuera cerrado; que ésta, antes de internarse dió orden a Moretti de ir hacia Palermo. Puesto en movimiento el coche por Pueyrredón hacia Peña, y habiendo andado cincuenta y tres metros — distancia comprendida entre la casa de la señora de Castañeda y dicha esquina — el chauffeur siente un quejido, y al darse vuelta, observa que la portezuela derecha se hallaba abierta, y que la mujer que había ocupado el asiento de ese lado, estaba bañada en sangre y su acompañante trataba de sotenerla de la parte posterior de la cabeza, por lo que detuvo la marcha del vehículo y llamó al agente de facción en Peña y Pueyrredón, Octavio Romero, el que concurre conjuntamente con el testigo José Volpi, sorprendiendo al procesado que con la navaja de afeitar certificada en autos, se hería en el cuello, la que le es quitada por el referido agente y quien ante la gravedad del caso y dado el estado en que se hallaba la mujer, ordena al chauffeur seguir hasta el Hospital Alemán por su proximidad, y subiéndose al pescante, se dirigió a ese sitio, mientras Volpi, parado en el estribo del lado donde se hallaba aquélla, sostenía la puerta para evitar que cayera el cuerpo de la misma, que se recostaba en ella, encontrándose sentada en el piso del auto, recogiendo en el trayecto la cartera de malla certificada y que a la herida se le había desprendido del brazo al sacarlo por el espacio abierto de la puerta. Llegados a aquel establecimiento, se constató que la mujer Carolina C. de Vanoli era cadáver, y su muerte la consecuencia de la herida que tenía en el cuello, y su esposo presentaba una lesión leve, también en el cuello, la que le fué curada en el hospital Fernández a donde fué trasladado poco después de llegar al Alemán.

4.° Con lo expuesto en el considerando anterior, resulta plenamente probada la existencia de la muerte de la Vanoli, correspondiendo ahora establecer, si el procesado es autor responsable de ella, como se sostiene por la querella y agente fiscal.

La defensa al solicitar la absolución de culpa y cargo de su patrocinado, se funda en que la muerte de la esposa de aquél se ha producido por un acto voluntario de la misma, teniendo en cuen-



ta los siguientes antecedentes: la dirección de la herida, inexplicable dada la diferencia de estatura y situación en que iban sentados en el automóvil, estar manchadas con sangre las manos de Carolina y ser ésta una histérica, lo que se demuestra por haber atentado contra su vida en otra oportunidad, correlacionándolo con los hechos que se producían en los momentos de intimidad de los protagonistas, con lo expresado por los testigos que antes del suceso estuvieron con aquéllos, estableciendo el estado de intranquilidad de la esposa y su confesada relación con Q. A., anterior al matrimonio, y lo establecido también por la querella y los médicos doctores Ingenieros y Cabrera, sobre las facultades mentales de Carolina, y se agrega, poniéndose en el caso de que ésta hubiera sido muerta por el reo, que no existiría responsabilidad criminal porque el hecho se habría consumado en una perturbación de los sentidos, de acuerdo con lo que establece el artículo 81, inciso 1.º, del código penal.

Es un hecho plenamente constatado por la declaración del acusado, de la querella, de la madre y hermana de aquél, Palmira Vanoli de Vanoli, fojas 462, y María Vanoli, fojas 463 y testigo José M. Méndez, fojas 371, que el primero era legítimamente casado con la interfecta Carolina C.

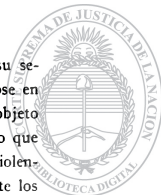
Veamos los antecedentes que nos da el procesado sobre el hecho de autos y sus relaciones con su esposa. El primero es el que se produce a raíz del mismo, ante el comisario instructor, quien al tomar conocimiento del suceso, se traslada al Hospital Alemán, a donde habían sido llevados los esposos Vanoli, y sometió al reo a un interrogatorio por el sub-dicho funcionario, le manifestó como se llamaba y le dió su domicilio, agregando «que ocupó un automóvil con su esposa Carolina C. y casi en seguida ella se suicidó, y él como la quería entrañablemente, se apoderó de la navaja de afeitar de que hiciera uso, y a su vez pretendió el mismo objeto, pero fué impedido por alguien», (fojas 4 vuelta).

Siete días después, hallándose en asistencia en el Hospital Fernández, presta ante el juez declaración indagatoria, fojas 41, y en esa oportunidad manifestó que se negaba a declarar en todo



lo que se refiriera a sus relaciones con su esposa durante su noviazgo y matrimonio el que se había realizado hacia tres meses; y agregó, que después de su boda, se dirigieron a su establecimiento de Coronel Pringles, donde permanecieron un mes o mes y medio, regresando él solo a esta capital, mientras su esposa permanecía en casa de su hermano Eugenio; que después de cinco días volvió al lado de su esposa, con la que se trasladó nuevamente a su estancia, y a fines de agosto, viajaron juntos a esta capital, con el fin de hacer reconocer a Carolipa con un especialista de mentales, consultando al efecto al doctor Ingenieros, quien después de un examen, indicó el tratamiento que requería; que en esa oportunidad, aquélla manifestó sus deseos de ser internada para su curación, a lo que se declaró disconforme el referido facultativo; que dos o tres días después de esa visita, y a pedido de su esposa, la llevó al Instituto Frenopático de la calle Montes de Oca, y como se le exigiera un certificado, pensó solicitárselo al doctor Ingenieros, no haciéndolo porque no les agradaba el establecimiento, motivo por el que la sacó esa misma tarde; que el día del hecho, después de almorzar en casa del doctor Reynoso, se dirigieron de visita a la del señor Castañeda, y al salir de ésta subieron a un automóvil sin poder precisar cuál de los dos dió la dirección al *chauffeur* ni cuál era; y desde ese momento no recuerda nada de lo que pasó dentro del coche, a excepción de haber tomado él una navaja de las manos de su señora sin saber cuál, creyendo fuera de afeitar y con ella trató de suicidarse impelido por un acto de desesperación al ver que su señora se suicidaba, no recordando cómo se suicidaba ésta, ni con qué arma, ni cómo la vió, ni si la habló o no, como también si hizo movimiento alguno para evitar que su esposa se suicidara; no recordaba tampoco ningún hecho posterior a lo que deja referido, hasta el día subsiguiente en que se encontró herido en el hospital, sin saber por quién, ni cómo, ni con qué arma y atribuyéndole su falta de recuerdo, a que desde un tiempo atrás viene sufriendo faltas parciales de memoria, notando algunos días su existencia con relación a ciertos hechos, no obstante recordar otros.

A fojas 98, amplía su indagatoria, estableciendo en ese acto, no



recordar si encontrándose en Pringles, tuvo un incidente con su señora, que diera motivo a que le pegara, agregando, que hallándose en esta capital el 25 de junio, se trasladó a Pringles, con el sólo objeto de entrevistarse con su cuñado, a fin de ponerle en conocimiento que su esposa le había revelado, al día siguiente de su boda, que violentada por su cuñado Q. A., había tenido relaciones con él durante los cuatro o cinco años anteriores a su matrimonio, y agrega, no recordar haberle hecho manifestaciones a Eugenio de que le hubiera pegado a Carolina, por la revelación que le hizo, como también de que no repetiría los actos de violencia contra la misma. Reconoce que debido a la situación creada por ese antecedente, se producían incidentes entre ambos, llegando en una oportunidad en que se hallaban en la estancia tomando el te, al manifestarle que la abandonaría si no olvidaba los vicios, adquiridos en sus antiguas relaciones, a contestarle que prefería sciudarse y en seguida se levantó con el pretexto de ir a buscar un pañuelo y a los pocos minutos sintió una detonación de arma, encontrándola en el suelo de la habitación, herida de bala en el hombro, llegando en seguida la mucama Raimunda Martínez, quien oyó de boca de aquélla que había atentado contra su vida ella misma, y expresan también que en las revelaciones que poco a poco le hacía su señora, sobre sus relaciones anteriores, supo que en una oportunidad en Europa, se tiró de una escalera con el propósito de suicidarse, en circunstancias que su cuñado la perseguía, habiéndole expresado más de una vez, que lo que más le remordía la conciencia, era la vida que había llevado, engañando a su hermana y a él, lamentándose no haberse muerto en Burdeos o no haberse tirado del vapor cuando venía a esta ciudad.

Por último, a fojas 269 y a su pedido. fojas 267, presta otra declaración, ampliando los datos dados en sus anteriores, estableciendo en ella que yendo en un automóvil, de la casa del doctor Reynoso a la del señor Castañeda, su señora espontáneamente le hizo nuevas referencias sobre sus íntimas relaciones con Q. A., lo que lo puso nervioso, logrando dominarse, pues no le respondió en forma alguna, habiendo durante el tiempo que estuvo en lo de Castañeda, mantenido en ese estado de nerviosidad debido también a que se nombró a Q. A. durante la visita; y al retirarse, en el zaguán. interrogó



a su esposa si le agradaría ver nuevamente a aquél, a lo que le contestó que sí, agregándole «si regresara al país, reanudaré con él las relaciones, por ser el único hombre que la había hecho conocer la vida y con el que había gozado». Desde ese instante, dice no recordar nada de lo que pasó después, negándose a declarar la causa de porqué la hizo dicha pregunta.

Como se ve, de lo expuesto, el reo niega haberle dado muerte a su esposa.

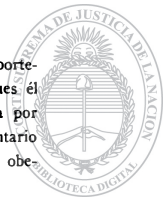
El hecho se produjo, como se ha dicho, en el interior de un automóvil, y cuando su conductor se dió cuenta, él se había consumado.

Dicho testigo nos refiere en sus declaraciones, que los esposos Vanoli pacíficamente y con toda tranquilidad subieron a su automóvil, pues no notó alteración alguna en los mismos, habiendo recibido la orden de parte del reo, para que siguieran a Palermo, no obstante que su esposa, según el mismo, tenía que volver a casa del doctor Reynoso, por haberse convenido en el almuerzo, entre la señora de éste y aquélla, ir a hacer compras después de la visita a lo de Castañeda.

El mencionado testigo, como se ve, no notó nada de anormal en el acusado, inexplicable por cierto, teniendo en cuenta la transformación que debió operarse en el sujeto, ante la emoción violenta que dice le causó la contestación de su esposa, llegándole hasta hacerle olvidar todo lo que pasó después.

Siguiendo la relación que hace el testigo citado, nos encontramos que a poco andar el auto (ver plano de fojas 245), oye quejidos que partían del interior del mismo, se da vuelta y observa que la Vanoli estaba herida y su esposo que la sostenía de la parte posterior de la cabeza, atribuyendo esa actitud, a fin de evitar que aquella se cayera, pues la puerta de ese lado se hallaba abierta.

Esta última circunstancia la observa también el testigo José Volpi, desde su domicilio, al ver que se paraba el auto, al que se dirigió, para inquirir lo que pasaba, por los ademanes que vió hacer al *chauffeur*, al llamar al agente y la señora Elvira Santamarina de Lezica Alvear, que se cruzaba en ese momento con su automóvil, fojas 309.



La defensa no hace alusión alguna al antecedente de la portezuela abierta, de gran importancia a juicio del infrascripto, pues él nos demuestra de una manera inequívoca, que ha sido abierta por Carolina, lo que no se explica, si se tratara de un hecho voluntario de la misma, no así por haber sido atacada, y con el fin de huir, obedeciendo al instinto de conservación.

Tampoco se destruyen las conclusiones a que arriban los médicos de los tribunales, ante las características que presenta la lesión que ocasionó la muerte de la Vanoli.

Es cierto que los peritos doctores Castellanos y Arana, en su informe ampliatorio de la autopsia (fojas 179), establecen que la lesión que presentaba Carolina, no permitía una afirmación categórica, sobre si se la produjo ella u otra persona, pero agregan: «que hay indicios de valor real para presumir lo segundo, lo que resultaría en concordancia con la conclusión de «suicidio posible, homicidio probable», dado el distinto significado que importan los adjetivos aplicados.»

Nuestros asesores, en el informe citado, establecen que los procedimientos cruentos no son los de predilección de la mujer, para suicidarse, por razones de sensibilidad y el horror que tienen a la sangre, y al efecto, se apoyan en una opinión de Hoffman, el que afirma que el suicidio por heridas en la mujer es relativamente raro.

La defensa, con el fin de demostrar lo contrario, fojas 433, fojas 455 y 482, cita dos casos de mujeres que se han suicidado, degollándose. Con ello, es evidente que no se destruya la opinión de los peritos médicos, ni de Hoffman, desde el momento que los mismos no lo establecen de una manera absoluta, lo que también no deja de reconocer la defensa a renglón seguido, fojas 433 vuelta.

Se afirma por los médicos, que es raro que en los suicidios por heridas, sean ellas tan profundas en los dos extremos, pues según los mismos, y basadas en opiniones de autores, existen en aquéllos las colas que se presentan en él, comienzo o terminación, como también otras pequeñas heridas que interesan sólo la piel, resultantes de la falta de energía en el cumplimiento de la resolución tomada en la intensidad del dolor, incomodidad relativa de herirse a sí mismo, etc.,





características que no presentaba la que aparecía en la víctima, pues ella era única y profunda en toda su extensión.

Como se ve, los especialistas consultados y autores de medicina legal, están contestes aun cuando no de una manera absoluta, que es un indicio de presunción de una auto lesión, que las heridas presentan colas en sus extremos, interpretándose lógicamente, la existencia de esta particularidad como un reflejo del estado del ánimo del suicida, en momentos de cumplir su resolución, empuñando con mano vacilante el arma, dado los motivos varios de orden psíquico expresados por los peritos en el informe de la referencia.

La defensa, nos ha aportado al proceso elementos que corroborarían lo expuesto por los médicos.

En efecto, a fojas 455 y 482, corren dos testimonios de autopsias presentadas con el fin a que se ha referido anteriormente.

Es cierto que en ellos se ha omitido decir si existían o no colas, pero tenemos que en el de fojas 455, se afirma que el cadáver de Adela Vila, suicida por herida incisa de las regiones antero laterales del cuello, según los informantes, presentaba «en su extremidad postero-superior (extremo donde comenzó), una ligera bifurcación como si al iniciarse el corte el arma hubiera sido movida». Esta particularidad, que es la única consignada a los extremos de la herida, es precisamente un equivalente de la cola en las heridas de los suicidas.

En el de fojas 482, también expresa el médico como única de los extremos de la herida del cuello de la suicida María Lorente Suárez, la misma particularidad al informar «la piel donde parece que comenzaba la herida, presentaba varias pequeñas incisiones.»

Ambos casos, vienen a corroborar como se ha dicho, la tesis sostenida por los especialistas, respecto a que las heridas de los suicidas presentan con frecuencia, características que revelan la vacilación—sean colas—lo más común—o incisiones superficiales múltiples, como los que se ha hecho referencia y que no presentaba en ninguna de sus formas el caso de autos.

Es inconcebible que Carolina se haya producido semejante herida, dada las dificultades que debían presentársele para empuñar la navaja, ante la inseguridad de la hoja, estando abierta, y que sólo



una mano vigorosa, firme y experta en su manejo como la del procesado, ha podido herir tan profundamente en toda su extensión y no que haya sido la víctima quien se la ha ocasionado, dado que se hallaba con los guantes puestos, circunstancia plenamente comprobada, no obstante la desaparición de los mismos, con lo declarado por Volpi, agente Romero, comisario instructor L. Harriot de Castañeda, Ana Benet de Harriot, Filomena Riservelt, e informe de fojas 115, las que establecen que salió de lo de Castañeda con ellos puestos, y así se hallaba en el momento del hecho, como también después de él, al llegar al hospital Alemán, declaraciones que se correlacionan más con otras ante los distintos momentos en que fué anotada, la observación, no pudiendo alegarse fueran quitados con anterioridad al hecho, por carecer de tiempo material para ello.

En cuanto a la cita que la defensa hace de Vivert, fojas 435, ante el hecho de que la víctima tenía manchadas las manos con sangre, antecedente que sólo se menciona en el informe del médico de policía de fojas 27, ello no tiene importancia toda vez que dicho facultativo no nos dice, si tenía los guantes puestos antes de la observación y aún así teniendo en cuenta la posición en que fué hallada en el automóvil y la abundante hemorragia, no sería de extrañar que se lo hubieran manchado en ese momento, penetrando por la abertura de los guantes, o después que le fueran quitadas dichas prendas, haciendo descansar las manos en sus ropas empapadas en sangre.

Con respecto a la dirección de la herida con la posición que ocupaban en el interior del automóvil, que según la defensa, a ser el procesado el autor, debía producirla en otra forma, fojas 432, teniendo en cuenta las características que presentaba aquélla, y que según los médicos, pueden observarse en casos de homicidio, cuando el matador sorprende a su víctima de atrás, no es inadmisibles tal conclusión en el sub-judice, si se observa que el reo ocupaba un asiento a la izquierda de su esposa y que era mucho más alto que ésta, lo que permitía fácilmente en aquella forma inferirle la lesión de la referencia.

Y a esa conclusión se llega correlacionando ello con los demás antecedentes que quedan expuestos con la manía suicida atribuida a su esposa por el reo, y que la defensa niega, que no se ha constatado



no obstante las manifestaciones de la sirvienta Raimunda Martínez, doctor Cabrera y hermano de la víctima, sobre la confesión de Carolina, del hecho acaecido en la estancia de Pringles, y que el interés del acusado en no denunciarlo, e informe de fojas 226, sobre la dirección de la bala, por la forzada posición que debió tomar al disparar el arma, lo hace sospechoso; y por no probarse, que ello, lo informado por el doctor Cabrera, las relaciones confesadas y sus huidas del lecho conyugal, sindiquen a Carolina como una histérica, como lo pretende la defensa, dado que los doctores Ingenieros y Osorio que examinaron también a aquélla, no observaron anomalía alguna que les revelara tal estado.

No confiesa el reo que pegara a su mujer, pero tampoco lo niega, y aun cuando nadie lo ha visto ejercer actos de violencia, ellos se inducen de lo declarado por los testigos Adrián Heine fojas 257, Apolinaria de Heine, fojas 262, Oscar M. Wolman, fojas 277, José M. Méndez, fojas 371 y por la querella, que lo establece categóricamente, antecedentes que dan su explicación a las huidas, por el terror que le infundía el reo, a quien se hallaba dominado por sus actos de sevicia, y que motivaban, a no dudar, la ocultación de los actos a que la sometía.

En cuanto a las relaciones de la víctima con Q. A. de que eran una invención de la misma, basándose en lo sostenido por la querella, que la niega, y con ello robustecer la tesis sustentada que se trata de una histérica con la opinión de Kovalensky, sobre casos idénticos, el infrascripto disiente con tal conclusión, pues aquéllas se han producido, aunque no en forma normal, dada la confesión de Carolina al afirmar que su virginidad había permanecida intacta, la que aparece corroborada con la conclusión del informe de fojas 61, sobre las condiciones en que se hallaban los colgajos del himen que denotaban una desfloración reciente y los antecedentes que al respecto nos da el procesado, refiriéndose a los vicios que había adquirido en sus relaciones anteriores a su matrimonio.

Con referencia al argumento que se hace, que la Vanoli pudo suicidarse acosada por los remordimientos; así como no se explica por la defensa que se buscara por el reo esa oportunidad para consumar el hecho, habiéndosele presentado otras en la estancia y sobre



todo cuando tuvo conocimiento de esas relaciones, tampoco se explicaría tal actitud en esos momentos de la víctima, teniendo también su explicación el estado de nerviosidad en que se hallaba la misma en casa de Castañeda, en contraposición a la tranquilidad observada por el reo, que nos lo informa los que allí con él estuvieron contrariamente a lo que él afirma.

En efecto, según el acusado, en el trayecto entre la casa del doctor Reynoso y la de Castañeda, su esposa le daba detalles de lo que hacía con Quintana, y notamos que en los antecedentes que él mismo suministra a los médicos que lo examinaron, fojas 348, refiere que le preguntó que ¿qué haría si su cuñado viniera a Buenos Aires?, lo que quedó sin respuesta porque llegaban en ese momento a la de Castañeda, y al salir de la visita, volvió a preguntarle lo mismo, recibiendo la contestación hiriente.

He ahí explicado la actitud de nerviosidad de Carolina y su interés en demorar la salida lo más posible, dado que debía suponerse renovaría la conversación, obligándola a contestar la interrogación pendiente, como se produjo en la forma establecida por el reo, y que contribuye a afianzar la prueba de cargo, como autor del hecho, de acuerdo con lo que prescriben los artículos 357 y 358 del código de procedimiento en lo criminal.

5.º Que la defensa, colocándose en el supuesto de que Vanoli fuera el autor de la muerte de su esposa, nos dice que no es responsable de acuerdo con el artículo 81, inciso 1.º del código penal.

Declarado el procesado, como se ha visto en el considerando anterior autor material de la lesión que ocasionó la muerte de su esposa, veamos ahora si la excepción alegada puede aceptarse legalmente.

El procesado, según sus exposiciones, acusó una amnesia desde el momento que recibió la contestación hiriente, antes de subir al automóvil en la puerta de la casa de Castañeda, si bien no completa desde el momento, que dió ciertos detalles, y que resultan contrarios a lo sucedido, de acuerdo con las conclusiones a que se arriban en esta sentencia.

Los doctores Castellanos y Arana, peritos oficiales, acompañados de los nombrados por la defensa, doctores Ameghino y Fernán-



dez, procedieron a efectuar un examen del acusado, llegando sin disidencia, en su minucioso y claro dictamen, fojas 322, a establecer las siguientes conclusiones: Primera. Que el reo presenta anomalías que atenúan ligeramente su responsabilidad con relación a las prescripciones de la ley penal. Su anomalía, es pasible de crisis agudas, durante los cuales sería mayor la atenuación de su responsabilidad.

Segunda. La amnesia que acusa Vanoli no puede determinarse si es real o es simulada y agregan puede ser real y consecuente en este caso, a una emoción violenta y puede ser simulada.

En cuanto a la primera cuestión, no ofrece dudas, se trata de un sujeto que padece de una psicastenia incompleta, cuyos síntomas no lo eximen de responsabilidad, sino que la atenúan, fojas 338.

Con referencia a la segunda cuestión, los especialistas, después de iluminar en un meditado e ilustrado informe las amnesias sintomáticas, llegan a que se produce por una emoción violenta, y no declaran que se trate de un simulador, por haber constatado anormal la emotividad de Vanoli.

No obstante ello, el infrascripto considera que la amnesia, única perturbación psíquica manifestada por Vanoli, aún en el caso de no ser simulada, no modificaría en forma alguna su responsabilidad, porque aparte de que ella puede coexistir con la integridad de los procesos de conciencia, sólo sería admisible en el sub-judice, por choque emocional, como lo establecen los peritos en su estudio por exclusión de todo otro síntoma como se ha dicho.

Ahora bien ¿cuál ha sido la emoción capaz de producir ese *shock* moral al procesado?

No puede decirse que hayan sido las manifestaciones de la víctima sobre sus deseos de reanudar las relaciones con Q. A., toda vez que éste era un tema tratado, puede decirse a diario entre ellos, y que no podía impresionar mayormente al prevenido, que según el mismo, se sometía a escuchar los relatos que le hacía sobre sus intimidades con aquél, concordante con su actitud tranquila el día que puso en conocimiento esas relaciones a su cuñado Eugenio.

La impresión capaz de determinar el choque intenso — en el caso improbable de su existencia, pues la memoria no le falta para establecer hecho que le favorecen — habría sido la consumación mis-



ma del homicidio a que asistía, máxime siendo él el autor, resuelto y consumado en la perfecta integridad de sus facultades mentales, no siendo de extrañar que la laguna de su memoria abarque el tiempo en que esos hechos se producían, por tratarse de un fenómeno comprobado y admitido por la ciencia y clasificado como amnesia anterograda, que consiste en la anulación de la facultad de evocación, por haberse borrado el recuerdo en la conmoción moral, no obstante haberse fijado normalmente en la memoria, cuando ellos ocurrían. Véase Eugenio Fausi, *Psiquiatria forense*. Ed. Italiano, páginas 183 y 184. Regis. *Precis, de Psychiatrie* Ed. Francesa 1914, página 78.

Teniendo en cuenta por otra parte que se trata de una excepción que para que ella sea aceptada, debe estar probada plenamente, lo que no ocurre, dado lo expuesto, Vanoli debe ser declarado con responsabilidad criminal por el hecho de autos.

6.° Que la calificación del sub-judice es la de homicidio provocado por injurias ilícitas y graves, encuadrado en lo que dispone el artículo 17 C. 1, inciso 4.°, letra "a", y 5.° de la ley 4189, correlacionado con el inciso 2.° de la misma disposición y artículo 55 del código penal, teniendo en cuenta el vínculo que los unía y la comprobación de las injurias.

7.° Que existe en contra del acusado, la agravante del artículo 84, inciso 10 del código penal y a su favor la atenuante del artículo 83, inciso 1.° del mismo código, dada las conclusiones del informe médico y en atención a la naturaleza de las mismas, se hace equitativo graduar la pena por debajo del promedio. Artículo 6.° de la ley citada.

Por estos fundamentos, fallo condenando a ANÍBAL PALMIRO VANOLI, A DIEZ Y SEIS AÑOS DE PRESIDIO, accesorias de ley y costas procesales, y responsabilidad civil, emergente por el delito cometido. Compútase en forma la prisión preventiva sufrida y si no fuere apelada, elévese en consulta a la excelentísima cámara en lo criminal.

CARLOS M. MARTÍNEZ.

Ante mí:

*E. Madero.*

## EXPRESIÓN DE AGRAVIOS DEL DOCTOR JOFRÉ



1. Hechos invocados en el fallo de primera instancia.—2. La falta de observación del *chauffeur*.—3. La portezuela del auto.—4. Los guantes de la suicida.—5. La naturaleza de la herida.—6. Los tratamientos.—7. Indicios demostrativos del suicidio.—8. Amnesia de Vanoli.

1.—El juez *a quo* analiza minuciosamente, como lo ha hecho ya la defensa, los antecedentes del caso y llega a la conclusión de que fué Anibal P. Vanoli el matador de su esposa.

Cuatro son los hechos fundamentales invocados por el inferior y de los que vamos a hacernos cargo.

Se sostiene por el señor juez que Vanoli es el autor del hecho porque el *chauffeur* que lo conducía no notó nada de anormal en su fisonomía, porque la portezuela del automóvil se encontraba abierta, porque la señora Carolina C. llevaba puestos los guantes, porque la herida que ella tenía en el cuello, presentaba colas, y finalmente porque Vanoli pegaba a su esposa.

Examinemos separadamente cada una de esas presunciones.

2.—El argumento que se deduce de la circunstancia, que el conductor del automóvil no notó nada de anormal en el acusado, para concluir de ahí que éste es culpable, no resiste al análisis.

Los hombres, excelentísima cámara, no llevan escrito en la frente sus designios, ni es posible que los conductores de automóvil descubran las tempestades que sacuden el alma de los viajeros.

Que el conductor del automóvil haya notado o dejado de notar anomalías en Vanoli, carece de importancia para la solución de esta causa.

3.—El argumento de la portezuela abierta, reviste mayor importancia, a lo que se agrega que con él se ha hecho un cargo a la defensa, que nosotros creemos injustificado.

La defensa — dice el señor juez — no hace alusión alguna al



antecedente de la portezuela abierta, de gran importancia a juicio del infrascripto, pues él nos demuestra de una manera inequívoca, que ha sido abierta por Carolina, lo que no se explica, si se trataba de un hecho voluntario de la misma, no así por haber sido atacada, y con el fin de huir, obedeciendo al instinto de conservación\*.

El cargo que se formula a la defensa de no haberse ocupado de la portezuela abierta del automóvil, es gratuito.

Ni el ministerio público, ni el querellante particular, han mencionado como presunción, semejante hecho. ¿Se quería que la defensa se ocupase de cargos no formulados? ¿Debíamos echarnos a nadar en el campo incommensurable de las suposiciones?

La portezuela ha sido abierta por Carolina, dice el juez.

¿De dónde saca esa conclusión?

¿En qué la funda?

La portezuela pudo abrirse sola como ocurre con frecuencia en cierta clase de automóviles, pudo abrirla Vanoli.

Carolina — agrega el juez — abrió la portezuela porque fue atacada por su esposo Vanoli.

¿Acaso los suicidas no proceden como pretende el inferior que procedió la víctima de este hecho?

En mil casos constatados por la experiencia diaria, la persona que se tira al agua bracea vigorosamente para salvarse, y se salva; en otros tantos el que se está asfixiando por medio de una ligadura al cuello, afloja el lazo para volver a la vida, y no es extraño tampoco que quien ha bebido un tórico para poner fin a sus días, pida socorro.

Nada de particular tendría, entonces, que Carolina, en un movimiento instintivo, estirase la mano y consiguiese abrir la portezuela del carruaje. Pero de ahí no se sigue lógica y naturalmente el ataque que se atribuye a Vanoli.

4.—La circunstancia invocada también por el juez de que la señora llevaba puestos los guantes, carece de influencia para demostrar la culpabilidad del acusado.

Puede manejarse un arma con guantes. Los militares y los dueñistas van al combate enguantados.





Nos dice el inferior que «es inconcebible que Carolina se haya herido, dadas las dificultades que debían presentársele para empuñar la navaja ante la inseguridad de la hoja estando abierta, y que sólo una mano vigorosa, firme y experta en su manejo, como la del procesado, ha podido herir tan profundamente en toda su extensión, etc.»

La afirmación es avanzada. Ella significa sentar dos hechos, desmentido el uno por la experiencia y no constatado en autos el otro.

Las mujeres, según la opinión del juez, no son capaces de suicidarse con navaja de afeitar.

La experiencia nos demuestra que el hecho es falso. En autos consta que en esta ciudad se degolló con una navaja una señorita de Vila, y que en la estación Serodino, de la provincia de Santa Fe, otra mujer se degolló con un cuchillo de mesa. (Véase constancias corrientes a fojas 455 y fojas 482.)

La mano vigorosa y firme que se atribuye al procesado, no está constatado que sea un hecho real.

Tampoco se ha constatado, como lo pretende el juez, que Vanolí sea experto en el manejo de la navaja.

La víctima de este lamentable drama era una mujer en buen estado de salud, con excelente musculatura y que tenía treinta y un años de edad; ¿por qué no pudo, entonces, manejar ella misma la navaja?

5.—Otro de los argumentos aducidos por el inferior es el de la naturaleza de la herida. «Es cierto, se lee en la sentencia, que en el caso del suicidio de la señorita Vila el informe ha omitido decir si existían o no colas; pero tenemos que se afirma que la suicida, por herida incisa de las regiones antero-laterales del cuello, presentaba en su extremidad postero-superior una ligera bifurcación como si al iniciarse el corte el arma hubiera sido movida. Esta particularidad, que es la única consignada a los extremos de la herida, es precisamente un equivalente de la cola en las heridas de los suicidas».

Esta afirmación va por exclusiva cuenta del juez, ya que ella no resulta del ilustrado informe del doctor Gnecco y de la opinión de los autores de medicina legal.

Por otra parte, el juez se separa de las conclusiones de los



médicos, pues éstos no se atreven a afirmar que se trate de un homicidio, y es por eso que nos dicen «el suicidio posible, el homicidio probable».

El inferior, en su sentencia, ha interpretado la duda del informe de los facultativos en contra del reo, aplicando, por consiguiente, al revés la regla del artículo 13 del código de procedimiento en lo criminal.

6.—Finalmente, dice el señor juez lo siguiente: «No confiesa el reo que pegara a su mujer; tampoco lo niega; aun cuando nadie lo ha visto ejercer actos de violencia, ellos se induce de lo declarado por los testigos Adrián Heine (fojas 257), Apolinaria de Heine (fojas 262), Oscar M. Wolman (fojas 277), José M. Méndez (fojas 371) y por la querella, que lo establece categóricamente, antecedentes que dan su explicación a las heridas, por el terror que le infundía el reo, a quien se hallaba dominada por sus actos de fuerza, y que motivaban, a no dudar, la ocultación de los actos a que la sometía».

«No confiesa el reo, pero tampoco lo niega». Luego el hecho es cierto. Con esa forma de raciocinar nos comprometemos a hacer condenar a un santo.

La argumentación nos recuerda un pasaje que se encuentra en la página 245 de *L'île des Pingouins*, del admirable Anatole France, que no reproducimos por no ofender la ilustración de V. E.

Las declaraciones de los testigos Heine, Wolman y Méndez, han sido mal interpretadas por el juzgado. No es posible que Vanoli maltratase a Carolina en las horas íntimas del lecho conyugal.

7.—Vamos a formular una síntesis de los hechos a fin de establecer que en el caso traído a conocimiento de V. E. se trata de un suicidio y no de un homicidio, como lo sostiene el señor juez.

Se trata de un homicidio, dice el juez de instrucción, homicidio perpetrado por Vanoli a consecuencia de las relaciones amorosas existentes entre Carolina y su cuñado Q. A.

Esas relaciones no han existido, según el fiscal y el querellante. Esas relaciones existen, según el juez de sentencia.

¿En qué quedamos, entonces?



Francamente, nadie sabía decirlo. La defensa empezó afirmando en su escrito y concluyó por dudar.

Las histéricas, y Carolina lo era a carta cabal, inventan historias extrañas y complicadas y no retroceden delante de ninguna de las consecuencias a la comedia que representa; Vibert, página 709, edición de París, 1900.

Es clásico el caso de María de Morel, que hizo condenar a un oficial del ejército francés por una supuesta tentativa de estupro donde había escalamiento, lesiones y otras cosas imaginativas.

La duda, entonces, sobre las relaciones de Q. A., debió asaltar el espíritu del juez y llevarlo derechamente a la aplicación del aforismo *in dubio pro reo*.

Carolina, se nos ha dicho, se mostraba intranquila antes del hecho, porque sospechaba que su esposo iba a asesinarla.

Mayor razón hay para que estuviera intranquila si tenía ella el propósito de matarse.

A nadie dijo Carolina que su esposo la hubiera amenazado de muerte, y solamente a base de suspicacia se puede atribuir su tristeza a ese hecho.

El hermano de la víctima, en la querella y a fojas 157 y 158, nos habla de las tristezas y angustia que dominaba a Carolina a la caída de la tarde; lo que provocaba sus ataques de nervios. De aquí se seguiría entonces, que Carolina venía presintiendo el asesinato desde mucho tiempo antes a la visita que hiciera a la señora de Castañeda.

¿Por qué no comunicó ese hecho a su hermano? ¿Por qué no habló de él con nadie?

Es que semejante estado de espíritu no ha existido, o de haber existido, ha tenido otras causas que las invocadas por la acusación.

La señora Carolina no se ha suicidado ni nada autoriza esa hipótesis—se dice.

La defensa ha constatado múltiples hechos de valor positivo y real que justifican el suicidio.

La citada señora atentó contra su vida, como consta en autos. Ella misma lo confesó a su hermano; lo declara categóricamente la



único testigo presencial, Raimunda Martínez, y lo corrobora el doctor Cabrera, que asistió a la lesionada en aquel entonces.

El hecho es sospechoso, dice el juez, por la forzada posición que debió tomar Carolina al disparar el arma con que se hirió.

Basta leer lo que dice el doctor Cabrera, que la lesión nada tiene de sospechosa. Según dicho facultativo, «encontró a Carolina en cama con una herida de bala en el tercio interno de la clavícula izquierda y en su borde superior», etc.

¿Cómo quiere el señor juez que sean las heridas de bala en los suicidios?

Los médicos legistas nos dicen que, generalmente, las mujeres se hieren con armas de fuego en el corazón o en sus proximidades. ¿Y no está, acaso, próxima al corazón la clavícula izquierda?

A las afirmaciones categóricas de los testigos y del médico, a la propia confesión de Carolina, el señor juez nos opone su distinto modo de pensar en un razonamiento que carece de lógica.

El histerismo de Carolina ha sido negado por el inferior.

Han sido inútiles los razonamientos de la defensa para llevar al ánimo del juzgado el convencimiento de la realidad de ese hecho.

El hermano de la víctima y querellante en estos autos, nos dice que hubo oposición en la familia al casamiento de Carolina, fundado en el carácter y temperamento especial de ésta, a quien a los treinta años se la seguía considerando como a una criatura (fojas 47 y 48).

Carolina sentía repugnancia, según el querellante, por las brutalidades de su esposo a consecuencia del exceso con que éste ejercía sus derechos de esposo. «Con su desenfreno martirizaba a esa pobre criatura».

Se necesita, o no haber vivido, o ignorar lo que es el contacto de los sexos para creer semejantes cosas. Carolina se quejaba de las caricias de su esposo, huía a altas horas de la noche, del tálamo nupcial, porque era una histérica, una pobre enferma.

Y eso lo confirman hasta los médicos que cita el inferior y otros testimonios y antecedentes que éste omite.

El doctor Ingenieros depone, a fojas 193 otra, que «Vanoli y su esposa estuvieron en su consultorio el 31 de agosto de 1915, manifestándole el primero que su señora se encontraba un poco nervio-



sa... Que la señora de Vanoli es una mujer muy pobre de espíritu.»

El doctor Augusto Osorio, a fojas 182 vuelta, refiere la visita que Vanoli y su esposa hicieron en septiembre de 1915 al Instituto Frenopático que él dirige y con el objeto de internar a dicha señora. Agrega el mencionado facultativo, «que sólo conversó con la señora de Vanoli breve tiempo y que la única impresión que obtuvo de su estado fué la de que dicha señora era una persona poco comunicativa, se hallaba triste y revelaba un espíritu débil.»

En el dicho de dos testigos funda el inferior la afirmación de que Carolina no era una histérica, olvidando que aquéllos confirman el histerismo.

Ha omitido también recordar el señor juez las declaraciones de los doctores Cabrera y Barlaro corrientes a fojas 211 y 487. Manifiesta el primero que dicha señora no era una persona normal mentalmente por la serie de observaciones que ha hecho sobre la misma, y agrega el segundo que era muy retirada y su estado no era normal.

Ha prescindido el inferior de la luz que arroja la autopsia de Carolina, donde los médicos de los tribunales dicen «que en las meninges hay placas diseminadas de paqui-meningitis, extendidas a toda la superficie de ambos lóbulos parietales y la del lóbulo temporal derecho». Como se ve, pues, Carolina presentaba lesiones en el cerebro, justificativas del histerismo, negado por el juez.

En el informe producido a fojas 62 vuelta por los médicos de los tribunales, manifiestan éstos, en la tercera conclusión, «que las interpretaciones de los hechos observados en el cadáver de Carolina son insuficientes para afirmar que se trate de un homicidio o de un suicidio.»

Esto significa que la verdad sobre los hechos hay que buscarla en otra parte, ya que la ciencia médica ha sido impotente para resolver el problema que se le sometió y ya que carecemos de testigos presenciales.

Como lo hemos manifestado en escritos anteriores, que no hay necesidad de repetir, existe una serie de antecedentes, además de los ya expuestos, tendientes a demostrar el suicidio y que alejan la idea del homicidio:



Carolina de Vanoli era una histérica, y las histéricas tienen una notable predisposición al suicidio;

La herida, según el informe de fojas 62 vuelta, ha sido de izquierda a derecha, habiendo podido inferirse, ya sin que la navaja la esgrimiese la víctima o ya un victimario.

A este respecto dice el señor juez que es probable que el matador ha sorprendido a su víctima de atrás, si se tiene en cuenta que el reo ocupaba un asiento a la izquierda de su esposa y que era mucho más alto que ésta, lo que le ha permitido fácilmente, en aquella forma, inferirle la lesión de la referencia.

Colóquese a dos personas en un automóvil o en un sofá para simplificar el experimento, la una al lado de la otra. La víctima a la derecha, el victimario a la izquierda. Hágase que éste, más alto que aquélla, le pase la mano por detrás, y se constatará que es imposible herir de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Esta es la forma de la lesión de la señora de Vanoli, según el informe de fojas 61 vuelta. La descripta es la posición que ocupaban los actores, según el juez.

Para diferenciar el homicidio del suicidio, se indica, en primer término, la existencia de lesiones o traumatismos en la víctima, y, según el informe de fojas 61 vuelta, no los presentaba.

Nada, pues, hace presumir que Carolina, cuyo estado de desequilibrio mental era evidente, no haya puesto fin a sus días por propia y deliberada voluntad.

8.—Reconoce el inferior que en el dictamen de fojas 322 los peritos no han podido determinar si la amnesia que acusa Vanoli es real o si es simulada, y luego agrega que la amnesia, aun en el caso de existir, no modifica en forma alguna su responsabilidad; porque, aparte de que ella puede coexistir con la integridad de los procesos de conciencia, sólo sería admisible en el *sub judice* por el choque emocional, como lo establecen los peritos en su estudio, por exclusivo de todo otro síntoma, como se ha dicho. Entra luego dicho magistrado a estudiar cuál ha podido ser la emoción que ha producido el choque normal, para perderse naturalmente en una serie de hipótesis sin base legal alguna.



Finalmente, se quiere echar a cargo a los defensores el peso de la prueba la falta de memoria, olvidando que la prueba incumbe a la acusación, y que del informe médico citado resulta que, cuando menos, es dudosa la falta de memoria de que se queja Vanoli.

El artículo 31, inciso 1.º, del código penal, exime de pena al que ha cometido el hecho en una perturbación cualquiera de los sentidos que ha privado a los agentes de la comisión de sus actos, y ése es justamente, en el peor de los casos, la situación de Vanoli.

En la duda debe absolverse, porque así lo dispone un sano principio de filosofía penal.

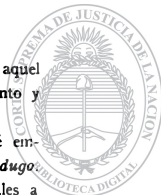
#### IV

##### VISTA DEL SEÑOR FISCAL DE CÁMARA

1. El hecho.—2. La prueba.—3. La personalidad del reo.—4. La calificación legal del hecho.—5. Conclusión.

1.—Anibal P. Vanoli, temperamento mujeriego, ligeramente disipado y hondamente psicopático, se enamoró de Carolina C., joven, de honrada familia, hermosa y pobre de espíritu. Fué correspondido; pero el casamiento no pudo al principio realizarse por la decidida oposición de la familia de la novia. Ésta fué llevada a Europa, como para que olvidase su simpatía. No obstante, a la vuelta, manifestó su firme deseo de volverse a ver con Vanoli, y acabó casándose con él.

Aquel matrimonio resultó desastroso, desde el primer instante. La psicosis de Vanoli se manifestó en una forma que tal vez podría calificarse de *sadismo*. Complaciase en *torturar* a su mujer, física y moralmente, con *diabólico refinamiento* y *morbosa sensualidad*. Ocurriósele que Carolina había tenido amores con su hermano político Q. A. Como obsesionado por esta idea, le hablaba del asunto en todo momento. La infeliz, totalmente dominada por su *extraño esposo*, no se atrevía a contradecirle. Padecía *horribles castigos*, que le infligía Vanoli, especialmente durante la noche, en las horas que debían ser de tiernas expansiones. Alguna vez llegó ella a huir del



lecho conyugal. Por las tardes, cuando se acercaba la hora de aquel amor trágico—llamémosle así—, la infeliz tenía accesos de llanto y ataques de nervios.

Vanoli, como ocurre a menudo en casos semejantes, fué embriagándose cada vez más y más en sus *expansiones de verdugo*. Probablemente después de infligir las primeras torturas morales a su víctima, pasó a infligirle las físicas. La misma pasividad de Carolina debió aburrirle y cansarle, hasta que nació en su ánimo el pensamiento de desembarazarse de ella, ya haciéndola recluir en un manicomio, ya quitándole la vida.

Llevó a su mujer a consultar a los médicos psiquiatras doctores José Ingenieros y Augusto Osorio. La opinión de estos facultativos pareció inclinarse a que se trataba de un caso de simple debilidad mental, que no obliga en manera alguna a la hospitalización de la enferma. Podría continuar ésta la vida marital.

Ante semejante perspectiva, Vanoli, a los tres meses de casado, dió muerte a su esposa, de un navajazo en el cuello. El hecho ocurrió en la calle, yendo ambos en un automóvil, el 6 de septiembre del año pasado.

2.—El señor juez *a quo*, en el extenso considerando 3.º de la sentencia recurrida, corriente a fojas 552, analiza muy bien la prueba, desde el punto de vista de que el autor material y moral del hecho es Aníbal P. Vanoli. Como sobre esta cuestión me hallo muy de acuerdo con el señor juez *a quo*, omito el recordar las piezas probatorias citadas en el mencionado considerando 3.º En mi entender, está, pues, perfectamente demostrada la responsabilidad penal del reo.

Aparte de esto, discrepo con el señor juez respecto de los siguientes puntos:

a) No está probado que Carolina C. mantuviera jamás relaciones amorosas con Q. A.

b) No está probado que dicha Carolina C. faltase en lo más mínimo al respeto y a las consideraciones que debía a su marido.

c) Está probado que Aníbal P. Vanoli no tuvo ningún motivo o pretexto para castigar a su esposa, y mucho menos para matarla.

Respecto del punto a), recuérdese ante todo el informe pericial



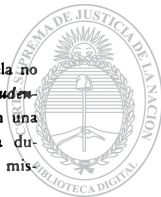


de la autopsia verificada en el cuerpo de la víctima, documento corriente a fojas 61, en el cual se declara que «el himen está desgarrado, con los colgajos sin completa retracción». Esta falta de retracción de los colgajos es indicio vehemente de que Carolina había sido desflorada poco tiempo antes de su muerte. Por consiguiente, no había podido tener años atrás relaciones con su cuñado. A esta prueba ha de añadirse que no se halla en autos la menor presunción de que Carolina C. llevase una vida desarreglada y deshonesta antes de casarse. Era una muchacha ingenua, que vivía bajo la continua vigilancia de su padre y sus hermanos. Su única pasión (al menos alrededor de la época crítica de los treinta años en las solteras honestas) parece haber sido la que sintió por su esposo, y que éste correspondió tan mal. (Véanse las declaraciones de fojas 193 vuelta, 182 vuelta, 211 y 487 y también las de fojas 123, 126 vuelta, 133 y 164.)

Respecto del punto *b*), véase la autopsia certificada a fojas 61 y las declaraciones de fojas 209, 530 y 534. De todo ello resulta que Carolina era una pobre de espíritu, absolutamente incapaz de agraviar al *hombre feroz* que la tenía bajo sus garras. No hay en autos una sola circunstancia que desmienta el carácter inofensivo de Carolina, que, antes que una verdadera mujer, era como una criatura.

Respecto del punto *c*), fácilmente se advierte que viene a ser una consecuencia a los dos anteriores. Además, se apoya en el carácter y la psicopatía de Vanoli, según el extenso informe pericial de fojas 322. Es muy interesante, para juzgar esta cuestión, el extenso relato que hace E. C. en su escrito de fojas 144. A mi juicio, ésta es una pieza sincera, aunque, sin duda, de forma apasionada. La mayor parte de las declaraciones (especialmente de fojas 123, 126 vuelta, 133 y 164) confirman lo substancial de esa exposición del hecho. Nada, en cambio (salvo las aseveraciones del procesado), demuestran que E. C. faltó a la verdad.

3.—Los principales elementos para juzgar la personalidad del reo son, en este caso: *a*) La naturaleza del hecho; *b*) las declaraciones indagatorias de fojas 41 y 98; y *c*) el informe pericial de fojas 322.



La naturaleza del hecho y el modo con que se ejecutó revela no sólo una *brutalidad feroz*, sino también *cálculo, previsión, prudencia, astucia*. Vanoli no mató a su mujer en un rapto de ira, en una de aquellas *monstruosas expansiones matrimoniales* que tenía durante la noche, a puerta cerrada. Vanoli proyectó el golpe, y al mismo tiempo inventó la disculpa y preparó la «coartada».

Para justificar el inhumano trato que daba a su esposa, *sostuvo aquello de que Carolina había tenido relaciones* con su cuñado Q. A. y de que aún le amaba. Así se lo dijo a las personas de su familia y a su hermano político E. C. Cuidóse mucho de tener aterrorida a su mujer, para que no le desmintiera.

«Cuando surgió en la cabeza de Vanoli la idea siniestra de matar a Carolina, trató de preparar los ánimos, *diciendo que estaba enferma y que había intentado suicidarse*. Representó en este sentido *una hábil comedia, en la estancia de Pringles*. Dijo a E. C. que Carolina tramaba el proyecto de quitarse la vida, y hasta facilitó que se llamara a algún médico; luego podía ser un testigo favorable.»

En sus declaraciones indagatorias de fojas 41 y 98, Vanoli demuestra su temperamento disimulado, *perverso y amoral*. Los médicos de los tribunales, después de examinarle, no pueden decir si su amnesia es simulada o no (véase informe pericial de fojas 322). Como datos para juzgar la personalidad ética del reo, son muy interesantes los documentos de fojas 316 y 317. Todo esto revela su espíritu de enredo y de intriga, para salvarse de la sanción que corresponde a su horrible delito.

Según el citado informe pericial de fojas 322, Vanoli es hijo de primos hermanos; *su padre era alcoholista*, y en su familia hay varios casos de *neuropatología*. «Presenta actualmente anomalías que atenúan ligeramente su responsabilidad con relación a las prescripciones de la ley penal. Su anomalía es pasible de crisis agudas, durante las cuales será mayor la atenuación de la responsabilidad». En una palabra, Vanoli no está del todo exento de cierta psicosis; pero es responsable. No me parece que, dada nuestra legislación, pueda considerarse un caso de *responsabilidad atenuada*.

4.—El señor juez *a quo* califica legalmente el hecho de HOMICIDIO PROVOCADO POR INJURIAS ILÍCITAS Y GRAVES, y cree que se debe aplicar lo dispuesto en el artículo 17, capítulo I, inciso 4.°, subinciso a) e inciso 5.° del mismo artículo 17 de la ley 4189 (véase considerando 6.° de la sentencia recurrida).

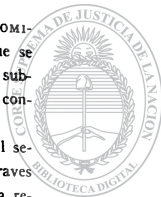
No estoy en manera alguna de acuerdo con esta opinión del señor juez *a quo*. La víctima no ha inferido injurias ilícitas y graves al victimario, salvo que se considerasen tales la mansedumbre, la resignación, el cariño pasivo y humilde. No consta que aquella desgraciada mujer faltara en nada a su esposo. Es más: aunque se admitiese que antes hubiera habido algún enredo entre Carolina y Q. A. (lo que es falso), esto no podía considerarse como una injuria ilícita y grave, de los que mueven a homicidio.

En mi opinión, se trata simplemente de un UXORICIDIO, perpetrado con toda voluntad y ensañamiento en la persona de la esposa legítima. Es un delito que nuestra legislación castiga con pena de muerte, como lo dispone el artículo 17, capítulo I, inciso 2.°, de la ley 4189.

No obstante, me parece que no puede aplicarse la pena capital, por el carácter de la prueba. Podría ésta calificarse de prueba de presunciones, dado el alcance que se da a esta expresión en nuestro foro. Por consiguiente, según los términos del artículo 55 del código penal, corresponde la pena inmediata inferior a la de muerte, que, de acuerdo con el artículo 59, parece ser la de presidio por tiempo indeterminado.

No hallo circunstancias atenuantes ni agravantes. No deben computarse ni la premeditación, alevosía y abuso de mayor edad y fuerza, ni tampoco la supuesta ofuscación o estado pasional. Todos estos rasgos son propios del uxoricidio.

Más bien podría discutirse lo de la responsabilidad atenuada. Pero el informe médico, de fojas 322, como he lo dicho ya, considera a Vanoli de todo punto responsable, conforme a los términos de nuestra ley. Una teoría distinta sería aquí ilegal, y, en caso de darle grande amplitud, podría resultar imprudente y peligrosa.





5.—Por estos fundamentos, opino que la sentencia recurrida debe ser reformada, imponiéndose a Aníbal P. Vanoli la pena de PRESIDIO POR TIEMPO INDETERMINADO, costas y demás accesorios legales. Así lo dictamino, adhiriendo a la apelación interpuesta por la parte querellante y por los señores defensores del procesado.

Buenos Aires, etc.

C. O. BUNGE.

## V

### RÉPLICA AL SEÑOR FISCAL DE CÁMARA

1. Las afirmaciones del señor fiscal de cámara no se fundan en las constancias de autos.—2. Según éste, Vanoli inventó las relaciones de Carolina con Q. A.—3. Demostración de lo absurdo de esa afirmación.—4. Los amores de Carolina y Q. A. fueron confesados por aquélla.—5. Revelaciones de la autopsia, según el fiscal.—6. Opinión de los autores de medicina legal, sobre la determinación de la época en que se ha producido la desfloración.—7. Los castigos infligidos por Vanoli a su esposa.—8. La comedia de Pringles.—9. La indagatoria del reo y la Isla de los Penguinos.—10. El alcoholismo del padre de Vanoli.—11. La calificación del delito, caso de existir.—12. Consideraciones generales.

1.—Se le ha comunicado a la defensa, traslado del dictamen del señor fiscal de cámara, doctor Carlos Octavio Bunge, en el que se adhiere a los recursos deducidos en primera instancia, y solicita para el prevenido la pena de presidio por tiempo indeterminado, costas y demás accesorios legales.

Como, por nuestra parte, hemos sostenido la inocencia del reo, fundados en las constancias de autos, que no ha tenido en cuenta el ilustrado representante de la acción pública, necesitamos rebatir su argumentación con algún detenimiento.

Librenos Dios de pensar que el señor fiscal de cámara no haya leído los autos, porque ello constituiría una irreverencia para el alto



representante de la sociedad. Creemos más bien que sus puntos de mira son distintos de los nuestros.

Analicemos los hechos en que se funda el fiscal de cámara, al solicitar para Vanoli la aplicación del máximum de la pena. Nos dice el doctor Bunge en su citado dictamen, refiriéndose a los esposos Vanoli: «Aquel matrimonio resultó desastroso, desde el primer instante. La psicosis de Vanoli se manifestó en una forma que tal vez podría calificarse de sadismo. Complaciase en torturar a su mujer, física y moralmente, con diabólico refinamiento y morbosa sensualidad. Ocurriósele que Carolina había tenido amores con su hermano político Q. A. Como obsesionado por esta idea, le hablaba del asunto en todo momento. La infeliz, totalmente dominada por su extraño esposo, no se atrevía a contradecirle. Padecía horribles castigos, que le infligía Vanoli, especialmente durante la noche, en las horas que debían ser de tiernas expansiones. Alguna vez llegó ella a huir del lecho conyugal. Por las tardes, cuando se acercaba la hora de aquel amor trágico—llamémosle así—, la infeliz tenía accesos de llanto y ataques de nervios».

El párrafo transcripto ha sido creado *«a toute pièce»* por el señor fiscal y a base exclusiva de imaginación, por cuanto otra cosa distinta consta del expediente.

No hay en dicho párrafo una palabra de verdad.

Reiteramos perdón a V. E. si incurrimos en repeticiones, que se imponen ante las afirmaciones rotundas y dogmáticas de la requisitoria fiscal.

2.—Parecería que Vanoli, para tener en qué entretenerse, para gozar de una fruición extraña, inventó las relaciones de su esposa con Q. A. No las inventó aguijonado por los celos, que llegan a engeguercer a los espíritus más claros, sino en forma tranquila y fría y como si sintiese placer en considerarse deshonrado.

3.—Pero ¿no ve el señor fiscal de cámara que esto es sencillamente absurdo? ¿No comprende que a ningún hombre, a menos de estar loco de remate, se le puede ocurrir que su esposa le había sido infiel, para darse el *placer* de torturarla y de asesinarla más tarde?



Carolina era joven, hermosa, recién casada por amor. No era rica. ¿Por qué había de torturarla su esposo?

En las leyendas bíblicas, Job se rascaba con resignación en un estercolero la sarna que Satanás le enviara con permiso de Dios para obligarlo a blasfemar, y eso tiene todavía su explicación; pero tipos de cornudos, como los que nos describe el señor fiscal de cámara, creemos que son una muestra única que vale la pena de ser estudiada en su psicosis, como él nos dice.

¿En qué página de libro, en qué novela de extravagancias ha leído que un marido invente por cálculo el adulterio imaginario de su esposa, nada más que para hacer sufrir a ésta? ¿Quién conoce una escena de la vida real que se parezca al cuadro descrito por el fiscal de cámara? Se puede proceder, como éste lo cree, por exceso de amor en un rapto de celos; por deseos de injuriar al ser que se aborrece y cuya muerte se desea. Nada hay de eso en el caso de autos.

Piense serenamente cada uno de los señores jueces a quienes nos dirigimos y, como hombres que han vivido, nos dirán si tiene alguna verosimilitud el cuadro sombrío que nos describe el señor fiscal doctor Bunge.

4.—Las versiones que corren en autos de los amores de Carolina con Q. A. están lejos de ser una invención del acusado Vanoli: ellas han sido reveladas a la justicia por el propio querellante. Éste, para solicitar la aplicación del máximo de la pena, ha presentado escritos llenos de pasión como lo reconoce el fiscal de cámara, y en alguno de ellos ha dicho palabras que vamos a citar una vez más, porque parece ignorarlas la acusación. Habla el señor E. C., refiriendo una entrevista que tuvo con los esposos Vanoli: «¡Desgraciados, decía yo, para llegar a esto es que me buscaron a mí, para interceder ante mi padre! Bueno, Carolina, es necesario que me lo digas todo, por terrible que sea. ¿Es cierto, Carolina, esa horrible revelación que me ha hecho Aníbal, de tus relaciones con Q. A.? Dime, Carolina, ¿es cierto? Carola, siempre presa de llanto, entre sollozos y frases entrecortadas, decía: «Sí, E., es cierto», pero jurando al mismo tiempo que su virginidad no ha sido vulnerada» (fojas 153).



Ya ve, pues, la excelentísima cámara, que si alguien inventó esas relaciones, no fué el acusado, como lo piensa el señor fiscal, sino que ellas surgieron claras y espontáneas de los propios labios de la culpable, es decir, de la esposa que entregó su virginidad antes del matrimonio al esposo de su hermana.

La testigo Apolonia Post de Heine, a fojas 272, refiere una conversación que tuvo con los esposos Vanoli, en los siguientes términos: «Que en esa misma ocasión, Vanoli le decía a la declarante, que su esposa, *antes de casarse*, había *engañado* a sus padres y cometido dos crímenes, lo que era confirmado por la esposa, con signos de afirmación, al ser preguntada al respecto por Vanoli. Que en esas mismas ocasiones. Vanoli decía que se consideraba muy desgraciado por culpa de la mujer, por el motivo que acaba de expresar».

La afirmación del señor fiscal, de que Carolina estaba dominada por su extraño esposo, es una simple suposición que carece en absoluto de base en los autos. Carolina fué a pasar una temporada en la casa de su hermano, lejos de la presencia de Vanoli, sin que en ningún momento retractase la confesión que hiciera a E. C.

Si la falta cometida por Carolina existió, como todo lo hace presumir, es evidente que élla debió llevar la muerte al espíritu del esposo. Si no existió, y se trata sólo de la invención de una histérica, tesis que hemos adoptado piadosamente para salvar el honor de una familia y que ha sido mal comprendida por alguien que interviene en el proceso, el efecto debió ser exactamente el mismo.

5.—Afirma el señor fiscal de cámara, que es una burda invención del acusado las relaciones de Carolina con Q. A., porque los médicos, en su informe de fojas 61, manifiestan que el himen de Carolina se encontraba desgarrado, con los colgajos sin completa retracción.

«Esta falta de retracción de los colgajos — agrega el fiscal — es indicio vehemente de que Carolina había sido desflorada poco tiempo antes de su muerte. Por consiguiente, no había podido tener años atrás, relaciones con su cuñado. A esta prueba ha de añadirse que no se halla en autos la menor presunción de que Carolina C. llevase una vida desarreglada y deshonesta antes de casarse. Era una



*muchacha ingenua*, que vivía bajo la continua vigilancia de su padre y sus hermanos», etc.

En todo esto, hay desconocimiento de la medicina legal y de la vida. En la desfloración, cuando pasa de ocho días, no es posible constatar la fecha en que se produjo, mucho menos en una simple autopsia que se propone otros objetos, como en el caso de autos. El contacto entre los sexos, se produce, aunque no se lleve vida desarreglada y no escapan de él las *ingenuas* que viven bajo la custodia vigilante de sus padres. Esto lo enseña la experiencia diaria de todos los hombres que saben cómo ocurren las cosas del amor que son cosas de la vida...

6.—Pero, detengámonos un momento en lo que se refiere a la época en que la desfloración ha podido producirse.

En este juicio se pretende sacar graves consecuencias a base de *colas* y *colgajos*.

Las *colas* de la herida que presenta Carolina, se han invocado para sostener que ésta fué asesinada y no se suicidó. Ningún autor de medicina legal habla de tales cosas como signo diferencial entre el homicidio y el suicidio. Los *colgajos* que presentaba el himen, le sirven al fiscal de cámara para sostener que ésta no fué desflorada por Q. A. Todos los autores desmentirán tal conclusión.

No hay médico que sea capaz de evidenciar que el primer coito causante de la ruptura himenal, ha tenido lugar quince días antes de su examen pericial.

«Cuando la desfloración es antigua — dice Divergie, citado por Legrand du Saulle—, no se le puede señalar nunca época; y en materia de violación, una desfloración se CONSIDERA ANTIGUA AL CABO DE OCHO O DIEZ DÍAS», (tomo 3, página 385).

Casper, en su obra, sobre medicina legal, tomo I, página 129, adhiere a las palabras de Divergie que dejamos transcriptas.

Le Gludic afirma que las desfloraciones antiguas son imposibles de precisar en qué época han tenido lugar (página 106).

Si una desfloración es vieja a los ocho días, ¿cómo puede precisarse, quince días después, la época en que se verificó?. De ninguna





manera. El hecho habrá ocurrido hace quince días, hace dos meses o dos años, todo es vago y conjetural.

José Ziino en su «Compendio di medicina legale», edición de Milán, 1906, tomo II, página 43, dice sobre el punto de que nos venimos ocupando: «Orfila y otros autores creen que la cicatrización del himen se produce en dos o tres días; Toulmouche fija el término de ocho a diez días y ésta es la opinión más generalizada».

El mismo autor sostiene que, pasados diez días de la desfloración, es imposible, por sólo los rastros del himen, saber la época en que el hecho tuvo lugar, y las dificultades aumentan si se trata de un cadáver.

Es necesario tener en cuenta que los famosos colgajos a que se refiere el fiscal, son las carúnculas mirtiformes llamadas así por los autores, por una lejana semejanza con la hoja del mirto, y que esas carúnculas no se forman completamente, sino por un prolongado uso del coito y frecuentemente después del primer parto.

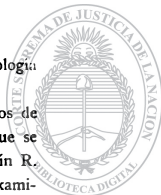
Sobre estas cuestiones pueden verse los autores citados y a Lacassagne. «Précis de médecine legale», página 755 a 760.

Como se ve, pues, de las constancias de la autopsia, se ha sacado una consecuencia desautorizada en absoluto por la medicina legal.

7.—Se pretende que nuestro defendido «infligia horribles castigos a su esposa, principalmente durante la noche, en las horas que debían ser de tiernas expansiones».

Para autorizar semejante afirmación, se invoca la declaración de los sirvientes de los esposos. Adrián Reine nos dice, a fojas 257: «que oyó quejas de la señora de Vanoli, quien decía ¡ay, qué dolor! déjeme, ¡ay, qué dolor! etc.»; y Apolonia Post de Heine, manifiesta a fojas 272: «que oyó quejas de la señora de Vanoli, tanto de día como de noche, y que ello ocurría cuando aquélla se encontraba en cama, consistiendo dichas quejas en exclamaciones como estas: «¡ay, qué dolor, déjame, ay, qué dolor!, que las dirigía a su esposo», etc.

Hemos explicado en el escrito de defensa, en forma minuciosa y detallada los motivos de estas quejas de la señora de Vanoli, que, por cierto, obedecían a causas muy distintas de las que les atribuye el



señor fiscal de cámara, con desconocimiento completo de la psicología masculina y femenina.

Basta leer lo que dice la autopsia practicada por los médicos de los tribunales, para convencerse de que los horribles castigos que se invocan, no han existido. A fojas 61 los médicos doctores Martín R. Arana y Nicéforo Castellanos, dicen que el cadáver que han examinado «corresponde a una mujer como de treinta años de edad, cabellos castaños, nariz aguileña, bien parecida, cuerpo de regular grueso, bien formado y en buen estado de nutrición, de 1.62 metro de talla y en buen estado de higiene personal. En la piel del abdomen no hay requiebrajaduras. Hay rigidez cadavérica en los cuatro miembros. NO HAY MANCHAS CONGESTIVAS EN LAS REGIONES DECLIVES, EN LAS MANOS NO HAY HERIDAS NI OTROS TRAUMATISMOS QUE INDIQUEN LUCHA O DEFENSA», etc.

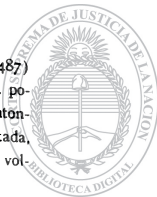
No es posible que los médicos legistas no hayan observado los rastros que forzosamente debieron dejar los horribles castigos que Vanoli infligía a su esposa y que tan gratuitamente se le atribuyen en el escrito que contestamos.

Se sostiene asimismo que Vanoli, procediendo con un frío y cruel refinamiento, pretendió hacer recluir a su esposa en un manicomio.

La reclusión no obedecía a las causas que le atribuye el señor fiscal de cámara sino al hecho real de tratarse de una perturbada o de una histérica.

La prueba, a este respecto, es abundante, concluyente e insospechable.

El querellante, cuya opinión no puede tildarse de parcial para nuestro defendido, dice respecto de las facultades de Carolina, lo siguiente: «... Mi padre entonces le observó que dado el carácter y temperamento especial de Carolina, temía no se diera exacta cuenta del paso trascendental que pretendía dar. Que si de ella se exteriorizaba un carácter apacible y bueno, creía con fundamento que no fuera una mujer capaz de dirigir el manejo de una casa, pues que nunca en los años vividos a su lado, se había preocupado de ello dejando a M. que desempeñara esas funciones dirigentes, que por lo tanto, se le seguía considerando como una criatura sin aptitudes para mujer de un hogar, etc.» (fojas 147 vuelta).



Los doctores Ingenieros (fojas 193 vuelta), Barlaro (fojas 487) y Cabrera (fojas 209), están contestes en que Carolina era una pobre de espíritu, una mujer no normal, y nada de extraño tiene entonces que su esposo tratase de recluirla, no para preparar una coartada, como con ligereza se sostiene, sino para que recuperase la salud y volviese a su estado normal, si eso era posible.

8.—El señor fiscal pretende que cuando surgió en la cabeza de Vanoli la idea siniestra de matar a Carolina, trató de preparar los ánimos, DICIENDO QUE ESTABA ENFERMA Y QUE HABÍA INTENTADO SUICIDARSE. Representó en este sentido UNA HÁBIL COMEDIA EN LA ESTANCIA DE PRINGLES. Dijo a E. C. que Carolina tramaba el proyecto de quitarse la vida, y hasta facilitó que se llamara a algún médico; luego podía ser un testigo favorable.

Replicamos: la tentativa de suicidio de Carolina, está comprobada por la confesión hecha por ésta en presencia de su hermano E. y del médico doctor Cabrera, fojas 159 y 209, respectivamente; lo está, por la declaración de la testigo Raimunda Martínez, fojas 301.

¡Esa es la comedia!

Y el comediógrafo o comediante, tan preocupado se mostró de su obra o de su papel, que ni siquiera se lo hizo presente al juez de instrucción, hasta que éste se lo preguntó.

¡Así son todos los cargos!

9.—El señor fiscal de cámara agrega que Vanoli, en sus indagatorias de fojas 41 y 98, se muestra perverso y amoral.

El acusado, en esas indagatorias, se ha limitado a decir: que conoció a Carolina C. con quien se casó y que se niega a declarar lo que se refiere a sus relaciones de novio y de esposo; que fué con su esposa a consultar a varios médicos sobre la salud de aquélla; que no recuerda cómo ocurrió el hecho sangriento que se desarrolló en el automóvil; que esa falta de memoria la atribuye a un golpe que recibió en época anterior al hecho; que su esposa le había revelado las relaciones íntimas que había mantenido con Q. A., por lo cual llegó a golpearla; que el carácter de su señora era harto desigual; que ha-



bía dicho a su esposa que si no cambiaba de conducta, la abandonaría; que su esposa se mostraba arrepentida...

¿Dónde aparece la perversidad y la amoralidad que le imputa a Vanoli el señor fiscal de cámara? ¿Es, acaso, que se le hacen tales imputaciones porque no ha confesado un crimen no cometido?

Anatole France trae un diálogo en «La Isla de los Pengüinos», que no nos resistimos a la tentación de recordar.

—¡Pruebas, murmuró Greatank, pruebas! ¿qué es esto de pruebas? No hay sino una prueba cierta irrefutable, la confesión de culpable. ¿Pyrot ha confesado?

—No, mi general.

—Confesará, debe confesar. Haced un llamado a sus buenos sentimientos, que confiese por patriotismo, por la bandera, por el orden, por respeto a la jerarquía, por orden del ministro de la guerra... Pero, dime, Panther, ¿es que acaso él no ha confesado? Hay confesiones tácitas: el silencio es una confesión.

—No, mi general, él no calla, grita como una garduña. que es inocente.

—Panter, la confesión de un culpable resulta a veces de la vehemencia de sus denegaciones. Negar desesperadamente es confesar. Pyrot ha confesado».

Ese es el caso de Vanoli; debió confesar, debió recordar, por la vindicta social, por honor a la justicia, por el honor de la familia. ¡Si no lo ha hecho, es por perverso y amoral!

Estas son exageraciones que no nos explicamos en un juriconsulto tan distinguido e ilustrado como el señor doctor Bunge.

10.—El señor fiscal de cámara, refiriéndose al acusado Vanoli, le imputa en pocas páginas todo lo que a un hombre se le puede imputar. Es el acusado un digno émulo del marqués de Sade; ha procedido «con diabólico refinamiento y morbosa sensualidad»; «es un esposo extraño que infligía horribles castigos a su consorte»; «ha tenido expansiones de verdugo»; «es un hombre feroz que ha procedido con brutalidad feroz, con cálculo, previsión, prudencia, astucia»; «ha inventado cosas que no existían»; «ha representado una hábil comedia en la estancia de Pringles»; «es un perverso y amoral», etc.



El señor fiscal está en su perfecto derecho al tratar así a Vanoli. Para eso está acusado y debe soportar las violencias de lenguaje del representante de la sociedad. Es un reo y la ley autoriza a tratar así a los reos. Es menester que sufra junto con la pena que la ley fulmina, la tortura moral de la acusación como otros sufrieron las torturas físicas en los pasados tiempos, antes de ser colgados. El señor fiscal está en su derecho.

Pero lo que no es legítimo es el insulto a la familia de Vanoli en nombre de la cual protestamos como defensores y como amigos de alguno de sus componentes. El señor fiscal, en su dictamen publicado en la prensa periódica de esta capital, ha dicho que el padre de Vanoli era alcoholista. El hecho es inexacto; de absoluta inexactitud. No consta de autos, no puede constarle privadamente al representante de la acción pública y la afirmación corre por su exclusiva cuenta.

Los vecinos de Pringles, donde vivió el padre de Vanoli, saben que éste no era alcoholista. No es posible que un alcoholista se forme una fortuna luchando desde abajo, a fuerza de energía y de labor honesta, como se la formó el padre de Vanoli.

Que estas palabras nuestras, sirvan, cuando menos, de lenitivo a una madre anciana que llora sin ver, y a los hijos en cuyo hogar los nietos recuerdan con cariño al abuelo traído a colación en este juicio, sin motivo, ni razón que lo justifique.

**11.**—Entramos a ocuparnos de la calificación del delito imputado, con el único propósito de no dejar sin contestar en su totalidad el escrito del señor fiscal de cámara. Para nosotros la culpabilidad de Vanoli no está probada en manera alguna.

•Vanoli — dice el representante de la acción pública—, a los tres meses de casado, dió muerte a su esposa, de un navajazo en el cuello. yendo ambos en un automóvil, el 6 de septiembre del año pasado\*.

Nosotros podríamos habernos limitado a decir: Carolina C. vivaba con su esposo, y por disgustos domésticos se degolló con una navaja, falleciendo momentos después.

Una afirmación vale lo que otra afirmación, juzgadas las cosas con criterio simplista. Los expedientes estudiados por ese método son de una sencillez encantadora.



Hemos preferido, sin embargo, en escritos anteriores, entrar al análisis minucioso de los hechos para poner en evidencia que se trata de un suicidio y no de un homicidio. No se ha rebatido uno solo de nuestros argumentos que quedan en pie. No dudamos que V. E. ha de proceder, al fallar en definitiva, con criterio menos simplista pues conocemos la forma cómo se estudian los expedientes por los jueces del alto tribunal a quien nos dirigimos.

Reproducimos nuestra expresión de agravios y solamente por vía de hipótesis entramos al terreno donde nos lleva el señor fiscal de cámara.

Si Vanoli fuere declarado autor de la muerte de Carolina C., la pena que le correspondería, jamás podría ser la que pide el fiscal. La fulminada por el juez, con ser mucho más leve, es excesiva.

En la expresión de agravios que contestamos, se leen las siguientes palabras: «La víctima no ha inferido injurias ilícitas y graves al victimario, salvo que se considerasen tales la mansedumbre, el cariño pasivo y humilde».

¡La afirmación y siempre la afirmación! Parecería que el acusador no tuviera qué demostrar.

Hemos repetido hasta la fatiga, que Carolina injurió a su esposo al llevar al altar su virginidad perdida; que agravó esa injuria el día del hecho, al manifestarle a Vanoli que si encontrase nuevamente a Q. A., repetiría la falta.

¿Constituye esto una injuria ilícita y grave?

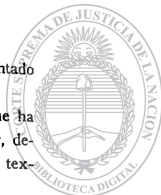
Sí, contesta cualquier hombre con sólo ponerse la mano sobre la conciencia.

Basta leer la impresión que la revelación de ese hecho produjo en el querellante, según él mismo lo confiesa, para darse cuenta del sacudimiento que debió experimentar el reo.

El artículo 17, inciso 4.º de la ley de reformas, considera como circunstancia calificativa benigna, la provocación del acto homicida, por la víctima, con ofensas o injurias ilícitas y graves.

Esas injurias ilícitas y graves provocan el ímpetu de ira o el intenso dolor que si no excusan la muerte, la explican aún ante los hombres de bien.

Nuestro artículo contiene la misma doctrina del artículo 51 del



código penal italiano, y la opinión de los autores que han comentado este texto legal, puede citarse ante un tribunal argentino.

El artículo recordado del código italiano, habla de aquel que ha cometido el hecho en el ímpetu de la ira o de un intenso dolor, determinado por UNA PROVOCACIÓN INJUSTA. Como se ve, los dos textos dicen la misma cosa.

La provocación suficiente en el caso de autos, surge clara y evidentemente no bien se ahonda en este proceso. Si Vanoli, como se dice, fuera el matador de su esposa, la verdad es que merecería alguna indulgencia y no todos los rigores de la ley, en su grado máximo.

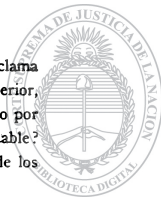
Intenso debió ser su dolor, grande su ira, al descubrir que su sueño de felicidad se derrumbaba el mismo día que había imaginado realizarlo. Su novia, su novia de largos años, había sido la querida de otro hombre y se lo confesaba plenamente. Eso no bastaba. Aquella mujer enferma, histérica, con toda seguridad llegó a arrojarle al rostro el día del hecho como un salivazo, la palabra brutal: si Q. A. se le atravesaba en su camino, reanudaría las relaciones amorosas de antaño.

¿Constituye esas palabras y aquellos antecedentes una injuria ilícita y grave? La palabra autorizada de V. E. lo dirá en su día, por medio de una sentencia con fundamentos, como todas las del tribunal.

La ley excusa al marido que mata a su esposa sorprendida en infragante delito de adulterio y disminuye notablemente la pena del ascendiente o hermana en el acto de sorprenderla en ilegítimo concubito. Ha tenido en cuenta el legislador el justo dolor que ha llevado al homicida a un estado tal de perturbación de los sentidos, que le ha hecho imposible resistir a la presión de las pasiones.

La ofensa original inferida por Carolina a la fe jurada a su esposo, debió perturbar a cada momento y hacerlo estallar por la provocación que le infiriera el día del hecho.

**12.**—Terminamos, excelentísimo señor, pidiendo la absolución para Vanoli. No es éste el criminal atroz que con tan negros colores nos pinta el señor fiscal. Cuando mucho, puede considerársele como un hombre a quien la suerte le deparó una mujer que lo engañó, tronchando sus ilusiones y malogrando su vida.



Si para casos como éste, el representante de la sociedad reclama la pena de muerte y por no poderse aplicar ésta, la inmediata inferior, ¿qué pena se reserva para los casos en que se ha ido al homicidio por perversidad brutal, por precio, o por otro fin innoble y despreciable?

Abusuela V. E., aún en la duda, y habrá hecho la justicia de los hombres, la única posible sobre la tierra.

## VI

### MEMORIAL PRESENTADO A LA CÁMARA DE APELACIONES

1. La primera impresión.—2. La opinión del *chauffeur*.—3. La portezuela del auto.—4. Los guantes de la suicida.—5. La mujer y los procedimientos cruentos.—6. Las «colas» de las heridas.—7. Los antecedentes.—8. La vida de Vanoli.—9. La vida de C.—10. El casamiento.—11. La revelación.—12. El estado de ánimo de Vanoli.—13. El estado de ánimo de C.—14. Tentativa de suicidio.—15. Varios indicios.

Excelentísima cámara:

1.—Hace pocos días he aceptado esta defensa, sin tener mayores antecedentes del hecho que ha servido de base a la formación del proceso, pues no lo conocía, ni por las referencias de la prensa periódica que, según me aseguran, se ocupó de él detenidamente.

Mi primera impresión he venido a recogerla en los autos y he comenzado por estudiar la sentencia que está recurrida y sobre cuya justicia deberá decidir V. E.

En el considerando primero está el primer hecho que servirá para orientar mi opinión. Se imputa al acusado «haber dado muerte a su esposa el 6 de septiembre de 1915, a las cuatro y media p. m. en el interior de un automóvil de alquiler».

La circunstancia que más hiere la atención desde el primer instante, es que este hecho se haya desarrollado en la vía pública, a la luz del día, sin ocultación alguna, abiertamente, francamente... No cabe, pues, la sospecha de que se trató de un hecho fríamente calcu-





lado, cuidadosamente preparado. Es un acontecimiento que ha surgido repentina e impensadamente. Así, pues, desde el primer momento recibo la impresión de estar en presencia de un drama pasional, de un choque sentimental, de un estallido...

La señora que iba en el interior del automóvil estaba bañada en sangre y el hombre se hería el cuello con una navaja de afeitar, cuando, al oír un quejido, el *chauffeur* que conducía el auto, lo detuvo y miró a su interior. Llegó en seguida un agente de policía, quien quitó el arma a Vanoli, impidiendo que continuara así en su propósito de inferirse nuevas heridas...

Y la imaginación ha reconstruido el cuadro. El marido que da muerte a su esposa y que luego intenta suicidarse.

¿Ha ocurrido así el hecho?

Ningún testigo puede afirmar como se desarrollaron los acontecimientos. ¿El acusado ha confesado? Tampoco.

Y ¿cuáles son, entonces, los elementos de juicio que permiten corroborar la hipótesis de los primeros instantes? A eso se reduce la tarea desempeñada por el ministerio público y por el juez sentenciador.

Ese hombre, que destroza el cuerpo del ser amado, desempeñándose ciego y frenético en la senda del crimen, ese hombre atenta también contra su propia vida, asomando su silueta enloquecida al abismo pavoroso de la muerte, pronto a precipitarse en *ce froid, ce noir, ce vide: la mort!*

Nuestra imaginación reproduce la escena. Uxoricidio y suicidio...

Por amor, por dolor, por sacrificio, por ansia insatisfecha de felicidad, por locura, ese hombre ha querido ir hacia la muerte junto con su esposa, ir juntos hacia la nada. Para él, matarla y morir era un sólo acto, un sólo pensamiento, una sola sensación. Por eso, en plena luz, en plena calle, desafiando a Dios y a los hombres, el acto se cumplió, fatal, irrevocable, como un mandato del destino.

Esa es la escena que hemos reconstruido; pero, para seguir basando nuestras consideraciones en los hechos comprobados, tenemos que oír al supuesto protagonista, tenemos que escuchar su confesión. tenemos que escudriñar sus ojos, que espiar su gesto, su ademán...

La autoridad policial practica la diligencia a fin de traer esas



primeras palabras reveladoras. Pero de esa confesión resulta que la esposa de Vanoli se ha suicidado y que él, impulsado por la desesperación, se ha apoderado de la navaja que ella tenía en una de sus manos y ha intentado a su vez quitarse la vida.

Esas son las palabras del hombre que ha mirado de cerca la idea luminosa y deslumbradora de la muerte. Ese es el hombre que ha ido en derechura al aniquilamiento propio, al no ser, a la nada. En medio del más frío estoicismo, fuera imposible ampararse en fraudes y mentiras cuando se está frente a la única verdad indiscutible: el suicidio de Carolina.

2.—Así ha quedado planteada la cuestión en esta causa. Mientras la acusación particular y pública, sostienen la existencia del homicidio, la defensa afirma la tesis del suicidio.

No deseamos entrar al examen de los hechos que suministra este proceso, dejándonos guiar por un espíritu preconcebido en el que la unilateralidad de miras sea la característica dominante.

El verdadero espíritu de investigación y de análisis debe acumular los hechos, desmenuzarlos, palparlos y después de conocerlos minuciosamente, construir el edificio con todo ese material. Pero, si ese material no tiene consistencia y solidez, en vez de construir un edificio, sólo conseguiremos armar, sobre frágil esqueleto, una construcción efímera que al primer sople quedará convertida en un montón informe de ruinas...

Así, pues, serenamente, friamente: ¿Homicidio o suicidio?

El juez de sentencia ha enumerado los indicios que le permiten sospechar que se trata de un homicidio.

Estudiémoslos.

Se hace notar, en primer término, que el *chauffeur* Morelli declara que los esposos Vanoli subieron a su auto, pacíficamente y que no notó alteración alguna en ellos. De esto se podría deducir que el señor Morelli no ha de ser un observador muy fino y muy sagaz, porque, si la señora subió al automóvil con ánimo de quitarse la vida inmediatamente, o si era Vanoli quién llevaba decidido matar a su mujer, su emoción debió ser difícil de disimular; de modo que, tanto



dentro de una de las hipótesis posibles como dentro de la otra, la afirmación del *chauffeur* nos deja indiferentes.

Pero, aun suponiendo que el *chauffeur* fuera un buen psicólogo, su tarea era difícil, no conociendo el temperamento de las personas que habían caído bajo su observación. Y no conviene tomar muy a lo serio esas teorías y colecciones de hechos demostrativos acumulados ingenuamente por Darwin en su obra *La expresión de las emociones en los animales y en el hombre*. No siempre es fácil conocer la emoción de un ser humano. Hay indicios casi imperceptibles que autorizarían a adelantar ciertas afirmaciones; pero eso está muy lejos de alcanzar la exactitud y precisión de las verdades científicas aceptadas.

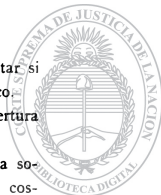
Pudo pasar, pues, inadvertida para el *chauffeur* la agitación de Vanoli o de su señora, en el momento de subir al automóvil. Hay momentos supremos en la vida de los hombres, en que las más fuertes emociones vienen a golpear violentamente en su corazón. Y ocurre que, en vez de la tormenta que esperábamos ver desencadenarse, el ser humano queda como absorto ante el dolor, y en su actitud se nota cierta torpeza, cierto estupor...

La sabiduría popular conoce ya esta verdad y la revela con una gráfica expresión: «La procesión anda por dentro».

En resumen, el *chauffeur* no sabe si se trata de homicidio o de suicidio. Investiguemos por otro lado.

3.—«La portezuela derecha del auto iba abierta; Carolina iba sentada a la derecha; luego, ella es quien abrió la portezuela». Así razona el señor juez.

1.º El auto fué llamado desde la casa de C., situada en la calle Pueyrredón número 1869. El auto marchaba de sud a norte y después que subieron los pasajeros, siguió en ese mismo sentido. Estos han subido por el costado derecho: el *chauffeur* afirma que la señora se sentó a la derecha y que el señor, pasando por delante de ella, se sentó a su izquierda; lo que demuestra que entraron por la portezuela derecha. Esto permite suponer que esa portezuela no fué bien cerrada y que se entreabrió a los pocos metros.



2.° No se ha hecho un examen del auto para poder constatar si la portezuela podía abrirse sola por cualquier movimiento brusco.

Un sacudón o una trepidación pudo haber originado la apertura de la portezuela.

3.° La portezuela pudo abrirse cediendo al peso que ejercía sobre ella el cuerpo de Carolina que cayó precisamente sobre ese costado.

4.° Pudo esa portezuela ser abierta por Vanoli.

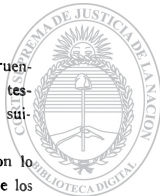
5.° Pudo ser abierta por Carolina instintivamente, después de haberse herido y en un movimiento final de desesperación.

6.° Pudo ser abierta por la misma para huir.

De todas estas hipótesis, el juez acepta la última. ¿Por qué no considera las otras? ¿No le parecen verosímiles?

4.—La señora de Vanoli llevaba guantes. Admitamos que así sea, aunque no esté definitivamente demostrado. El funcionario policial que practica las primeras diligencias hace esta observación: «Los guantes habrán dificultado la operación de herirse», profunda afirmación que es repetida por el señor juez en su sentencia.

Los duelistas se baten con guantes; los cirujanos operan con guantes de goma; los barberos, cuando tienen la mano lastimada o enferma, usan guantes y manejan cómodamente las tijeras y la navaja de afeitar. La señora de Vanoli llevaba guantes de cabritilla. Además, era persona habituada a vestir correctamente, a usar guantes normalmente, con soltura. Los guantes no traban la acción de la mano habituada a llevarlos. El empleado policial que ha tenido la iniciativa en esta brillante observación, el fabricante de este indicio, está acostumbrado a ver a los agentes de policía con guantes blancos de algodón, trabados, torpes, molestos, incómodos, sin poder liar un cigarrillo, ni tocar el pito, ni meter las manos en los bolsillos. Y cree, además, a pie juntillas, en la verdad de aquel gran principio de filosofía callejera: «Gato con guantes no caza ratones». Pero esto son pamplinas: los guantes no molestan, ni dificultan para darse un tajo con una filosa navaja. Por último, no bastaría que existiera dificultad: habría que evidenciar la imposibilidad.



5.—Se afirma que las mujeres no emplean procedimientos cruentos para quitarse la vida. Y, en autos, la defensa ha presentado testimonios de autopsias que demuestran que varias mujeres se han suicidado, degollándose.

Se dice que las mujeres no se degüellan todos los días, con lo que estamos conformes y sobre todo, si reconocemos también que los hombres tampoco degüellan a sus mujeres todos los días.

Si, se dirá, pero hay más casos de homicidios que de suicidios. Entonces la defensa contestará que los tribunales tendrán que condenar o absolver de manera que no se alterasen las estadísticas y pudiera conservarse la misma proporción entre el número de homicidios y el de suicidios.

No conviene, pues, ponerse a estudiar la existencia de una probabilidad matemática, mediante una regla de tres o mediante cualquier otro procedimiento.

6.—Se argumenta que la herida que Carolina presenta en el cuello es profunda y que no se observan en ella las colas características de las auto-lesiones. Estos hechos ya han sido brillantemente tratados por mi antecesor en la defensa, doctor Jofré, quien ha llevado su celo hasta obtener testimonios de la autopsia practicada en el cadáver de la suicida Vila, autopsia de la cual resulta que la herida termina profundamente sin colas. Ya se ve a donde han ido a parar las teorías de los médicos equivocadamente interpretadas por el juzgado. Si se admite que en unos casos no hay cola a la entrada de la herida y que en otros casos no hay cola a la salida, es fácil admitir que hay casos en que la lesión no presenta colas ni a la entrada ni a la salida y en que el corte es profundo en toda su extensión.

La conclusión a que arriba el informe médico es: «Suicidio posible, homicidio probable», lo que quiere decir que los facultativos sospechan que se trata de homicidio, pero no disponen de pruebas que confirmen esa sospecha. El juzgado admite que el homicidio es probable; pero la ley exige que esté probado. Hay muchas cosas probables en este mundo. Lo único que falta es probarlas y eso es precisamente lo más difícil. Sería un crimen condenar a un hombre por simples sospechas. Habría que demostrar científicamente la imposibi-



lidad del suicidio y los peritos reconocen precisamente que el suicidio en este caso es posible.

Existe otro indicio favorable a la tesis del suicidio: ausencia de señales, lo que demuestra la inexistencia de lucha; ausencia de traumatismos, de los que no hay ni rastros en el cuerpo de la mujer.

Se ha dicho en la sentencia que la señora no iba a esperar encontrarse en un automóvil para suicidarse. No es aceptable el argumento: el suicidio es un acto que se ejecuta en un raptó, es casi un acto de locura. En cambio, es más difícil creer que un homicidio se lleve a cabo en tales circunstancias, sobre todo cuando habrían sobrado las oportunidades, si hubiera existido el propósito.

7.—Si las circunstancias materiales que rodearon al hecho no suministran indicios reveladores en favor de ninguna de las dos tesis, conviene estudiar los antecedentes de la vida de este matrimonio. Vamos a emprender la tarea, pidiendo disculpas si en esta exposición nos vemos obligados a llamar las cosas por su nombre, con cierta desconsideración para las personas aludidas. La verdad suele ser dolorosa.

Es una triste historia de amor lo que contienen las hojas de este expediente.

Comenzó, hace muchos años, en Pringles, cuando Vanoli era un muchacho de diez y ocho a veinte años. Carolina era algo mayor. El idilio estaba en su iniciación, cuando fué bruscamente interrumpido por la oposición del padre de Carolina y por el viaje que emprendió en seguida su familia. No había llegado a establecerse intimidad alguna entre los *soi-disant* novios. Aquello no alcanzaba a asumir las proporciones de un noviazgo en forma. La familia no pudo tolerar ni que Vanoli escribiera a su pretendida. Era un simple *flirt* veraniego. Así nació y así murió aquel primer amor...

8.—Pasaron los años. Para Vanoli el recuerdo de aquella muchacha se asociaba a ideas de bien y de pureza. Tenía, además, los prestigios del alejamiento y la estadía en Europa conservaba la deslumbrante ilusión de ese primer sueño juvenil.

Pasaron diez años de ausencia, de olvido, de nada... Y un buen



día, llegó a Pringles la familia de C. y se formalizó el compromiso.

¿Qué había ocurrido? ¿Qué causas habían precipitado este imprevisto desenlace?

Muertos aquellos amoríos, la vida de Vanoli se deslizó en las rudas faenas del campo y en los placeres monótonos del estanciero que va de cuando en cuando al pueblo. No se prestaba su alma ingenua y primitiva a las exquisitesces de una existencia llena de halagos. Prefería las pequeñas satisfacciones de su vida sencilla. De pronto, su existencia fué interrumpida por la aproximación de Carolina, y esa ansia de amor sano y puro se identificó de nuevo en la imagen querida de esa hermosa mujer.

9.—Pero en ella, es más difícil de comprender el proceso sentimental. Vamos a guiarnos por las indicaciones y referencias que existen en estos autos. Declaran varias señoras.

Dicen que Carolina gustaba de salir poco. Salir poco es indicio de honestidad, según esos viejos maridos gruñones de la novela picaresca, según esos maridos precabidos y desconfiados que olvidan que la escala de seda asalta siempre a los balcones floridos de la amada...

Salir poco... Las reclusas de una casa pública son las que menos salen. Son pupilas, según dice la ordenanza municipal...

Y aquellas buenas señoras nos vienen a referir con toda gravedad que Carolina salía poco. Es natural. Residiendo habitualmente en Burdeos, Carolina tendría mucho menos deseos de andar recorriendo calles y teatros, que los que esas viajeras demostrarían. Y, por comparación, ella resultaba una persona muy de su casa.

¿Eran las virtudes domésticas la causa de este retraimiento?

No; porque tanto el padre, como el hermano de Carolina, se encargan de decir que ella no sirve para ama de casa, que no entiende nada del manejo de una casa y que nunca le ha prestado ayuda eficaz a su hermana M.

Y si no eran las labores propias de la casa, ¿qué atractivos encontraba ella en el hogar de su hermana casada?

Vanoli, que, al comienzo de este sumario, pretende guardar silencio sobre las intimidades de su noviazgo y de su matrimonio. se vé luego precisado a hacer revelaciones de carácter íntimo y a refe-



rir la confesión que su cónyuge le hiciera en repetidas ocasiones. Allí dice (fojas 104 vuelta), que «su esposa le reveló que en la misma casa de familia donde vivían en Burdeos, Q. A. había tenido relaciones íntimas con la misma, aprovechando la ausencia momentánea del padre y la hermana casada con aquél».

Si admitimos estos hechos — y no habría por qué no admitirlos desde que la misma Carolina ha confesado a su hermano E. sus relaciones con Q. A. — podemos formarnos una opinión sobre el carácter de esa mujer, entregada al vicio, a la mentira, a la traición...

Y podemos imaginar los pliegues de esa alma llena de dobleces, en constante fraude, en constante infracción, ocultándose de todas las miradas y con el único apoyo moral del cómplice que era el culpable de todo, el que la había conquistado, el que la había pervertido: el único responsable moral de esta espantosa situación.

Cuando en el teatro o en la novela nos encontramos en presencia de situaciones demasiado fuertes para nuestros nervios, cuando la violenta correlación de los acontecimientos se precipita tras complicada trama en impresionantes desenlaces, solemos decir que la obra se aleja de la realidad. Es que olvidamos — ¡oh, críticos incautos! — que la vida es más terrible y más compleja y más mala que lo que supone la imaginación de los noveladores. ¡Cuántas veces el observador vulgar habrá dicho, contemplando uno de esos magníficos atardeceres de nuestras pampas en que el sol pinta a las nubes con violentos colores, que si eso lo viéramos reproducido en la tela de un pintor, lo criticaríamos como inverosímil. Es que los fenómenos de la naturaleza sobrepujan a la imaginación de los hombres.

En el estudio de las almas pasa lo mismo. De pronto se nos revelan maldades y crímenes que no hubiéramos ni sospechado y que nos resistimos a creer.

Así, impiamente, cruelmente, dolorosamente, tendremos que conformarnos con reconocer la verdad de ese engaño: Carolina tenía relaciones con el esposo de su hermana, bajo el mismo techo, misteriosamente.

Esas vidas se deslizaban plácidamente, cual mansa corriente callada; pero, en el fondo de ellas, estaba escondido el monstruo de la tragedia, frío, repugnante...





El dramaturgo más genial de esta época, Benavente, ha evocado una situación parecida en «Malquerida», un amor secreto que un día estalla delirante y avasallador. Si la literatura nos suministra ejemplos, ¿con cuánta mayor razón la vida nos convencerá de la posibilidad de esta terrible situación!

10.—Así las cosas, se prepara de pronto un viaje a la Argentina. Carolina dice a sus amigas que piensa ver a Vanoli. Ella «parecía traer el propósito preconcebido de aceptar los requerimientos amorosos de Vanoli, si éste se manifestaba interesado en ello», dice su hermano E. (fojas 147). Y agrega que en las confidencias con sus amigas se traslucía esa su firme intención.

¿Qué había ocurrido? Sus relaciones con Q. A., ¿habrían sufrido alguna interrupción? Siendo Carolina sumisa y estando influenciada por Q. A., ¿obedecía a indicaciones de éste que deseaba poner punto final a esta vida de zozobra y de engaño? ¿O había sido descubierta por su hermana M. y ésta se desprendía de ella, haciéndola casar precisamente con aquel a quien toda la familia había repudiado? Tristes sospechas que la defensa debe cumplir con el penoso deber de expresar, sospechas oscuras, larvadas, como malos pensamientos, como pesadillas, sospechas que no han surcado el cerebro del mismo acusado, incapaz de imaginar tanta perfidia; pero que el investigador, el psicólogo, el juez, deben concebir como posibilidades dignas de estudiarse.

¿Qué repentino viaje era éste desde Burdeos a Pringles? El hermano de Carolina nos dice que «cuando se aproximaba el momento del proyectado viaje a Pringles, ella exteriorizaba esos anhelos, recalcando su INQUEBRANTABLE RESOLUCIÓN de no volver a Europa».

Traía el propósito de casarse con Vanoli

¿Y la resistencia natural de los suyos a este proyectado enlace? ¿Cómo? ¿Iban a oponerse y a mantenerla alejada del objeto de su amor durante diez años para venir a transar, de golpe, porque sí, en el breve espacio de unos días?

¿Acaso la moral y la educación de Vanoli eran, ahora, superiores? No, absolutamente. Cuando lo rechazaron, tenía 20 años de

edad y una conducta intachable. Cuando lo aceptaron, tenía 30 años y vivía públicamente con una francesa... El hermano de la novia lo sabe y lo dice.

Carolina no lo ignora.

Cuando la señora de C. va a visitarla, al poco tiempo de haber llegado de Europa, Carolina le dice que Vanoli, ése de quien ella se acordaba en Burdeos, vive ahora con una francesa en la estancia. Y el subcomisario Peyre trae el dato suministrado por la esposa de don E. C.: que Carolina sabía que Vanoli tenía una francesa y le hacía bromas por eso...

El padre de Carolina salva su responsabilidad y declara lealmente al pretendiente que su hija no tiene aptitudes para mujer de un hogar; pero es aceptada igualmente.

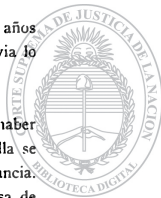
Pocos días duró la permanencia en Pringles de los viajeros, según lo dice E.; pero esos pocos días bastaron para arreglar la cuestión; bastaron para que este novio que había quedado olvidado en la campaña bonaerense, ofreciera su nombre a la viajera, a esa misma que había resuelto INQUEBRANTABLEMENTE no regresar a Europa.

Contrajeron enlace el 5 de junio, y doce días después—o sea el 17 de junio—se embarcaban para Burdeos el padre y la hermana de Carolina, los mismos con quienes había vivido, bajo un mismo techo, en Burdeos, durante largos años.

Pero con ellos se iba también Q. A., su amante, su cómplice, su dueño. Mientras ella revolcaba su cuerpo en convulsiones nerviosas, mientras rechinaba sus dientes en el agudo ataque histérico, allí, en la triste estancia del partido de Pringles, sola y alejada de su mundo y de su amor, él, Q. A., recostado en la borda del lujoso transatlántico, la faz vuelta hacia América, entre irónico y piadoso, entre sensible y cruel, evocaría su imagen, donjuanesca...

Y entonces escuchó Vanoli la terrible confidencia. La mujer hizo la revelación...

**11.**—Esa extraña impresión de horror ante lo desconocido, esa incertidumbre ante lo imprevisto, ese estupor ante lo inesperado, esa



mezcla informe de ideas, de impulsos, de arrebatos y de desfallecimientos que entró por el alma de Vanoli, es indescriptible...

Cuando la multitud acude a presenciar un espectáculo fuerte, como el fusilamiento de un reo, suele ocurrir que muchos de los presentes apartan la vista en el instante supremo. Así, al dar a Vanoli ese terrible golpe, su mujer no habrá osado mirarle: habrá ido diciendo lentamente su confesión, entre suspiros y sollozos, mientras la verdadera víctima, acongojada y muda, permanecía como atontada, escuchando, escuchando... Dice Materlick que las palabras son como enormes bloques de hielo flotando en el insondable mar del silencio. Así las frases reveladoras habrán ido marchando una en pos de otra, desfilando impávidas, erguidas, hirientes, como bloques inmensos... Y habrán resonado trágicamente en ese pobre cerebro torturado por la indecible angustia.

La imposibilidad de una reacción inmediata, la desorientación de esas horas, la depresión moral, el anonadamiento, ésa fué la actitud de Aníbal Vanoli.

En una de las más conocidas novelas del conde Tolstoy, *Ana Karenine*, el marido engañado no encuentra ninguna solución adecuada para salir de su angustiosa situación: proyecta mil medios de vengarse, mata, vuelve a matar; pero todo imaginativamente, y termina por no saber qué hacer. Es un fenómeno observado que en temperamentos muy nerviosos—y Vanoli es uno de ellos—la imaginación se atropella en el afán de consumir con lujo de crueldades todo género de venganzas; pero es tan grande ese trabajo imaginativo, que llega a satisfacer sobradamente la sed de venganza, y entonces, ante el hartazgo de violencia imaginativa, el hombre experimenta verdadera repugnancia, renuncia a la acción y permanece inmóvil, extático, como esperando...

El señor E. C., en frío, escribe, en su acusación, que Vanoli debió pedir una reparación a Q. A., como cuadra a todo hombre de honor. Es fácil decir que estas cuestiones se arreglan saltando sobre la pedana; pero, cuando se ha perdido toda noción de la vida exterior, cuando se está, por amor y por dolor, como sumido en un mar de angustias, cuando no se razona o se razona mal, nada valen las consideraciones académicas del señor E. C. Además, no estamos





averiguando cómo debieron pasar los hechos, sino cómo pasaron en la realidad.

Preguntado Vanoli por qué no tomó resolución alguna con motivo de este hecho, dice sencillamente que porque su señora así se lo pidió, lo que es muy natural en un pobre hombre enamorado, desorientado, vuelto a la inexperiencia de la niñez ante el pavoroso problema que se diseñaba inesperadamente en su horizonte. ¿Qué hacer? Por lo pronto, acceder a las lágrimas y a las súplicas de esa mujer humillada, de ésa que ayer era hermosa y presumida y que hoy está llorosa, afeada por su delito, empequeñecida por su traición.

La actitud de Vanoli en esa emergencia es un patético comentario a esta frase: «El corazón tiene corazones que la razón no conoce».

**12.**—Lanzado ya por esa senda, debía Vanoli apurar hasta la última gota el acíbar de esas confidencias. Y Carolina experimentaría como un alivio al echar fuera de su conciencia tantos hechos silenciados durante tanto tiempo y como un deleite al exacerbar el dolor del hombre rudo que la escuchaba, con los ojos desmesuradamente abiertos, mudo de sorpresa, anhelante de curiosidad, sintiendo cierto placer en torturarse a sí mismo y en dejarse humillar, soportando, como Sacher Masoch, el latigazo de su Venus.

Y así fué sabiendo los vicios adquiridos, los malos hábitos contraídos, las perversiones sexuales. Y cada vez quedaba más desorientado: «Carolina—dice él—era difícil de comprender: para unas cosas revelaba energía y para otras era demasiado dócil». Ella le fué diciendo su remordimiento por todo el daño causado, el engaño a su padre, a su hermana y a él mismo.

Y dijo sus deseos de haberse suicidado en Burdeos o de haberse arrojado desde la borda del barco. Es imposible dudar de la sinceridad de las declaraciones de Vanoli: hasta este detalle de íntima psicología lo está revelando. No es capaz Vanoli de esta intuición: el deseo de morir que ella ha experimentado cuando ha vuelto a sentirse niña frente al mar infinito y amigo, cuando ha vuelto a comparar la serena majestad del océano rumoroso con la pequeñez des-



preciable de su alma agitada por bajos instintos y por pasiones funestas...

Ante la brusca manera cómo esta alma se mostró a Vanoli en toda su desnudez, ante la humildad de la pecadora, ante el remordimiento, real y no fingido, que la torturaba como negro cuervo que grita y aletea en el fondo de la conciencia, Vanoli sintió una inmensa congoja y una ilimitada piedad. Ciertó es que fué hombre; cierto es que tuvo arranques de ira y de desesperación; pero su amor era tan grande, que llegaba hasta el delirio, y deshonorado, vilipendiado, hubiera soportado más aún de lo que soportó con tal de evitar que esa alma se le escapase moralmente, con tal de reconquistar de nuevo la felicidad, de ser el uno para el otro *et pour toujours*...

Esto es lo que se llama técnicamente «redentorismo».

Ya sabemos todo el mal que esta actitud le acarreó a Vanoli.

**13.**—Vanoli trajo a su señora a Buenos Aires y la hizo ver con los doctores Ingenieros y Barlaro; la llevó al Instituto Frenopático, solicitando sistemas de tratamiento para curar esa tristeza mórbida que se había apoderado del ánimo de Carolina. Y hasta el día mismo del hecho, cuando la señora de C., en cuya casa estaban de visita, propuso a su esposa que se quedara unos días, Vanoli dijo que lo consentiría si esa señora creía que se mejoraría. «¿Usted me responde que la va a transformar?», fueron sus palabras.

Pero no era de esperarse tal transformación. Muy al contrario: no sólo está probado por dichos contestes del acusado y del acusador que Carolina era invadida por una gran tristeza todas las tardes, sino que el día del hecho, así como también el día anterior, todos han notado su angustia y su depresión. No hablaba, o hablaba haciendo un visible esfuerzo; estaba dominada por una grave pena; parecía obsesionada por una idea triste, por una honda desesperanza, por una angustia inconfesable. Y era tan inconfesable, que nadie ha escuchado la confidencia y Carolina ha llevado consigo el misterio de sus pensamientos.

Es fácil saberlo, sin embargo. No amando ella a Vanoli, como no podía amarlo, desde que había consentido en valerse de él como un simple instrumento para resolver un problema terrible de fami-



lia—como era el creado por sus amores con Q. A.—, no amando a Vanoli, debió resultarle insoportable su misma actitud. Era su esposo un hombre incapaz de comprender los secretos de su psicología complicada de mujer histérica: él mismo así lo dice ingenuamente: «era un carácter difícil de comprender».

En las horas de las expansiones conjugales, ella daba gritos de rebeldía; se quejaba: «¡Ay, qué dolor! ¡Esto es un martirio! ¡Déjame!» Era la ausencia del amor.

Las dulces caricias de otrora, suaves, veladas, apenas insinuadas, el leve cosquilleo del espasmo largamente esperado, largamente provocado, así era lo que obsesionaba sus sentidos. La visión del «otro» era lo que perseguía la imaginación exaltada de esta mujer y esa angustia infinita, esa ansia inasequible, era difundida a su redor como perfume embriagador y malsano, como emanación de flor de vicio. Ese recuerdo era una droga que la excitaba en la soledad y que la deprimía estando acompañada. Cercada por las visiones de su pasado, perseguida por lacerantes inquietudes, Carolina tenía sus crisis al atardecer de todos los días. Sus ilusiones habían caído, tumbaradas en el fango, con las alas tronchadas. Estaba embrujada por la tentación del suicidio. Hubo momentos en que la verdad asomó a sus labios, a esos labios de púrpura maldita, como cantara el divino Rubén. Y, en la visita a la señora de C., dijo a ésta: «ME LO PASO LLORANDO Y NO PUEDO VER A MI ESPOSO»; pero el hábito de fingir volvió a predominar en ella, y reaccionando, dijo luego, que Aníbal era muy bueno y que todas la envidiarían a ella.

Hacia apenas noventa días que se habían casado. Vanoli cuida y atiende a su esposa; soporta que el hermano de ella se establezca en su estancia, acompañado de su mujercita honesta y de sus hijos felices; aguanta este terrible contraste con su hogar deshecho, con su felicidad destrozada, con su honor pisoteado; lleva a su esposa a casa de su propia madre y, en fin, da pruebas de un infinito amor. En cambio, ella le detesta, huye de su lecho, tiene confidencias con las amigas, se lo pasa llorando y no lo puede ver.

Todo era inútil. El alma de Carolina estaba perdida para siempre. Envenenada por aquel amor prohibido, maldito, todo había concluido para ella en esta tierra. Era una superviviente de sí misma;



era como «el muerto que está en pie», de la famosa rima becqueriana.

Para colmo, ya no veía a Q. A. La ausencia amengua las pasiones pequeñas, pero aviva las grandes. Se ha dicho que es como el viento que apaga las bujías, pero enciende el fuego. Y aquel viento de amor pasó por encima de todas esas cabezas doblegadas y encendió el alma de esta infeliz mujer, la consumió haciéndola arder y la redujo a cenizas.

El 6 de septiembre de 1915 Carolina se suicidó, infiriéndose un tajo con una navaja de afeitar.

Esta es la historia; esta es la triste historia.

14.—Ya había atentado antes contra su existencia. El hecho es innegable, y, sin embargo, se ha pretendido disminuir su importancia, haciendo consideraciones inaceptables.

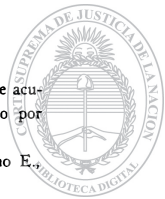
Voy a relatarlo brevemente para darle toda la trascendencia que tiene en este proceso. Poco impresionará a los señores jueces la circunstancia de que algunas señoras que trataron superficialmente a Carolina opinen que la nombrada era incapaz de suicidarse, cuando comprueben en forma fehaciente que ya en otra oportunidad consumó un serio atentado contra su vida.

De paso haré notar que esas señoras no podían conocer muy a fondo el carácter de Carolina. Se trataban poco y nunca llegaron a la intimidad.

Por otra parte, todos hemos conocido hombres que juzgamos incapaces de suicidarse, porque nos parecieron muy normales o porque los supusimos pusilánimes y cobardes. Y un buen día, nos dicen los diarios que se han pegado un tiro. Sólo Maeterlinck, místicamente, pretende señalar a los predestinados a temprana muerte. Son serios, reposados, marchan silenciosamente, parecen meditar: una luz de misterio brilla en sus ojos y resplandece en sus frentes...

Pero las señoras que están de visita no saben esas cosas: ellas conocen la moda y ya es bastante. Sólo a un juez de instrucción, desprovisto de pistas, se le ocurre interrogar a *ces dames*.

Vamos a analizar los hechos que rodearon ese suicidio tentado en la estancia de Pringles el 25 de julio de 1915.



La declaración de Vanoli, perfectamente verosímil.

La declaración de las personas de servicio de la estancia que acusaron al producirse la detonación que corrobora lo declarado por Vanoli.

La manifestación de la suicida hecha a su mismo hermano E., según éste lo reconoce.

La autopsia, de la que resulta que el cadáver conservaba aún la bala.

Se ha dicho que la posición del brazo derecho de la suicida era incómoda para conseguir que la bala fuera a alojarse en la clavícula; pero a cualquiera se le ocurre pensar que, habiéndose dirigido el disparo al corazón y habiéndose hecho instintivamente un movimiento defensivo, esquivando el corazón y agachando el hombro izquierdo en el momento del disparo, la bala ha ido a alojarse justamente en la clavícula.

La declaración del doctor Cabrera, quien comprobó que en las ropas había vestigios de pólvora, lo que demuestra que el tiro se había hecho a quemarropa.

La dirección de la herida, que va de adentro afuera, circunstancia que demuestra que el disparo ha sido hecho por la misma lesionada, con su brazo derecho, hacia el corazón.

La circunstancia de haberse apresurado Vanoli a llamar a su cuñado E., lo que demuestra que no existía el propósito de ocultar el hecho.

En el telegrama dirigido desde la estación que está en la estancia, a Pringles, se dice a E. que lleve un médico, sin indicar especialmente que se lleve a uno determinado, lo que evidencia que no se pensaba silenciar el hecho; pues, de lo contrario, se habría pedido un médico amigo. Por su parte, el doctor Cabrera dice que todos estuvieron de acuerdo en silenciar el hecho, a fin de evitar el escándalo. Este antecedente del anterior suicidio fué obtenido de oficio, en virtud de lo ordenado a fojas 59. No es cierto, pues, que el acusado tenga interés excepcional en traer ese antecedente; pero lo que es indudable, es que no sólo la defensa, sino también y ante todo la justicia están en el deber de recoger ese antecedente, de darle el va-





lor que realmente tiene y de deducir de él la presunción favorable a la tesis del suicidio.

Y lo que es más interesante, es la actitud de E. C., referida por él mismo.

En esa oportunidad, E., que poco antes y ante la sospecha de que Vanoli haya podido maltratar a Carolina, se encara furioso con aquél diciéndole toda suerte de improperios y que hasta llega a confesar que, de tener un arma, lo hubiera muerto en ese momento; el mismo E. que ha tenido cuidado de prevenir a Vanoli que no vaya a intentar maltratar a Carolina; ese mismo, en posesión de todos los antecedentes del drama, llega a la estancia, ve a su hermana herida de un balazo y no sospecha de Vanoli. ¿Por qué? Porque ha formado la firme convicción, de que el suicidio de su hermana es no sólo posible, sino muy lógico; porque sabe que su hermana tiene motivos más que suficientes para desear el eterno descanso; porque no cree que su pobre hermana sea incapaz de atentar contra su vida y sabe que, por el contrario, es muy capaz. ¿Por qué consiente, entonces, en ocultar el hecho a la autoridad? ¿Por qué no recrimina a Vanoli, por qué no indaga, por qué no llama aparte a cualquier persona del servicio, y le pregunta cuidadosamente, ávidamente? ¿Por qué? Él ha llegado a la estancia, se ha enterado del hecho; ha escuchado a los testigos que acudieron en el primer momento; ha conversado con su misma hermana; ha oído la opinión del médico amigo que le acompaña y no ha encontrado nada de anormal: es una tentativa de suicidio en regla.

El hecho está allí, preciso, claro, elocuente. Es un antecedente valioso.

**15.**—Momentos antes de producirse el hecho que sirve de base a la instrucción de este proceso, los protagonistas salían de casa de la señora de C. Las declaraciones de esa señora y de su señora madre, que vieron a los esposos Vanoli hasta pocos momentos antes de producirse el hecho, podrían ser de un gran valor informativo.

En primer lugar se nota que la visita duró dos horas y media. Justo es que al cabo de tanto tiempo Vanoli dijera a su esposa que



convenía retirarse, máxime cuando pensaba ir todavía en busca de la señora de R. Este detalle no es aprovechable para la instrucción, porque no conduce a ninguna conclusión.

En cambio, hay otros detalles que tienen un valor inapreciable: es el conjunto de hechos que demuestran el estado de ánimo de cada uno de los esposos Vanoli. Mientras Aníbal estaba perfectamente tranquilo y tenía toda su presencia de ánimo y la lucidez de espíritu necesaria para abordar los diversos temas a que se refiere a la señora de C., Carolina demuestra estar muy preocupada, mira insistentemente a sus interlocutores y está dominada por una GRAN EXCITACIÓN NERVIOSA.

¿Cuál de los dos cónyuges ocultaba una decisión extraordinaria? ¿El marido que estaba tranquilo y en estado normal? ¿O la mujer, que revelaba su angustia, su preocupación, su exaltación? Pero se dice que Vanoli estuvo con el sobretodo puesto y que al salir la sirvienta en busca de un automóvil, él pidió que fuera cerrado. Estas circunstancias concuerdan para demostrar que hacía frío. Y está demostrado que efectivamente hacía frío ese día.

El estado de ánimo de Carolina, obedecía a ese remordimiento que la torturaba, a ese anhelo de expiar sus culpas, a esa desesperación sorda, persistente, enloquecedora...

Los demás puntos del proceso están minuciosamente estudiados por la defensa en los escritos agregados a los autos. Deseo no incurrir en más repeticiones y pido a V. E. se digne revocar el fallo recurrido y absolver al acusado (1).



# LADOUX VERSUS LAPLACETTE

---



## I

### JUICIO RUIDOSO

Ha sido éste un juicio ruidoso. Ha sonado por la cuantía de los intereses comprometidos, por el volumen de los autos, por la malicia de los actores y hasta por los golpes que han recibido.

Fué ganado por mi parte en primera instancia, con costas. En la cámara volvió a fallarse a favor de mi parte, pero se le impusieron las costas.

Probablemente es la primera vez que un tribunal argentino aplica costas al vencedor.

El error fué reparado por la suprema corte de la provincia de Buenos Aires.

Los vencidos por tres veces consecutivas, llevaron su pleito a la corte de la nación, quien los repelió sin más trámite.

Para que el lector pueda darse cuenta de la justicia con que ha litigado don Juan Laplacette, publicamos a continuación:

1.°—Una carta del ilustre literato uruguayo, don José Enrique Rodó, sobre un folleto que apareciera relativo al pleito bajo el título de «Pirronismo».

2.°—Algunos antecedentes contenidos en ese folleto.

3.° Las sentencias del juez, de la cámara, de la corte de la provincia y de la corte de la nación.

4.°—Un escrito sobre ejecución de la sentencia.

, 26 de Enero del 912.

Dr. D. Tomás Jofré,  
Mercedes. (Chas).



Estimado señor y amigo:

Fueo muy grato á la amabilidad del envío de su opúsculo, así como á la distinción que ha hecho V. al "Proteo", tomando de una página de él el fragmento de su argumentación jurídica. Esto me complace y me honra.

Es indudable que el intento de romper por los moldes estrictos de la dialéctica jurídica, humanizándola por el contacto



con el libre y amplio razonar del pensamiento desinteresado, tiende, no sólo a ennoblecen las formas del debate judicial, sino también a favorecer a aquel espíritu de verdad que se cieme por encima de la verdad cristalizada en cánones y leyes.

Y ello testimonia, desde luego, el superior criterio de quien lo acomete, dando el ejemplo de tan hábil y lucida manera.

Me es muy agradable esta oportuna invitación que se me ofrece de presentarme a sus órdenes y subscritarme en afirme.  
amigo.

Julio Ríos

J/c Canto 102º

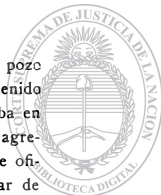
## ANTECEDENTES

Los antecedentes de este ruidoso pleito pueden exponerse en cuatro palabras: en 1904, a raíz del fallecimiento de don Enrique Laplacette, que había dejado cuantiosa fortuna, sus herederos resolvieron no partir los bienes por el término de cinco años, poniéndoles bajo la administración de don Juan Laplacette. Terminado ese plazo los señores Rafael y Agustín Ladoux—dueños de dos de las doce partes de la herencia—demandaron a nombre de sus esposas, al señor Laplacette por rendición de cuentas.

Los señores Ladoux han estado recibiendo durante cinco años las utilidades de una sociedad que redituó millón y medio de pesos, y declaran ignorar el hecho; desconocieron que se les hubiera dirigido varias cartas, y ellos mismos se encargaron de presentarlas al juicio, o se les exhibió las certificaciones del correo que lo constataba; han suscrito inventarios de bienes que representan casi una decena de millones, y dicen que lo hicieron por complacencia; la esposa no conocía la letra del marido; don Agustín Ladoux desconocía la suya propia; el campo de Pehuajó ha cambiado de dueño de un escrito a otro, según convenía o no a los intereses de don Rafael Ladoux; los actores ignoraban la existencia de la sociedad Laplacette, Copello y C.ª, y han tratado con ella a través de un lustro; presentaron testigos que declararon en su contra, y se apresuraron a tacharlos; el marido repudiaba lo que había hecho la mujer; la mujer los actos del marido; el mandatario afirmaba una cosa y el mandante lo desmentía, o viceversa; lo que hoy era negro al día siguiente se trocaba en blanco.

De Pirrón, padre de los escépticos, se cuenta que empeñado en negar toda posibilidad de certidumbre y para demostrar la desconfianza en que debían tenerse los datos del sentido, jamás desviaba el paso de la dirección en que marchaba porque ante





él se presentase un obstáculo, ya fuese éste una pared, un pozo o una hoguera. Ocurre preguntar como Pirrón no era detenido por la pared, ni se abrasaba en la hoguera, ni se precipitaba en el pozo. Pero Diógenes Laercio, que esto refiere, cuida de agregar que el caminante escéptico iba rodeado de un grupo de oficiosos amigos, los cuales le obligaban por fuerza a cambiar de dirección cuando era necesario. Así sin discordancia entre la voluntad y la filosofía de Pirrón, su filosofía dejaba de aparejar graves riesgos para profesada al aire libre, y Pirrón podía ser a un tiempo filósofo y paseante (José E. Rodó).

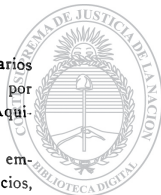
En los pleitos no se puede seguir el Pirronismo, porque faltan los amigos benévolos y la ley ha llenado de obstáculos el camino de los que niegan la evidencia; ni aún en lo infinito de la Pampa se puede caminar sin mirar lo que hay delante, porque se encuentra cruzada por alambrados de púa.

Cuenta Paúl Grousac, que los musulmanes suelen abrir con su sable el alcorán, seguros de encontrar en cualquier página una máxima de sabiduría. Del propio modo se puede proceder con los cargos de los señores Ladoux, porque aún tomándolos al acaso, daremos con una afirmación maliciosa, o una contradicción, o la negación de la evidencia misma. Para ellos este juicio es una obra maestra, una maravilla: está hecho de nada!

Los cargos que se han hecho en el juicio por los señores Ladoux contra don Juan Laplacette, han sido estudiados detenida y minuciosamente, en un escrito que consta de quinientas páginas, y es un brevísimo resumen de dicho escrito lo que ahora me propongo hacer.

Pretende, don Agustín Ladoux, que el inventario de 1904 lo firmó por «complacencia». Sin embargo, intervino personalmente en esa operación; se le han exhibido los apuntes que él tomó en las estancias para confeccionarlo y se vió obligado a reconocerlos como auténticos. Cinco o más testigos le desmienten. No ha producido ni siquiera una prueba para demostrar sus afirmaciones, y sigue negando, a pesar de su firma, magüer la de su esposa. Esto será todo lo pirrónico que se quiera, pero no es correcto, leal, ni honesto.





Asegura don Rafael Ladoux que él no firmó los inventarios porque tuvo un violento altercado con don Juan Laplacette, por lo cual abandonó San Antonio y se fué a vivir a Pehuajó. Aquí les se retiró a su tienda!...

No debió existir ese disgusto, porque el señor Ladoux empezó en el acto a pedir a Laplacette dinero, favores, servicios, que le eran acordados. Para convencerse de ello basta leer la interminable colección de cartas acompañadas en autos que empiezan con el sacramental «les he girado»... y terminan invariablemente con las gracias... Parecen el monótono *ora pro nobis* de una letanía de Semana Santa.

Según don Rafael Ladoux «el inventario de 1904, suscripto por su esposa, no ha podido ser ratificado porque los contratos que pasan de doscientos pesos sólo pueden ratificarse por documento escrito». Se ha interpretado aquí la ley con la exactitud con que definía el cangrejo el personaje del cuento, diciendo: es un pez de carne colorada que camina para atrás. Littré, glosando esa definición, escribía: salvo que no es pez sino crustáceo, que no camina para atrás sino de lado y que su carne sólo es colorada cuando está cocida, la definición es irrepachable!

Sostienen los actores «que las cuentas están mal rendidas porque sólo se han presentado por el demandado los inventarios y balances del caudal común».

Ese es el modo de rendir cuentas en las sociedades. El artículo 436 de la ley mercantil nos dice: que los liquidadores harán un inventario del balance del caudal común, que pondrán en conocimiento de los socios. Así ha procedido don Juan Laplacette. Lo que hay es que los actores no han sabido distinguir entre la rendición de cuentas del tutor, del mandatario, del comisionista, etc., con la que debe presentar el socio administrador.

Con idéntico conocimiento de los hechos un pescador de agua dulce puesto en presencia de una ballena, decía: no sabría decir qué clase de pescado es, parece que fuera sardina. Y entre la rendición de cuenta del mandatario y la del socio existe la misma diferencia que entre una ballena y una sardina. Solamente con criterio jurídico de abogado de cabotaje puede confundirse esas

cosas. Es conveniente a las veces leer un librito que se llama el código.

«El administrador es responsable porque permitió que continuase después del fallecimiento del causante la existencia de la sociedad Laplacette, Copello y C.<sup>a</sup>, que constituye una bochornosa sociedad leonina».

La sociedad citada se constituyó en 1896, aportando: don Enrique Laplacette \$ 54.962.35, don Juan Laplacette \$ 11.000, don Santos Copello \$ 4.795.43 moneda nacional. Las utilidades se distribuían: 20 por ciento para don Enrique y el 40 para cada uno de los otros socios administradores, de la sociedad.

Al cabo de quince años el capital de la sociedad ha alcanzado a varios millones y los 54 mil pesos que aportó don Enrique se han convertido en un millón y medio. Estos son milagros del país y de la laboriosidad, honradez y competencia de los socios administradores don Juan Laplacette y don Santos Copello.

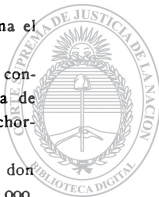
Si mi instituyente hubiese demandado la disolución de la sociedad a la muerte del causante, a los herederos de éste les habría correspondido medio millón de pesos; por no haberlo hecho, su capital se ha triplicado. De eso se quejan!

Lo que precede consta de los inventarios y balances firmados por el causante y del contrato por escritura pública registrado en el tribunal de comercio de la capital con fecha 9 de Abril de 1904. El hecho, además, lo constataron los peritos Deláguila y Lennard a pedido de uno de los actores.

«Don Juan Laplacette no ha hecho los inventarios anualmente, como era su deber».

Nuevo cargo y nueva injusticia.

En el contrato de 1904 se dijo: «quedan nombrados don Agustín Ladoux y don F. Raúl Laplacette para levantar los inventarios anualmente, los que serán sometidos a los demás herederos para su aprobación» foja 557. El señor Agustín Ladoux no cumplió con la obligación que le impuso el contrato y por eso demanda a mi parte. Lo que correspondía era que se hubiese demandado a sí mismo. Habría sido más lógico y más justo. El





cilicio y las disciplinas se usan más para las propias que para las ajenas culpas.

«El administrador ha vendido, sin tener facultad para ello, tres campos situados en San Antonio, Junín y Dolores». Y va de injusticias! El contrato de 1.º de setiembre de 1904, estableció que se daría poder al administrador y que éste no podía enajenar los bienes inmuebles.

El poder se hizo *después* del contrato y en él se confirió al administrador la facultad de vender bienes raíces. Por eso vendió. El hecho lo han confesado los actores. Las mismas personas que firmaron el contrato suscribieron el poder.

«Don Juan Laplacette ha violado la cláusula del contrato, que le imponía la obligación de depositar los fondos de la sucesión en el Banco de la Nación Argentina».

El hecho es cierto. El Banco no paga intereses en cuenta corriente y los fondos se depositaron en la casa de Saturnino Unzué e hijos, en el Banco Francés, etc. La violación de esa cláusula reportó a la sucesión una ganancia de 41 mil pesos. El mandato se juzga cumplido cuando lo ha sido de manera más ventajosa para el mandante.

«En el inventario de 1910, hecho cuando don Juan Laplacette entregó los bienes sucesorios, las haciendas se tasaron a un precio excesivamente alto, con el objeto de aumentar las ganancias del administrador, retribuido con el cinco por ciento». Nuevo cargo! Al año siguiente se tasaron esas mismas haciendas en la sucesión y su precio excedió en doscientos mil pesos al que les había fijado don Juan Laplacette. El señor Agustín Ladoux encontró justa esta tasación—su hermano—don Rafael objetó que era baja.

Los actores tienen dos criterios: cuando se trata de retribuir la comisión del administrador, las haciendas están tasadas alto; cuando se trata de la adjudicación, ese precio se convierte en bajo. Si esta no es la ley del embudo, que venga Dios y lo diga.

«A don Agustín Ladoux se le ha cargado indebidamente arrendamiento por 500 hectáreas de campo en Pehuajó que le pertenecen en propiedad». Esto último es falso. Corre en autos



el poder otorgado por don Enrique Laplacette para que su yerno don Agustín firmase como mandatario la escritura de esas quinientas hectáreas; corre también la carta de don Agustín al administrador, donde le pide: le deje las quinientas hectáreas por el precio de tasación a su esposa. En los libros comunes aparece que don Agustín pagaba el arrendamiento por ese campo. En los inventarios de 1904 y 1905, bajo la firma de don Agustín Ladoux y su esposa, se incluyó por dos veces el campo de Peluajó como de propiedad de la sucesión. El señor Ladoux ha pagado arrendamientos por el campo que hoy pretende apropiarse, como consta en un recibo cuya autenticidad reconoció. Todos los herederos nos dicen que ese campo lo ocupa don Agustín Ladoux como arrendatario y afirma el hecho, asimismo, su coligante y hermano don Rafael Ladoux.

¡Pirronismo puro!

\*No saben los actores donde han ido a parar los campos de la Portaña y Alfaland\*.

En el contrato de 1904, que constituyó por escrito la sociedad Laplacette, Copello y C.<sup>a</sup>, el causante don Enrique Laplacette, dice: que como capital suyo en la sociedad introduce dichos campos. Los señores Ladoux sabían esto y no obstante reclaman los campos y quieren su parte en la sociedad nombrada. Si se les da lo primero, el causante se queda sin capital en la sociedad; si desean utilidades en ésta, el causante se queda sin campos. No importa, dicen, queremos las dos cosas.

Esto parece un cuento de Gedeón.

Gedeón entró en una tienda a comprar un par de calzoncillos. Le pidieron dos pesos.—Cámbiemelos, dijo, por un gorro de dormir del mismo valor. Luego pretendió retirarse sin pagar.—Pague el gorro, señor, le objetó el vendedor.—¿Cómo? Si el gorro lo he cambiado por los calzoncillos.—Sí, pero es que no ha pagado éstos.—Es que los calzoncillos no los llevo y no tengo por qué pagarlos.

El señor Rafael Ladoux ofreció varios testigos y como declararan en su contra los tachó y llegó a pedir la prisión de algunos de ellos. En siendo contra mi gusto nada me parece justo!



En el juicio todo el mundo se ha propuesto perjudicar a los actores.

Don Juan Laplacette — un hombre honesto a carta cabal que posee varios millones de pesos y que ha trabajado para centuplicar lo que le entregó el causante, beneficiando así a sus hermanas, ha concluido por defraudar a éstas, según sus esposos.

El juez de paz de San Antonio no les merecía fe y así lo manifestaron.

Los peritos nombrados de oficio, señores Deláguila y Lenard, dos caballeros, han prevaricado y sostenido hechos falsos. Se explica. Les propusieron cincuenta cuestiones y las evacuaron todas en contra de los señores Ladoux.

El ex juez de lo civil doctor Pedro J. Hernández, plata labrada de la magistratura, por su carácter, por su talento y honestidad, les ha tratado parcialmente.

El secretario Bollini les escamoteó un escrito, por más que las dos cámaras civiles de la capital de la República, reunidas en acuerdo extraordinario, declararon falso el hecho.

El secretario de la causa ha cosido mal una foja del expediente para inducirlos en error. No se dan cuenta que en tres mil fojas es bien sencillo agregar mal una constancia cualquiera y que el orden de los factores no altera el producto.

Los testigos han mentido invariablemente cada vez que han declarado en contra de los señores Ladoux. Y ha ocurrido que siempre han declarado en contra porque son hombres de verdad.

El juez fué parcial; la cámara fué parcial; la corte provincial fué parcial; la corte de la nación fué parcial. Todos estuvieron en su contra!

Sólo les falta a estos señores repetir las frases del Duc de Venecia en el drama de Hugo.

En el escrito de demanda los Ladoux dijeron, que el señor Juan Laplacette les había pasado algunas cuentas parciales, foja 5 vuelta. En el escrito de foja 176 vuelta, agregaron que no había tales rendiciones parciales de cuentas ni cosa que lo valgan. Corneille lo dijo: *Il faut bonne mémoire après qu'on à menti*. Esta es la lógica de la cacerola.

La generalidad de los hombres quedan ligados por la firma, porque creen que debe hacerse honor a ella;—a otros les impone ese respeto la ley. Con don Agustín Ladoux no ocurre lo mismo y es así como ha podido decirnos a foja 170 vuelta, que el primero y segundo inventario de los bienes fueron suscritos por él, pero que ese acto a nada obliga, que es una *ingenuidad* pensar lo contrario.

Me declaro ingenuo, y conmigo todos los que piensan que cuando se firma queda uno obligado a respetar el acto.

¡Qué raza de ingenuos es la humanidad! ¡Felices los vivos; bienaventurados los que no son ingenuos, que de ellos es el reino de los Cielos!

Debía entregarse a los actores una asignación mensual durante cinco años. Según ellos lo afirman, Laplacette no cumplió con lo pactado.

¡Ellos callaron!

Las utilidades de la sociedad se repartirían todos los años y alcanzaron a millón y medio de pesos. Los señores Ladoux, agregan, nada percibieron por ese concepto. Los otros socios eran los únicos que gozaban de los beneficios del contrato.

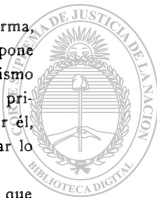
¡Ellos callaron!

Refiere don Diego Hurtado de Mendoza en el Lazarillo de Tormes, que un ciego y su criado resolvieron comerse un racimo de uvas y el primero dijo al segundo:

—Tú picarás una vez, y yo otra, con tal de que me prometas no tomar cada vez más de una, yo haré lo mismo hasta que lo acabemos y de esta suerte no habrá engaño.

Hecho así el trato comenzaron; mas luego, al segundo lance, el ciego mudó de propósito, y comenzó a tomar de a dos en dos, pensando que el criado estaba procediendo lo mismo.

Este tomó entonces los granos de tres en tres. Acabado el racimo, el ciego estuvo un poco con el escarabajo en la mano, y meneando la cabeza, dijo:—Engañado me has; jurara yo que has tú comido las uvas tres a tres:—No comí, dijo el criado; mas ¿por qué sospechas eso? Respondió el ciego.—¿Sabes en qué





veo que comiste tres a tres? en que comía yo dos a dos, y callabas...

Ha pretendido don Rafael Ladoux establecer una separación entre los intereses de su esposa y los suyos propios, con los fines que ya hemos visto, pero a foja 198, olvidándose de su doctrina reconoce que la comunidad va a la sucesión como deudora o acreedora y el marido como dueño de los intereses que administra. Les ocurre a menudo a los señores Ladoux, lo que a los actores del teatro antiguo: sofocados bajo la máscara, descubren un momento sus facciones reales para respirar. Entonces se les reconoce. Aparecen tal cuales son y es inútil que después se vuelvan a cubrir.

Deducida y contestada la demanda, la causa se abrió a prueba. La rendida en autos fué laboriosa y completa: de peritos contadores, de peritos calígrafos, de testigos, de instrumentos públicos y privados, de confesión, de presunciones o indicios. Toda la farmacopea del código. Llegó por fin el día de los alegatos y se entregó los autos a los litigantes para que hicieran mérito de las probanzas acumuladas en más de cuatro mil páginas. Así lo hizo mi parte. Los señores Ladoux sostuvieron, entonces, que todo eso se había hecho en broma, por pasatiempo, por *sport*; que los actos practicados con su intervención, bajo su contralor, consentidos por ellos eran nulos. ¿Por qué? Se me antoja que por la grande y poderosa razón que tenía Bertoldo para no hallar árbol en que ahorcarse; por no haberles dado resultado la prueba, por serles ella adversa en toda la línea, sin una excepción. Hay que proceder como Penélope, se han dicho, deshaciendo en la noche lo que se ha tejido durante el día. Esto puede ser lindo como leyenda, todo lo homérico que se quiera, pero no cabe dentro de la ley, ni lo consiente la lógica, ni el buen sentido.

Pirrón... no más!...

Indignado con el resultado poco favorable de la pericia de los contadores que se han atrevido a decir la verdad, uno de los actores manifiesta que jamás volverá a recurrir a tal género de pruebas.

¡No es para tanto, colega!

¡Un paisano se indigestó comiendo mulitas y después hacía arcadas cuando veía una cueva!

Un burrito fué acollarado con un torete que lo carneó despiadadamente. ¡Después el pobre disparaba hasta de las cabezas de vaca que blanquean en el campo!

La prueba de autos es concluyente a favor de mi parte. Con razón se pide su nulidad por los contrarios!

Mis testigos, y los de ellos, han declarado invariablemente a favor de don Juan Laplacette.

Los contadores se han expedido sobre cincuenta cuestiones que se les propusieron, evacuándolas a favor de mi parte.

Los caligrafos han procedido en igual forma.

Los instrumentos públicos abonan mis afirmaciones y desvirtúan las de los contrarios.

Los documentos privados se encuentran en el mismo caso.

Los informes pedidos a las reparticiones públicas les han sido adversos a los señores Ladoux, y favorables a mis pretensiones.

Los libros comunes justifican plenamente todo lo que he dicho y afirmado.

La prueba de confesión constata los perjurios a granel de los demandantes.

La prueba de presunciones robustece todo lo anterior.

Con razón insultan y protestan, se hacen pirrónicos y recurren a la lógica de la cacerola.

Que se le va a hacer.

Ese es el consuelo de las cosas irreparables, fatales, ese es el supremo recurso de los débiles.

Si no fuera así, sería cuestión de reventar de rabia y de impotencia: de alguna manera tiene que desahogarse la gente... la gente que no tiene razón!

Van a continuación las sentencias que han dado toda la razón a mi parte, reprimiendo con severidad la malicia de los vencidos.





## SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mercedes, noviembre 10 de 1913.



## Y VISTOS:

Estos autos seguidos por don Carlos A. Ladoux en representación de don Rafael y don Agustín Ladoux, esposos de doña Catalina y doña Lucía Laplacette sobre rendición de cuentas, de los que *resulta*:

1.º—Que a fojas 3 se presentó don Carlos A. Ladoux por sus mandantes, exponiendo: que a don Juan Laplacette se le confirió poder para administrar los bienes fincados por fallecimiento de don Enrique Laplacette, padre de las esposas de los nombrados, don Rafael y don Agustín Ladoux, como consta de la escritura otorgada por ante el escribano don Rómulo G. Jordán el 1.º de septiembre de mil novecientos cuatro y que, de acuerdo con las disposiciones legales que rigen el mandato, venía a pedir la correspondiente rendición de cuentas por no haberlas presentado el mandatario.

2.º—Que conferido traslado de la demanda, contestó a fojas 12 don Juan Laplacette, exponiendo: que, en efecto, con poderes bastantes administró los bienes a que se refiere la demanda, todo en virtud del contrato que se invoca y poder posterior, negando que fuera cierto que durante su administración se limitara a pasar algunas cuentas, pues que anualmente había hecho inventarios y balances, remitiendo copias de las mismas a los interesados y que, además, cada tres meses les presentaba el estado de sus cuentas corrientes, entregándoles el saldo que a cada una correspondía por sus utilidades durante el año, cuyas cuentas fueron siempre aceptadas, y que no tenía inconveniente alguno en presentar las cuentas de toda la administración, para lo cual solicitaba un plazo de cuarenta días.

3.º—Que a fojas 13 se dictó providencia acordando el dicho plazo de cuarenta días y a fojas 56 se presentó el demandado acom-



pañando el resumen del inventario de los bienes que dejó al morir el causante de la sucesión el 31 de octubre de 1904 y además los balances de los años 1905, 1906, 1907, 1908, y un inventario y balance general que terminó el 31 de marzo de 1910, fecha en que se hizo cargo el nuevo administrador.

4.°—Que a fojas 57 se encuentra el auto en virtud del cual se mandaron pasar las cuentas presentadas a secretaría, por el término de diez días.

5.°—Que a fojas 64, el señor Agustín Ladoux observó las cuentas presentadas, afirmando que se requería pruebas en legal forma de los actos de la administración; que el contrato de 1904 se había infringido por Laplacette; que el inventario de 1905 se firmó por complacencia; que el de 1910 es irregular porque fué hecho por el que había dejado de ser administrador; que las cuentas no están justificadas; que el administrador no ha repartido las utilidades anualmente; que ha retenido sumas de dinero; que los inventarios no fueron hechos por los peritos nombrados; que el administrador no hizo los depósitos en el Banco de la Nación; que hay diferencia de precios entre los parciales y los totales; diferencias en los valores de las haciendas; omisiones respecto de los campos de «La Porteña» y «Alfaland», incorrecciones en la sociedad «Laplacette y Cia.» y omisión de algunas alhajas.

6.°—Que a fojas 83, don Rafael Ladoux observó que el inventario de 1904 ni lo firmó ni autorizó a su esposa para que lo firmara; que no está de acuerdo con él; que no aparece claro el capítulo que se refiere a la sociedad «Laplacette, Copello y Cia.»; que se han excluido los campos de «La Porteña» y «Alfaland»; que falta el detalle del movimiento de la cuenta corriente del Banco de la Nación; que las tasaciones del inventario de 1910 no son válidas, por haber sido hechas sin autorización.

7.°—Que a fojas 85, el juzgado, para mejor proveer, corrió traslado al demandado, el que se evacuó a fojas 144, rectificando las afirmaciones hechas respecto a las cuentas por don Agustín Ladoux y a fojas por don Rafael Ladoux.

8.°—Que a fojas 188, don Agustín Ladoux observó que el demandado modificaba la *litis contestatio*; que no podía agregar docu-



mentos después de la contestación de la demanda; que los libros no podían oponérsele como prueba; que la carta subscripta por don Agustín era sobre negocios particulares; que el administrador no rindió cuenta de la sociedad; que el contrato de la sociedad «Laplacette, Copello y Cia.» es nulo.

9.—Que a fojas 192, don Rafael Ladoux solicitó se condenara al demandado a rendir cuenta documentada; que impugnó las presentadas; que no firmó los inventarios; que el hecho de recibir cuotas no importa su conformidad con los inventarios; que su conformidad se refiere a su cuenta particular con el fallecido don Enrique Laplacette seguidas después con la sucesión.

10.—Que, recibida la causa a prueba por el auto de fojas 213 vuelta, se produjo por las partes la de que instruye el certificado del actuario de fojas 3064.

11.—Que a fojas 3065 alegó sobre la prueba producida don Carlos A. Ladoux por don Rafael Ladoux, y a fojas 3142 hizo otro tanto don Rodolfo A. Dubarry en representación de doña Lucía Laplacette de Ladoux.

12.—Que, tanto en el uno como en el otro alegato, se mantiene la afirmación que es nulo el procedimiento por razón de los traslados conferidos para mejor proveer; que los libros presentados no hacen prueba, porque no están llevados en forma; que la firma de la esposa puesta sin consentimiento del marido es nula, habiéndose sostenido con anterioridad que la prueba producida fuera de término debe desestimarse, insistiendo en que se condene al demandado porque la prueba que ha rendido no es la que corresponde por derecho, ni justifica la legalidad de su administración.

13.—Que a fojas 2352 alegó de bien probado la parte del administrador, sosteniendo que ha administrado con arreglo a un contrato de sociedad con poderes amplios; que los libros presentados son documentos de la sociedad y no particulares de él; que los reconocimientos explícitos y tácitos hechos por sus coasociados, la prueba pericial rendida, las declaraciones de los testigos que han depuesto en la causa y todos los demás antecedentes acumulados, justifican sus cuentas, demuestran la rectitud de sus proceder y, por consi-



guiente, corresponde que el juzgado, rechazando con costas la demanda, apruebe, en consecuencia, las cuentas presentadas.

14.—Que a fojas 3525 se llamó autos para sentencia.

Y CONSIDERANDO:

1.º—Que está probado en legal forma, tanto la personería de los demandantes como la del demandado, por los documentos públicos con que se inició la demanda y por el reciproco reconocimiento de unos y otros.

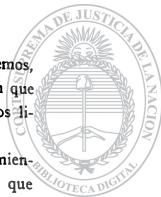
2.º—Que por lo que respecta a la nulidad alegada que se hace surgir de la providencia **«traslado para mejor proveer»**, invocada como fundamento para hacer esta argumentación que las leyes de procedimiento son de orden público y no pueden renunciarse, los demandantes incurrir en un error incomprensible, porque es doctrina corriente, no sólo en nuestro país, sino en todas las naciones civilizadas donde existen códigos de procedimiento, que las nulidades, cuando son relativas, se subsanan por el consentimiento tácito o expreso de las partes que intervienen en los juicios.

Ya en tiempo de los Romanos era esto una regla de procedimiento, según sentencia de Bado, que decía: **«Si las partes lo consideran y el juez lo permitiese, puede éste mandar que se invalide lo que antes se actuó, no siendo sentencia definitiva»**. (Digesto, libro 42, título 1.º, ley 45.)

Muchísimos siglos después, Villadiego, en su **«Tratado de instrucción política»**, en la página 43, siguiendo la ley antes citada, la comentaba en la forma siguiente: **«Y omisa la citación que se debe de hacer antes de la ejecución es nula; pero si el reo no apela o no pide esta nulidad ante el mismo juez de la causa. antes de hacer algún auto en ella es válida la ejecución y pidiéndola antes es nula y se ha de revocar por el mismo juez o por el de apelación»**.

**«Y es de notar (agrega el mismo Villadiego) que es nula la ejecución en que se pervirtió el orden y forma dado por la ley real, fallando que en ella se pone por forma y por modo de proceder, siendo contradicho por la parte, porque de otra suerte, no alegándose esta nulidad, queda firme lo hecho y actuado»**.

Como se ve esta doctrina no es original de este autor; por eso



también él invoca a Parladosis; es, pues, la prolongación, diremos, de la sentencia de Paulo, que antes he mencionado; prolongación que llega difundida hasta nuestros días, como lo vemos en todos los libros de procedimiento que se han escrito hasta la fecha.

Y, si bien es cierto que el artículo 80 del código de procedimiento establece que estas leyes son de orden público, también dice que son renunciables dentro de lo dispuesto en los artículos 19 y 21 del código civil, cuando la renuncia no afecta al orden público y a las buenas costumbres, ya como la providencia de «traslado para mejor proveer» no atañe al orden público ni ofende a las buenas costumbres, sino que tan sólo se relaciona con los intereses particulares que aquí se debaten, los que son parte en el juicio han podido legalmente aceptar el trámite, como lo hicieron de hecho contestando los traslados y produciendo, sin con ello causar nulidades y subsanando las relativas si, en efecto, hubieran existido.

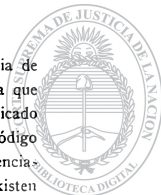
Nótese, además, que, por el artículo 19 del código citado, el juez que decreta un traslado para mejor proveer, no hace otra cosa que usar de la facultad conferida en el inciso 2.º de dicho artículo, desde que con esa providencia se busca una *explicación* que el juez juzga *conducente*.

Para no abundar en mayores consideraciones, recordaré aquí que el primer tribunal de la nación ha resuelto que no causa *nulidad del procedimiento ejecutivo* el comparendo ordenado para procurar un arreglo y un *traslado conferido para mejor proveer*. (Fallos de la suprema corte de justicia nacional, tomo 46, página 169.)

El mismo tribunal ha dicho también «que queda subsanada cualquier nulidad que haya habido» en el procedimiento anterior a la sentencia de remate, si ésta ha sido consentida por el ejecutado y si se han obrado diligencias ulteriores de juicio con intervención y consentimiento del apoderado (los mismos fallos, tomo 58, página 359).

En esta causa fueron consentidos los traslados y el auto que recibió la causa a prueba a solicitud y con el consentimiento de los demandantes y del demandado.

Por consiguiente, aun en la hipótesis de que hubiera existido la nulidad de procedimientos alegada por los actores, son precisamente ellas mismas las que han subsanado con sus actuaciones posteriores.



3.°—Que en cumplimiento de lo dispuesto en la providencia de fojas 238 vuelta, examinado los autos, el infrascripto encuentra que las diligencias de prueba a que aquel auto se refiere, se han practicado dentro de lo que prescriben los artículos 123, 130 y 135 del código de procedimiento; siendo notorio no sólo que se trata de diligencias producidas lejos del asiento del tribunal, sino también que no existen antecedentes que demuestren que las demoras sufridas sean imputables a nulidad, negligencia y descuido de las que solicitaron, por cuya razón son válidas con arreglo a los artículos del código ya citado y el juez está obligado a tomarlas en cuenta al pronunciarse sobre el fondo del asunto, como lo dispone el inciso 4.° del artículo 260 del mismo código.

4.°—Que aun cuando, por lo que hace a la prueba producida, no tiene mayor interés pronunciarse, sobre si el contrato del 1.° de septiembre de 1904, celebrado entre don Juan Laplacette y sus coherederos, es un contrato de sociedad o es un mandato, puesto que si se tratara de un mandato la prueba a que se refiere el artículo 1909 del código civil no está sujeto a formalidades especiales para la justificación de las cuentas que se presentan en juicio, ni están tampoco prescritas bajo pena de nulidad; el juez puede pronunciarse inmediatamente sobre los debates relativos a la aprobación o rechazo de esas cuentas, sobre todo cuando las partes han aceptado la discusión sobre las mismas.

El artículo 1909 que dejo citado fué tomado, según el codificador argentino, del artículo 1993 del código civil francés.

Y bien: la corte de casación de Francia, en la causa «Marais C. Coareau Bellerenn» se pronunció el 19 de diciembre de 1853 aplicando el artículo del código civil del que hemos tomado el 1909 del nuestro.

5.°—«Que las formalidades establecidas por los artículos 530 y siguientes del código de procedimiento para la discusión de las cuentas presentadas judicialmente, no son prescritas so pena de nulidad; el juez puede pronunciarse inmediatamente sobre los debates relativos a esas cuentas, sobre todo cuando las partes han aceptado en sus conclusiones la discusión ante la audiencia.»

La misma corte, en sentencia de 3 de marzo de 1874, en la cau-



sa «Martens y Dupontrovix C., señora de Lampigny y viuda Dupontrovix», decía «que las formalidades establecidas por los artículos 527 y siguientes del código de procedimiento civil para la rendición de cuentas presentadas en juicio, no estaban establecidas bajo pena de nulidad». (Dallos: Recopilación Periódica, año 1854—1.ª—página 26, año 1854—1.ª—página 483; año 1899—segunda parte, página 414; año 1880—parte 1.ª, página 340) (véase igualmente Dallos—Suplemento al Repertorio—tomo 30, página 523—, donde se repite que las formas establecidas por el artículo 527 y siguientes del código de procedimiento no son de orden público, deduciéndose, en consecuencia, que tales formas no están prescritas bajo pena de nulidad.)

Tal es la doctrina que prevalece, y ella se concreta en los términos siguientes. La ley no ha subordinado a ninguna forma especial los justificativos de la rendición de cuentas a que están obligados los mandatarios gerentes o administradores, y son los jueces de fondo a quienes corresponde apreciar con *amplia soberanía el valor y la sinceridad* de los comprobantes presentados por el mandatario, gerente o administrador.

Así también lo han sostenido Laurent, tomo 5.º, números 129 a 160 y siguientes; Aubry y Rau, 4.ª edición, tomo 1.º, párrafo 121, página 487, y en la 5.ª edición, página 752, Huc, tomo 3.º, página 435 y siguientes; Guillouard, página 452 y siguientes.

Y que si, por el contrario, se resolviera que el contrato celebrado entre don Juan Laplacette, los demandantes y demás coherederos es una sociedad, la prueba producida que obra en autos es la que corresponde a la naturaleza del asunto, como lo resolvió la misma corte de casación el 17 de febrero de 1869, en la causa Rossard y Lausand, en la que aquel tribunal declaró: que el libro de apuntes o memoria mencionado en los motivos de la sentencia atacada, fueron considerados por los jueces de fondo como someras y dignas de confianza, no obstante *sus irregularidades*, desde que esos jueces han podido, sin *violar ninguna ley*, apoyar en ese libro, apunte o memoria, un juicio sobre las cuentas debatidas entre las partes. (Dallos, Recopilación periódica, año 1870, parte 1.ª, página 40.)

Y nótese también que el artículo 1694 de nuestro código civil



establece que: «La administración de la sociedad *se reputa un mandato general*». Por consiguiente, a la rendición de cuentas del administrador de una sociedad le son estrictamente aplicables las doctrinas que se han mencionado respecto a la documentación y comprobantes que pueden hacerse valer por el mandatario o administrador, justificativos o documentación que, como se ha visto, no están sujetos a formas determinadas ni prescriptas bajo pena de nulidad, pudiendo, por lo contrario, apreciar el juez con toda la amplitud de su criterio cuanto elemento sea concurrente a establecer la exactitud y veracidad de las cuentas, aun cuando se trate de apuntes, memorias o libros *con irregularidades*, como explícitamente lo he hecho ya notar, lo ha resuelto siempre esa corte de casación de Francia, cuyos fallos invocan y recuerdan en todos los libros que sobre derecho se publican en las otras distintas naciones; porque esas sentencias forman la norma de la jurisprudencia mundial y sus pronunciamientos se recuerdan como autoridad suprema en materia de decisiones judiciales.

Si a esta consideración se agrega que nuestro artículo 1909 del código civil fué tomado al pie de la letra del artículo 1993 del código de Napoleón, nos convenceremos que no puede haber más autorizado comentarista y jurisconsulto con criterio más acertado e imparcial, para apreciar el alcance y aplicación de nuestra ley civil, que aquel tribunal, que resuelve, en presencia de lo dispuesto en ese código del que nosotros copiamos la disposición legal de que se trata.

6.°—Que aun prescindiendo de lo expuesto en el anterior considerando, la lectura del contrato del 1.° de septiembre de 1904, invocado por los demandantes y el poder general conferido al administrador, agregado a fojas 597, demuestra en forma evidente que allí se establecieron las cláusulas de una sociedad civil.

La ley 2, título 16, libro 5.°, de la Recopilación Castellana, disponía que: «En cualquier manera que uno parezca se quiso obligar a otro, obligado queda». Siendo ese contrato la ley para los contratantes, como ya lo había dispuesto la ley primera, título 3.°, libro 6.°, del Digesto. (*Contractus legen est conventionem accipientes.*) Así también lo dispone explícitamente el artículo 1197 del código civil.

Pues bien; ese contrato de septiembre 1.° de 1904, no es un sim-



p'le mandato para administrar los bienes de una testamentaria, porque no se estipula que la acción del administrador ha de limitarse a la conservación de los bienes de la herencia, a la percepción de la renta y a la distribución del producido entre los coherederos, sino que, en virtud del poder general agregado a fojas 597, que complementa el contrato, se establecieron los requisitos del artículo 1548 del código civil.

En ese poder se leen las facultades de transar, de comprar y vender bienes inmuebles urbanos y rurales, *recibir y pagar sus precios al contado o a plazos, recibir o dar dinero sobre hipoteca* u otra forma de garantía, tomar dinero a intereses de Banco o particular, etc.

Quiere decir, entonces, que es evidente que se le autorizó al demandado a realizar operaciones de lucro *para distribuirse en dinero las ganancias entre los coasociados, que corrían a la vez la contingencia de perder o ganar, empleando* por ese contrato como capital social la parte que a cada uno correspondía como heredero en la sucesión de Laplacette, y por eso la formación de cuentas corrientes, a cada uno de ellos, el nombramiento de tesorero y demás cláusulas de contrato y de poder.

7.º—Que por lo que hace a la prueba, los libros presentados, como lo afirma el demandado, no son documentos propios de él, sino antecedentes escritos de pertenencia de la sociedad, y que han estado a la disposición de todos los asociados. Que los recibos a cuenta, o sea por razón de los inventarios de 1904 a 1908, son un reconocimiento tácito de la exactitud de las cuentas presentadas, y a estos hechos le son estrictamente aplicables los artículos 1935 y 1936 del código civil, sin que los reparos que se hacen de que esos libros y esos inventarios y balances no están llevados ni hechos con las formalidades que se requieren por el código de comercio, tengan asidero, no sólo porque aquí no se trata de una sociedad comercial, sino civil, para la que no hay formas prescriptas so pena de nulidad respecto de su contabilidad, sino porque los que demandan han presenciado la ejecución del contrato, no han hecho oposición durante años a los inventarios, balances y cuentas corrientes, recibiendo por razón de los mismos dividendos o utilidad, lo que significa consentimiento tácito, ratificación tácita del demandante, y, por consiguiente, la apro-



bación de todas las operaciones expresadas por el administrador bajo el amparo de los artículos 1935 y 1936 ya recordados.

8.º—Que la firma puesta por la esposa de Ladoux es perfectamente válida y como documento reconocido en juicio hace plena prueba, según el artículo 1026 del código civil.

La ley 5, título 3.º, libro 5.º, de la Recopilación Castellana, y la ley 58 de Toro, disponían que el marido podía ratificar lo hecho por la mujer de una manera general o especial, y la suprema corte de justicia nacional, en la sentencia que se registra en el tomo 16, página 123, de sus fallos, declaró:

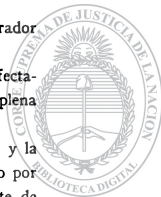
«Que el silencio del marido, a pesar de haber estado presenciando la ejecución del contrato de venta hecho por su mujer, debe reputarse como una confirmación tácita de su consentimiento».

Las disposiciones legales que dejo citadas, lejos de estar derogadas, se encuentran comprendidas en el artículo 918 del código civil.

9.º—Que las pericias practicadas de los libros y contabilidad llevada por el administrador Laplacette han demostrado que los asientos de los mismos son verídicos, que se ha observado en ellos un método que aleja toda sospecha de dolo o fraude; que la absolución de posiciones, como las cartas reconocidas, recibo de cantidades entregadas por el administrador y la misma prueba testimonial, han venido a corroborar cuanto se tiene dicho y referido respecto a la eficacia de todos esos comprobantes y justificativos que se acompañaron a la rendición de cuentas.

10.—Que en cuanto a la sociedad «Laplacette, Copello y Cia.», se trata de un acto jurídico llevado a cabo en vida del causante de la sucesión, según consta de la escritura pública cuya copia corre agregada a fojas 122, contrato lícito reconocido por los herederos y respecto del cual, en la parte que se relaciona con las cuentas presentadas, las consideraciones hechas a fojas 3458 relacionadas con los facsimiles de fojas 3458 a 3461, consideraciones que el juzgado reproduce por encontrarlas arregladas a derecho, dejan sin fundamento alguno los reparos especificados por los demandantes sobre dicha sociedad.

11.—Que, según la cláusula 3.ª de dicho contrato, el capital so-



cial se componía del capital líquido del Molino Arrecifes, *establecimiento de propiedad La Portaña, establecimiento de propiedad Alfaland*, y según el artículo 4.º, el capital social pertenece a los socios en la proporción siguiente: a don Enrique Laplacette, 489.326 pesos con 43 centavos moneda nacional; a don Santos Copello, 474.065 pesos con 63 centavos, y a don Juan Rodolfo Laplacette, 485.286 pesos con 39 centavos.

El artículo 5.º de dicho contrato dice textualmente, a propósito de los artículos del mismo que dejo citado, lo siguiente: «A los efectos de los artículos 3.º y 4.º, los socios declaran: Que si bien los títulos de las propiedades denunciadas están a su nombre particular y los tres socios son condóminos, *quedan por este contrato cedidos a la razón social Laplacette, Copello y Cía.*».

De manera que queda evidenciado en forma notoria, y por razón de una escritura pública, la improcedencia y falta de fundamento con que se ha observado que los dichos campos de «La Portaña» y «Alfaland» no se han hecho figurar en las cuentas del administrador como de propiedad de la sucesión Laplacette.

12.—Que por lo que hace a la venta de bienes inmuebles, no puede ponerse en duda que el poder agregado a fojas 597, otorgado como complemento del contrato firmado el 1.º de septiembre de 1904 no tuvo otro objeto que ampliar las facultades conferidas al administrador, y basta su simple lectura para convencerse que con él quedó investido de facultades que antes no tenía porque no se las habían conferido en el contrato.

Fué, pues, en virtud de esas facultades que el campo se vendió por 16.400 pesos moneda nacional.

Pudo el precio ser alto o ser bajo; al administrador no se le dió límite o base; entonces no quiere esto decir que la venta fuera nula, ni mucho menos que lo fuera fraudulenta, tanto más cuanto que se hizo con la intervención del juez, y ella se llevó a cabo con todos los requisitos legales.

13.—Que respecto a la venta del campo en San Antonio, debe decirse otro tanto. Se hizo con facultades de vender al precio de 800 pesos por hectárea, no fué en forma alguna desventajosa, como no lo fué tampoco la venta de los lotes de tierra en el partido de Junín,

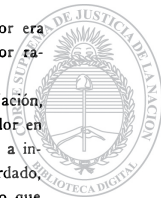


porque era venta necesaria y obligada, desde que el comprador era el ferrocarril Pacífico, que podía conseguir la expropiación por razones de utilidad pública.

14.—Que en cuanto a los depósitos en el Banco de la Nación, se ha demostrado que esos dineros no los retuvo el administrador en su poder, sino que de las mismas cuentas resulta que los colocó a interés con facultades para hacerlo así, según el poder ya recordado, beneficiando con los intereses devengados a sus coasociados; lo que significa que al obrar así, consultó mejor los intereses de los mismos y pudo hacerlo dentro de lo legal, según el artículo 1906 del código civil.

15.—Que en cuanto al cargo formulado por don Agustín Ladoux respecto de la propiedad de 500 hectáreas ubicadas en Pehuajó, cuya pertenencia se atribuye, la veracidad de lo afirmado por el administrador don Juan Laplacette queda evidenciada con el poder de fojas 1512 otorgado por don Enrique Laplacette a nombre de su yerno don Agustín Ladoux, poder recibido por éste, y que se redacta de acuerdo con los datos que el mismo dió, según las declaraciones de los escribanos Esquiaga y Jordán; con la carta de fojas 1422, escrita por el señor Ladoux, donde reconoce que la propiedad es de la sucesión, y con el inventario corriente a fojas 18 del libro letra A, firmado por el dicho señor Ladoux, donde se incluye el campo como perteneciente a la sucesión de don Enrique Laplacette.

16.—Que de las mismas pruebas mencionadas resulta también que los cargos hechos por las diferencias de precio en las haciendas y contradicciones entre los parciales y totales, son aparentes, como se ha demostrado sin esfuerzo con los informes periciales y explicaciones satisfactorias y concluyentes dadas por el administrador. Tampoco debe tenerse en cuenta lo dicho respecto a las alhajas, desde que don Agustín Ladoux, absolviendo posiciones a fojas 1940, al contestar el número 13, confiesa que lo dicho sobre esas alhajas fué un error de su mandatario y por lo que hace a lo asegurado por el mismo, de que las cartas eran por operaciones con la sucesión Laplacette y no por razón del contrato de septiembre de 1904, esa dualidad de relaciones jurídicas no ha podido existir, porque ese contrato de septiembre de 1904 hizo desaparecer la entidad jurídica o sea la su-



cesión Laplacette, convertida en una sociedad entre coherederos en la que el capital social se formó con la parte que a cada uno de ellos correspondía; parte que no podía ser otra que los saldos y operaciones anteriores con la sucesión para con aquellos herederos que las hubieran tenido, quedando entonces las obligaciones limitadas a las estipulaciones hechas en el contrato.

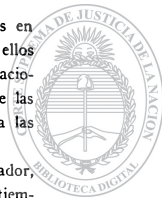
17.—Que respecto a la comisión retenida por el administrador, dadas las estipulaciones establecidas en el contrato de 1.º de septiembre de 1904, aquél ha podido hacer esa retención porque lo autoriza en forma el artículo 1956 del código civil.

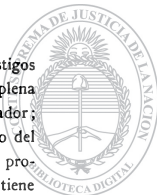
18.—Que, además de todas las pruebas que se ha hecho mérito en los anteriores considerandos, el juzgado, que según las sentencias de la corte de casación que antes mencionó, está llamado a apreciar con absoluta soberanía todos los comprobantes que se encuentran en la causa, no puede prescindir de la prueba de los artículos 837, 238 y 682 del código de procedimiento, porque son de estricta aplicación al *sub judice*.

Así, pues, vemos que son doce las porciones en que ha de dividirse el capital y las utilidades de la sociedad y que sólo dos dueños de sólo dos partes se han opuesto a la aprobación de las cuentas presentadas, en las que no aparecen mejoradas aquéllas no resultan perjudicadas estas dos.

Es principio inconcuso en la ciencia jurídica que la ley reputa siempre a todos los hombres honrados, y es su maldad o extravíos lo que requiere prueba; por consiguiente, el juez no puede invocar ningún principio de derecho abstracto o escrito, ni apoyarse en la moral ni en la justicia para declarar por sentencia que esa mayoría de interesados, personas de reconocida honradez, se hayan constituido en cuadrillas para perjudicar a sabiendas y sin motivo alguno. aprobando cuentas incorrectas, erradas o fraudulentas; los intereses pecuniarios de sus dos hermanas, de las que no aparecen apartadas por resentimientos o rencores que pudieran engendrar una venganza o represalia.

Las manifestaciones de esa gran mayoría de interesados coherederos y coasociados que han tenido participación en proporciones iguales en los beneficios de la sociedad y de su administración, no se-



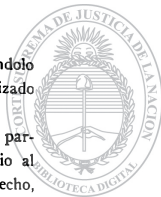


rán, si se quiere, las declaraciones múltiples y contestes de testigos hábiles que han depuesto en la causa haciendo con sus dichos la plena prueba de la verdad de las cuentas presentadas por el administrador; pero la aprobación de esas cuentas hechas por los mismos, dentro del espíritu y propósitos que informa el artículo 682 del código de procedimiento, no sólo constituyen esa mayoría de interesados que tiene autoridad por sólo su mayor número para dirimir las dificultades que se presenten; sino que también son otras tantas presunciones igualmente graves, precisas y concordantes que por su número, importancia y corrección llevan necesariamente al ánimo del juez que ha de fallar, con arreglo a toda la prueba producida, la íntima y fundada convicción de que todas ellas, estrechamente entrelazadas con todos los demás comprobantes ya analizados, forman una valla infranqueable que hace imposible la entrada al recinto de lo equitativo, de lo legal y de lo justo; a esas pretensiones formuladas por los demandantes, cuya ilegalidad e improcedencia toda la prueba producida se ha encargado de poner al descubierto.

19.—Que por lo que hace a las observaciones o reparos que se dicen afectan de inhabilidad a alguno de los testigos, según los actores, ello no tiene importancia decisiva en el juicio, desde que, debiendo apreciarse la prueba testimonial con arreglo a los artículos 219 y 225 del código de procedimiento, con esos testigos o sin ellos, por lo que hace a toda la prueba producida, quedan siempre de pie los instrumentos públicos, los instrumentos privados reconocidos en juicio, los libros, las pericias, los recibos de dinero por razón de utilidades, las conformidades explícitas o tácitas prestadas por los demandantes, de todo lo cual ya se ha hecho mérito, sin que su valor probatorio pueda ser destruido ni menguado por lo que el testigo A o B dijo al prestar declaración. Por el contrario, aun suponiendo probadas esas inhabilidades, sus dichos serían siempre graves indicios en contra de los actores y a favor del demandado.

20.—Que, como resulta de todo lo antes expuesto, los demandantes, contra los textos explícitos de las disposiciones legales que rigen el caso, en contra de escrituras públicas, de documentos privados reconocidos en juicio y de hechos categóricamente confesados:

•Maliciosamente sabiendo que non han derecho en la cosa que de-



mandan han movido a sus contendores pleitos sobre ellos, trayéndolo en juicio i faziéndolos fazer grandes costas i omisiones, es guizado que non sin pena por que los otros se revelen de los fazer».

Por lo tanto, de acuerdo con esta ley, que es la 8, título 22, partida tercera, siguiendo la sentencia de Pablo sobre el comentario al edicto, que decia: «Que a cada mal debe perjudicar su propio hecho, no a su adversario, principio reasumido en los artículos 902, 903, 904 y 1909 del código civil, y artículo 71 del código de procedimiento, las costas causadas en este pleito deben ser abonadas por los demandantes vencidos en juicio.

Por estas consideraciones, concordantes de los escritos de fojas 144, 146 y 3252, y en mérito de las disposiciones legales antes recordadas, fallo definitivamente este juicio, absolviendo a don Juan Laplacet de la demanda interpuesta contra el mismo por rendición de cuentas, aprobando, en consecuencia, las presentadas por éste corriente de fojas 22 a 55, para lo cual interpone el juzgado la autoridad que inviste y condenando en costas a don Rafael y don Agustín Ladoux.

A los efectos del artículo 71 del código de procedimiento, régulanse los derechos procuratorios de don Agustín Villalba en 25.000 pesos y se reproducen las regulaciones ya hechas al doctor Tomás Jofré (1), y señores peritos Rafael S. Deláguila, Patricio Lennard, Adolfo Herrera y Vidal Ques: Régulase el honorario del doctor Carlos Jofré en 10.000 pesos moneda nacional. Repóngase las fojas. Autorice el adscripto.

ALBERTO L. ESPINOSA.

Ante mí:

*Juan G. Aguirre.*

---

(1) Ochenta mil pesos moneda nacional.

## SENTENCIA DE LA CÁMARA 1.ª DE MERCEDES

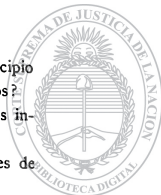


Mercedes, a 24 de diciembre de 1915, reunidos en acuerdo ordinario el señor vocal de la excelentísima cámara 2.ª de apelación del departamento del Centro de la provincia de Buenos Aires, doctor don Elbio Medina y el señor conjuuez doctor don Leopoldo Ojea, insaculado en reemplazo del señor vocal de este tribunal doctor don Remigio Molinas, que fué recusado, se trajo al despacho para pronunciar sentencia definitiva el juicio seguido por DOÑA CATALINA LAPLACETTE DE LADOUX y OTRA CONTRA DON JUAN LAPLACETTE SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS, y se procedió a practicar la insaculación prescripta por el artículo 173 de la constitución, resultando de ella que en la votación debía observarse el orden siguiente: doctores Ojea: Medina.

La cámara planteó las siguientes cuestiones:

- 1.ª—¿Es nula la sentencia apelada?
- 2.ª—¿Quedó trabada la *litis contestatio* con los escritos de fojas 3 y 12?
- 3.ª—¿Ha sido ésta modificada con la presentación del escrito de fojas 144?
- 4.ª—Caso afirmativo, ¿es nulo y de ningún valor todo lo obrado de fojas 213 vuelta en adelante?
- 5.ª—¿Don Juan Laplacette fué nombrado administrador y administró los bienes dejados por el fallecimiento de don Enrique Laplacette en virtud de un convenio celebrado entre los herederos de éste?
- 6.ª—Caso afirmativo, ¿estaba como tal obligado a rendir cuentas de la administración?
- 7.ª—Caso afirmativo: ¿ha rendido don Juan Laplacette las cuentas de la administración?
- 8.ª—Caso afirmativo, ¿la rendición de cuentas de la administración fué hecha en forma?





9.—¿Debía el administrador hacer un inventario al principio de la administración y repetir esa operación en los años sucesivos?

10.—¿Se ha probado que las tasaciones de los bienes en los inventarios presentados no fuesen arregladas?

11.—En el inventario o inventarios, ¿se han excluido bienes de los dejados por fallecimiento de don Enrique Laplacette?

12.—¿Ha dado cumplimiento el administrador a la cláusula del convenio relativa al reparto anual?

13.—¿Lo ha dado respecto a la cláusula de llevar una cuenta corriente a cada heredero que será liquidada en cada repartición?

14.—¿Ha retenido el administrador el importe del 5 por ciento de las utilidades liquidas?

15.—¿Ha violado el señor Juan Laplacette la cláusula 3.ª del convenio respecto a la formación de inventarios anualmente, incurriendo en alguna responsabilidad?

16.—¿Estaba convenido que la sucesión tendría una cuenta corriente con el Banco de la Nación Argentina, en donde serían depositados los fondos?

17.—¿Ha cumplido el administrador con lo convenido en esa cláusula?

18.—Caso negativo, ¿la falta de cumplimiento hizo incurrir en alguna responsabilidad al administrador?

19.—¿Se ha probado que el saldo de la cuenta de la sociedad «Laplacette, Copello y Cia.» no fuese verdadero?

20.—¿Debían incluirse en el inventario los campos denominados «La Porteña» en Peyrano, provincia de Santa Fe, y «Alfaland» en San Luis?

21.—La falta de conformidad con las tasaciones contenidas en el inventario de fecha 31 de marzo de 1910, ¿es motivo para que no se aprueben las cuentas?

22.—¿Lo constituye la circunstancia de haberse comprendido entre los bienes de la sucesión un campo en el partido de Pehuajó y cargado arrendamientos por el mismo a don Agustín Ladoux?

23.—¿Ha vendido el administrador un lote de campo en San Antonio de Areco y otro en Conesa, pertenecientes a la sucesión?



24.—Caso afirmativo, ¿ha procedido con la autorización correspondiente?

25.—Si se resuelve negativamente la cuestión anterior ¿ha incurrido en alguna responsabilidad?

26.—¿Ha vendido el administrador una fracción de campo en Junín, perteneciente a la sucesión.

27.—Caso afirmativo ¿ha procedido con la autorización correspondiente?

28.—Caso negativo, ¿ha incurrido en alguna responsabilidad?

29.—¿Se probó que a dos toros se hubiese asignado un precio de 70 pesos moneda nacional a cada uno?

30.—¿Se ha cargado indebidamente a la cuenta que figura a nombre de don Agustín Ladoux el importe de unas alhajas?

31.—¿Se ha justificado la presentación del pagaré de fojas 664 y pago de la partida respectiva?

32.—¿Cuál es la naturaleza del contrato de 1.º de septiembre de 1904?

33.—¿Son procedentes las tachas alegadas contra varios testigos?

34.—¿Cómo deben pagarse las costas?

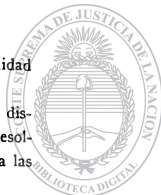
35.—¿Son arregladas las regulaciones apeladas?

36.—¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la PRIMERA CUESTIÓN el doctor Ojea dijo:

Con fecha 19 de febrero del año 1910, el doctor Carlos A. Ladoux, en el carácter de apoderado de don Rafael Ladoux y de don Agustín Ladoux como administradores de sus respectivas esposas, promovió demanda contra don Juan Laplacette para que rindiese cuentas de las operaciones efectuadas como administrador de los bienes dejados por don Enrique Laplacette, según convenio hecho entre los herederos de éste, el 1.º de septiembre de 1904.

Después de muchas incidencias y de una larga tramitación, se dicta a fojas 3642 sentencia definitiva, absolviendo al demandado de la demanda interpuesta por rendición de cuentas y aprobando las presentadas por él, corrientes de fojas 22 a 55.



De dicha sentencia interpusieron los actores recurso de nulidad a fojas 3664 y 3669, que les fueron concedidos.

Trátase de recurso de nulidad de la sentencia regido por la disposición del artículo 284 del código de procedimiento, y para resolver sobre su procedencia hay que examinar si aquélla se ajusta a las formas del título 3.º, capítulo 4.º.

Considero que la sentencia, arreglada o no a derecho, lo que se discutirá si el tribunal entra a conocer el fondo del asunto, reúne las formas exigidas por la ley, no siendo, por lo tanto, nula.

En efecto; la sentencia contiene decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la acción deducida y absolviendo al demandado; el objeto de la demanda fué que el demandado rindiese cuentas; el juez, por las consideraciones de la sentencia, pronuncia fallo absolviendo al actor de la demanda y aprobando las cuentas que presentó; así cumple con el requisito del artículo 259 en cuanto a la forma de la sentencia; si el pronunciamiento debió ser diferente, teniendo en cuenta las constancias de autos, es cuestión que atañe al fondo del asunto, no a la forma de la sentencia.

La demanda fué promovida por don Rafael y don Agustín Ladoux, administradores de sus respectivas esposas doña Catalina y doña Lucía Laplacette contra don Juan Laplacette para que éste rindiese cuentas de la administración de bienes en que aquéllas tenían interés; de suerte que fueron actores los señores Ladoux por sus esposas y el señor Laplacette, los que se mencionan en la sentencia; si otros herederos de don Enrique Laplacette se incorporaron al juicio, no fué por demanda contra ellos deducida por los actores, quienes la dirigieron exclusivamente contra el administrador señor Laplacette; no fué tampoco por demanda de éste, quien no era actor, era demandado y su obligación era la del artículo 110 del código de procedimiento, sin que tampoco pudiese reconvenir a quien no había demandado (artículo 111).

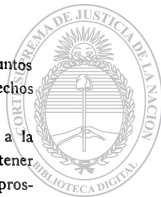
La exposición sumaria de los puntos de hecho y de derecho, así como la apreciación de la prueba, no fué omitida en la sentencia, según consta de los resultandos y considerandos de la misma; la circunstancia de que alguna de las numerosas cuestiones debatidas por las partes no haya sido motivo de pronunciamiento o de uno espe-

cial no es motivo de nulidad, porque los jueces no están obligados a plantear todas las cuestiones que las partes quieran o hayan tratado, sino las pertinentes y hagan verdaderamente al pleito a juicio de aquéllos; así lo tiene consagrado la jurisprudencia de la suprema corte de justicia de la provincia en numerosos fallos respecto a las cámaras de apelación debiendo aplicarse a los jueces de primera instancia. Véase tomo 4.º, página 87, 7-279, 8-433 de la serie 2.º; 7-292, 8-165 de la serie 3.º y tantos otros de los acuerdos y sentencias de la suprema corte de justicia. Todo sin perjuicio que el tribunal tome en consideración esas cuestiones si las considerase a su juicio pertinente, para la mejor decisión.

La violación de cosa juzgada, de que se hace mérito como causal de nulidad, dado el caso que exista, no es cuestión de forma de la sentencia (artículos 259 y 260); sería cuestión de fondo, en cuanto violaría un derecho adquirido; puede una sentencia ser válida por su forma y, sin embargo, no ajustada a derecho, en cuanto priva a una parte de uno adquirido por resolución firme será revocable la sentencia, en cuanto priva a uno de un derecho, pero no nula por estar pronunciada con observancia de las solemnidades legales.

El recurso de apelación concedido por la regulación de honorarios del doctor Jofré, no privó al juzgado de jurisdicción para resolver respecto al fondo del asunto entretanto aquél estuviese pendiente, pero sí en lo que a la regulación referida tuviese atingencia; no todos los incidentes impiden la prosecución de lo principal, sólo la impiden aquellos cuya resolución es previa, necesaria para la del fondo del asunto, en cuyo caso no se encuentra el relativo a la regulación de honorarios de los abogados, procuradores, peritos, etc., que intervienen en los juicios, porque la resolución relativa al fondo del asunto será siempre la misma, sin que pueda hacerla variar la mayor o menor suma que en definitiva se fija por concepto de honorarios; los incidentes que impiden la prosecución de la demanda principal suspenden el curso de ésta (artículo 422); lo que no se encuentran en ese caso no la suspenden (artículo 424); además, en rigor no puede decirse que constituya un incidente del juicio el promovido por los abogados y procuradores sobre regulación de honorarios, porque se trata de asuntos de éstos con sus clientes y no entre las partes que





intervienen, entre el actor y el demandado, puede decirse de asuntos de terceros ajenos al pleito, por más que se trate de trabajos hechos en él.

Lo relativo a pronunciamiento sobre puntos no sometidos a la decisión de juzgado y a la violación de principios que pueda contener la sentencia, no es cuestión de forma de la sentencia para que prospere el recurso de nulidad (artículos 259, 260 y 284), sino que afecta al fondo del asunto.

Por lo expuesto, voto por la negativa.

El doctor Medina, haciendo suyas las consideraciones emitidas por el señor doctor Ojea, formuló su voto también en el sentido de que la sentencia recurrida no es nula.

A la SEGUNDA CUESTIÓN el doctor Ojea dijo: Los señores Rafael y Agustín Ladoux, por sus respectivas esposas, promovieron, a fojas 3, demanda contra don Juan Laplacette, por rendición de cuentas de la administración de los bienes dejados por fallecimiento de don Enrique Laplacette, en virtud del poder dado por escritura extendida ante el escribano don Rómulo J. Jordán, con fecha 1.º de septiembre del año 1904, poder que reconoció por origen un convenio entre todos los herederos de don Enrique Laplacette, que se transcribe en la demanda.

Se corrió traslado de ésta a fojas 6 vuelta y se fijó al demandado el término de 15 días para que la contestase y compareciese a estar a derecho.

El demandado señor Laplacette contestó a fojas 12, reconociendo haber recibido el poder para administrar los bienes sucesorios de don Enrique Laplacette y también que se hizo el contrato transcripto en la demanda y firmado por todos los herederos; después de algunas consideraciones respecto a lo afirmado por los actores en algunos puntos de la demanda, concluyó por manifestar conformidad con rendir las cuentas de la administración que se le pedía y solicitó un plazo de 40 días para presentarla.

Se le concedió a fojas 14 el plazo solicitado con el asentimiento de los actores, pues notificado el representante de éstos, no hizo observación.

El demandado, aunque no dentro del plazo que se le fijó, presentó a fojas 56 los documentos de fojas 22 y siguientes, con lo que entendió cumplir lo pedido en la demanda de rendición de cuentas.

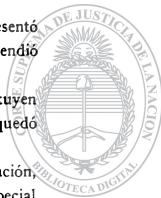
El escrito de fojas 12 y el complemento de fojas 56, constituyen la contestación de la demanda, pero no con éste, y el de fojas 3 quedó trabada la *litis contestatio*.

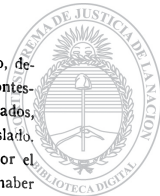
Se trata de un juicio de rendición de cuentas de administración, ejercida en virtud de un mandato, que no tiene tramitación especial señalada en el código y le corresponde la del juicio ordinario, de acuerdo con lo que dispone el artículo 78 del código de procedimiento.

El señor juez, presentadas las cuentas, las mandó poner a la oficina por diez días, imprimiendo al juicio la tramitación que corresponde a la rendición de cuentas de administradores judiciales, de acuerdo con lo que dispone el artículo 673 del código de procedimiento.

El procedimiento que correspondía en virtud de lo dispuesto en los artículos 78 y 112 del código de procedimiento, en razón de tratarse de rendición de cuentas pedidas a un mandatario, no judicial, quien había contestado la demanda presentando documentos, era que se corriese traslado a los actores y éstos lo entendieron así, puesto que a fojas 64 y 83 se expiden sobre las cuentas rendidas, prescindiendo del juicio verbal a que el juzgado convocara a las partes y como si el juzgado hubiese corrido traslado de los documentos, procedimiento expresamente consentido por las partes.

Sobre ello no hubo cuestión si el procedimiento no era ajustado a derecho, tampoco se trataba de actos prohibidos que no fuesen de ningún valor y que no pudiesen hacerse, de acuerdo con lo que dispone el artículo 18 del código civil; no había interés público comprometido; no había intereses de incapaces afectados; no había reclamación judicial respecto al procedimiento observado y el juez nada sobre el particular tenía que resolver; las partes tácitamente se ajustaron a un procedimiento que no interesaba el orden público ni las buenas costumbres, y pudieron muy bien haber dejado sin efecto por convención expresa o tácita la ley de la materia (artículo 21); si hubiese contienda a resolver o discrepancia entre las partes, respecto al punto, sería el caso de que el juzgado resolviese, aplicando la ley que legisla la cuestión.





Pero buenamente, sin que se confiriese a los actores traslado, dejando tácitamente sin efecto la convocatoria a juicio verbal, contestaron los actores, respecto a las cuentas y documentos presentados, supliéndose así la omisión en que se incurrió al no conferirle traslado.

Si hubo un defecto de procedimiento, quedó subsanado por el consentimiento tácito, contestando el traslado que se les debiera haber corrido, sin que la otra parte reclamase, pues sabido es que el error de procedimiento se subsana si no se reclama su reparación en la instancia en que se comete (artículo 283 del código de procedimiento).

Por lo expuesto, opino que la *litis contestatio* quedó trabada con el escrito de fojas 3, la contestación de fojas 12 con su ampliación de fojas 56 y los escritos de fojas 64 y 83, que pueden considerarse como las contestaciones de los traslados que ordena el artículo 112 del código de procedimiento.

Voto en este sentido la cuestión propuesta.

El doctor Medina, por las mismas consideraciones que las formuladas por el señor vocal preopinante, votó igualmente en sentido afirmativo la cuestión segunda.

A la TERCERA CUESTIÓN el doctor Ojea dijo: De los escritos presentados por los actores observando las cuentas, el juzgado, a fojas 85, para mejor proveer, corrió traslado a don Juan Laplacette; esa providencia está autorizada por el artículo 19 del código de procedimiento, sin que ello importe modificar la *litis contestatio* que había sido trabada ya en la forma expresada al tratar la cuestión que precede.

La circunstancia de que para mejor proveer, se corra un traslado las partes, no importa alterar la *litis contestatio* ni admitir su alteración; la situación jurídica de las partes es la misma, el juez las oye para que refuercen o aclaren sus argumentos, sin alterar la situación en que se colocaron; si se alegan hechos que no lo fueron en los escritos respectivos, el juez no los considerará en la sentencia.

Por esto voto en el sentido que los escritos de fojas 144 y 156 no importaron alterar la *litis contestatio*, la que quedó trabada en la forma que se expresa en la cuestión antes votada.

El doctor Medina, por los mismos fundamentos que los expues-



tos por el señor doctor Ojea, votó también en el sentido de que los escritos de fojas 144 y 156 no importaron alterar la *litis contestatio*.

A la CUARTA CUESTIÓN el doctor Ojea dijo: Después de correrse un nuevo traslado a fojas 161 vuelta, haciendo siempre el juzgado uso de la facultad que le confiere el artículo 19 del código de procedimiento, se recibió la causa a prueba por el auto de fojas 213 vuelta.

Es el procedimiento que correspondía; como se deja dicho, se trata de un juicio de rendición de cuentas que no tiene señalada una tramitación especial, cuya contienda entonces debe decidirse en juicio ordinario.

Había hechos controvertidos y lo que correspondía, era que se recibiese la causa a prueba, como efectivamente se hizo, de acuerdo con lo que dispone el artículo 114 del citado código.

El procedimiento es ajustado a derecho; las partes lo han consentido.

Voto la cuestión propuesta en sentido negativo.

El doctor Medina, por las mismas consideraciones que las formuladas por el señor doctor Ojea, votó igualmente en sentido negativo la presente cuestión.

A la QUINTA CUESTIÓN el doctor Ojea dijo: Ocurrido el fallecimiento de don Enrique Laplacette en Rosario de la Frontera, sus herederos, todos mayores de edad, se reunieron en San Antonio de Areco el día 1.º de septiembre de 1904 y convinieron no proceder a la partición de los bienes que aquél dejó por el término de cinco años, nombrando administrador de los mismos, con algunas restricciones, a don Juan Laplacette y debiendo otorgársele un poder general; así resulta del convenio transcrito en el escrito de fojas 3, expresamente reconocido por el demandado en el escrito de fojas 12, del poder cuyo testimonio se encuentra agregado a fojas 9 de las posiciones absueltas a fojas 451 y siguientes, y tantas otras constancias de autos, todo lo que constituye plena prueba respecto al nombramiento de administrador y desempeño del mandato (artículo 161 del código de procedimiento y 993 del civil). Voto por la afirmativa.

El doctor Medina, por los mismos fundamentos que los expre-





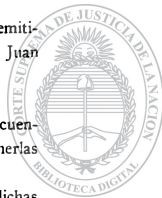
sados por el señor vocal preopinante, votó igualmente esta cuestión por la afirmativa.

A la SEXTA CUESTIÓN el doctor Ojea dijo: Reconocido, como está, que fué nombrado administrador y administró don Juan Laplacette los bienes dejados por el fallecimiento de don Enrique Laplacette, según resulta de la cuestión anterior, la obligación de rendir cuenta de la administración que ejerció, surge de la disposición terminante del artículo 1909 del código civil, que establece que todo mandatario está obligado a dar cuenta de sus operaciones, obligación que no ha eludido el administrador, manifestando conformidad expresa con el pedido que al respecto se hace en la demanda; voto por la afirmativa.

El doctor Medina votó igualmente en sentido afirmativo, aduciendo las mismas consideraciones que las expuestas por el señor vocal preopinante.

A la SÉPTIMA CUESTIÓN el doctor Ojea dijo: Al contestar la demanda, a fojas 12, don Juan Laplacette dice que ha rendido prolijas cuentas del tiempo de su administración, menos las relativas al último año; pero desde que se le piden cuentas de toda la administración, promete presentarlas, para lo que pide se le conceda un plazo de 40 días, plazo que se le concede por el auto de fojas 14 con el asentimiento tácito del actor, pues notificado de esa resolución, la consintió sin observación; a fojas 56, el señor Laplacette, tratando de cumplir lo que prometiera, al contestar la demanda a fojas 12, presenta los papeles de fojas 22 a 55, que lo constituyen el resumen del inventario de los bienes dejados por don Enrique Laplacette el día 31 de octubre del año 1904, los inventarios y balances generales correspondientes a los años 1905, 1906, 1907 y 1908 y el inventario final y balance que terminó el 31 de marzo del año 1910; así rinde cuenta el señor Laplacette de la administración que ejerció, de acuerdo con lo pedido en la demanda, lo que prometió al contestar ésta y de acuerdo con la resolución de fojas 14; si esas cuentas están o no en forma, es cuestión que debe tratarse por separado para mayor claridad y por la importancia que tiene; en la presente se trata sólo de resolver si ha rendido o no las cuentas, y, de acuerdo con lo expuesto, voto por la afirmativa.

El doctor Medina, por las mismas consideraciones que las emitidas por el señor doctor Ojea, votó también en el sentido que don Juan Laplacette ha rendido las cuentas de la administración.



A la OCTAVA CUESTIÓN el doctor Ojea dijo: Presentadas las cuentas de que se hace mención en la cuestión séptima, se mandó ponerlas en la oficina por el término de diez días, como consta a fojas 57.

Los actores, en los escritos de fojas 64 y 83, objetaron dichas cuentas por no presentarse con la documentación completa sobre todos los pormenores y por falta de detalles; observación que mantuvieron en sus escritos de fojas 168 y 192; se hizo una cuestión previa, una observación en general a las cuentas antes de entrar en las parciales, algunas de las que se formularon también, como se verá al tratarse las cuestiones correspondientes.

Se trata de un juicio de rendición de cuentas en virtud de un contrato, no de rendición de cuentas de un administrador judicial de bienes de una sucesión; aquel juicio no tiene en nuestro código de procedimiento una tramitación especial, y la contienda, en tal caso, debe ser decidida en juicio ordinario; así lo dispone el artículo 78.

Los señores Ladoux entablaron demanda contra don Juan Laplacette sobre rendición de cuentas; el escrito de demanda es el que se encuentra agregado a fojas 3, siguiendo el procedimiento del juicio ordinario y de acuerdo con lo que dispone el artículo 91, de la demanda se le corrió traslado al demandado, quien la contesta a fojas 12 pidiendo un plazo para presentar las cuentas, que le fué acordado con el asentimiento tácito de los actores a fojas 14 y presentó el escrito de fojas 56 con las cuentas de fojas 22 a 55; este escrito y el de fojas 12 constituyen la contestación de la demanda.

Se observa que esas cuentas se presentan sin detalles, sin la comprobación necesaria, y que, entretanto no se cumpla con esto, no puede decirse que se haya rendido cuentas, como debió haberlo hecho el demandado.

Un juicio de rendición tiene por objeto demostrar una serie de hechos ya de cargo, ya de descargo, para establecer inversión de sumas, saldos, etc., etc.; los documentos o comprobantes justificativos de esos hechos no son los que la ley exige que se acompañen con la



demanda y la contestación; la ley exige en esos instantes del juicio la presentación de las escrituras y documentos que hagan al derecho del actor o demandado (artículos 87 y 110, inciso 4.º del código de procedimiento), pudiendo presentarse, por lo tanto, los demás, durante el período de prueba, la exigencia de la presentación de escrituras y documentos al entablar la demanda o contestar ésta se refiere a aquellos en que fundan su derecho el actor o demandado, los demás documentos pueden presentarse durante el término de prueba, siendo abundantísimas las resoluciones de los tribunales en este sentido, tanto federales como nacionales y provinciales, que subscriben jueces como Tedin, Gorostiaga, Domínguez, Frías, Ibarguren, Posse, Molina Arrotea, Díaz, Jiménez, Gelly y tantos otros.

El comprador de un inmueble que reclama su entrega, debe acompañar con la demanda testimonio de la escritura respectiva o mencionarla si no la tuviese, expresando lo que de ella resulta y designando el archivo, oficina pública o lugar en donde se encuentre el original, sin que le sea permitido presentarla después, porque se trata del documento fundamento de su derecho; pero esa prohibición no es extensiva al recibo de alguna cantidad que entregó a cuenta al de pago de la escritura de impuestos, etc., porque éstos no son los documentos fundamento del derecho, lo mismo el mandante que pide cuentas a su mandatario del desempeño del mandato debe presentar el documento justificativo de éste, porque es el que funda el derecho para pedir la rendición de cuentas; el demandado por rendición de cuentas, que se defiende por haberlas rendido, debe presentar el documento respectivo en que funda su derecho a oponerse a la rendición que se le pide.

En el caso se trata de un juicio de rendición de cuentas que, siendo los dos mayores, bien pudo haber concluido con la presentación de aquéllas; el demandado no sabía si se impugnarian todas o algunas partidas para, en ese caso, presentar los justificativos que tuviere.

De suerte, pues, que la circunstancia de no haber presentado el demandado comprobantes con la rendición de cuentas, no es motivo para que se rechacen en total.

Y tratándose de la prueba de numerosos hechos como lo constituyen tantos y tantos actos de administración ejercidos durante un



período de cinco años, de bienes de tanta importancia como los que fueron objeto de administración, natural es que no se presentase con las cuentas los comprobantes de todas las partidas bastando a los objetos de la aprobación de las cuentas que se presentasen los relativos a partidas que fueran materia de observación, es decir, posterior a éstas y, por lo tanto, en el período correspondiente del juicio, o sea en el de prueba.

Tampoco por esa misma razón era posible que se presentase en secretaría o se agregase a los autos, porque la prueba de tantos hechos consta de libros y documentación en la sede de la administración que se puso a disposición de los interesados; aplicando por analogía la disposición del artículo 60 del código de comercio, la prueba resultante de los libros se debía hacer en donde sin exigirse su traslación al lugar del juicio.

Se hace observación por falta de detalles; cierto es que las cuentas presentadas lo han sido englobando partidas, y que acaso hubiera sido conveniente, para mayor claridad, que se detallasen más; pero considero que esa circunstancia no es motivo para que se rechacen.

El mandatario está obligado a dar cuenta de sus operaciones, establece el artículo 1909 del código civil; pero no de qué manera; la forma de la rendición de cuentas no está tampoco legislada por el código de procedimiento.

Sí hay gran conveniencia para la claridad que se precisen lo más posible, no por el hecho de que se prescinda de aquélla han de rechazarse.

A la claridad se puede llegar por diversos medios, por medio de explicaciones en comparendos verbales, al que se puede convocar a las partes, aplicando por analogía la disposición del artículo 673 del código de procedimiento para administraciones judiciales, ya que no hay trámite especial para las rendiciones de cuentas de otra naturaleza, y ello no está prohibido; además, los mismos jueces tienen facultad de convocar a su presencia a las partes, procurando su avenimiento (artículo 26), y la aclaración de una partida dudosa o de una cuenta presentada sin la explicación necesaria puede poner fin a las diferencias entre ellas.

Por estas consideraciones voto en sentido afirmativo.



El doctor Medina, fundado en las consideraciones expuestas por el señor doctor Ojea, votó igualmente en el sentido de que la rendición de cuentas de la administración fué hecha en forma.

A la NOVENA CUESTIÓN el doctor Ojea dijo: Las bases a que los señores Laplacette se sujetaron para mantener el estado de indivisión resulta del contrato transcripto en el escrito de demanda de fojas 3, y al que me he referido al ocuparme de la quinta cuestión planteada; la base séptima dice textualmente: «Se nombra a don Agustín Ladoux y a don F. Raúl Laplacette para levantar los inventarios anualmente, los que serán sometidos a los demás herederos para su aprobación. Inciso 1.º: si por cualquiera causa alguno de los herederos inventariadores nombrados no pudiese desempeñar su comisión, la heredera doña Margarita S. de Laplacette nombrará su reemplazante. Los gastos que se originen serán pagos por la administración»; resulta de esta convención que forma para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma (artículo 1197 del código civil), que los que debían hacer el inventario anualmente y someterlo a los demás interesados eran don Agustín Ladoux y don F. Raúl Laplacette o los que designase doña Margarita S. de Laplacette en caso de que aquéllos no pudiesen hacerlo; el administrador don Juan Laplacette no fué el encargado de hacer el inventario por el contrato; sólo podía hacerlo por imposibilidad de los nombrados en el caso que lo designase doña Margarita S. de Laplacette, designación no hecha ni alegada; por esto voto por la negativa.

El doctor Medina, haciendo suyos los fundamentos expuestos por el señor vocal preopinante, formuló su voto igualmente por la negativa.

A la DÉCIMA CUESTIÓN el doctor Ojea dijo: Uno de los fundamentos de la impugnación de las cuentas fué la falta de conformidad con los precios atribuidos a los bienes.

El convenio de indivisión no contiene cláusula alguna referente a la tasación de los bienes; establece sólo que deben practicarse inventarios anualmente, y se nombró inventariadores, como se deja establecido en la cuestión novena; pero indudablemente el propósito

de las partes fué que también se hiciesen tasaciones pues no se explica de otra manera cómo debía hacerse para pagar al administrador, por sus servicios como tal, el 5 por ciento de las utilidades líquidas que hubiere de un inventario a otro, según se establece en la cláusula sexta; era indispensable conocer el valor de los bienes de cada inventario para pagar una parte alícuota de la diferencia entre uno y otro; y tanto lo han entendido así las partes, que se formula oposición a las cuentas por disconformidad con los precios atribuidos en los inventarios; obliga el contrato, no sólo a lo que formalmente está establecido en él, sino a las consecuencias que hubiesen sido virtualmente comprendidas en él (artículo 1198 del código civil).

¿Debe establecerse, pues, que fué el propósito de las partes que anualmente se tasasen los bienes, o acaso a esa tasación anual es a lo que llamaron inventarios y quién debía hacer éstos?

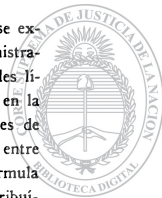
Al tratar la cuestión anterior, queda establecido que esas operaciones debían hacerlas don Agustín Ladoux y don F. Raúl Laplacette o, en caso de impedimento de éstos, por el reemplazante que nombrara doña Margarita S. de Laplacette.

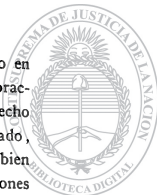
No fué el administrador don Juan Laplacette el nombrado por el convenio para hacer los inventarios que debían comprender la tasación de los bienes y, por lo tanto, no puede formularse cargo contra él porque los precios atribuidos no sean los verdaderos.

Además, se trata de una afirmación hecha por la parte impugnante, que la pone en el caso de probarla, sin que lo haya conseguido.

Por otra parte, de la comparación de valores, según el inventario de fojas 48, y el precio obtenido en la venta realizada de varios semovientes de la sucesión que resulta del certificado que corre a fojas 1598 a 1602, quinto cuerpo de estos autos, resultan diferencias bien sensibles a favor de los últimos; se trata de constancias de un expediente, o sean instrumentos públicos, que hacen plena fe (artículo 979, inciso 4.º, y 993 del código civil); constancias que bien pudieron agregarse en el período de prueba, como se dijo en otra parte al tratar de otra cuestión.

Para mejor proveer, y haciendo uso de la facultad que le acuerda el artículo 19 del código de procedimiento, el tribunal mandó traer





los autos testamentarios de don Enrique Laplacette, encontrando en el segundo cuerpo, de fojas 445 a 452, la tasación de los bienes practicada de común acuerdo por los peritos nombrados, habiendo hecho alguna observación los actores por considerar bajo el precio fijado, de la comparación entre ambas tasaciones resulta una diferencia bien sensible a favor de los precios de la judicial. Por las consideraciones expuestas, voto por la negativa.

El doctor Medina, por las mismas consideraciones que las formuladas por el señor doctor Ojea, dió su voto igualmente en sentido negativo.

A la UNDÉCIMA CUESTIÓN el doctor Ojea dijo: Una de las observaciones generales hechas a las cuentas presentadas por el administrador don Juan Laplacette consiste en que en los inventarios o detalles de bienes presentados no se incluyen todos los dejados por el fallecimiento de don Enrique Laplacette; se trata de la afirmación de hechos, cuya prueba incumbe a quien la hace (artículo 116 del código de procedimiento); prueba que en el caso no se ha producido.

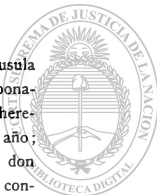
Aunque algunos bienes no se hubiesen incluido en el inventario, no por eso deberían dejar de aprobarse las cuentas, sin perjuicio de reclamar la inclusión y pedir cada interesado la parte que le correspondiese; la exclusión de un bien de un inventario no causa la pérdida del dominio del mismo.

Se hacen referencias a los campos «La Porteña» en Peyrano, provincia de Santa Fe; «Alfaland», provincia de San Luis; al de Conesa, parte en la sociedad Laplacette, Copello y Cia.; pero, como para cada uno de estos puntos se plantea cuestión aparte, al ocuparse el tribunal de ellos se tratará de las observaciones formuladas a las cuentas por ese motivo.

Por el momento, tratándose de una observación en general, basta lo dicho a resolver respecto a la cuestión planteada.

Voto por la negativa.

El doctor Medina, por las mismas consideraciones que las expuestas por el señor doctor Ojea, formuló su voto también en sentido negativo.



A la DUODÉCIMA CUESTIÓN el doctor Ojea dijo: En la cláusula tercera del convenio se establece que el producto, después de abonadas las cuentas y pagadas las deudas, será repartido entre los herederos según la parte que corresponda a cada uno, una vez por año; fueron materia de observaciones las cuentas presentadas por don Juan Laplacette por falta de cumplimiento de esta cláusula del contrato.

Las cuentas presentadas, que corren a fojas 24 y siguientes, contienen el activo y pasivo, detallándose los bienes y determinándose las salidas, incluyendo en éstas las sumas repartidas entre los herederos cada año.

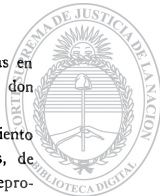
Así, según el balance al 15 de diciembre de 1905, se repartió por utilidades 220.000 pesos, correspondiendo 110.000 pesos a doña Margarita S. de Laplacette y 18.333 pesos con 33 centavos a cada uno de los herederos; según el de 1906, 250.000 pesos, correspondiendo 125.000 pesos a doña Margarita y 20.833 pesos con 33 centavos a cada uno de los herederos; en el de 1907, 220.000 pesos, correspondiendo 110.000 pesos y 18.333 con 33 centavos, respectivamente; en el de 1908, lo mismo que el anterior; el 27 de abril del año 1910 se hizo cargo el nuevo administrador, don F. Raúl Laplacette, con un saldo de 565.791 pesos con 36 centavos, como consta a fojas 55.

Estas sumas totales no fueron materia de observación, quiere decir que fueron aceptadas por los interesados.

Pero éstos observaron que sólo se hicieron entregas a cuenta, sin precisar cuánto y sin decir, por lo tanto, lo que falta; reconocidas las sumas totales y que hubo entregas parciales, era necesario concretar la observación, es decir, la falta de entrega de tales o cuales sumas para que fuesen materia de prueba.

No obstante esto, el demandado ofreció y produjo prueba tendiente a demostrar las entregas: el señor Agustín Ladoux, esposo de doña Lucía L. de Ladoux, reconoció, a fojas 1931 vuelta, las firmas de fojas 5, 6, 7 y 20 del cuaderno de prueba que corresponden a las de los documentos de fojas 560, 561, 562, 563, 576 a 596, 659 y 660, según foliatura definitiva actual con tinta roja; el reconocimiento judicial de las firmas que subscriben esos documentos importa el reconocimiento de su contenido (artículo 1028 del código





civil); esos documentos contienen la prueba de partidas cargadas en la cuenta que don Juan Laplacette llevaba por el nombre de don Agustín Ladoux.

Se ha protestado de nulidad, a fojas 1930, del reconocimiento de varios documentos atribuidos a terceros y cartas misivas, de acuerdo con lo que dispone el artículo 1036 del código civil, reproduciéndose manifestaciones anteriores hechas en el mismo sentido; pero considero que, no obstante la protesta, el tribunal debe tomar en consideración esos documentos y juzgar de su valor; la prohibición del artículo 1036 se refiere a cartas misivas, y bien se ve que no se trata de documentos de esa naturaleza, son órdenes de pago que es cosa bien distinta; como observa Segovia en la nota 24, título V, sección 2, libro 2.º, Explicación y crítica del código civil argentino, comentando el artículo 1036; los escritores franceses sólo rechazan la admisión de cartas misivas que sean de carácter confidencial y admiten la producción de las que no tengan tal carácter, siempre que las personas a que están dirigidas consientan en ello; esas cartas, esos documentos no reúnen carácter confidencial, como resulta de su forma y contenido, y el consentimiento de su presentación resulta del hecho de tenerlos en su poder el señor Laplacette, quien, por otra parte, es miembro de la sociedad Laplacette, Copello y Cía., a quienes están dirigidas, según consta del contrato social corriente a fojas 122: además, no puede decirse que se trata de misivas dirigidas a terceros, porque se refieren a órdenes dadas a los señores Laplacette, Copello y Cía., que se cumplían cargando el importe a la sucesión de don Enrique Laplacette y ésta, a su vez, las cargaba a quien la daba, según resulta de la confrontación de las diferentes cuentas.

La orden de 800 pesos de 5 de mayo de 1908, que resulta del documento de fojas 560, fué cargada por los señores Laplacette, Copello y C.º, a la cuenta de la sucesión de don Enrique Laplacette, según consta de la partida de igual fecha, fojas 2168 vuelta, de la cuenta de la sucesión anexo, letra H, presentada por los contadores, que corre de fojas 2131 a 2186, y esa misma partida la sucesión, a su vez, la carga a la cuenta de don Agustín Ladoux, como consta a fojas 2120 vuelta, cuenta de éste, anexo letra F; lo propio ocurre con

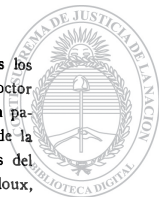


la de pesos 661.24, de fojas 581, a favor de Tasca Hnos.; con la de 900 pesos, de fojas 582, a favor del Banco de la Nación Argentina; con la de 1.170 pesos, a fojas 583, a favor de A. Moro y Cía.; con la de fojas 585, por 418 pesos, a favor de Alberto de Bary y Cía.; con la de 1.021 pesos, a favor de la superiora del colegio de Misericordia, corriente a fojas 588; con la de fojas 589, por valor de 210 pesos, a favor de don Juan Iribarren; con la de 5.000 pesos, de fojas 590, a favor del Banco de la Nación Argentina; con la de fojas 592, por 130 pesos, a favor de don Antonio Zucci; con la de 502 pesos, de fojas 594, a favor de Esperio y Balestrini; con la de fojas 595, por 500 pesos, a favor de don Cándido de Aviño, todas las que son órdenes de pago dadas por don Agustín Ladoux contra los señores Laplacette, Copello y Cía., que al pagarlos fueron cargados a la cuenta de la sucesión de don Enrique Laplacette, y ésta, a su vez, las cargó a quien las dió; la confrontación de los cargos hechos en las cuentas respectivas, según los anexos que los contadores presentan con su informe, y a que hice referencia, lo demuestran.

Los documentos de fojas 576, 577 y 578, figuran entre los reconocidos por don Agustín Ladoux a fojas 1931; se trata de letras firmadas a favor del poder ejecutivo de la provincia como parte del precio de un terreno comprado en el partido de Pehuajó; las partidas contenidas en el papel de fojas 876, que el señor Ladoux se negó a reconocer y debe dársele por reconocido, considerando atendible la razón del juez para insistir en la pregunta a fojas 1932, se refieren precisamente a las resultantes de los mencionados documentos de fojas 576, 577 y 578, como resulta de su comparación; en la cuenta de Laplacette, Copello y Cía., fueron cargados los importes de la segunda y tercera, con cargo a don Agustín Ladoux dos tercios y un tercio a don Enrique Laplacette.

En la carta de fojas 562, que fué reconocida por el señor Ladoux, a fojas 1931, le dice que el 15 de abril vence la letra del gobierno correspondiente al campo por 12.567 pesos, y le pide la levante; es la de fojas 568.

Por la carta de doña Lucía L. de Ladoux, cuya firma es auténtica, según la pericia caligráfica de fojas 2353, tinta roja, dirigida a Juan (es don Juan Laplacette, hermano de dicha señora y adminis-



trador de los bienes), le pide que le remita el dinero de todos los meses, 1.500 pesos, a Mar del Plata, ordenándole pague al doctor Berro 380 pesos y al doctor Copello 250 pesos; estas sumas son pagadas por Laplacette, Copello y Cia., cargándolas a la cuenta de la sucesión, según consta a fojas 2185, en las partidas respectivas del anexo H, y la sucesión las carga a la cuenta de don Agustín Ladoux, esposo de doña Lucía, según resulta de las respectivas partidas de fojas 2122 del anexo F, de los contadores; en la cuenta de los mismos Laplacette, Copello y Cia., están los cargos a la sucesión por entregas o remesas hechas a don Agustín Ladoux o su esposa, que a su vez se cargan a la cuenta de éstos; la carta de la referencia prueba que el importe de los meses anteriores al de la fecha (diciembre de 1909) fué entregado, corroborando lo que resulta de los cargos en las cuentas respectivas de Laplacette, Copello y Cia. con la sucesión y de ésta con Ladoux; en esa carta se dice a don Juan Laplacette que mande a Mar del Plata 1.500 pesos todos los meses, menos el de diciembre, que limita el pedido a 1.000 pesos porque pide se paguen las cuentas que le han pasado los doctores Berro y Copello, como efectivamente se hacen por intermedio de Laplacette, Copello y Cia., haciéndose los cargos respectivos.

Por lo que se refiere a don Rafael Ladoux, esposo de doña Catalina Laplacette, no hizo observaciones fundamentales a las cuentas presentadas que tengan relación con la cuestión de que se trata; no obstante esto, se ha producido prueba por parte del demandado para demostrar que se le han entregado anualmente cantidades a cargo del haber que ha correspondido en las liquidaciones, cargándose a la cuenta respectiva.

En la carta agregada a fojas 1302, que fué reconocida por don Rafael Ladoux, a fojas 1628, se le pide la suma de 2.000 pesos correspondientes a las asignaciones de enero y febrero de 1909; en la cuenta de Laplacette, Copello y Cia. con la sucesión, a fojas 2177 se ve un cargo de un cheque orden R. Ladoux por 2.000 pesos, y a su vez, la sucesión carga a éste igual suma, como consta a fojas 2117; lo propio sucede con el giro de 1.500 pesos dado a favor de M. Menier y Cia., según carta de fecha 7 de marzo de 1909 corriente a fojas 1296, reconocida en la misma acta de fojas 1628.

Demuestra la carta de fojas 1302 que se habían hecho asignaciones mensuales de 1.000 pesos y que todas las anteriores al mes de enero de 1909 fueron pagadas, puesto que en ella sólo se reclama los correspondientes a los meses de enero y febrero de 1909; también lo demuestra la carta de fojas 1293, igualmente reconocida; la de fojas 129 y 132, reconocidas a fojas 205 vuelta, y los cargos en las cuentas correspondientes.

En la carta de fojas 140, reconocida en el mismo escrito, el señor Rafael Ladoux le ordena a don Juan Laplacette que la cuenta que él tiene con el molino se la cubra con la parte que a doña Catalina le pertenece de las ganancias de la sucesión, cargando en esa cuenta el saldo; se refiere a la cuenta que don Rafael Ladoux tenía el 31 de marzo de 1906 con los señores Laplacette, Copello y Cía., sin determinar a cuánto ascendía el saldo, revisando la cuenta de Laplacette, Copello y Cía. con la sucesión de don Enrique Laplacette presentada por los contadores, resulta a fojas 2148 cargada a ésta por transferencia de cuenta de don Rafael Ladoux 9.221 pesos con 51 centavos, suma que, a su vez, se carga en la cuenta de éste con la sucesión, como consta a fojas 2114 vuelta.

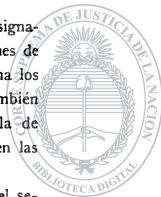
Aunque se trata de constancias de libros no rubricados, ni acaso llevados con todas las formalidades que el código de comercio exige, sus constancias deben ser tenidas muy en cuenta, porque aparecen corroboradas por las de otros que reúnen los requisitos y en gran parte por documentos debidamente reconocidos, lo que constituye una gran presunción a favor de aquéllos, prueba pertinente, de acuerdo con lo que dispone el artículo 1190 del código civil.

Estas consideraciones llevan a mi ánimo el convencimiento para el voto afirmativo de la cuestión planteada, como así voto.

El doctor Medina, por las mismas consideraciones, formuló su voto también en sentido afirmativo.

A la DÉCIMATERCERA CUESTIÓN el doctor Ojea dijo: En la cláusula cuarta del convenio se acordó que cada heredero tendría una cuenta con la administración, la que sería liquidada en cada repartición.

Al estudiar la cuestión anterior a ésta se ha visto que las cuentas





presentadas por el administrador contienen el activo y pasivo, determinándose los saldos y lo que a cada uno de los herederos corresponde; la exactitud de las sumas presentadas en las cuentas aparece corroborada por la prueba pericial, como consta de la contestación al punto séptimo a fojas 2262 vuelta y 2263.

Resulta que se han abierto cuentas a doña Margarita S. de Laplacette, don Juan Laplacette, don Enrique J. Laplacette, don F. Raúl Laplacette, don Rafael Ladoux, don Agustín Ladoux y don Juan Gassiebayle.

Estos tres últimos no son herederos, pero sí esposos de las herederas doña Catalina, doña Lucía y doña María Laplacette, respectivamente.

Se observa que las cuentas abiertas en esa forma son cuentas particulares mantenidas por los señores Ladoux con la sucesión, cuentas diferentes de las que corresponden a sus esposas doña Catalina y doña Lucía, que son las herederas.

En el anexo F, corriente a fojas 2109 y siguientes, los contadores extractan las cuentas mantenidas por las referidas personas con la sucesión.

Resulta, de los extractos presentados por los contadores, que en las cuentas abiertas en esa forma se acreditaron partidas por concepto de utilidades y se cargaron sumas por concepto de dividendos o asignaciones acordadas.

Estaba establecido en el inciso 1.º, cláusula cuarta, del convenio, que se señalaría la cantidad de dinero que cada heredero podría mensualmente percibir hasta la terminación; y que así se hizo resulta de lo expuesto al tratar la cuestión anterior y, principalmente, lo que resulta de las cartas de fojas 129, 132, 559, 1293, 1302 y de tantas otras constancias.

En las cuentas abiertas de la administración a los nombres de don Rafael Ladoux y don Agustín Ladoux, se cargan el importe de las asignaciones mensuales entregadas por ganancias de los bienes, y, de acuerdo con lo convenido, se cargan a esa misma cuenta y por orden expresa, la cuenta con el molino, importe de alhajas compradas, arrendamiento de un campo, pago de cuotas de éste, etc., etc.

Demuestra todo ello la existencia de la cuenta con la sucesión



que cada heredero tuvo, estando la de las señoras Catalina Laplacette de Ladoux y Lucía Laplacette de Ladoux a nombre de sus esposos don Rafael Ladoux y don Agustín Ladoux, como estaba la de doña María Laplacette de Gassiebayle a nombre del suyo, don Juan Pedro Gassiebayle.

No había otras cuentas a nombre de las señoras de Ladoux, cuentas que no tenían objeto desde que, en las abiertas a nombre de sus respectivos esposos, se hacían los cargos y descargos con las liquidaciones anuales correspondientes.

No importa que las cuentas abiertas no estuviesen en libros rubricados y llevados con las prescripciones del código de comercio; no se trataba de una sociedad comercial, sino de un estado de indivisión de carácter civil, convenido durante un tiempo determinado.

En esos libros, así llevados, se abrió la cuenta, anotándose las entregas y las entradas, cumpliéndose la cláusula respectiva del convenio.

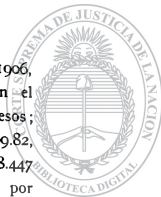
Si en la cuenta se cargaron partidas de negocios de los esposos, aparte de que es sumamente difícil establecer la diferencia, ello no fué objeto de observación y aunque lo hubiese sido, no sería motivo para desconocer haberse cumplido con la cláusula respectiva del convenio.

Por estas consideraciones, y lo que disponen los artículos 1026 y 1190 del código civil y 172 del código de procedimiento y otros, voto en sentido afirmativo.

El doctor Medina votó también por la afirmativa, por las mismas consideraciones que las aducidas por el señor vocal preopinante.

A la DÉCIMACUARTA CUESTIÓN el doctor Ojea dijo: En la cláusula sexta del convenio se nombró administrador a don Juan Laplacette, asignándosele el 5 por ciento de las utilidades líquidas que hubiese entre un inventario y otro, en concepto de la remuneración de los servicios que en ese carácter debía prestar.

En las cuentas presentadas figura rebajado el 5 por ciento que a su favor se acredita el administrador; así, en el balance de 1905, se asigna 21.156 pesos con 43 centavos, o sea el 5 por ciento de las uti-



lidades presentadas por 423.129 pesos con 47 centavos; en el de 1906, 17.631.01 pesos, al 5 por ciento sobre 352.620.22 pesos; en el de 1907, 13.341.25 pesos, o sea el 5 por ciento sobre 266.825.05 pesos; en el de 1908, 10.380.49 pesos, o sea el 5 por ciento sobre 207.609.82, y en el último, 13.422.35 pesos, o sea el 5 por ciento sobre 268.447 pesos; todo lo que consta de los mismos balances presentados por el administrador a fojas 24 y siguientes y del informe pericial informando los contadores a fojas 2263 vuelta y 2264, respecto al punto octavo.

Voto por la afirmativa.

El doctor Medina, por las mismas consideraciones que las expresadas por el señor doctor Ojea, votó también por la afirmativa.

A la DÉCIMAQUINTA CUESTIÓN el doctor Ojea dijo: Al tratar la cuestión novena, votada negativamente, quedó resuelta de una manera indirecta la presente cuestión; allí se ha establecido que no era obligación del administrador hacer el inventario al principio de la administración y repetir esa operación anualmente; los que debían hacer el inventario eran don Agustín Ladoux y don F. Raúl Laplacette o los que designase doña Margarita S. de Laplacette por imposibilidad de alguno de aquéllos, según el contrato que obliga a las partes (artículo 1197 del código civil); si no era obligación de don Juan Laplacette hacer el inventario, por no haberlo hecho no violó la cláusula respectiva del convenio; si las personas designadas para ello no lo hicieron y él estaba obligado por la cláusula respectiva del contrato a repartir utilidades, de alguna manera tendría que hacer para suplir la omisión del cumplimiento de las obligaciones de los herederos designados y cumplir a la vez las suyas; si en alguna responsabilidad se incurrió, serían los herederos designados los que en ella incurrieron; la del administrador sería por haber repartido más o menos, según que el inventario y tasación que sirvió de base para las distribuciones fuese o no ajustado, lo que no se probó, y, por el contrario, la inacción de los herederos encargados de hacerlo importaba un consentimiento.

Voto por la negativa.



El doctor Medina votó también por la negativa, por las mismas consideraciones emitidas por el señor vocal preopinante.

A la DÉCIMASEXTA CUESTIÓN el doctor Ojea dijo: La cláusula undécima del contrato dice, textualmente: «La sucesión tendrá una cuenta corriente con el Banco de la Nación Argentina, donde serán depositados los fondos».

Esta disposición es terminante, y, por otra parte, no fué negada por el administrador; al contrario, lo ha reconocido absolviendo posiciones a fojas 451; se trata de un hecho no negado y que ha sido expresamente reconocido, lo que constituye prueba plena (artículo 161 del código de procedimiento), por lo que voto en sentido afirmativo.

El doctor Medina, por las mismas razones, dió su voto también en sentido afirmativo.

A la DÉCIMA SÉPTIMA CUESTIÓN el doctor Ojea dijo: Contestando la segunda posición del pliego de fojas 450, don Juan Laplacette, a fojas 451, dice que es cierto, que los dineros de la sucesión nunca los depositó en el Banco de la Nación, confesión que hace plena prueba contra el absolvente, de acuerdo con lo que dispone el artículo 161 del código de procedimiento.

Teniendo esto en cuenta, debe establecerse que don Juan Laplacette no cumplió con la obligación contenida en la cláusula undécima del contrato, respecto a tener una cuenta con el Banco de la Nación Argentina, en donde serían depositados los fondos de la sucesión.

Voto por la negativa.

El doctor Medina, por las mismas consideraciones, formuló su voto igualmente en sentido negativo.

A la DÉCIMA OCTAVA CUESTIÓN el doctor Ojea dijo: Confesando el demandado que no dió cumplimiento a lo convenido respecto a tener la sucesión una cuenta con el Banco de la Nación Argentina, donde serían depositados los fondos, se excusó diciendo que no lo hizo porque hubiera sido en perjuicio de los intereses de la sucesión.

Se alegó que el Banco de la Nación no paga intereses por los



depósitos en cuenta corriente y se solicitaron como parte de prueba los informes correspondientes; el impreso de fojas 1346 e informe de fojas 1347, demuestran que ello es cierto.

En cambio, se dijo que los depósitos fueron hechos en otras casas que pagaban intereses por ellos, como resulta de la pericia de los contadores, fojas 2265 vuelta, habiendo ingresado sumas procedentes de pago de intereses de los que la sucesión estaría privada si los depósitos se hubieran hecho en el Banco de la Nación Argentina, como se convino en la cláusula undécima.

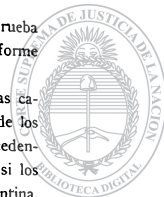
Cierto es que de acuerdo con lo que dispone el artículo 1906 del código civil, no se consideran ultrapasados los límites del mandato, cuando ha sido cumplido de una manera más ventajosa que la señalada por ésta, en cuyo caso parece que el depósito hecho por el señor Laplacette, en lugar distinto del convenio, haciendo producir a los capitales intereses de que se había visto privada la sucesión, cumpliendo el administrador con la cláusula undécima del convenio, habría sido más beneficioso para los intereses de ella.

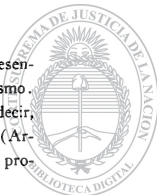
Pero la cláusula undécima contiene una disposición terminante de hacer el depósito de la sucesión en el Banco de la Nación, sin que pueda decirse que el propósito de las partes fué el de que los depósitos devengasen un interés mayor o menor; pueden haber sido razones de seguridad de los depósitos de crédito para las partes u otras que no se han expresado.

El administrador no cumplió con esa cláusula, y si bien es cierto que no se ha probado que la falta de cumplimiento hubiese ocasionado perjuicios a la sucesión, ni constituye razón suficiente para el rechazo de las cuentas, sin perjuicio de que éstas se aprueben, debe dejarse a salvo la acción por indemnización de los daños que hubiere causado ese incumplimiento y que se prueben en otro juicio. Artículo 1109 del código civil. Voto en ese sentido.

El doctor Medina, haciendo suyas las consideraciones expuestas por el señor vocal doctor Ojea, dió su voto en igual sentido.

A la DÉCIMANOVENA CUESTIÓN el doctor Ojea dijo: En el balance presentado a fojas 48, figura la parte que la sucesión tiene en la sociedad Laplacette, Copello y C.<sup>a</sup>, en la suma de 489.326 pesos





con 43 centavos moneda nacional, observándose las cuentas presentadas por el administrador, por no haber conformidad con el mismo.

La observación importa alegar que el saldo es mayor, es decir, la afirmación de un hecho cuya prueba incumbe al que la hace. (Artículo 116 del código de procedimiento), prueba que no se ha producido.

Por lo demás, la partida materia de observación, fué puesta en el balance, según consta del contrato social de Laplacette, Copello y C.<sup>ta</sup>, otorgado en Buenos Aires, el 9 de abril del año 1904, cuya copia se encuentra a fojas 122, sin haberse desconocido; del artículo cuarto de ese contrato, resulta que el capital, que corresponde a don Enrique Laplacette, asciende a 489.326 pesos con 43 centavos, o sea la suma que figura en el balance o inventario presentado por el administrador, señor Laplacette; se trata de constancias de un instrumento público que hace plena fe. (Artículo 993 del código civil.)

Voto por la negativa.

El doctor Medina, por las mismas consideraciones, formuló su voto igualmente por la negativa.

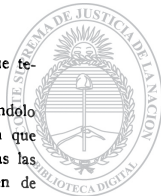
A la VIGÉSIMA CUESTIÓN el doctor Ojea dijo: Esta cuestión, que tuvo gran importancia, actualmente no la tiene, por lo que no hay necesidad de que el tribunal la trate con la extensión que en otras circunstancias hubiera sido preciso.

Fueron materia de observación las cuentas por haberse excluido los campos «La Portaña», en la provincia de Santa Fe y «Alfaland» en la de San Luis.

Como resulta del contrato de constitución de la sociedad Laplacette, Copello y Cía. a que hice referencia, ocupándome de la cuestión anterior, que es un instrumento público y hace plena fe (artículo 993 del código civil), uno de los objetos de esa sociedad es la explotación, entre otros, de esos dos campos que constituyen parte del capital de la misma.

El causante de la sucesión don Enrique Laplacette, era socio de la sociedad Laplacette, Copello y C.<sup>ta</sup>, y tenía en esos campos la parte que como socio le correspondía.

Siendo esto así, al formarse el inventario de sus bienes no de-



bían incluirse esos campos como bienes de él, sino la parte que tenía en la sociedad dueña de los campos, como se hizo.

Muchas observaciones se hicieron al contrato, considerándolo malo para don Enrique Laplacette, hecho en circunstancias en que éste no se encontraba en su completo juicio, etc., etc., pero todas las cuestiones que se promovieron con motivo del mismo, carecen de objeto, desde que la sociedad Laplacette, Copello y C.<sup>a</sup> fué liquidada posteriormente y entregándose a las partes que observaron las cuentas, lo que les ha correspondido en la liquidación de la misma, como así resulta de los testimonios de fojas 4016 y 4028, no existiendo sobre esas cuestiones caso que exija y justifique un pronunciamiento.

Por lo expuesto, voto en sentido negativo.

El doctor Medina, por las mismas consideraciones, dió su voto también en sentido negativo.

A la VIGESIMAPRIMERA CUESTIÓN el doctor Ojea dijo: Aceptada la renuncia del cargo de administrador que presentó don Juan Laplacette, fué nombrado en su reemplazo don Félix Aristóbulo Raúl Laplacette, como consta del acta de fojas 16 y auto de fojas 18.

Se convino que se pusiese al nuevo administrador en posesión de todos los bienes, bajo inventario que se practicaría, de todos los bienes a cuyo efecto se haría saber con anticipación a los representantes por el doctor Ladoux, que eran don Rafael y don Agustín Ladoux.

El inventario practicado es el que resulta a fojas 48 y siguientes que aparece subscripto por don Juan Laplacette y don F. Raúl Laplacette, es decir, el administrador saliente y el administrador entrante.

Se observa ese inventario, porque las tasaciones no fueron hechas con autorización ni acuerdo entre los inventariadores, es decir, la observación se refiere a los valores atribuidos a los bienes.

Es aplicable a esta cuestión lo que se ha dicho al tratar de la décima y que reproduzco con sus fundamentos, para evitar repeticiones.

Pudiera ser materia de observación de las cuentas, si se probase que en virtud de las tasaciones elevadas se habían repartido utili-



dades que no correspondían; pero no resulta así, puesto que las tasaciones son inferiores a los precios de venta obtenidos por parte de esos bienes, como resulta de la pericia de los contadores, contestando el punto décimoséptimo a fojas 2269 vuelta, y el anexo F, fojas 2228, resulta una diferencia bien sensible a favor de los precios obtenidos posteriormente.

En último caso, la observación afectaría tan sólo las cuentas del inventario de 1910. Voto por la negativa.

El doctor Medina, por las mismas consideraciones, votó también por la negativa.

A la VIGÉSIMASEGUNDA CUESTIÓN el doctor Ojea dijo: El campo de que se trata, es una fracción de 500 hectáreas, que adquirió don Agustín Ladoux, por compra al gobierno de la provincia, para don Enrique Laplacette, junto con otro lote para él, en cuyo pago subscribió aquél los documentos de fojas 576, 577, 578; el administrador señor Laplacette siguió un juicio contra el señor Ladoux, sobre reconocimiento de condominio, que terminó declarando la existencia de éste y ordenando la escrituración de quinientas hectáreas, sentencia que se cumplió otorgándose la escritura respectiva con fecha 29 de diciembre del año 1913, en la ciudad de Buenos Aires, ante el escribano don Carlos D. Giménez, cuyo testimonio se encuentra agregado a fojas 4010; si el bien pertenecía a la sucesión y se encontraba ocupado por el señor Ladoux, el administrador procedió bien, cargando al ocupante el importe de los arrendamientos, no constituyendo un cargo el haberlo hecho; si el campo era de la sucesión, tenía derecho para percibir sus frutos. (Artículo 2513 del código civil.) Por lo expuesto, voto por la negativa.

El doctor Medina votó en igual sentido que el señor vocal preopinante, fundado en las mismas consideraciones.

A la VIGÉSIMATERCERA CUESTIÓN el doctor Ojea dijo: La venta de un lote de campo de esta sucesión hecha en San Antonio de Areco y otra en Conesa que hizo don Juan Laplacette, se trata de hechos no negados por éste y que, por el contrario, los ha reconocido.

La venta del primero hecha a don Antonio Salvatore, resul-



ta del testimonio de escritura otorgada en San Antonio de Areco, el 29 de mayo de 1909, ante el escribano don José A. Esquiaga, que en testimonio se encuentra agregado a fojas 1054.

La del segundo hecha a don Santiago Repetto, resulta del boleto de fojas 1588 y testimonio de la inscripción respectiva hecha en la oficina de registro de la propiedad de Dolores, de fecha 1.º de agosto de 1908, que corre a fojas 1593 vuelta, y 1594.

Resultan así reconocidos los hechos y constan de documentos públicos que hacen plena fe. Artículo 999 del código civil.

Voto por la afirmativa.

El doctor Medina votó en igual sentido, fundado en las mismas consideraciones que las emitidas por el señor vocal preopinante.

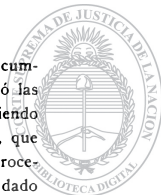
A la VIGESIMACUARTA CUESTIÓN el doctor Ojea dijo: En el convenio de fecha 1.º de septiembre de 1904, sobre mantenimiento de indivisión, se acordó otorgar al administrador un poder general con amplias facultades para comprar y vender, etc., entendiéndose que no podría vender ningún bien raíz a excepción de las propiedades compradas por Antonio Soba.

No obstante la prohibición de vender, el administrador señor Laplacette, vendió los lotes de campo a que se hace referencia en la cuestión anterior, que no se dijo fuesen de los excluidos por aquélla, es decir, de los comprados por don Antonio Soba para don Enrique Laplacette.

Y, al proceder así, invocó la representación de los herederos de don Enrique Laplacette, que resulta del poder otorgado con fecha 1.º de septiembre de 1904, ante el escribano don José A. Esquiaga y que en testimonio se encuentra agregado a fojas 9 y 10 de estos autos.

El poder contiene la facultad expresa de vender sin limitación.

Pero ese poder fué otorgado dándose cumplimiento a lo convenido en el contrato de mantenimiento de estado de indivisión, en el que se acordó que el administrador no podría vender ningún bien raíz; no se trata de que el poder haya ampliado el contrato



sino de un poder como consecuencia de éste que se otorgó cumpliéndose lo convenido; si ese poder exteriormente no limitó las facultades para vender bienes raíces y si las ventas que haciendo uso de él se hicieron, no pueden perjudicar a los terceros, que obraron de buena fe, no por eso el poderdante podía haber procedido fuera de las instrucciones con que obraba; se le había dado poder en virtud de un contrato y a las estipulaciones de éste debía ajustar sus actos, prescindiendo de las apariencias porque las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma. Artículo 1197 del código civil.

Externamente, para con terceros que obrasen de buena fe, el señor Laplacette tenía poder para vender bienes raíces, pero para las relaciones con sus coherederos no tenía facultad para ello, porque el poder se le había dado en virtud de un contrato que excluía expresamente esa facultad.

El poder tiene la misma fecha del contrato, y sería raro que habiéndose convenido expresamente que no pudiesen venderse bienes raíces, en seguida se resolviese lo contrario, dejándose sin efecto una resolución que alguna razón seria se debió tener para adoptar; lo más lógico, es suponer que se puso la facultad en el poder para no tener que consignar la especial de vender los bienes comprados a Soba, cuya venta estaba acordada, y desde que el mandatario ajustaría sus actos a lo convenido en el contrato. Voto por la negativa.

El doctor Medina votó también por la negativa, fundado en las mismas razones.

A la VIGÉSIMAQUINTA CUESTIÓN el doctor Ojea dijo: El administrador señor Laplacette, trató de probar que las ventas fueron beneficiosas porque los campos no se aprovechaban o porque se vendieron en un precio bueno, que la venta de la parte indivisa del campo de Conesa fué autorizada por el juez de la testamentaria del condómino señor Oyhamburu, que la sucesión no se perjudicó, etc., lo que efectivamente, probó con la tasación fijada a fojas 23 vuelta, con el certificado de fojas 895, con el testimonio



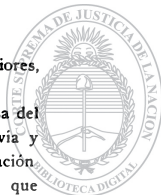
de fojas 777 y siguientes, con el plano de fojas 1010, con las boletas de valuación de fojas 1043 y 1044, con el informe de fojas 1045 vuelta; pero no por eso debe dejar de responder de los actos ejecutados sin autorización, por los perjuicios que hubiese podido haber causado de acuerdo con lo que dispone el artículo 1009 del código civil; pudieran tener los herederos algún interés especial en conservar esos bienes, su valor pudiera ser mayor que el precio obtenido, no obstante la prueba que produjo, etc., etc., todo lo pudo ocasionar perjuicios a consecuencia de la realización del acto, que no le estaba permitido realizar; debiendo dejarse a salvo la indemnización y perjuicios que las ventas pudieran haber ocasionado, perjuicios que reclamarán y probarán los interesados, si lo estiman conveniente, en juicio por separado. Voto en ese sentido.

El doctor Medina, por las mismas razones, formuló su voto en igual sentido que el señor vocal preopinante.

A la VIGÉSIMASEXTA CUESTIÓN el doctor Ojea dijo: No se ha negado el hecho de que don Juan Laplacette, usando del poder a que se hace referencia en las cuestiones anteriores, otorgó escritura de traspaso a favor de la compañía ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, de una extensión de tierra de propiedad de la sucesión de don Enrique Laplacette, y así resulta de la escritura otorgada en La Plata, el 6 de noviembre de 1908, ante el escribano don David Roca, la que se anotó en la oficina de registro de la propiedad, del departamento del Norte, bajo el número 7420, folio 1373, año 1908, según asiento transcripto en el informe de fojas 1671. Voto por la afirmativa.

El doctor Medina, por las mismas consideraciones, votó igualmente en sentido afirmativo.

A la VIGÉSIMASÉPTIMA CUESTIÓN el doctor Ojea dijo: El administrador trató de probar que la venta fué beneficiosa para los intereses de la sucesión por el precio obtenido, comparándolo con el de la boleta de valuación de fs. 1659, y si bien no obstante



esto, la resolución debía ser como la de las cuestiones anteriores, en el caso hay razones especiales para que sea diferente.

Se trata de una venta forzosa, de una venta a la empresa del ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico, de terrenos para vía y estación, venta forzosa, pues por medio de la ley de expropiación la sucesión se hubiera visto obligada a realizarla en caso que resistiere, con la consecuencia que esa oposición trajese.

No es lógico suponer que estuvo en la intención de los firmantes del convenio de septiembre 1.º de 1904, prohibir realizar ventas de esa naturaleza, porque no dependía de su voluntad realizarla o no; enajenaciones de esa naturaleza entraban en los actos ordinarios de administración, para lo que el administrador estaba obligado a hacer bajo pena de responder de los daños y perjuicios por la inejecución del mandato, de acuerdo con lo que dispone el artículo 1904 del código civil; si el poder aparentemente tenía facultades para vender, bien pudo hacer uso de esas facultades en el caso de la venta forzosa de que se trata, pues nada se hubiera hecho con resistir, los herederos no habrían podido conservar el terreno que por la ley de expropiación se le hubiese sacado. Voto por la afirmativa.

El doctor Medina, por las mismas consideraciones, votó también en sentido afirmativo.

A la VIGÉSIMAOCTAVA CUESTIÓN el doctor Ojea dijo: Si no hubo extralimitación en el mandato por parte del administrador señor Laplacette, al otorgar a favor de la empresa de Buenos Aires al Pacífico, como se ha establecido en la cuestión anterior y no se ha probado que el precio aceptado no fuese el verdadero, lo que ni siquiera se alegó, es natural que no incurrió en responsabilidad alguna. Artículo 1906 del código civil.

Voto así por la negativa, en la cuestión de que me ocupo.

El doctor Medina, votó igualmente en sentido negativo, por las mismas consideraciones que las expuestas por el señor vocal doctor Ojea.





A la VIGÉSIMANOVENA CUESTIÓN el doctor Ojea dijo: Se hizo observación a las cuentas por lo que se expresa en la cuestión de que se trata; y efectivamente, en los precios parciales del inventario de fojas 30, se asignan 70 pesos a cada uno de dos reproductores Durham, pero se trata de un error evidente, pues al sacar la suma en la columna respectiva, se pone 1.400 pesos, es decir, 700 pesos a cada reproductor; ese error se corrige en los inventarios posteriores, en los que figuran los dos reproductores en 700 pesos cada uno.

Tratándose de un error evidente, de la supresión de un cero en la cantidad parcial, voto por la negativa.

El doctor Medina, por las mismas razones, votó también por la negativa.

A la TRIGÉSIMA CUESTIÓN el doctor Ojea dijo: Teniendo en cuenta el reconocimiento y confesión hecha por don Agustín Ladoux, contestando a fojas 1933 vuelta, las posiciones 12 y 13 del pliego corriente a fojas 1927 (artículo 161 del código de procedimiento), creo que el cargo no se hizo indebidamente, y voto entonces la cuestión de que se trata en sentido negativo.

El doctor Medina, por las mismas razones que las expresadas por el señor vocal preopinante, votó también por la negativa.

A la TRIGÉSIMAPRIMERA CUESTIÓN el doctor Ojea dijo: Se trata de un documento justificativo de una obligación del causante, que estaba en tramitación; el juicio fué arreglado, conviniéndose en pagar la suma pagada, según resulta de los testimonios expedidos por el secretario don Santiago Díaz Navarro, corrientes a fojas 840, a fojas 842 y de fojas 844 a 848, que constituyen instrumentos públicos que hacen plena fe. Artículo 979, inciso 4.º, y 993 del código civil. Voto por la afirmativa.

El doctor Medina, votó también por la afirmativa, fundado en las mismas consideraciones.

A la TRIGÉSIMASEGUNDA CUESTIÓN el doctor Ojea dijo: Teniendo en cuenta la forma en que se han resuelto diferentes otras



cuestiones, la que se trata ahora puede decirse que es meramente doctrinaria y no tiene mayor importancia para la decisión del pleito; por otra parte, no se trata de una cuestión planteada por las partes en la demanda y contestación, por más que lo haya sido en el curso del debate, con el fin de establecer la situación jurídica de los litigantes, la validez de la prueba producida, etc.

Ocurrido el fallecimiento de don Enrique Laplacette, sus herederos se reunieron y resolvieron mantener el estado de comunidad a que da nacimiento el hecho.

Celebraron el contrato de fecha 1.º de septiembre de 1904, transcripto en el escrito de fojas 3, cuya cláusula primera dice textualmente: "Se resolvió por unanimidad, no proceder a la partición de bienes dejados por don Enrique Laplacette, hasta nueva resolución", esta cláusula es la fundamental, la que determina la naturaleza del acto, las demás, son simplemente reglamentarias puede decirse.

Pues bien, esa cláusula establece el mantenimiento del estado de indivisión de bienes, que nació con el fallecimiento de don Enrique Laplacette, no da origen a una entidad diferente de la que el referido hecho creó; los herederos o condóminos resolvieron no partir los bienes por un tiempo determinado; es el contrato de mantenimiento de estado de indivisión, que autoriza el artículo 2693 del código civil.

El fallecimiento de don Enrique Laplacette creó el estado de indivisión, una comunidad, lo que no implica sociedad, por más puntos de analogía que contengan; para que aquel estado desapareciese, dando origen a otro, era necesario la voluntad expresa de los contratantes; sin embargo, en el caso, esa voluntad no se ha manifestado, por el contrario, acordaron por unanimidad no proceder a la partición de los bienes hasta nueva resolución.

La misma frase "por unanimidad" que contiene la cláusula primera, demuestra lo que sostengo, que el propósito fué continuar el estado de indivisión, no formar una sociedad; si se hubiere creado ésta, no tendrían razón de ser aquellas palabras, porque la sociedad se forma por el consentimiento de los contra-



tantes (artículo 1648 del código civil), no por mayoría que obliguen.

Cierto es que hubo convenio de reparto, nombramiento de administrador, de cajero, etc., cosas propias de una sociedad, pero que en un estado de indivisión no se excluyen.

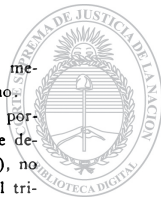
El acto celebrado fué un contrato de mantenimiento de estado de indivisión, durante un tiempo determinado, sin que sea necesario pronunciamiento respecto a su validez y a sus consecuencias. Voto en ese sentido.

El doctor Medina, por las mismas razones, votó en igual sentido.

A la TRIGÉSIMATERCERA CUESTIÓN el doctor Ojea dijo: El tribunal, al plantear las cuestiones que fueron materia de debate, debe hacerlo respecto a todas aquéllas que considere pertinentes para la resolución definitiva.

En ese sentido pudo plantearse la presente cuestión, respecto a las tachas de los testigos, pero no fundándose las cuestiones resueltas en la prueba testimonial, dada la forma en que el tribunal encaró las cuestiones principales, materia del pleito, prescindiendo de dicha prueba, no tiene razón un pronunciamiento especial respecto a las tachas; no hay razón que exija y justifique un fallo, porque los jueces deben limitar su pronunciamiento al caso especial, y si no hay caso a resolver la resolución que dictase sería injustificada, puede decirse que sería una resolución meramente doctrinaria, lo que le está prohibido por la regla III, título preliminar del código de comercio, e indirectamente se desprende de la doctrina que informa la resolución de la suprema corte de justicia, de 4 de agosto de 1900, mandando archivar un expediente por haber desaparecido las razones que habían dado lugar al juicio y no haber por lo tanto caso que resolver.

¿Qué objeto tendría considerar las tachas deducidas contra los testigos, si el pronunciamiento no se funda en las declaraciones prestadas por los mismos?



Sería un pronunciamiento teórico, un pronunciamiento meramente doctrinario, prohibido a los jueces como dejo dicho.

Si tuvo su razón de ser el planteamiento de la cuestión, por que esto es previo, dado el formulismo constitucional a que deben sujetarse los acuerdos, (artículo 172 de la constitución), no teniendo razón de ser el pronunciamiento sobre el punto, el tribunal no debe resolverla. Voto, pues, en ese sentido.

El doctor Medina, por las mismas razones, votó en igual sentido.

A la TRIGÉSIMACUARTA CUESTIÓN el doctor Ojea dijo: El artículo 71 del código de procedimiento, establece que el vencido en el juicio será condenado por el juez al pago de las costas, pero si se reclamase por vía de apelación, la cámara podrá exonerarlo; el artículo 311, que siendo la sentencia confirmatoria en todas sus partes de la de primera instancia, las costas del recurso serán a cargo del apelante.

Tales son las disposiciones procesales que rigen lo relativo a las costas del juicio en general y los relativos a los recursos.

Dado el resultado de las votaciones en diferentes cuestiones propuestas, no puede decirse que haya sólo vencidos y sólo vencedores, pues se ha visto que unas cuestiones se han votado con resultado favorable para el demandado, otras lo fueron con resultado contrario; vencedores y vencidos son ambas partes a la vez y entonces debe adoptarse una resolución que armonizando las disposiciones legales consulte la equidad.

Los actores tuvieron perfecto derecho para entablar el juicio, derecho que le fué reconocido por el demandado, que sin mayor observación, asintió a rendir las cuentas y las rindió en la forma que entendió procedía y cumplía con su deber.

El demandado a su vez, no procedió puede decirse, en gestión propia, sino como consecuencia del mandato que recibiera de sus coherederos, es decir, por representación ajena.

La obligación de rendir cuentas es una carga de la administración; el mandatario, como tal, está obligado a dar cuenta de sus operaciones, de acuerdo con lo que dispone el artículo 1909



del código civil; la rendición de cuentas como ejercicio del mandato es una terminación de actos de éste.

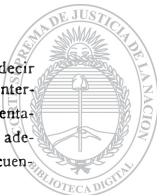
Si la rendición de cuentas es una carga de la administración, si el mandatario al rendirlas no puede en rigor decirse que obre en nombre propio, sino por el mandato que recibió, representando a terceros, a quienes presta el servicio, es lógico que los gastos que se ocasionan sean a cargo de éste, por aquella regla conocida que nadie debe enriquecerse en perjuicio ajeno; regla 18, título 24, part. 6.º

El código de comercio, expresamente, establece en el artículo 71 que las costas de la rendición de cuentas en forma, son siempre a cargo de los bienes administrados.

Desde que las cuentas se aprueban, no debe cargar el administrador con las costas; tampoco los demandantes, porque han reclamado algo que tenían derecho a reclamar y que ha sido reconocido, pero alguien debe pagarlas, y como el servicio que se prestó, fué a los bienes administrados, a la comunidad, sobre ésta debe recaer el pago de las costas.

Así lo ha pedido expresamente el señor Laplacette, al contestar la demanda, según resulta de la última petición del escrito de fojas 12, al decir que los gastos y costas que demande la rendición de cuentas, deben ser por cuenta de la sucesión, es decir, por cuenta de la comunidad.

Pudiera decirse, que esta solución importaría condenar a pagar gastos a herederos que no reclamaron rendición de cuentas y que el juicio lo siguieron dos herederos con el administrador; el argumento es aparente; desde el primer momento el administrador demandado, dijo que las costas y gastos debían ser a cargo de la sucesión, formuló una petición en ese sentido; todos los herederos de don Enrique Laplacette, fueron citados a juicio, comparecieron, contestaron, intervinieron en diferentes incidentes, presentaron escritos, hicieron uso de derechos que creían entender, etc., etc., en una palabra, han sido parte en el juicio como herederos del causante, como dueños de los bienes de cuya administración se trata, que hayan manifestado desde el primer momento con formidad con las cuentas rendidas, que su intervención en el juicio



no haya sido tan activa como la de los actores, no quiere decir que no hayan sido parte, que no hayan intervenido porque la intervención no depende del mayor o menor número de escritos presentados; fueron citados a juicio y concurrieron sin observación; además, para la liquidación definitiva se requería la rendición de cuentas de la administración.

Pero, como no obstante aprobarse las cuentas, se desestiman algunos actos de administración, dejándose a salvo acciones contra el administrador y como también se rechazan muchas observaciones hechas, no es justo que los gastos y costas en esta parte, sean a cargo de la comunidad, porque no ha sido beneficiada en esa parte; el demandado debe cargar con las costas y gastos de esa parte, en cuanto fué vencido, como los actores deben cargar con la que, de igual modo les corresponde en cuanto también lo fueron.

Si bien es cierto que se ha establecido que el administrador presentó las cuentas, no debe desconocerse que fueron necesarias muchas explicaciones y aclaraciones para su comprensión: si en vez de presentarse englobadas tantas partidas, hubiese habido mayores detalles, acaso se habría llegado con más facilidad a la solución; esto es una circunstancia que debe tenerse en cuenta al establecer el cuántum de las costas y gastos que a cada parte corresponde.

Lo que considero procedente, es que se declare que una parte alícuota del importe total de los honorarios y gastos, sean pagados por los actores, otra parte igual por el administrador y el resto por la comunidad; esa parte alícuota debe ser a mi juicio de un vigésimo para los primeros, otro vigésimo para el segundo, correspondiendo el resto a la comunidad. Voto en ese sentido.

El doctor Medina, haciendo suyas las consideraciones formuladas por el señor vocal preopinante, dió su voto en el mismo sentido.

A la TRIGÉSIMAQUINTA CUESTIÓN el doctor Ojea dijo: Trátase de uno de los asuntos más complicados e importantes que se ventilan en los tribunales, su tramitación ha durado varios años y en ella,



como consecuencia del procedimiento y dada la diversidad de puntos que abarca, así como la variada prueba ofrecida y producida, se produjeron numerosos incidentes; vencidos y vencedores, justo es reconocerlo, que han trabajado con empeño loable en pro de la causa que representaban.

Teniendo en cuenta esto, aunque aparentemente aparecen grandes las sumas reguladas en la sentencia, como condenación en costas, creo que el juez se colocó en un justo medio al hacer las regulaciones y que deben confirmarse, en consecuencia. Voto en ese sentido.

El doctor Medina, por las mismas razones, dió su voto en igual sentido.

A la TRIGÉSIMASEXTA CUESTIÓN el doctor Ojea dijo: Teniendo presente el resultado de la votación de las diferentes cuestiones planteadas, la resolución que corresponde es no hacer lugar al recurso de nulidad de la sentencia y modificar ésta, declarando procedente la acción de rendición de cuentas promovida por don Agustín Ladoux y don Rafael Ladoux, por sus respectivas esposas contra don Juan Laplacette, de la administración de los bienes dejados por el fallecimiento de don Enrique Laplacette, y rendidas dichas cuentas en forma, las que se aprueban con las salvedades contenidas al resolver las cuestiones 17 y 24; las costas y gastos a cargo de la comunidad, con excepción de un vigésimo del importe total que será a cargo del demandado y de otro vigésimo por partes iguales a cargo de los actores, confirmandose las regulaciones practicadas.

Las costas y gastos de esta instancia, en las mismas proporciones. Así voto.

El doctor Medina, por las mismas consideraciones, votó también igual pronunciamiento.

Con lo que terminó el acto que firman todos:

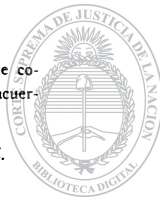
MEDINA.—OJEA.

Ante mí:

*José F. Campi.*

Es conforme con el acuerdo original de su referencia, que corre al folio seiscientos setenta y siete, del libro auxiliar IX de acuerdos y sentencias criminales y correccionales.

*José F. Campi.*



SENTENCIA

Y VISTOS.—CONSIDERANDO:

Que está probado:

- 1.°—Que no es nula la sentencia apelada.
- 2.°—Que la *litis contestatio* quedó trabada con el escrito de fojas 3, la contestación de fojas 12, con su ampliación de fojas 56 y los escritos de fojas 64 y 83.
- 3.°—Que la *litis contestatio* no fué modificada con los escritos de fojas 144 y 156.
- 4.°—Que no es nulo lo obrado de fojas 213 vuelta en adelante.
- 5.°—Que don Juan Laplacette fué nombrado administrador, y administró los bienes dejados por fallecimiento de don Enrique Laplacette.
- 6.°—Que habiendo administrado los bienes de la sucesión de don Enrique Laplacette, y de acuerdo con la disposición del artículo 1909 del código civil, don Juan Laplacette estaba obligado a rendir cuenta de sus gestiones.
- 7.°—Que don Juan Laplacette ha rendido las cuentas de la administración.
- 8.°—Que dicha rendición de cuentas fué hecha en forma.
- 9.°—Que de acuerdo con la cláusula séptima e inciso 1.° de la misma del convenio de 1.° de septiembre de 1904, a la que las partes deben sujetarse como a la ley misma (artículo 1197 del código civil), no era deber del administrador don Juan Laplacette levantar los inventarios.
- 10.°—Que no se ha probado que las tasaciones de los bienes de los inventarios presentados no fueron arregladas.





11.—Que en los inventarios no se han excluido bienes de la sucesión de don Enrique Laplacette.

12.—Que el administrador ha cumplido con la cláusula del convenio que le imponía ejecutar un reparto anual entre los herederos.

13.—Que el administrador ha cumplido con la cláusula del convenio que le imponía llevar una cuenta corriente a cada heredero, que era liquidada en cada repartición.

14.—Que el administrador ha retenido el 5 por ciento de las utilidades líquidas.

15.—Que don Juan Laplacette no ha violado la cláusula tercera del convenio, respecto a la formación de inventarios.

16.—Que se había convenido en que la sucesión tuviese una cuenta corriente con el Banco de la Nación Argentina.

17.—Que don Juan Laplacette no ha cumplido con esa cláusula.

18.—Que no se ha probado que la falta de cumplimiento a esa obligación haya ocasionado perjuicios a la sucesión, y no constituye tampoco razón suficiente para rechazar las cuentas, pero debe dejarse a salvo la acción por indemnización de los daños que pudiera haber causado y que probaran en juicio.

19.—Que el saldo de la cuenta de la sociedad Laplacette, Coppello y Cía. era verdadero.

20.—Que no debían incluirse en el inventario los campos denominados «La Portaña» en Peyrano, provincia de Santa Fe, ni «Alfaland», en la de San Luis.

21.—Que la falta de conformidad con las tasaciones contenidas en el inventario de 31 de marzo de 1910 no es motivo para que no se aprueben las cuentas.

22.—Que la circunstancia de haberse comprendido entre los bienes de la sucesión un campo en el partido de Pehuajó y haberse cargado arrendamiento por el mismo a don Agustín Ladoux no es motivo para que no se aprueben las cuentas.

23.—Que el administrador vendió un lote de campo en San Antonio de Areco y otro en Conesa, pertenecientes a la sucesión.

24.—Que al efectuar esa venta, el administrador ha procedido sin la autorización correspondiente.

25.—Que, no obstante haber probado el administrador, con la



documentación correspondiente, que la venta de los campos mencionados en la cuestión 23 fué beneficiosa para la sucesión, y como procedió sin la autorización correspondiente, deben dejarse a salvo las acciones que convengan a los que se crean perjudicados por esos hechos del señor Juan Laplacette.

26.—Que el señor Juan Laplacette ha vendido una fracción de campo en Junín perteneciente a la sucesión.

27.—Que si bien no tenía autorización suficiente para vender esa fracción de campo, pudo hacerlo en virtud de tratarse de una venta forzosa.

28.—Que, por lo tanto, no ha podido incurrir en responsabilidad alguna.

29.—Que los toros a que se refiere esta cuestión se vendieron a 700 pesos cada uno.

30.—Que no se ha cargado indebidamente en la cuenta de don Agustín Ladoux el importe de unas alhajas.

31.—Que se ha justificado la presentación del pagaré de fojas 664.

32.—Que la naturaleza del convenio de fecha 1.º de septiembre de 1904, transcripto en el escrito de fojas 3, fué un contrato de mantenimiento de estado de indivisión durante un tiempo determinado.

33.—Que las tachas deducidas contra los testigos no han sido consideradas por el tribunal, desde que el pronunciamiento no se funda en tales pruebas.

34.—Que los honorarios y gastos deben pagarse por partes alícuotas entre el actor y el demandado y el resto la comunidad.

35.—Que las regulaciones apeladas son justas y arregladas.

Por ello, y consideraciones aducidas en el acuerdo que precede, se rechaza el recurso de nulidad deducido contra la sentencia de fojas 3042 y se modifica ésta declarando procedente la acción de rendición de cuentas promovida por don Agustín Ladoux y don Rafael Ladoux por sus respectivas esposas contra don Juan Laplacette, de la administración de los bienes dejados por fallecimiento de don Enrique Laplacette; y habiéndose rendido dichas cuentas en forma, se aprueban, con las salvedades consignadas en las cuestiones 17 y 24.



declarándose que las costas y gastos son a cargo de la comunidad, con excepción de un vigésimo del importe total, que será a cargo de los actores, y de otro vigésimo que será a cargo del demandado.

En consecuencia, se confirman las regulaciones practicadas en primera instancia; y en cuanto a los honorarios de los doctores Canale, Ladoux, Pérez y señores Dubarry y Raúl Laplacette, se fijan en 18.000 pesos los del primero, 55.000 pesos los del segundo, 50.000 pesos los del tercero, 23.000 pesos los del cuarto y 8.000 pesos los del quinto.

Por lo que se refiere a los honorarios de esta instancia, se regulan los del doctor Tomás Jofré en 6.000 pesos, los del doctor Ladoux en 3.500 pesos, los del doctor Pérez en 3.000, los del doctor Carlos Jofré en 600 pesos, los del señor Villalba en 1.500 pesos y los del señor Dubarry en 600 pesos, y en 500 pesos los del señor Raúl Laplacette. Hágase saber y devuélvase.

ELVIO MEDINA.—LEOPOLDO OJEA.

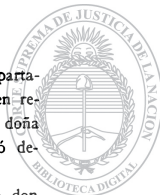
Ante mí:

*J. F. Campi.*

## V

### SENTENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

En la ciudad de La Plata, reunida la suprema corte de justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa letra B, número 11.607, caratulada: LAPLACETTE DE LADOUX (DOÑA CATALINA) Y LAPLACETTE DE LADOUX (DOÑA LUCÍA) CONTRA LAPLACETTE (DON JUAN), SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS<sup>3</sup>; se procedió a practicar la insaculación prescripta por el artículo 173 de la constitución, resultando del sorteo que en la votación debían los señores jueces observar el siguiente orden: doctores Lecot, Rivarola, Gnecco, Llambi y Escobar.

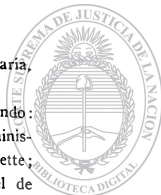


Ante el juzgado número 1 en lo civil y comercial del departamento del Centro, se presentó el doctor Carlos A. Ladoux, en representación de don Rafael y don Agustín Ladoux, esposos de doña Catalina y doña Lucía Laplacette, respectivamente, y entabló demanda contra don Juan Laplacette, por rendición de cuentas.

Fundando la demanda, el doctor Ladoux, expuso: Que a don Juan Laplacette se le confirió poder para administrar los bienes fincados por fallecimiento de don Enrique Laplacette, padre de las esposas de los nombrados don Rafael y don Agustín Ladoux, como constaba de la escritura otorgada por ante el escribano don Rómulo G. Jordán, el 1.º de septiembre de 1904, y que de acuerdo con las disposiciones legales que rigen el mandato, venía a pedir la correspondiente rendición de cuentas por no haberlas presentado el mandatario.

Conferido traslado de la demanda, contestó a fojas 12, don Juan Laplacette, exponiendo: Que en efecto, con poderes bastantes administró los bienes a que se refería la demanda, todo en virtud del contrato que se invocaba y poder posterior, negando fuera cierto que durante su administración se limitara a pasar algunas cuentas, pues que anualmente había hecho inventarios y balances, remitiendo copias de los mismos a los interesados y que además, cada tres meses les presentaba el estado de sus cuentas corrientes, entregándoles el saldo que a cada uno correspondía por sus utilidades durante el año, cuyas cuentas fueron siempre aceptadas, y que no tenía inconveniente alguno en presentar las cuentas de toda la administración, para lo cual solicitaba un plazo de cuarenta días.

Habiéndosele acordado dicho plazo de cuarenta días, se presentó oportunamente el demandado acompañando el resumen del inventario de los bienes que dejó al morir el causante de la sucesión el 31 de octubre de 1904, y además los balances de los años 1905, 1906, 1907 y 1908, y un inventario y balance general que terminó el 31 de marzo de 1910, fecha en que se hizo cargo el nuevo administrador.



El juzgado mandó poner las cuentas presentadas, a secretaría, por el término de diez días.

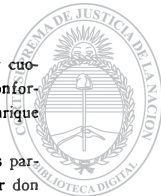
El señor Agustín Ladoux, observó dichas cuentas, afirmando: Que se requería pruebas en legal forma de los actos de la administración; que el contrato de 1904 se había infringido por Laplacette; que el inventario de 1905 se firmó por complacencia; que el de 1910 era irregular porque fué hecho por el que había dejado de ser administrador; que las cuentas no estaban justificadas; que el administrador no había repartido las utilidades anualmente; que había retenido sumas de dinero; que los inventarios no fueron hechos por los peritos nombrados; que el administrador no hizo los depósitos en el Banco de la Nación; que había diferencia de precios entre los parciales y los totales, diferencias en los valores de las haciendas, omisiones respecto a los campos de «La Porteña» y «Alfaland», incorrecciones en la sociedad Laplacette y C., y omisión de algunas alhajas.

Por su parte, don Rafael Ladoux, observó que el inventario de 1904, ni lo firmó, ni autorizó a su esposa para que lo firmara; que no estaba de acuerdo con él; que no aparecía claro el capítulo referente a la sociedad Laplacette, Copello y C., que se habían excluido los campos de «La Porteña» y «Alfaland»; que faltaba el detalle del movimiento de la cuenta corriente del Banco de la Nación; que las tasaciones del inventario de 1910, no eran válidas por haber sido hechas sin autorización.

El juzgado, para mejor proveer, corrió traslado, al demandado quien lo evacuó rectificando las afirmaciones hechas respecto a las cuentas por don Agustín Ladoux y las especificadas por don Rafael Ladoux.

A fojas 188 de los autos, don Agustín Ladoux observó que el demandado, modificaba la *litis contestatio*; que no podía agregar documentos después de la contestación de la demanda; que los libros no podían oponérsele como prueba; que la carta suscripta por don Agustín, era sobre negocios particulares; que el administrador no rindió cuentas de la sociedad; que el contrato de la sociedad Laplacette, Copello y C. era nulo.

A fojas 192, don Rafael Ladoux, solicitó se condenara al demandado a rendir cuenta documentada, impugnó las presentadas y



manifestó que no firmó los inventarios; que el hecho de recibir cuotas no importaba su conformidad con los inventarios; que su conformidad se refería a su cuenta particular con el fallecido don Enrique Laplacette, seguidas después con la sucesión.

Recibida la causa a prueba y agregada la producida por las partes, alegó sobre la prueba producida don Carlos A. Ladoux, por don Rafael Ladoux, y otro tanto hizo don Rodolfo A. Dubarry, en representación de doña Lucía Laplacette de Ladoux.

Tanto en el uno como en el otro alegato, se mantuvo la afirmación de que era nulo el procedimiento por razón de los traslados conferidos para mejor proveer, que los libros presentados no hacían prueba, porque no estaban llevados en forma, que la firma de la esposa, puesta sin el consentimiento del marido, era nula, habiéndose sostenido con anterioridad que la prueba producida fuera de término debía desestimarse, insistiendo en que se condenase al demandado porque la prueba que había rendido no era la que correspondía por derecho, ni justificaba la legalidad de su administración.

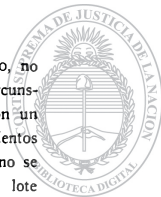
Alegó también la parte del administrador, sosteniendo que había administrado con arreglo a un contrato de sociedad con poderes amplios, que los libros presentados eran documentos de la sociedad y no particulares de él, que los reconocimientos explícitos y tácitos hechos por sus coasociados, la prueba pericial rendida, las declaraciones de los testigos que habían depuesto en la causa y todos los demás antecedentes acumulados, justificaban sus cuentas, demostraban la rectitud de sus proceder, y, por consiguiente, correspondía que el juzgado, rechazando con costas la demanda, aprobase en consecuencia las cuentas presentadas.

El juzgado falló absolviendo de la demanda a don Juan Laplacette, y aprobando las cuentas presentadas por éste; y condenó en las costas a los demandantes.

Apelada esta sentencia por la parte actora, la cámara 2.<sup>a</sup> del departamento del Centro, falló, estableciendo en su sentencia las siguientes conclusiones: que estaba probado: 1.<sup>o</sup> Que no era nula la sentencia apelada.—2.<sup>o</sup> Que la *litis contestatio* quedó trabada con el escrito de fojas 3, la contestación de fojas 12, con su ampliación de fojas 56 y los escritos de fojas 64 y 83.—3.<sup>o</sup> Que la *litis contestatio*



no fué modificada con los escritos de fojas 144 y 156.—4.° Que no era nulo lo obrado de fojas 213 vuelta en adelante.—5.° Que don Juan Laplacette fué nombrado administrador y administró los bienes dejados por fallecimiento de don Enrique Laplacette.—6.° Que habiendo administrado los bienes de la sucesión de don Enrique Laplacette y de acuerdo con la disposición del artículo 1909 del código civil, don Juan Laplacette estaba obligado a rendir cuenta de sus gestiones.—7.° Que don Juan Laplacette, había rendido las cuentas de la administración.—8.° Que dicha rendición de cuentas fué hecha en forma.—9.° Que de acuerdo con la cláusula séptima e inciso 1.° de la misma, del convenio de 1.° de septiembre de 1904, a la que las partes debían sujetarse como a la ley misma (artículo 1197 del código civil), no era deber del administrador don Juan Laplacette levantar los inventarios.—10. Que no se había probado que las tasaciones de los bienes en los inventarios presentados no fueran arreglados.—11. Que en los inventarios no se habían excluido bienes de la sucesión de don Enrique Laplacette.—12. Que el administrador había cumplido con la cláusula del convenio que le imponía ejecutar un reparto anual entre los herederos.—13. Que también había cumplido el administrador con la cláusula del convenio que le imponía llevar una cuenta corriente a cada heredero que era liquidada en cada repartición.—14. Que el administrador había retenido el cinco por ciento de las utilidades líquidas.—15. Que don Juan Laplacette no había violado la cláusula III del convenio respecto a la formación de inventarios.—16. Que se había convenido en que la sucesión tuviese una cuenta corriente con el Banco de la Nación Argentina.—17. Que don Juan Laplacette no había cumplido con esa cláusula.—18. Que no se había probado que la falta de cumplimiento de esa obligación hubiese ocasionado perjuicios a la sucesión y no constituía tampoco razón suficiente para rechazar las cuentas, pero debía dejarse a salvo la acción por indemnización de los daños que pudiera haber causado y que probaran en juicio.—19. Que el saldo de la cuenta de la sociedad Laplacette, Copello y C.ª era verdadero.—20. Que no debían incluirse en el inventario los campos denominados «La Porteña», en Peyrano, provincia de Santa Fe, ni «Alfaland», en la de San Luis.—21. Que la falta de conformidad con las



tasaciones contenidas en el inventario de 31 de marzo de 1910, no era motivo para que no se aprobasen las cuentas.—22. Que la circunstancia de haberse comprendido entre los bienes de la sucesión un campo en el partido de Pehuajó, y haberse cargado arrendamientos por el mismo a don Agustín Ladoux, no era motivo para que no se aprobasen las cuentas.—23. Que el administrador vendió un lote de campo en San Antonio de Areco y otro en Conesa, pertenecientes a la sucesión.—24. Que al efectuar esa venta, el administrador había procedido sin la autorización correspondiente.—25. Que no obstante haber probado el administrador con la documentación correspondiente, que la venta de los campos mencionados en la cuestión 23 fué beneficiosa para la sucesión; como procedió sin la autorización correspondiente, debían dejarse a salvo las acciones que conviniesen a los que se creyeran perjudicados por esos hechos del señor Juan Laplacette.—26. Que el señor Juan Laplacette había vendido una fracción de campo en Junín perteneciente a la sucesión.—27. Que si bien no tenía autorización suficiente para vender esa fracción de campo, pudo hacerlo en virtud de tratarse de una venta forzosa.—28. Que, por lo tanto, no había podido incurrir en responsabilidad alguna.—29. Que los toros a que se refería la cuestión 29, se vendieron a 700 pesos cada uno.—30. Que no se había cargado indebidamente en la cuenta de don Agustín Ladoux el importe de unas alhajas.—31. Que se había justificado la presentación del pagaré de fojas 664.—32. Que la naturaleza del convenio de fecha 1.º de septiembre de 1904, transcrito en el escrito de fojas 3, fué un contrato de mantenimiento de estado de indivisión durante un tiempo determinado.—33. Que las tachas deducidas contra los testigos no habían sido consideradas por el tribunal, desde que el pronunciamiento no se fundaba en tales pruebas.—34. Que los honorarios y gastos debían pagarse por partes alicuotas entre el actor y el demandado y el resto la comunidad.—35. Que las regulaciones apeladas eran justas y arregladas.

Por ello, y consideraciones aducidas en el acuerdo, la cámara rechazó el recurso de nulidad deducido contra la sentencia de primera instancia y modificó ésta declarando procedente la acción de rendición de cuentas promovida por don Agustín Ladoux y don Rafael





Ladoux por sus respectivas esposas contra don Juan Laplacette, de la administración de los bienes dejados por fallecimiento de don Enrique Laplacette; y, estimando la cámara que se habían rendido dichas cuentas en forma, las aprobó con las salvedades consignadas en las cuestiones 17 y 24, declarando, además, que las costas y gastos eran a cargo de la comunidad, con excepción de un vigésimo del importe total, que sería a cargo de los actores, y de otro vigésimo, que sería a cargo del demandado.

Contra esta sentencia interpuso el representante de la parte demandada el recurso de inaplicabilidad de ley, el que fundó extensamente, sosteniendo, en resumen:—1.° Que el recurso era procedente bajo sus formas externas, capítulo I.—2.° Que su instituyente don Juan Laplacette había cumplido el mandato en lo que se refería al depósito de fondos y que la cámara había aplicado erróneamente el artículo 1906 del código civil, capítulos II, VI y VIII; que, además, se había violado la ley y la doctrina, que establecen que la ratificación equivale al mandato, haciendo una errónea aplicación del artículo 1936 del código civil.—3.° Que, en cuanto a los campos de San Antonio de Areco y Conesa, su mandante había obrado dentro de los límites de la procuración al enajenarlos, por lo que la cámara aplicaba erróneamente los artículos 1197 y 1200 del código civil y la doctrina que dejaba citada.—4.° Que, al imponer las costas al vencedor, se había infringido el artículo 71 del código de procedimiento, aplicándose erróneamente el artículo 71 del código de comercio y la ley 18, título 24, partida 6.°, por cuanto ningún beneficio le reportaba a su mandante el juicio, por lo que, al aplicar las costas a su instituyente, como heredero, se había infringido el artículo 259 del código de procedimiento.

Alegó que había demostrado también que la suprema corte tenía jurisdicción para pronunciarse sobre la imposición de costas, por haberse violado las leyes de la prueba y haberse aplicado erróneamente la doctrina; que había probado, además, que se habían impuesto costas al vendedor, capítulo IV; que el contrato de 1.° de septiembre de 1904 constituyó una sociedad y, al no resolverlo así la cámara, había aplicado erróneamente el artículo 1648 del código civil y doctrina citada.



Sostuvo, además, que se habían violado igualmente los artículos 439 y 1324 del código civil, en cuanto se declaraba que don Juan Laplacette no pudo enajenar el campo de Conesa, pues de dichas disposiciones se desprendía que su mandante no podía oponerse a la enajenación forzosa, desde que se trataba de dividir el condominio de una cosa que no admitía partición en especie.

Agregó, por último, que la cámara había violado el artículo 71 del código de procedimiento civil, al no imponer las costas a los señores Agustín y Rafael Ladoux, como representantes de sus respectivas esposas, pues ellos eran los vencidos y ellas debían pagar las costas, de acuerdo con el artículo citado y las conclusiones de hechos de la sentencia de la cámara.

Dicha sentencia fué también recurrida por don F. A. Raúl Laplacette: por sí y por doña Margarita Safontas de Laplacette, por don Enrique J. Laplacette y por doña María Laplacette de Gassiebayle, en cuanto la sentencia decidía que las costas y gastos eran *a cargo de la comunidad*; comunidad que, en concepto del recurrente, no existía, porque los herederos de don Enrique Laplacette se habían dividido los bienes hacía tiempo.

Después de estudiar la sentencia de la cámara, terminó manifestando: Que el recurso de inaplicabilidad deducido tenía por objeto que la suprema corte declarase mal aplicadas las leyes y doctrinas citadas en el cuerpo del escrito, y estableciera:—1.° Que no habían sido parte en el juicio, ni sus mandantes ni el recurrente.—2.° Que, no habiendo sido parte, no habían podido ser cargados con el peso de las costas en ninguna proporción.—3.° Que se había violado la «cosa juzgada» en un doble concepto: a) porque el auto de fojas 118 terminó la causa; b) porque la sentencia de la cámara de fojas 3986 declaró que no eran parte en este juicio.—4.° Que la cámara había procedido sin jurisdicción y había violado la *litis contestatio*.—5.° Que se les había condenado sin oírlos.—6.° Que no se les dejaba a salvo los derechos sobre los campos de Conesa y San Antonio de Areco, justamente porque nada habían pedido, porque no habían sido parte y porque nada se había reclamado de ellos por ninguno de los litigantes.

Recurrió igualmente de la sentencia de la cámara el doctor Car-

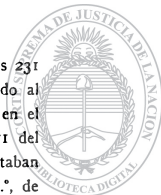


los A. Ladoux, por sus mandantes, alegando: que en la cuestión octava habían sido violados los artículos 81, inciso 5.º, del código de procedimiento civil, y 1909 y 1911 del código civil; que en la cuestión 34 y fallo, se violaba el artículo 259 del código de procedimiento civil, en cuanto condenaba a su parte a pagar la décima parte de las costas,—interpretando, además, erróneamente la doctrina en cuanto absolvía de las costas totales al administrador.

En consecuencia, sostuvo que las cuentas no debieron aprobarse por no estar en forma, ordenando que el administrador las presentara nuevamente, salvo que la voluminosa prueba se considerara como la cuenta misma, y, en este caso, se les acordara un plazo prudencial para su examen y el de los comprobantes. Que la condena en décima de las costas a su parte era ilegal, por no haber sido solicitadas oportunamente; y que las costas, suponiendo su aprobación de las cuentas, debían ser a cargo exclusivo del mandatario.

También interpuso recurso de inaplicabilidad de ley don Rodolfo A. Dubarry, en representación de doña Lucía Laplacette de Ladoux.

Fundando el recurso deducido, sostuvo, en resumen: Que la cámara había aplicado erróneamente la ley y la doctrina en los siguientes puntos:—1.º Al decidir, en el voto de las cuestiones segunda y tercera y considerando números 2 y 3 de la sentencia, que «la *litis* no quedó trabada con los escritos de demanda y contestación». — 2.º Aun resolviendo como lo hacía la cámara en la cuestión cuarta y considerando número 4, que el escrito de fojas 144 no podía «alterar» la *litis contestatio*, dado que (son sus palabras): «SI SE ALEGAN HECHOS QUE NO LO FUERON EN LOS ESCRITOS RESPECTIVOS, EL JUEZ NO LOS CONSIDERARÁ EN LA SENTENCIA», el hecho es que la había «alterado», desde el momento que el tribunal apreciaba la prueba de hechos y documentos «articulados» en el recordado escrito de fojas 144, contra la terminante prohibición del artículo 120 del código de procedimiento.—3.º En la cuestión cuarta y considerando número 4 violaba el artículo 133 del código de procedimiento, puesto que planteada la incidencia que provocó la presentación de las cuentas por el demandado, a fojas 24 y siguientes, el punto a decidir reducíase a esto: SI ESTÁN O NO «EN FORMA», punto de derecho que no era susceptible de prueba, con arreglo al artículo 117, infringido también. Concluida



así la causa, correspondía llamar autos para sentencia (artículos 231 y 245) y resolver aquélla: aprobando las cuentas o condenando al demandado a rendirlas «en forma».—4.º El tribunal infringía en el considerando octavo y voto a la cuestión octava, el artículo 71 del código de comercio y su doctrina, al decidir que las cuentas estaban «en forma». Violaba asimismo los artículos 87 y 110, inciso 4.º, de la ley procesal, puesto que no se trataba de «demanda», sino de una incidencia aparte, a la cual era aplicable por analogía, el artículo 673 de dicha ley. Y, de acuerdo con el procedimiento trazado en ese artículo, no cabía la recepción de la causa a prueba, sino la AUDIENCIA VERBAL y la decisión inmediata en IGUAL FORMA. La cámara aceptaba, sin embargo, el trámite y el texto legal, pero lo infringía al admitir un período probatorio que no autorizaba el artículo—5.º Violaba, en el considerando número 12 y voto a la cuestión del mismo número, la teoría del *onus probandi* y la del artículo 120 del código de procedimiento, al «considerar» prueba sobre hechos «NO ARTICULADOS EN DEMANDA Y CONTESTACIÓN». Violaba también el artículo 238 del mismo código, y la teoría de la prueba de libros privados, rechazada por Baudry-Lacantinerie en el tomo 24, número 662, y por Trop'long, en el número 629 del tomo 29.—6.º Aplicaba erróneamente en los siguientes considerandos y su correspondiente voto, hasta el 28 inclusive, los artículos 1904, 1905, 1946, 1161 y 1162 del código civil y su doctrina, al admitir la nulidad de los actos ejercidos sin mandato y «aprobar», no obstante, las cuentas respectivas, como si fueran de válida y regular administración.—7.º En el considerando número 34, correspondiente al voto de la cuestión 34, violaba el tribunal la doctrina de las costas en materia de rendición de cuentas, en los dos aspectos que este asunto podía presentar. Ellos eran: a). Concluido «el pleito» con la resolución que ordenó al demandado rendir cuentas de su administración, y habiéndose adoptado el trámite del artículo 673 del código de procedimiento, correspondía fallar *incontinente* el asunto, sea: aprobando o rechazando las cuentas, según estuvieran o no «en forma». Si, lo primero, declarando las costas «A CARGO DE LOS BIENES ADMINISTRADOS». Si lo segundo, condenando al demandado a efectuar esa rendición «en forma», con COSTAS A SU CARGO; b). Si se entendía que era admisible la recepción de la causa



a prueba y era dado a los jueces «considerarla», como el tribunal declaró ejecutados sin mandato los más importantes actos de administración del demandado al DESAPROBAR las cuentas relativas a ellos, debía declararse que no estaban «en forma» y que eran las costas a su cargo, por aplicación estricta de las normas procesales ordinarias (artículo 71 de la ley de la materia).

En conocimiento de la interposición de este recurso, don Rodolfo A. Dubarry, por la representación que ejercía, se presentó sosteniendo en síntesis:

1.º—Don F. Raúl Laplacette no era PARTE, ni como actor, ni como demandado;

2.º—Los recursos sólo se conceden a quien reviste alguna de esas calidades;

3.º—Que el rechazo de su personería no le privaba del derecho de excepcionarse cuando pretendieran partes hacer efectivas sobre sus bienes;

4.º—Que la obligación de soportar los gastos de la rendición de cuentas, era inherente a la calidad de administrado o propietario de bienes en administración, con arreglo a la doctrina y jurisprudencia sobre la materia; por todo lo cual pidió a la cámara revocatoria de la concesión del recurso y la consiguiente devolución del escrito, con costas.

La cámara no hizo lugar al pedido por estimar «que correspondía a la suprema corte pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del recurso deducido».

Apelada esta denegatoria, la cámara concedió el recurso para ante esta corte, la que, en resolución dictada con fecha 26 de abril del corriente año, declaró que no procedía el recurso de apelación contra las resoluciones de las cámaras sino en los casos previstos por los artículos 354 y 390 del código de procedimiento, declarando, en consecuencia, improcedente el recurso concedido.

Llamados autos para resolver sobre los recursos de inaplicabilidad de ley, concedidos, y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, la suprema corte resolvió plantear y votar las siguientes

CUESTIONES:

- 1.ª—¿Está justificado el recurso de inaplicabilidad de ley, deducido a fojas 4205?
- 2.ª—¿Lo está el deducido a fojas 4197?
- 3.ª—¿Está justificado el interpuesto por el demandado a fojas 4134 y ampliado a fojas 4175?
- 4.ª—¿Debe declararse justificado el presentado a fojas 4176?
- 5.ª—¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la PRIMERA CUESTIÓN el señor juez, doctor Lecot, dijo: Está fuera de discusión en este voluminoso expediente que los herederos de don Enrique Laplacette, todos mayores de edad; doña Margarita Safontas de Laplacette, doña María L. de Gassiebayle, doña Catalina L. de Ladoux, doña Lucía L. de Ladoux, don José Enrique Alberto Laplacette, don Félix Aristóbulo Raúl Laplacette y don Juan Laplacette, celebraron un convenio en 1.º de septiembre de 1904, por el que resolvieron: no proceder a la partición de bienes, nombrar administrador de los mismos a don Juan Laplacette con cargo de rendir cuenta anualmente, otorgar poder general amplio al citado administrador con las facultades que se enumeran en el convenio y fijar en cinco años el término del contrato.

Está igualmente fuera de discusión que, como consecuencia de ese convenio, se otorgó el poder general que acredita la escritura pública de fojas 9 (véase, además, fojas 3), y que el administrador nombrado desempeñó su cargo hasta el 19 de marzo de 1910, en que, de conformidad de partes y por renuncia de don Juan Laplacette, se nombró administrador a otro coheredero, don Félix Aristóbulo Raúl Laplacette (véase fojas 18).

Esa renuncia es presentada a fojas 12, al contestar don Juan Laplacette la demanda entablada a fojas 3 por los coherederos doña Catalina y doña Lucía Laplacette de Ladoux, por la que piden que el administrador rinda cuentas del mandato, expresando, además, que, si bien don Juan Laplacette ha pasado algunas cuentas parciales, éstas ni detallan ni expresan con la suficiente claridad las operaciones





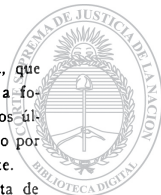
efectuadas. Invocan las actoras los preceptos de los artículos 1909 y concordantes del código civil.

Al contestar don Juan Laplacette, reconoce la existencia del contrato que se invoca, como asimismo del poder que le fué conferido para la administración, pero observa que anualmente ha levantado un inventario y balance, cuya copia ha entregado a cada heredero; que también en cada trimestre pasó a cada heredero el estado de su cuenta corriente, entregando el saldo que le correspondía por utilidades, y finalmente, que nunca se le ha requerido mayores explicaciones. Que considera que sólo le falta entregar el inventario y balance del último año, pero que dada la demanda instaurada y a fin de evitar un incidente, reproducirá los balances e inventarios agregándole los finales, para lo cual pide se le señale al efecto un plazo de cuarenta días.

Señalado ese plazo por el auto de fojas 13 vuelta, y presentados por don Juan Laplacette, a fojas 56, los balances que corren de fojas 22 a 55, así se hizo saber a las partes por el auto de fojas 57, confiriéndose vista a las partes por diez días.

En este estado las actoras presentan el escrito de fojas 64, por el que desconocen a los documentos presentados el carácter de una rendición de cuentas, pues, para que fuese tal, se agrega, han debido presentarse todos los comprobantes justificativos de los actos realizados por el administrador. Se pide se exija previamente la presentación de esos comprobantes, y sin perjuicio, se formulan en el mismo escrito observaciones respecto de la forma cómo han debido cumplirse varias cláusulas del contrato. Ampliadas esas observaciones a fojas 79 y 83, y conferido traslado de ellas a don Juan Laplacette a fojas 85, éste, a fojas 144, evacuó dicho traslado.

Conferido un nuevo traslado a las partes con el carácter de para mejor proveer (fojas 153), fueron presentados los escritos de fojas 156—por don Juan Laplacette—y de fojas 168 y 192,—por las actoras,—recayendo en seguida la providencia de fojas 213 vuelta, por la cual el juzgado recibe la causa a prueba por cuarenta días, fundando su decisión en los preceptos de los artículos 114 y 131 del código de procedimiento. Por el auto de fojas 228 vuelta, se manda agregar la prueba producida y luego se sigue la tramitación del juicio ordina-



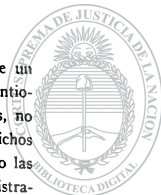
rio dictándose a fojas 4075 la sentencia de segunda instancia, que motiva los cuatro recursos de inaplicabilidad de ley, deducidos a fojas 4134 (ampliado a fojas 4175). 4176, 4197 y 4205, estos dos últimos por las actoras, el primero por el demandado y el segundo por los demás coherederos en la sucesión de don Enrique Laplacette.

He creído oportuno consignar la precedente relación sucinta de la forma cómo principió la tramitación en este juicio, porque esa tramitación y la discusión que respecto a su mérito legal han mantenido los litigantes, ha motivado las cuestiones segunda, tercera, cuarta y octava del acuerdo de fojas 4075 de la cámara, respecto de los que se alega en el recurso que nos ocupa de fojas 4205, errónea aplicación de los artículos 112, 113, 114, 120, 239 y 245 del código de procedimiento, 71 del código de comercio y 462 del código civil, en la solución dada por la cámara a dichas cuestiones. En ellas establece la cámara: a) Que la *litis contestatio* quedó trabada con el escrito de fojas 3. la contestación de fojas 12 con su ampliación de fojas 56, y los escritos de fojas 64 y 83 que pueden considerarse como las contestaciones de los traslados que ordena el artículo 112 del código de procedimiento; b) Que los escritos de fojas 144 y 156, no importaron alterar la *litis contestatio*; c) Que no es nulo el procedimiento observado de fojas 213 en adelante; y d) Que la rendición de cuentas fué hecha en forma.

Considero que las extensas consideraciones legales aducidas por la cámara, y a las que me refiero para evitar repeticiones, demuestran concluyentemente que en presencia de lo dispuesto en el artículo 78 del código de procedimiento, según el que toda contienda judicial que no tenga señalada una tramitación especial, será decidida en juicio ordinario, la solución dada por el tribunal a dichas cuestiones, no sólo no justifican la errónea aplicación de los preceptos legales que se invocan en el recurso, sino que acreditan la correcta aplicación de la ley.

No se trata en el caso de un administrador nombrado judicialmente y sujeto por lo tanto, respecto a la forma de rendir sus cuentas a los trámites señalados en los artículos 671 a 684 del código de procedimiento, ni de la negociación mercantil a que se refiere el artículo 71 del código de comercio, ni tampoco de la rendición de cuentas de una tutela a que alude el artículo 462 del código civil. El caso





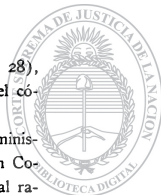
traído a este juicio, es el de un mandatario, quien, en virtud de un contrato y de un mandato general amplio, ha administrado cuantiosos caudales durante seis años y de cuyos actos se pide cuentas, no sólo en relación a la forma cómo haya percibido e invertido dichos caudales, sino también respecto de la manera cómo haya cumplido las cláusulas del contrato, en virtud del cual fué nombrado administrador y de las facultades que se le concedieron por el mandato general y amplio a que antes me he referido. Basta leer los escritos a que la cámara da el carácter de demanda y contestación, examinar las actuaciones que he relacionado al principiar este voto y anotar las observaciones que, respectivamente, se formulan las partes, para considerar que se han sometido al juicio puntos de hecho y de derecho, cuya solución no podía efectuarse sino mediante el trámite amplio del juicio ordinario adoptado francamente desde la foja 213, con el consentimiento de las partes que produjeron, respectivamente, las pruebas que consideraron pertinentes a sus respectivos derechos.

Ese juicio era la consecuencia ineludible de las alegaciones formuladas por las partes y de lo preceptuado en los artículos 1909, 1910 y 1911 del código civil.

Decide la cámara, al votar la cuestión décimasegunda, que el administrador ha dado cumplimiento a la cláusula del contrato, relativa al reparto anual, fundándose para ello en los numerosos elementos de prueba que analiza y en los preceptos de los artículos 1028, 1036 y 1190 del código civil.

Para el recurrente, esta decisión viola las reglas de la prueba fijada en los artículos 116, 120 y 238 del código de procedimiento, pero esta alegación carece, a mi juicio, de eficacia, si se tiene presente que la cámara ha analizado el valor de la prueba instrumental presentada por la parte demandada, con arreglo a los preceptos del código civil y en relación al punto discutido, es decir, a la entrega, de parte del administrador, del reparto anual de utilidades. Si, según los actores, ese reparto no se efectuó en la suma total que correspondía, era a ellos a quien incumbía esa prueba. (Artículo 116, citado).

Crítica el recurrente en seguida el criterio jurídico con que la cámara ha resuelto las cuestiones números 15, 16, 17, 18, 23, 24 y 25, así como los fijados en los números 26, 27 y 28, sosteniendo respecto



de los números 23, 24 y 25 (por error dice números 26, 27 y 28), que se han violado los preceptos de los artículos 1161 y 1931 del código civil.

Por dichas cuestiones establece la cámara: *a*). Que el administrador ha vendido un lote de campo en San Antonio y otro en Conesa; *b*). Que no tenía autorización para ello; y *c*). Que por tal razón ha incurrido en responsabilidad.

Estas decisiones, lejos de violar los preceptos legales citados, se ajustan a mi juicio a la doctrina que consagran, pues que no establecen una nulidad absoluta de los actos realizados por el mandatarario; ni la cámara los ha declarado nulos en este caso. Simplemente fijan una nulidad relativa sujeta a la ratificación del mandante.

Los preceptos de los artículos 1904, 1905 y 1906, también invocados, tampoco contrarían la conclusión legal a que arriba la cámara, decisión que acepto, sin perjuicio de las conclusiones legales a que pueda arribar, al ocuparme en la tercera cuestión de este mismo punto, pero bajo el distinto aspecto legal en que es atacada por el demandado la resolución de la cámara que nos ocupa.

Finalmente, ataca el recurrente la decisión de la cámara, acerca de la cuestión trigésimacuarta, por la que se establece que las costas de este juicio sean abonadas en el siguiente orden: una vigésima parte por los actores, otra vigésima parte por el demandado, y el resto por la comunidad.

Como se ve, esta decisión comprende a todos los herederos de la sucesión Laplacette, y por esta razón todos han recurrido de ella en los cuatro recursos traídos para ante esta corte.

Esta circunstancia, el carácter accesorio que forzosamente tiene el pronunciamiento acerca de las costas del juicio, que sólo puede recaer después de la decisión definitiva acerca de lo principal del pleito, obliga, a mi juicio, a este tribunal a reservar su opinión respecto de este motivo del presente recurso hasta que se encuentre dictado el pronunciamiento sobre lo principal, según los distintos motivos en que se apoyan los demás recursos traídos.

Con esta salvedad, voto en sentido negativo.

Los señores jueces doctores Rivarola, Gnecco, Llambí y Escobar, por los mismos fundamentos expuestos por el señor juez doctor



Lecot en su precedente voto, dieron los suyos también por la negativa en la primera cuestión.

A la SEGUNDA CUESTIÓN el señor juez, doctor Lecot, dijo: Como he expresado, al votar la cuestión anterior, este recurso es interpuesto por la otra parte actora. En él se ataca igualmente la decisión de la cámara acerca de la cuestión octava, por la que se establece que la rendición de cuentas fué hecha en forma, sosteniéndose que en ese pronunciamiento se viola la ley o doctrina de los artículos 81, inciso 5.º, del código de procedimiento, y 1909 y 1911 del código civil.

Aparte de que esa cuestión comprende, a mi juicio, sólo una cuestión de hecho, respecto de la que no ha alegado violación de las leyes de la prueba, estimo que las consideraciones que he expuesto acerca de este punto, al votar la cuestión anterior, los antecedentes del juicio de que he hecho mérito para demostrar las circunstancias particulares del mismo y los puntos que motivaron la divergencia de los litigantes, no permite encuadrar el caso dentro de los estrechos límites a que alude el inciso 5.º del artículo 81 del código de procedimiento al autorizar las diligencias previas para preparar el juicio ordinario, ni al procedimiento fijado en el código de procedimiento para la rendición de cuentas del administrador judicial de la herencia.

Se trata en el caso de un debate amplio acerca del cumplimiento de las cláusulas de un contrato y de las estipulaciones fijadas en un mandato basado en los preceptos de los artículos 1909 y 1911 del código civil, y acerca del cual estos preceptos no fijan una tramitación especial que autorice a declarar en el caso la violación de los mismos.

Por estas razones, y con la misma salvedad que he consignado en mi voto anterior, respecto al motivo del recurso fundado en la decisión de la cámara, acerca de las costas del juicio, voto también en sentido negativo.

Los señores jueces doctores Rivarola, Gnecco, Llambí y Escobar, reproduciendo los fundamentos expuestos por el señor juez doctor Lecot en su precedente voto, dieron los suyos por la negativa en la segunda cuestión planteada.



A la TERCERA CUESTIÓN el señor juez, doctor Lecot, dijo: El presente recurso es interpuesto por la parte demandada por rendición de cuentas.

Se sostiene, en primer término, que la cámara aplica erróneamente el artículo 1906 del código civil, al establecer: *a*). Que estaba convenido que la sucesión tendría una cuenta corriente en el Banco de la Nación Argentina, en donde serían depositados los fondos; *b*). Que el administrador no ha cumplido con lo convenido en esa cláusula; *c*). Que esa falta de cumplimiento ha sido beneficiosa para los mandantes, pues han percibido sumas de dinero en concepto de intereses que no las hubiesen recibido si los fondos se hubiesen depositado en el Banco de la Nación; *d*). Que esto no obstante, se deja a salvo la acción por indemnización en los daños que hubiere causado ese incumplimiento y que se prueben en otro juicio (artículo 1909 del código civil, cuestiones 16, 17 y 18).

Considero que las razones aducidas por el recurrente para demostrar la violación alegada del artículo 1906 citado, son pertinentes al caso de autos. Reconocida por la cámara, no sólo que no se ha probado que la falta de cumplimiento a la cláusula que disponía el depósito de los fondos en el Banco de la Nación haya ocasionado perjuicios a la sucesión, sino que, además, esa falta de cumplimiento ha sido beneficiosa por los intereses producidos, el precepto legal citado autoriza a no considerar traspasados los límites del mandato en relación al presente juicio, que es definitivo, y excluye, en consecuencia, la salvedad de acciones que fija la cámara invocando el artículo 1909 del código civil que nada estatuye al respecto y, por el contrario, fija una obligación, de cuyo mérito legal se ocupa este pleito.

Estimo, pues, que ha sido erróneamente aplicado el artículo 1906

Establece la cámara, al decidir las cuestiones 23, 24 y 25: *a*). Que el administrador ha vendido un lote de campo en San Antonio y otro en Conesa; *b*). Que no tenía autorización para ello; *c*). Y que, por tal razón, ha incurrido en responsabilidad, la que se deja a salvo respecto de la indemnización y perjuicios que esas ventas pudieron haber producido y reclamen y prueben los interesados en otro juicio si así vieren convenirles.

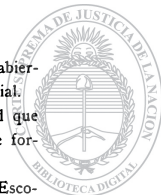


Es exacto que, según el convenio de 1.º de septiembre de 1904, el administrador no podía vender ningún bien raíz, a excepción de las propiedades compradas por Antonio Soba para Enrique Laplace; pero es exacto, también, que en el mandato general amplio, conferido por los mismos interesados al administrador, el mismo día del convenio se facultó a éste para comprar o vender inmuebles urbanos o rurales, sin limitación alguna; y aun cuando este mandato sea la consecuencia del convenio, no puede desconocerse que son dos actos jurídicos distintos y que, por lo tanto, las facultades del mandatario han podido ser ampliadas en el acto de conferírsele el mandato, sin que a ello se oponga lo estatuido en el convenio anterior. En estas condiciones, considero que, con arreglo al precepto del artículo 1197 del código civil y las reglas que fija el artículo 1200 del mismo código, no puede sostenerse que el administrador no estuviera autorizado para vender los campos a que se refiere este punto, y que, por consiguiente, existe en la decisión de la cámara la errónea aplicación de la ley que se invoca en el recurso y con relación a las cuestiones que dejo mencionadas.

Es también motivo del recurso que nos ocupa la decisión de la cámara acerca de la naturaleza del contrato de 1.º de septiembre de 1904 (cuestión 32).

Según la cámara, se trata en el caso del contrato de mantenimiento de estado de indivisión durante un tiempo determinado, autorizado y previsto por el artículo 2693 del código civil, mientras que, según el recurrente, el contrato realizado es el de sociedad legislado por el artículo 1648 del mismo código. Para demostrarlo, se extiende el demandado en numerosas consideraciones legales, las cuales no me considero obligado a tomar en consideración, porque se refieren a un punto que, como dice la misma cámara, en el caso de autos viene a ser puramente doctrinario, desde que ni ha sido motivo de discusión fundamental entre los litigantes, por lo que no le estaba expresamente sometido, ni su resolución, en un sentido o en otro, afecta a la decisión final de este pleito.

Dada esta circunstancia y la naturaleza extraordinaria y limitada del recurso que nos ocupa, pienso que la declaración que se busca mediante el presente motivo del recurso es ajeno a la jurisdicción



del tribunal, porque importaría un pronunciamiento abstracto, abiertamente contrario al carácter que debe revestir todo fallo judicial.

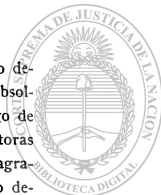
Por estas consideraciones, y teniendo presente la salvedad que respecto del pronunciamiento acerca de las costas del juicio he formulado en la primera cuestión, voto ésta en sentido afirmativo.

Los señores jueces doctores Rivarola, Gnecco, Llambi y Escobar, por los mismos fundamentos expuestos por el señor juez doctor Lecot, en su precedente voto, dieron los suyos por la afirmativa en la tercera cuestión.

A la CUARTA CUESTIÓN el señor juez, doctor Lecot, dijo: Como he expresado al votar las cuestiones anteriores, el punto concerniente al pago de las costas del juicio ha sido materia de todos los recursos deducidos contra la sentencia de segunda instancia a mérito de la resolución de la cámara, según la que esas costas serían a cargo de las actoras en una vigésima parte, del demandado en otra vigésima parte y el resto por cuenta de la comunidad.

Habiéndose ya pronunciado el tribunal en las cuestiones anteriores respecto de los demás motivos de los recursos referentes a la parte principal del pleito, considero llegado el momento de consignar mi opinión acerca de dicho punto concerniente a la forma cómo deben ser abonadas las costas causadas en este voluminoso expediente.

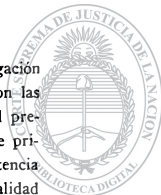
Al efecto, conviene tener presente lo siguiente: El presente juicio por rendición de cuentas fué iniciado por sólo dos de los herederos de don Enrique Laplacette (escrito de fojas 3), siendo solamente ese escrito el que es considerado como demanda, tanto por la sentencia de primera instancia como por la de la cámara (fojas 3642 y fojas 4075), y aun por este tribunal, al ocuparse de las cuestiones anteriores de los motivos de los recursos deducidos por los actores. El demandado es don Juan Laplacette, como administrador de los bienes de la sucesión. Las cuentas presentadas por éste fueron solamente observadas por las actoras señoras Catalina y Lucía Laplacette de Ladoux y fué solamente entre estas partes que quedó trabado el cuasi-contrato de la *litis contestatio*. Éstas fueron las que produjeron pruebas en la estación oportuna del juicio, las que alegaron de bien probado a fojas 3065, 3143 y 3252, y es considerando a las



señoras de Ladoux como actoras y a don Juan Laplacette como demandado que se pronuncia la sentencia de primera instancia absolviendo al demandado y condenando a las actoras citadas al pago de las costas del juicio en primera instancia. Son las mismas actoras las que apelan de esa sentencia (fojas 3664 y 3669) y expresan agravios a fojas 3684 y 3785, y es don Juan Laplacette como único demandado que contesta a fojas 3868.

Si a esto se agrega que los demás herederos en la sucesión de don Enrique Laplacette no formularon observación alguna a las cuentas presentadas por don Juan Laplacette (véase fojas 118), por lo que no asumieron el carácter de parte en el juicio; que la petición consignada en el escrito de contestación de fojas 12 sólo puede referirse a las actoras cuya demanda se contesta, es decir, a las señoras de Ladoux y no a todos los herederos de don Enrique Laplacette; que por resolución firme de la cámara de fojas 3986 se declaró que esos herederos no eran parte en el presente juicio; y, finalmente, que con arreglo a lo preceptuado en el artículo 259 del código de procedimiento el fallo judicial debe contener decisión con arreglo a las acciones deducidas en el juicio, declarando el derecho de los *litigantes* y no se podrá fallar en segunda instancia sobre ningún capítulo que no se hubiere propuesto a la decisión del inferior (artículo 306 del mismo código), es para mí indudable que la resolución de la cámara, estableciendo que los herederos de don Enrique Laplacette, que no son parte en el presente juicio, deben soportar el pago de una parte alicuota de los gastos causados en el mismo, es violatoria del precepto contenido en el artículo 71 del código de procedimiento que, al disponer que el vencido será condenado al pago de las costas, supone dos circunstancias que en el caso no están justificadas, pues ni los demás herederos de don Enrique Laplacette son partes en este juicio, ni pueden, por lo tanto, haber sido vencidas en él. Por estas razones estimo justificado el recurso deducido a fojas 4176, dando mi voto en sentido afirmativo.

Estimo igualmente justificado el recurso deducido por el demandado a fojas 4134 y ampliado a fojas 4175 respecto a la parte alicuota que en las costas del juicio impone la cámara a esa parte. Don Juan Laplacette, no sólo no desconoció su obligación de rendir



las cuentas que se le demandaban, sino que cumplió esa obligación dentro de los términos que al efecto le fijó el juzgado. Fueron las observaciones formuladas por las actoras las que motivaron el presente juicio. Desestimadas todas esas objeciones por el fallo de primera instancia y desestimadas en su mayor parte por la sentencia de la cámara, han quedado nuevamente rechazadas en su totalidad por el pronunciamiento de este tribunal en las cuestiones anteriores y queda, entonces, definitiva y judicialmente establecido que el administrador ha rendido cuentas en forma y éstas quedan aprobadas.

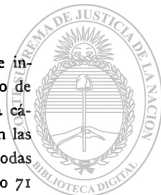
En estas condiciones, no puede afirmarse que don Juan Laplacette haya sido vencido en el juicio, requisito que es indispensable para que proceda su condenación en costas, atento lo claramente preceptuado en el artículo 71 del código de procedimiento. Por estas razones, y teniendo en cuenta que don Juan Laplacette ha sido demandado sólo como administrador, y por las consideraciones legales que he expuesto en el párrafo anterior respecto de la condenación a los coherederos en las costas del juicio, considero que se ha violado el precepto del artículo 71 ya citado, por lo que también voto en sentido afirmativo, acerca de este punto, del recurso que nos ocupa.

Finalmente, los dos actores, en sus recursos de fojas 4205 y 4197, atacan la decisión de la cámara que les impone el pago de una vigésima parte de las costas.

Considero que las alegaciones que al respecto formulan, no demuestran legalmente la errónea aplicación del artículo 71 del código de procedimiento, en el concepto que lo indica, pues ni es exacto que el demandado no haya pedido esa condenación (escrito de fojas 12 ya citado) ni puede aceptarse que, por haberse allanado el demandado a rendir cuenta, puede hoy sostenerse, en presencia de este expediente, formado por catorce cuerpos de autos, que no exista litigio, cuando los actores y el demandado se han trabado en un pleito en el que se han llenado todos los trámites del juicio ordinario en primera y segunda instancia, precisamente originado por las observaciones formuladas por los actores a esa rendición de cuentas.

Y es justamente la formación de ese pleito la controversia judicial sostenida entre los actores y el demandado y la decisión final del mismo desechando todas esas observaciones y aprobando las





cuentas, la que, de acuerdo con la misma jurisprudencia que se invoca, hace aplicable al caso el precepto del artículo 71 del código de procedimiento, pero no en el concepto limitado que lo aplica la cámara, sino en el amplio que lo pide el demandado, puesto que son las actoras las vencidas y es a ellas a quienes corresponde el pago de todas las costas del juicio, de acuerdo con el texto expreso del artículo 71 del código de procedimiento citado. En ese sentido voto.

Los señores jueces doctores Rivarola, Gnecco, Llambí y Escobar, por los mismos fundamentos consignados en el voto que antecede del señor juez doctor Lecot, dieron los suyos en el mismo sentido.

A la QUINTA CUESTIÓN el señor juez, doctor Lecot, dijo: Atentas las conclusiones a que ha arribado el tribunal al decidir las cuestiones precedentes, corresponde declarar:—1.° Que la cámara ha aplicado bien la ley respecto de los puntos resueltos y que motivan los recursos traídos por las actoras acerca de la parte principal del juicio.—2.° Que ha sido mal aplicada la ley por la cámara al decidir los puntos que motivan el recurso del demandado declarándose que no procede la salvedad de acciones que fija la cámara por no haberse efectuado los depósitos en el Banco de la Nación, y por las ventas de los campos ubicados en los partidos de San Antonio y Conesa.—3.° Que no corresponde dictar pronunciamiento respecto de la naturaleza del contrato de 1.° de septiembre de 1904.—4.° Que ha sido mal aplicada la ley por la cámara en cuanto impone el pago de una parte alicuota de las costas del juicio a los herederos de don Enrique Laplacette, que no han sido partes en este juicio.—5.° Que ha sido también mal aplicada la ley al imponerse otra parte alicuota al demandado don Juan Laplacette, que no es vencido en estos autos.—6.° Que lo ha sido igualmente en cuanto impone a los actores solamente el pago de otra parte alicuota de las costas.—7.° Que queda firme la sentencia de segunda instancia, menos en las salvedades que se consignan en las cuestiones 17 y 24, las que son improcedentes.—8.° Que el pago de todas las costas del juicio corresponde a las actoras.

En ese sentido voto la presente cuestión.



Los señores jueces doctores Rivarola, Gnecco, Llambí y Escobar, reproduciendo las consideraciones expuestas por el señor juez doctor Lecot, en su voto a la cuestión quinta dieron los suyos en el mismo sentido.

Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces de la suprema corte.

LLAMBÍ. — LECOT. — RIVAROLA. —  
ESCOBAR. — GNECCO.

Ante mí:

*Rogelio A. Casco.*

Es conforme con su original, que se registra al folio 247 del libro 64 de Acuerdos y Sentencias de esta suprema corte.

*Rogelio A. Casco.*

#### SENTENCIA

La Plata, etc.

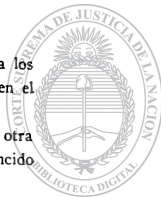
#### VISTOS Y CONSIDERANDO:

1.°—Que la cámara ha aplicado bien la ley respecto de los puntos resueltos y que motivan los recursos traídos por los actores acerca de la parte principal del juicio.

2.°—Que ha sido mal aplicada la ley por la cámara al decidir los puntos que motivan el recurso del demandado, declarándose que no procede la salvedad de acciones que fija la cámara por no haberse efectuado los depósitos en el Banco de la Nación y por las ventas de los campos ubicados en los partidos de San Antonio y Conesa.

3.°—Que no corresponde dictar pronunciamiento respecto de la naturaleza del contrato de 1.° de septiembre de 1904.

4.°—Que ha sido mal aplicada la ley por la cámara en cuanto



impone el pago de una parte alícuota de las costas del juicio a los herederos de don Enrique Laplacette, que no han sido partes en el juicio.

5.º—Que ha sido también mal aplicada la ley al imponerse otra parte alícuota al demandado don Juan Laplacette, que no es vencido en estos autos.

6.º—Que lo ha sido igualmente en cuanto impone a las actoras solamente el pago de otra parte alícuota de las costas.

7.º—Que debe quedar firme la sentencia de segunda instancia, menos en las salvedades que se consignan en las cuestiones 17 y 24, las que son improcedentes.

8.º—Que el pago de todas las costas del juicio corresponde a las actoras.

Por estos y demás fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, se declara firme la sentencia de la cámara, menos en las salvedades que se consignan en las cuestiones 17 y 24, que son improcedentes, declarándose igualmente que el pago de todas las costas del juicio corresponde a las actoras, con costas (artículo 351 del código de procedimiento). Reponga las fojas la parte de las actoras (artículo 72 del código de procedimiento) y devuélvase a la cámara de su procedencia.

LLAMBÍ. — LECOT. — RIVAROLA. —  
ESCOBAR. — GNECCO.

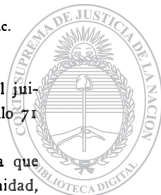
Ante mí:

*Rogelio A. Casco.*

## VI

### RECURSO DE ACLARATORIA

Contra la precedente sentencia los señores Ladoux interpusieron recurso de aclaratoria resuelto por el siguiente auto:



AUTOS Y VISTOS.—CONSIDERANDO:

1.º—Que la condenación al vencido al pago de las costas del juicio es de ley, y procede, haya o no petición de las partes (artículo 71 del código de procedimiento).

2.º—Que establecido por la sentencia de segunda instancia que las costas y gastos del presente juicio «era a cargo de la comunidad, con excepción de un vigésimo del importe total que será a cargo de las actoras, y de otro vigésimo que será a cargo del demandado», se interpusieron los recursos de fojas 4205, 4197, 4134, 4175 y 4176, en los que todos los recurrentes atacaron la decisión de la cámara por violación o errónea aplicación del expresado artículo 71.

3.º—Que, en consecuencia, no existe en la sentencia de esta corte el error material que se le atribuye en los escritos presentados a fojas 4340 y fojas 4347 al conocer y decidir acerca del expresado motivo de inaplicabilidad de ley.

4.º—Que las observaciones que se formulan respecto del escrito de fojas 4175, en el que se amplía con un motivo más el recurso deducido a fojas 4134 por el mismo demandado, son extemporáneas y ajenas a la naturaleza del recurso de aclaratoria presentado (artículo 265 del código de procedimiento).

5.º—Que las observaciones que también se formulan acerca del monto de las costas reposan en un concepto equivocado, desde que este tribunal se ha limitado a resolver la cuestión de derecho sin establecer el *quántum* de la indemnización por vía de costas.

Por esto, así se declara. Repóngase los sellos.

ANTONINO LLAMBÍ. — GREGORIO LECOT. —  
F. E. RIVAROLA. — M. F. ESCOBAR. —  
MANUEL F. GNECCO.

Ante mí:

*Rogelio A. Casco.*



## VII

### RECURSOS EXTRAORDINARIOS

Los demandantes no se conformaron con las tres sentencias desfavorables que preceden y dedujeron para ante la suprema corte de la nación el recurso a que se refiere la ley de 14 de septiembre de 1863 en su artículo 3.º

La corte dictó las dos resoluciones que insertamos a continuación :

#### PRIMERA SENTENCIA

Buenos Aires, diciembre 2 de 1916.

#### AUTOS Y VISTOS :

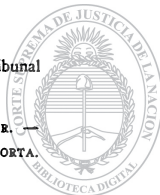
El recurso de hecho interpuesto por doña Catalina L. de Ladoux y Lucía L. de Ladoux. contra la sentencia de la suprema corte de justicia de la provincia de Buenos Aires, en el juicio que han seguido con don Juan Laplacette.

#### Y CONSIDERANDO :

Que para la procedencia del recurso extraordinario autorizado por el artículo 6.º, ley 4055 y 14 de la número 48, es necesario que en el pleito se haya cuestionado especialmente la inteligencia de una cláusula de la constitución, tratado o ley del congreso y que la decisión haya sido contraria a la garantía fundada en tales disposiciones. Que la sentencia apelada no contiene decisión contraria a dichas leyes, ni aparece que en el pleito se las haya cuestionado especialmente. Que si bien los recurrentes, al interponer la queja, mencionan prescripciones de la constitución, que dicen han sido violadas por la sentencia, debe estimárselas tardíamente invocadas a los fines del recurso, según lo reiteradamente resuelto por esta corte. Por ello, y conforme con lo expuesto y pedido por el señor procurador general, se declara bien denegado el expresado recurso. Notifíquese original y archívese, pre-

via reposición de sellos, devuélvanse los autos principales al tribunal de su procedencia con testimonio de esta resolución.

A. BERMEJO. — NICANOR G. DEL SOLAR. —  
D. E. PALACIO. — J. FIGUEROA ALCORTA.



#### SEGUNDA SENTENCIA

Buenos Aires, diciembre 23 de 1916.

#### AUTOS Y VISTOS:

El recurso de queja por apelación denegada interpuesto por doña Lucía L. de Ladoux contra la sentencia de la suprema corte de justicia de la provincia de Buenos Aires, en el juicio que ha seguido contra don Juan Laplacette, sobre rendición de cuentas.

#### Y CONSIDERANDO:

Que, según lo expresa el recurrente a fojas 8, el agravio irreparable a que responde la apelación extraordinaria se ha causado a su parte «recién en la sentencia de la corte», de que se queja.

Que en este mismo orden de consideraciones, agrega a fojas 9: que «en cuanto a las costas pronunciadas por la corte provincial, sin jurisdicción», «la decisión contraria, la irreparabilidad judicial nace con la sentencia reciente».

«Es ante ese tribunal, desde luego, donde cabía plantearla; y la primera oportunidad de hacerlo, la del recurso de rectificación que dedujo con fecha 2 de agosto».

Que cualquiera que sea la amplitud que pretenda atribuirse al recurso extraordinario que legislan los artículos 14 de la ley 48 y 6.º de la 4055, respecto al momento en que, dentro del procedimiento, pueden plantearse las cuestiones de carácter federal que lo motivan, es indudable que deben serlo en el pleito con anterioridad a la sentencia definitiva, de tal manera, que dicha sentencia pueda considerarlas y resolverlas. (Fallos, tomo 111, página 175.)

Que, por otra parte, no se indica cuáles sean las cuestiones de carácter federal que se hubiesen planteado en el pleito y que se hayan resuelto, fundándose en leyes provinciales como lo son los artículos



71, 78, 344 y 350 del código de procedimiento de la provincia de Buenos Aires, o que no hayan sido consideradas en el fallo, de tal manera, que su misión pueda importar un desconocimiento de derechos invocados; y los numerosos fallos de esta corte, citados por el recurrente, indican claramente que una omisión de tal naturaleza puede importar una decisión contraria, cuando en el juicio se hayan cuestionado y el tribunal de última instancia omita un procedimiento en la sentencia definitiva, lo que no ha ocurrido en el caso, según expresamente se reconoce en el escrito de queja.

Que las leyes cuya interpretación pueden motivar el recurso extraordinario para ante esta corte, están expresadas en el artículo 14 de la ley 48; y entre ellas no se encuentran los códigos comunes, cuya interpretación y aplicación, por sí solas son del resorte de los tribunales locales, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 67, inciso 11 de la constitución, y no dan lugar a dicho recurso, según el artículo 15 de la ley número 48 y lo reiteradamente resuelto.

Que si se cuestionara en el pleito disposiciones de los códigos comunes como repugnantes a la constitución y los tribunales locales invalidaran expresamente dichos códigos en las cláusulas impugnadas, sería el caso del tomo 68, página 238, de los fallos de esta corte, que se invocan para considerar procedente el recurso extraordinario; pero no puede serlo el presente, que, según lo expresa el recurrente, como queda dicho, las cuestiones han nacido con el fallo definitivo de última instancia y han sido planteadas después de dicho fallo y a propósito de un recurso de rectificación.

Que además, para la procedencia del recurso extraordinario no basta manifestar hallarse amparado por una disposición de carácter nacional (suponiendo que a los códigos comunes pudiera asignárseles tal carácter en el caso) si no se pretende y no resulta de autos que la inteligencia de la misma haya sido cuestionada y que la decisión sea contra la validez del título o derecho que en ella se funda y sea materia del litigio.

Que una resolución de un tribunal en la parte que establece la forma en que han de abonarse las costas del juicio, no da lugar al expresado recurso. (Doctrina del fallo, tomo 103, página 416.)



Por ello se declara no haber lugar al recurso.

A. BERMEJO. — NICANOR G. DEL SOLAR. —  
D. E. PALACIO. — J. FIGUEROA ALCORTA.

# I

## EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA.—ESCRITO DEL DOCTOR JOFRÉ

1. A los señores Ladoux no los conmueven los fracasos judiciales.—2. Su falta de razón es suplida con insultos.—3. El juicio de ejecución de sentencia.

1.—A los señores Rafael y Agustín Ladoux, o más bien dicho, a sus distinguidos letrados, no les importa, ni les preocupa de los fracasos judiciales. El juez, la cámara, la corte de la provincia y la corte de la nación, han decidido por cuatro veces consecutivas, que no tienen razón, que su causa es mala y ellos siguen discutiendo como si nada hubiera pasado.

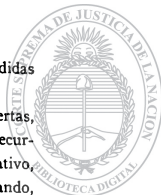
No se les importa de la autoridad de la cosa juzgada. Quieren volver a empezar al cabo de siete años de litigio, sin haber perdido un ápice de calor y entusiasmo.

Creen a pies juntillas, que la fe conmueve las montañas, por más que las montañas no sean de su misma opinión.

2.—La falta de razón la suplen con insultos; insultan al juez que desechó sus pretensiones; insultan a la corte que rechazó sus recursos y admitió los nuestros; insultan al letrado que los ha vencido. Están en su papel: pueden seguir insultando y perdiendo pleitos. Es un entretenimiento como cualquier otro. De los tarros vacíos, dijo Lucio López, que suenan tanto más fuerte cuanto más se les golpea...

3.—El juicio que los señores Agustín y Rafael Ladoux, promovieron en 1910, contra don Juan Laplacette, terminó con la sen-





tencia de la corte de la provincia, que aprobó las cuentas rendidas por éste e impuso las costas a aquéllos.

Los señores Ladoux, después de golpear a todas las puertas, después de recurrir en casación a la corte de la provincia y en recurso de hecho a la corte de la nación, siempre con resultado negativo, creen que el pleito no ha terminado. Ellos quisieran seguir litigando, desearían que la discusión se reabra y aspirarían a llegar nuevamente, a través de tres instancias largas y fatigosas, a la corte de la nación, donde creen que podrán ganar una batalla ya perdida. Por todos los caminos se imaginan que se llega a Roma, pero olvidan que la peregrinación a la Meca, es obligatoria una sola vez en la vida para los creyentes.

En dos escritos largos y fatigosos, presentados por los distinguidos letrados de la contraria, se pone nuevamente en discusión un pleito ya terminado. De esos escritos voy a ocuparme en los capítulos siguientes, empezando por el que suscribe el doctor Carlos A. Ladoux.

## II

- i. Excepciones admisibles en la ejecución de sentencias.—2. La acción ejecutiva de las letras de cambio.—3. Jurisprudencia de las cámaras de la capital de la república.—4. La excepción de falsedad.

1.—El código de procedimiento civil, establece que sólo son admisibles en la ejecución de las sentencias, las siguientes:

- 1.º—Falsedad de la ejecutoria;
- 2.º—Prescripción de la misma;
- 3.º—Pago;
- 4.º—Quita, espera o remisión.

Los señores Ladoux no se conforman con las prescripciones legales. La ley debe decir otra cosa para darles en el gusto. Los autores, según ellos, están de su parte.

Desgraciadamente, para la tesis que sustentan, la ley es clara y



los autores no participan de la opinión que tan gratuitamente les atribuyen.

2.—Pretenden los señores Ladoux que las excepciones de falta de personería, nulidad procesal, prescripción, incompetencia de jurisdicción y otras que no enumera la ley, pueden oponerse en la ejecución de sentencia. Se trata, según ellos, de defensas procesales de índole general que se aplican a cualquier juicio.

Para llegar a esa conclusión, mencionan lo que ocurre con las letras de cambio y lo que, a su respecto, ha establecido la jurisprudencia. El código de comercio, establece cuáles son las excepciones articulables en la ejecución proveniente de las letras de cambio y el código de procedimiento enumera otras, que no figuran en aquél. La doctrina y la jurisprudencia han sentado que las excepciones de forma, autorizadas por el código de procedimiento, son admisibles en el juicio ejecutivo de una letra de cambio, aun cuando ellas no figuran en el código de comercio.

Luego, concluyen, los señores Ladoux, lo mismo debe ocurrir en la ejecución de sentencia.

Las situaciones, sin embargo, no son semejantes. Las razones que militan en el juicio ejecutivo, proveniente de una letra de cambio, no son las mismas de la ejecución de sentencia.

La razón por la cual pueden articularse ciertas excepciones que no figuran en el código de comercio, la da el doctor Segovia en el párrafo transcrito por el propio doctor Carlos A. Ladoux. «EL CÓDIGO DE FONDO—dice Segovia—NO HA DEBIDO OCUPARSE DE UNA MATERIA QUE TOCA AL PROCEDIMIENTO, Y LA PROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DILATORIA HABRÁ DE APRECIARSE CON ARREGLO A LA RESPECTIVA LEY DE PROCEDIMIENTOS.»

Idéntica opinión sustenta el doctor de la Colina en su «Derecho y Legislación Procesal», y en el lugar citado por el el excepcionante.

En el caso de autos, como ya lo hemos dicho, no se trata de la ejecución de una letra de cambio, sino de la ejecución de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y en estos casos, la cuestión se rige exclusivamente por el código de procedimiento.

El código de comercio lo dicta el congreso y el de procedimiento



está reservado a las provincias—artículo 67, inciso 11—de la constitución de la nación.

El congreso extralimitó sus facultades, al establecer que en la ejecución de las letras de cambio, no se admitirían otras excepciones que las que enumeró, porque sentó reglas de procedimientos que, como acabamos de verlo, están reservadas a las provincias. Eso es lo que sostiene Segovia y de la Colina y eso es lo que ha establecido la jurisprudencia de los tribunales del país y eso es lo que no han entendido los letrados de la parte contraria.

# I

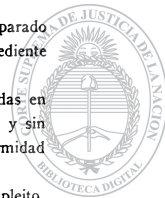
3.—La jurisprudencia de la capital de la república, es terminante, en el sentido que acabo de exponer, como paso a demostrarlo.

«Contra la ejecución de la sentencia sólo son admisibles las excepciones especialmente determinadas en la ley». Cámara Comercial, tomo 47, página 150. «Debe declararse improcedente la excepción de nulidad, si se opone a la ejecución de una sentencia». Cámara civil, tomo 77, página 354; tomo 78, página 371; tomo 86, página 383; tomo 119, página 314; tomo 131, página 222, etc. «Es improcedente la excepción de falta de personería opuesta a la ejecución de una sentencia». Cámara civil, tomo 40, página 305; tomo 43, página 83; tomo 148, página 17. Cámara comercial, tomo 29, página 25; tomo 11, página 566; tomo 98, página 385. «La excepción de incompetencia es inadmisibles en el juicio sobre ejecución de sentencia». Cámara comercial, tomo 41, página 188; tomo 66, página 188; tomo 68, página 7.

Inútilmente se buscaría un sólo fallo que diera razón a los actores en la equiparación que han querido establecer entre la ejecución proveniente de una letra de cambio y la que emana de una sentencia ejecutoriada.

4.—La única excepción que ha podido articularse es, por consiguiente, la de falsedad de la ejecutoria, desde que no se menciona en el escrito de que me ocupo, ninguna de las otras enumeradas en el artículo 544 del código de procedimiento.

Funda el señor Rafael Ladoux esta excepción, en los siguientes hechos:



«a) Iniciarse una ejecución de sentencia por incidente separado y no en los autos que se dictó. No hallándose, además, el expediente en la jurisdicción del juez executor;

»b) Ejecutarse liquidaciones de gastos, sellos, no practicadas en el expediente principal y sin que ellas resulten de la sentencia y sin que las partes interesadas hayan intervenido, prestado conformidad o disconformidad, aprobadas y ejecutoriadas;

»c) Ejecutar intereses que no han sido reclamados en el pleito, ni otorgados por la sentencia. Que tampoco se deben.

»d) Reclamar honorarios el señor Raúl, por sí y como apoderado, en primera y segunda instancia, siendo que por la sentencia se declara que no fueron partes litigantes en el juicio.»

Ninguno de los hechos a que se refiere don Rafael Ladoux, en los párrafos que dejo transcritos, cae bajo la denominación de falsedad de la ejecutoria.

El título puede ser falso—dice Rodríguez—por no ser obra de aquel a quien se atribuye. Tomo II, página 261. La falsedad del título — para de la Colina — existe, cuando el documento ha sido adulterado, o no proviene del que se supone obligado, o le faltan los requisitos de derecho para la formación del vínculo jurídico. Obra citada. Tomo II, página 285.

Sin embargo, por deferencia al juzgado, voy a demostrar que las alegaciones del doctor Ladoux carecen de fundamento legal, aun en el supuesto de que puedan comprenderse bajo la denominación de falsedad de la ejecutoria.

Se pretende que la ejecutoria que tratamos de llevar adelante, no se basa en los autos, sino en testimonio de las partes dispositivas de las sentencias. Y es natural que así suceda. Es la parte dispositiva de una sentencia, la que hace cosa juzgada. Es en la parte dispositiva de la sentencia de autos, donde se encuentra la aprobación de las cuentas de mi mandante, la condenación en costas a los señores Ladoux y la regulación de los honorarios que se persigue.

«La autoridad de la cosa juzgada no se refiere sino a la parte dispositiva de la sentencia. Cámara federal de la capital. *Boletín Judicial*, 4254: Camillón contra Banco Nacional. La autoridad de la cosa juzgada no se refiere en una sentencia a todas las expresiones



del juez: ella no se aplica ni en principio a las simples enunciaciones que contenga. La cosa juzgada recae sobre las decisiones implícitas o expresas del fallo. Las razones de derecho o de hecho que hayan podido determinar la decisión judicial, no son los puntos cuestionados de la causa, los puntos articulados por las partes, ante la justicia: esas razones son los móviles de la conciencia del juez llamado a pronunciar la decisión. La opinión del juez sobre tal o cual cuestión de derecho, no tiene sino un valor doctrinario\*. Resulta, pues, que la autoridad de la cosa juzgada no se refiere sino a la parte dispositiva de la sentencia: no se aplica a los motivos del fallo. (P. Lacoste. De la Chose Jugée. Números 213, 214 y 215).

Véase asimismo, fallo de la suprema corte de la provincia V-4-229, que ha establecido: «No puede haber violación de la cosa juzgada, sino con relación a una sentencia ejecutoriada. No constituye sentencia cada una de las decisiones adoptadas en el acuerdo del tribunal, sino el conjunto de las resoluciones pronunciadas en aquel y en la parte dispositiva, que forman un todo».

En lo que se refiere a la deuda de los señores Agustín y Rafael Ladoux, para con la sucesión de don Enrique Laplacette, voy a refrescarles la memoria a mis adversarios, que parecen vivir en amnesia permanente.

La demanda entablada por los señores Rafael y Agustín Ladoux lo fué por rendición de cuentas, las que fueron presentadas por don Juan Laplacette. En ellas figuró don Agustín Ladoux como deudor de la cantidad de seis mil seiscientos veinticinco pesos con sesenta y siete centavos moneda nacional, y don Rafael Ladoux, por la de diez y ocho mil trescientos setenta y tres pesos con diez centavos de igual moneda.

Los señores Ladoux objetaron las cuentas, dijeron que ellos, en vez de ser deudores de la administración, eran acreedores; pero las cuentas fueron aprobadas y eso resulta de las sentencias que corren testimoniadas en autos.

El juez de primera instancia, falló «absolviendo a don Juan Laplacette de la demanda interpuesta por rendición de cuentas, y aprobando, en consecuencia, las presentadas por éste, corrientes de fojas 22 a 55».

Justamente, en esas cuentas de fojas 22 a 55, los señores Ladoux figuran como deudores de la sucesión de don Enrique Laplacette, por las cantidades que he consignado anteriormente.

Llevados los autos a la cámara, por apelación de los señores Ladoux, el alto tribunal declaró que don Juan Laplacette, había rendido las cuentas de referencia, las que también aprobó.

Han olvidado también, los señores Ladoux, que ellos y todos mis mandantes, celebraron la transacción que corre a fojas 448 a 459 de la sucesión de don Enrique Laplacette, cuya cláusula 16, dice lo siguiente: «Los señores Rafael Ladoux y Agustín Ladoux, dejarán depositados a la orden de V. S. al hacerse la distribución definitiva de los fondos, las cantidades que se expresan más abajo y a las results del juicio de rendición de cuentas con don Juan Laplacette, declarando expresamente que si se ha adoptado esta solución ha sido para evitar la no terminación del juicio sucesorio y que no podrá interpretarse como el reconocimiento de saldos definitivos de aquellas cuentas, ni invocarse por los firmantes como aprobación expresa o tácita de la rendición de cuentas ya nombrada. Suma que dejará depositada don Rafael Ladoux: pesos diez y ocho mil trescientos setenta y tres con diez centavos moneda nacional; suma que dejará depositada don Agustín Ladoux: pesos seis mil seiscientos veinticinco con sesenta y siete centavos moneda nacional. Estas sumas pertenecerán a la sucesión o a sus dueños, según lo declare la sentencia ejecutoriada del juicio citado *ut supra*».

En lo que se refiere a los intereses, ellos fueron estipulados en el contrato de fojas 557, y en el peor de los casos, se deberían desde el día de la demanda.

Se invoca asimismo, como motivo de falsedad de la ejecutoria, las circunstancias de no haberse dado intervención a los actores, en la liquidación que se persigue. «Si se hace un aliquidación de gastos —se dice—ella debe practicarse en primer lugar en el expediente, y después con intervención de las partes, desde que éstas pueden impugnarlas y demostrar sus abultamientos o errores». Luego se cita la opinión de Manresa. Tomo II, página 304.

La liquidación se ha hecho en el expediente, porque es de ahí





justamente de donde el secretario ha tomado los antecedentes del caso.

En lo que se refiere a la opinión de Manresa, la cita, como de costumbre, no es pertinente.

El código español y el código argentino, han establecido distintas formas para la ejecución de la sentencia. En el primero, la liquidación se hace con citación de las partes y una vez aprobada, éstas no son oídas en adelante, no se les da audiencia. En el segundo, a las partes se les oye, recién después del embargo, y ésa es la oportunidad en que pueden presentar sus objeciones.

El artículo 548 de nuestro código, establece que si la sentencia contuviese condena al pago de cantidad líquida y determinada, se procederá al embargo de bienes; y el artículo 549, agrega: que se entenderá que hay condenación al pago de cantidad líquida, siempre que de la sentencia misma se infiera el monto de la liquidación, aun cuando éste no fuese expresado numéricamente.

En el caso de autos, la aplicación de los artículos citados, no puede ni siquiera discutirse.

Al citárseles de remate, los deudores pudieron objetar esa liquidación. ¿Se ha procedido en tal forma?

No. Eso jamás ha entrado en la táctica de los litigantes de seis años, a quienes estoy contestando. Se conforman con las vaguedades, con las palabras gruesas y con el lenguaje sobejano.

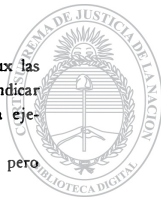
¿Qué es lo que se les cobra?

Se les cobra los honorarios regulados en las sentencias, consentidas, es decir, ochenta y seis mil pesos al doctor Jofré; veinticinco mil al que subscribe; los honorarios de peritos, secretarios, escribanos, etc., todos los cuales resultan de las mismas sentencias.

Se les cobra el sellado empleado en el juicio, habiéndose hecho una liquidación, foja por foja, que han podido objetar perfectamente.

Pero todo eso no entra en su temperamento, ni en su modo de ser. Su ideal sería no pagar o pagar lo más tardíamente posible, y a fe que lo van consiguiendo, pues este pleito, iniciado en 1910, todavía no ha terminado a pesar de los seis años transcurridos.

En la hipótesis de que hubiera algunas partidas mal incluídas



en la liquidación, lo natural hubiera sido que los señores Ladoux las concretasen. ¿Hay sellos de más? Pues nada más sencillo que indicar cuáles eran, para que el juzgado, al mandar llevar adelante la ejecución, pudiera ordenar que se descontasen.

Y es así cómo debieron proceder en todos los demás casos; pero eso no entra en su táctica ni en sus maneras de litigar.

### III

1. La excepción de falta de personalidad es improcedente.—2. El señor F. Raúl Laplacette tiene poder para intervenir en este juicio.—3. La excepción de nulidad no es admisible.—4. El recurso de hecho no suspende la ejecución de la sentencia.—5. La intimación de pago ha sido practicada de acuerdo con la ley.—6. Las cartas que reclama don F. Raúl Laplacette.

1.—Opone también el doctor Carlos A. Ladoux a la ejecución de la sentencia, la excepción de falta de personalidad, que, como lo hemos visto, no se encuentra enumerada en el artículo 544 del código de procedimiento. Luego, no es admisible.

2.—Se sostiene, para fundar dicha excepción, «que don F. Raúl Laplacette, invoca un poder, en nombre de Margarita S. de Laplacette, Maria L. de Gassiebayle y Enrique J. Laplacette, poder, con el cual, ha intervenido en el juicio sucesorio de don Enrique Laplacette y en la incidencia de rendición de cuentas de esta sucesión, que es la que motivó las actuaciones presentes contra don Juan Laplacette». Y luego, se agrega: «que, antes de iniciarse esta ejecución, se presentó dicho apoderado a fojas 2178—del juicio sucesorio citado—renunciando el poder que le habían conferido sus mandantes, con lo cual ha cesado el contrato y no ha podido iniciar, basado en él, nuevos juicios posteriores, desde que había desaparecido legalmente el contrato de mandato».

El hecho es inexacto, como paso a demostrarlo: A fojas 2178 y en septiembre del año próximo pasado, se presenta don F. Raúl Laplacette en el juicio sucesorio, manifestando que no desea seguir interviniendo en dicho juicio en nombre de sus mandantes. A fojas





2177, don Enrique J. Laplacette manifiesta que debe tenerse presente que ha aceptado la renuncia del mandato que habia conferido a don Raúl F. Laplacette, para intervenir en este juicio. Idéntica manifestación, hace a fojas 2180, doña Margarita Safontás de Laplacette.

Ahora bien: el poder conferido por sus coherederos a don F. Raúl Laplacette, no sólo era para intervenir en la sucesión, sino para hacerlo en cualquier otra clase de pleitos.

El juicio de ejecución de sentencia, nada tiene que hacer con la sucesión de don Enrique Laplacette y el mandato ha quedado subsistente en lo que se refiere al primero.

Aún más: en este juicio, don Raúl F. Laplacette y sus herederos, me han conferido poder para que intervenga y es, a mérito del mismo, que me he presentado por parte, con el fin de alejar el pretexto de una chicana.

¿Cuál es el objeto de la excepción de falta de personería?

Que no se pague a un falso acreedor, exponiéndose a que el verdadero haga más adelante las reclamaciones del caso.

Los acreedores de los señores Ladoux, se encuentran representados en el juicio y, por consiguiente, aquéllos no corren absolutamente ningún peligro de hacer un pago sin garantías.

3.—La excepción de nulidad que se opone por el doctor Carlos A. Ladoux, tampoco es admisible, por las razones expuestas en el número anterior y de acuerdo con la jurisprudencia que ya tengo citada.

4.—Sostiene esta misma parte, fundando dicha excepción, que ella procede, por ejecutarse una sentencia en incidente por separado y no estando el expediente en el juzgado, sino ante los tribunales superiores.

Fallada la causa definitivamente por la suprema corte de justicia de la provincia, los autos vinieron a conocimiento del juzgado, ante quien me presenté, solicitando se practicase la liquidación que surgía de la sentencia para proceder a su ejecución.

Eso se hizo con todas las formalidades legales.



Más tarde, los señores Ladoux dedujeron un recurso de hecho ante la suprema corte de la nación, la cual solicitó informes para proveer lo que correspondía a la suprema corte de la provincia. Este último tribunal, como mejor informe, mandó elevar los autos, cuando ya el incidente se había formado con el fin de ejecutar, como he dicho, la sentencia.

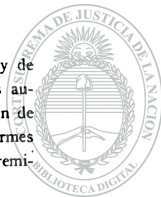
¿Suspende la ejecución de la sentencia ese recurso de hecho?

Inútilmente se buscaría un texto legal que prescribiera semejante cosa.

La real cédula, expedida por Carlos III, en El Pardo, el 19 de diciembre de 1766, y ratificada más tarde en 11 de enero de 1770, que se encuentra vigente entre nosotros, establece lo siguiente: «Mando que los tribunales y justicias del reino, así ordinarios como comisionados o limitados a ciertas causas o personas, procedan con arreglo a las leyes en la administración de justicia, a determinar las causas con la brevedad más posible, sin permitir dilaciones maliciosas o voluntarias de las partes, NI SUSPENDER SU CURSO, AUNQUE POR LOS TRIBUNALES Y JUECES SUPERIORES SE LES PIDA INFORME EN SU ASUNTO: Que no se expidan cartas y provisiones, ni se admitan apelaciones o recursos que no sean conformes a derecho; que si algunas se despachasen en contrario, se obedezcan, y no se cumplan; que cuando se pida de mi real orden, algún informe sobre pleitos pendientes, se dé pronto cumplimiento, pero entendiéndose siempre sin retardación, ni suspensión de su curso, a menos que en algún caso particular tenga a bien mandar expresamente que se suspenda; encargando, como encargo, a todos los tribunales y jueces estrechamente, la observancia de las leyes, la más pronta expedición de las causas, la rectitud y libertad con que deben administrar justicia, como principal objeto a que se dirigen mis justificadas intenciones».

La cámara civil de la capital de la república, en el fallo que se encuentra en el tomo II, página 428, ha declarado que las cédulas de referencia se encuentran en vigencia, y que, ni el recurso de hecho, ni la providencia del superior, pidiendo informe al juez de la causa, suspenden la jurisdicción del inferior, ni tampoco la secuela del juicio.

La suprema corte de justicia de la nación, en su acuerdo de 6 de abril de 1869, estableció que habiéndose observado que en los re-



curso de queja de que hablan los artículos 229 y 230 de la ley de procedimientos, se está introduciendo la práctica de remitir los autos como único informe, con perjuicio de la pronta administración de justicia, debía hacerse saber a los jueces que en los dichos informes deben sujetarse estrictamente a los mencionados artículos, no remitiendo los autos sino cuando expresamente se los pidan.

El doctor Carlos A. Ladoux, al tener conocimiento de que se estaba ejecutando la sentencia contra la cual había interpuesto el recurso de hecho, se presentó a la corte de la nación, pidiendo dirigiera oficio a V. S., a fin de que suspendiera los procedimientos y la corte no le hizo lugar.

5.—Se pretende asimismo que es nulo todo lo actuado por haberse practicado mal la intimación de pago. Ha sido hecha al apoderado y no al deudor.

La alegación carece de fundamento. «La ejecución de la sentencia debe entenderse con el apoderado que siguió el juicio, mientras no conste la revocación del poder». Sentencia del superior tribunal de Corrientes. Tomo 6, página 209. La cámara comercial de la capital de la república, en el tomo 66, página 188, ha sentado que el mandamiento en la ejecución de sentencia puede diligenciarse en el domicilio legal.

Las citas que se han hecho por el doctor Ladoux, se refieren al juicio ejecutivo, en donde el deudor no ha constituido apoderado que se haya presentado al juicio, lo que es muy diverso del juicio de ejecución de sentencia.

6.—Bajo el título de falsedad de la ejecutoria, el doctor Carlos A. Ladoux sostiene que mi mandante don F. Raúl Laplacette ni sus representados tienen derecho a colocar honorarios en este juicio de ejecución de sentencia. Y luego agrega: «La corte ha declarado en su sentencia, que dichos señores no fueron litigantes, ni partes en el juicio de rendición de cuentas; ¿cómo cobrar costas a personas que no han litigado con él y en un juicio que no fué parte?»

Después viene un desahogo personal, que dejo de lado. No le interesa al tribunal, ni a mí tampoco.

La excepción es improcedente, como paso a demostrarlo:

a) No le es dado al juzgado modificar la cosa juzgada. La suprema corte de la provincia resolvió en la sentencia que las costas del juicio eran a cargo de los señores Ladoux; ¿qué costas? Naturalmente, todas, y entre ellas figuran las que corresponden a don F. Raúl Laplacette, de acuerdo con la regulación que hizo la cámara, en un pronunciamiento no modificado por la suprema corte.

Si la solución es injusta, no corresponde a V. S. declararlo, desde que ello importaría, como lo he dicho, introducir modificaciones a la cosa juzgada.

b) Pero es que la imposición en costas, en las costas devengadas por Laplacette, lejos de ser injustas, proceden en derecho. Dicho señor fué traído a juicio por petición de los señores Ladoux, quienes lo obligaron a intervenir durante años en el mismo y hasta llegaron a hacerle aplicar condenaciones por más de ciento cincuenta mil pesos. Si se libró de esa carga fué porque recurrió a la suprema corte de justicia provincial, la cual casó la sentencia de la cámara y declaró que las costas debían abonarlas los señores Ladoux.

Por otra parte, el artículo 1109 del código civil establece que todo el que ejecute un hecho que por su culpa o negligencia ocasione un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. En el caso de autos, son los señores Ladoux los que hicieron citar a Laplacette y los que se opusieron a que se separase del juicio. Para conseguir que se le dejase en paz, y se declarase que no era parte, Laplacette ha tenido que litigar, y son las costas ocasionadas con tal motivo las que reclama. Justamente esas costas han sido declaradas por sentencia firme a cargo de los señores Ladoux.

Estos últimos argumentos los aduzco sólo a mayor abundamiento, puesto que en la ejecución de sentencia no le es dado a los señores Ladoux discutir la justicia de la condenación que les impuso la suprema corte.





1. Las cuestiones constitucionales.—2. La cosa juzgada.—3. Los fallos de la suprema corte.

1.—En un otrosí manifiesta el doctor Ladoux «que la sentencia de un tribunal, como todo acto jurídico, para que sea válida, debe conformarse a los preceptos legales de que deriva su potestad para juzgar. Si el tribunal excede su jurisdicción, es decir, si extiende su potestad más allá de los límites que la ley le asigna, produce un acto manifiestamente nulo, aunque su nulidad no haya sido juzgada. (Código civil, artículo 1938 y correlativos), y en tales casos, la nulidad puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de partes (código civil, artículo 1047». Y luego agrega: «que esa nulidad estriba en que la suprema corte provincial, ha dado al artículo 78 del código de procedimiento, una amplitud y extensión tales, que ha invadido la facultad que el artículo 67, inciso 11 de la constitución nacional atribuye al congreso, y, por vía de simple resolución judicial, ha invalidado los artículos 1909 y 1911 del código civil, y artículo 78 del código de comercio, relevando al mandatario de la obligación de dar cuenta al mandante de las operaciones realizadas en su nombre y representación».

Se hace otra cantidad de citas legales tendientes a demostrar que la sentencia de la corte de la provincia, es inconstitucional.

Lo que se pretende con estas defensas es, ni más ni menos, que dejar sin efecto sentencias ya pronunciadas y que tienen el sello de la cosa juzgada. Es decir, se solicita de V. S. que deje sin efecto una sentencia de la suprema corte.

Hay hechos que basta exponerlos lisa y llanamente para que queden rebatidos. El de autos es uno de ellos.

2.—En un caso análogo, en que se pretendía llevar por delante la cosa juzgada, la cámara civil dijo: «Cuando la demanda es audazmente violatoria de la cosa juzgada, debe ser rechazada con costas.

Patrocinada dicha demanda por un abogado, es alarmante, y hasta acusa falta de respeto a los tribunales de justicia». Véase el *Boletín Judicial*, número 3221.



3.—Desgraciadamente para el excepcionante, la suprema corte de la nación ha pronunciado su palabra definitiva en la sentencia aparecida el sábado 6 de enero del corriente año en la *Gaceta del Foro*, que acompaño. En esa sentencia se dice: «Que cualquiera que sea la amplitud que pretenda atribuirse al recurso extraordinario que legislan el artículo 14 de la ley 48 y 6.º de la ley número 4055, respecto al momento en que, dentro del procedimiento, pueden plantearse las cuestiones de carácter federal que lo motivan, ES INDUDABLE QUE DEBEN SERLO EN EL PLEITO, CON ANTERIORIDAD A LA SENTENCIA DEFINITIVA, DE TAL MANERA, QUE DICHA SENTENCIA PUEDA CONSIDERARLAS Y RESOLVERLAS». Agrega dicho tribunal: «Que las leyes cuya interpretación pueden motivar el recurso extraordinario para ante esta corte, están expresadas en el artículo 15 de la ley 48; y entre ellas no se encuentran los códigos comunes, cuya interpretación y aplicación, por sí solas son del resorte de los tribunales locales en su caso, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 67, inciso 11, de la constitución, y no dan lugar a dicho recurso, según el artículo 15 de la ley número 48 y lo reiteradamente resuelto. Que si se cuestionara en el pleito disposiciones de los códigos comunes como repugnantes a la constitución y los tribunales invalidaran expresamente dichos códigos en las cláusulas impugnadas, sería el caso del tomo 68, página 238, del fallo de esta corte, que se invocan para considerar procedente el recurso extraordinario; pero no puede serlo el presente, que, según lo expresa el recurrente, como queda dicho, las cuestiones han nacido con el fallo definitivo de última instancia y han sido planteadas después de dicho fallo y a propósito de un recurso de rectificación».

Finalmente, el alto tribunal dice: que una resolución que establece la forma en que hayan de abonarse las costas del juicio, no da lugar al recurso extraordinario, y termina rechazando la apelación de hecho que se le había llevado en este pleito.



1. El escrito de excepciones de don Agustín Ladoux.—2. Conclusiones.

**1.**—El doctor Francisco Pérez, patrocinando a don Agustín Ladoux, ha presentado también un largo escrito, oponiendo excepciones. Dada su falta de importancia, no me ocuparé en rebatirlo, remitiéndome a lo que ya tengo dicho.

**2.**—Termino, señor juez, en la plena seguridad de que las argucias de los señores Ladoux, y su defensa de ultratumba, no encontrarán asidero en los tribunales de la provincia, ni de la nación, y solicitando se mande llevar la ejecución adelante, con costas.

# LA LEY MITRE

y

## LOS SERVICIOS MUNICIPALES

---



1. Una ley discutida.—2. Jurisprudencia de la suprema corte nacional.—
3. El derecho de las municipalidades para cobrar los servicios de alumbrado, empedrado, barrido, etc., de las empresas ferroviarias.—
4. El juez competente y el procedimiento que debe seguirse.

1.—La ley nacional número 5315, conocida bajo el nombre de «Ley Mitre», ha suscitado discusión en los tribunales del país, con motivo de su artículo octavo, en el cual se exonera a las empresas ferrocarrileras de todo impuesto nacional, provincial y *municipal* hasta el año 1947. Desde el primer momento de su vigencia, se ha pretendido que los ferrocarriles no están obligados a pagar los servicios de alumbrado, limpieza, luz, etc., que les prestan las comunas de la república, y el caso ha sido llevado repetidamente a conocimiento de la justicia.

2.—La suprema corte de la nación en diversas causas, en algunas de las cuales me tocó intervenir patrocinando a municipios de la provincia de Buenos Aires, ha rechazado las pretensiones de las empresas de transportes. El alto tribunal ha dicho que el pago de afórmos debe conceptuarse la retribución de un servicio, desde que aquél, como el de alumbrado, barrido, aguas corrientes y cloacas, no se exige general e indistintamente a todos los habitantes de un municipio





por el hecho de serlo o de poseer propiedades en él, tengan o no afirmados y luz en el frente de sus fincas, estén o no provistos de aguas corrientes en las mismas y de cloacas, sino a los que reciben tales servicios. Ha agregado que los conceptos «una contribución única de tres por ciento del artículo 8 de la ley 5315, se refieren a los verdaderos impuestos, tributos o cargas públicas sancionados para hacer frente a los gastos generales de la administración; y que el impuesto del tres por mil es para la construcción o mantenimiento de puentes o caminos ordinarios de los municipios y departamentos, no para calles y pavimentación, limpieza y alumbrado; y el referido artículo 8 de la ley citada, no exime a las empresas ferroviarias, de la obligación de pagar el impuesto de afirmado, alumbrado, limpieza, etc. Fallos de la suprema corte, tomo 113 página 165; tomo 114, página 298; tomo 115, página 164 y 186; tomo 116, página 260; tomo 118, página 268; tomo 119, página 122; tomo 120, página 372; y otros.

3.—Es pues de toda evidencia que las municipalidades de la república pueden reclamar de las empresas ferroviarias los impuestos que los demás vecinos pagan por concepto de alumbrado, barrido, limpieza, empedrado, etc.

4.—El juez competente para conocer de estas acciones es el juez ordinario de la provincia o el de paz, según la cuantía de lo que se reclama, pudiendo así mismo los municipios recurrir a la justicia federal de la capital de la república. En cuanto al procedimiento, será el del juicio ordinario si el demandante carece de libros en forma, y el ejecutivo en caso contrario.

Las municipalidades deben arregar sus libros porque son evidentes las ventajas que ofrece el procedimiento ejecutivo sobre el juicio ordinario.

# INDICE



Cuatro palabras.....

## PRIMERA PARTE

### Derecho federal

#### DELITOS DE IMPRENTA

**CORONEL DIEGO SABORIDO CONTRA JUAN G. KAISER, QUERELIÁNDOSE  
POR CALUMNIA**

I.—Escrito de expresión de agravios presentado por el doctor Tomás Jofré, ante la cámara tercera de apelación de La Plata.	13
II.—Sentencia de la cámara tercera de apelación de La Plata...	22
III.—Recurso extraordinario deducido para ante la corte suprema de justicia de la nación, de la sentencia condenatoria que precede.....	34
IV.—Memoria presentada ante la corte suprema de justicia de la nación, en la misma causa.....	39
V.—Sentencia de la suprema corte de justicia de la nación....	49

#### IMPUESTOS MUNICIPALES

##### EMBARGABILIDAD DE LAS RENTAS MUNICIPALES

**TOMÁS JOFRÉ Y OTRO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DEL SALTO  
POR EMBARGO**

I.—Antecedentes.....	59
II.—Recurso extraordinario deducido para ante la suprema corte de justicia de la nación.....	60



III.—Dictamen del procurador de la corte suprema de justicia de la nación.....	62
IV.—Sentencia de la suprema corte de justicia de la nación....	64

### GOBIERNOS EXTRANJEROS

I.—Antecedentes y vista fiscal de primera instancia.....	69
II.—Sentencia del doctor Anchorena.....	70
III.—Vista fiscal de segunda instancia.....	70
IV.—Sentencia de la cámara federal.....	72
V.—Escrito del doctor Tomás Jofré.....	73
VI.—Dictamen del señor procurador general de la nación.....	74
VII.—Vista del procurador del tesoro.....	76
VIII.—Memoria presentada por el doctor Tomás Jofré.....	77
IX.—Resolución de la suprema corte.....	80

### LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS

I.—Antecedentes .....	85
II.—Escrito del doctor Tomás Jofré .....	85
III.—Sentencia de la cámara comercial.....	87

## SEGUNDA PARTE

### Derecho penal

#### CAUSA DE VICENTE DALIA

I.—Antecedentes.....	91
Una ley inicua.....	91
II.—Acusación fiscal.....	94
III.—Sentencia de primera instancia.....	98
IV.—Sentencia de la cámara.....	100
V.—Recurso extraordinario deducido por la defensa.....	101
VI.—Sentencia de la suprema corte.....	112

#### CAUSA DE ZENOBIO VALDEZ

I.—Sentencia condenatoria del juez doctor J. Florencio Ortiz...	143
II.—Escrito de expresión de agravios.....	146
III.—Vista del fiscal de cámara.....	160



IV.—Confirmación de la sentencia condenatoria por la cámara de apelación de Mercedes.....	161
V.—Recursos extraordinarios deducidos por el doctor Tomás Jofré.....	161
VI.—Vista del señor procurador general.....	167
VII.—Sentencia de la suprema corte de la provincia de Buenos Aires.....	174
VIII.—Sentencia de la cámara tercera de La Plata.....	178

#### CAUSA DE FRANCISCO GUASTIERI

Sentencia de la suprema corte de justicia.....	193
--	-----

#### CAUSA DE VICENTE PERALTA

Sentencia de la suprema corte.....	201
------------------------------------	-----

### TERCERA PARTE

#### **Dos causas ruidosas**

##### CAUSA DE ANIBAL P. VANOLI

I.—Defensa del doctor Tomás Jofré.....	209
II.—Sentencia del juez doctor Carlos M. Martinez.....	237
III.—Expresión de agravios del doctor Jofré.....	252
IV.—Vista del señor fiscal de cámara.....	260
V.—Réplica al señor fiscal de cámara.....	265
VI.—Memorial presentado a la cámara de apelaciones.....	277

##### LADOUX VERSUS LAPLACETTE

I.—Juicio ruidoso.....	297
II.—Antecedentes.....	300
III.—Sentencia de primera instancia.....	310
IV.—Sentencia de la cámara primera de Mercedes.....	325
V.—Sentencia de la suprema corte de justicia de la provincia..	368
VI.—Recurso de aclaratoria.....	392
VII.—Recursos extraordinarios.....	394
Juicio de ejecución de sentencia.....	397
LA LEY MITRE y los servicios municipales.....	413